

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA AÑO XLIII NÚMERO 86-87 IV-1999 - I-2000



LA CLASE MEDIA DE HOY SUS POSIBILIDADES LABORALES

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Revista de Ciencias Sociales

DIRECTOR

Daniel Camacho

CONSEJO EDITORIAL

Ana Cecilia Escalante

Omar Hernández

Henning Jensen

María Pérez

† Jorge Mario Salazar

Luis Valverde

EDITORA

Cecilia Arguedas

ceciliaa@cariari.ucr.ac.cr

CORRESPONDENCIA

DIRECTOR

revicsoc@cariari.ucr.ac.cr

Apartado 498

2050 San Pedro - Costa Rica

América Central



EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

© 2000

SAN JOSE, COSTA RICA

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

PUBLICACIÓN

TRIMESTRAL

43º Año. Nº 86-87

IV-1999 – I-2000

SUSCRIPCIONES

Editorial de la Universidad de Costa Rica

Apartado Postal 75

2060 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

San José, Costa Rica

CANJES

Universidad de Costa Rica

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información

Unidad de Selección y Adquisiciones-Canje

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

San José, Costa Rica

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

	c/ejemplar	Anual
Costa Rica	₡ 750	₡2000
Otros países	\$ 20	\$ 60

Visítenos en nuestra página WEB

<http://cariari.ucr.ac.cr/~revicsoc/index.html>

Portada: *Fragmento del planeta*. 1969.
Francisco Amighetti Ruiz.

Técnica: Cromoxilografía (Grabado en madera).

Dagramación: Priscila Coto Monge

Diseño Gráfico y Control de calidad:

Sergio Aguilar Mora

Grace Guzmán Aguilar

María de los A. Quirós Porras

Esta Revista se terminó de imprimir
en la Oficina de Publicaciones
de la Universidad de Costa Rica.
Su edición consta de 850 ejemplares.
Se finalizó en setiembre del 2000.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
San José, Costa Rica, A.C.

Revista
305

R *Revista de Ciencias Sociales / Universidad de Costa Rica*--
Vol. 1 (1959)--. -- San José, C. R.: Editorial Universidad de
Costa Rica, 1959--

v.
ISSN: 0482 - 5276

1. Ciencias Sociales -- Publicaciones periódicas.
2. Publicaciones periódicas costarricenses.

BUCR



La Revista de Ciencias Sociales es una publicación de la Universidad de Costa Rica que recibe apoyo material de varias de sus dependencias, entre ellas, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Editorial y Difusión de la Investigación (DIEDIN), la Oficina de Publicaciones y el Instituto de Investigaciones Sociales.

**LA CLASE MEDIA DE HOY
Y SUS POSIBILIDADES LABORALES**

	<i>PRESENTACIÓN</i>	5
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	7
Carlos Castro Valverde	Cambios en la estructura socio-laboral costarricense en un contexto de ajuste (1985-1997)	9
Mylena Vega Martínez	La clase media en transición: Situación y perspectivas al finalizar el siglo veinte	27
Carlos Rafael Rodríguez Solera	Cambios en la inserción laboral de la población con estudios universitarios en el período 1973-1997	47
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta Carlos Rafael Rodríguez Solera	La participación de las mujeres en el trabajo remunerado en Costa Rica durante el período 1950-1997	65

GOBIERNO Y CONCERTACIÓN

Flory Fernández Chaves	El proceso de concertación nacional como forma de participación ciudadana	83
Alberto Cortés Ramos	¿Concertación en Costa Rica? Una lectura crítica del proceso de concertación nacional en Costa Rica, 1998-99	95
	<i>ARTÍCULOS</i>	
Daniel Villalobos Céspedes Arlette Pichardo	Impacto de la crisis asiática en Costa Rica	111
Carmen María Romero Rodríguez	Políticas macroeconómicas y sus efectos en lo social: Criterios para el diseño y puesta en práctica de modelos alternativos de intervención social	125

Patricia Vega Jiménez	Una audiencia en crecimiento. La prensa en Costa Rica (1872-1889)	139
Jairo Mora Delgado	La necesidad de la multirracionalidad en la construcción del paradigma agroecológico y el desarrollo rural	157
María Cristina Romero Saint Bonnet	Entre lo público y lo privado. Las posibilidades de la terapia de red	167
	COLABORADORES	179
	PRÓXIMO NÚMERO (88)	181



PRESENTACIÓN

No puede ser más pertinente el contenido de este número, ya que se refiere en sus temas centrales a dos temas cuya importancia en la vida pública de Costa Rica es difícil de exagerar.

El primer tema central se refiere a las posibilidades laborales de la clase media y es bien sabida la radicalidad de los cambios del mercado laboral en esta época global. Mylena Vega, responsable de la investigación que produjo los primeros cuatro artículos los presenta en la "Introducción" que sigue a esta breve presentación.

El segundo tema central incluye dos artículos, uno de Fernández y otro de Cortés sobre el proceso de concertación que puso en práctica el Presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez al ser declarado electo. Fernández lo analiza desde la perspectiva de la participación ciudadana y Cortés hace una lectura crítica.

El proceso de concertación costarricense a que hacen referencia estos autores es un hecho de importancia. La administración Rodríguez y su partido Unidad Social Cristiana junto con la oposición del partido Liberación Nacional, han puesto en práctica un régimen de co-gobierno derivado tanto de la identificación de intereses de las dos cúpulas partidarias, como de los resultados de tal proceso de concertación.

Esto ha tenido como consecuencia una pérdida de importancia de los votos de los partidos con menor representación en la Asamblea Legislativa que otrora la tenían, gracias a su posibilidad de balancear las contradicciones entre los mayoritarios. El camino que les queda a los primeros, para mantener su peso político es el de acudir directamente a los sectores de la sociedad perjudicados por las decisiones del bipartidismo. De esto deriva la pertinencia que antes señalábamos de las contribuciones incluidas en esta segunda sección.

En la parte dedicada a artículos, como es costumbre hay variedad de temas: políticas macroeconómicas (Romero); impacto de la crisis asiática en Costa Rica (Villalobos y Pichardo); exploración histórica de la prensa en Costa Rica (Vega); el paradigma macroecológico (Mora) y terapia de red (Romero).

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

Marzo del 2000

Daniel Camacho Monge

Director

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas del siglo veinte Costa Rica ha vivido un período de transformaciones cuyos alcances y profundidad aún no se conocen suficientemente. El país ha ido abandonando progresivamente el esquema de desarrollo que había configurado a partir de los años cincuenta y adentrándose poco a poco en un proceso de ajuste estructural. Esta nueva vía ha implicado dejar atrás la centralidad del Estado como eje dinámico de desarrollo e inclinarse por una mayor liberalización y apertura de la economía.

Con el fin de avanzar en el conocimiento de los efectos sociales, directos e indirectos, del ajuste estructural, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica emprendió, a inicios de la década de los noventa, un proyecto de investigación titulado: "Modificaciones en la estructura social costarricense a partir de la década del ochenta: creación de un sistema de indicadores". Los cuatro artículos que aquí se presentan, elaborados por investigadores del proyecto, basan su análisis en resultados de esta investigación.

El estudio de Carlos Castro, que inicia la serie, nos brinda un panorama general de los principales cambios que vive la estructura socio-laboral del país en el marco del ajuste estructural. Deja clara la tercerización de la economía, la decreciente importancia del Estado como empleador, la reducción del campesinado, así como la significativa presencia del trabajador inmigrante nicaragüense en ciertas ramas de actividad.

Una de las hipótesis más divulgadas sobre el impacto del ajuste estructural en la sociedad costarricense es la de una eventual polarización social. Por eso no es coincidencia que, en los marcos de la investigación antes mencionada, se procediera a estudiar las transformaciones en la estructura de clases. Los resultados generales fueron expuestos en el documento "Cambios en la estructura de clases costarricense (1987-1994)" y han sido actualizados regularmente. Justamente uno de los temas más controversiales dentro de la hipótesis de la

mento "Cambios en la estructura de clases costarricense (1987-1994)" y han sido actualizados regularmente. Justamente uno de los temas más controversiales dentro de la hipótesis de la polarización incumbe a la clase media y a su eventual crecimiento o reducción dentro de la nueva dinámica socio-económica. El artículo de Mylena Vega analiza la evolución de esta clase social y sus perspectivas de desarrollo futuro. Logra establecer el crecimiento relativo que ha tenido este grupo social más allá de transformaciones significativas en su composición interna, en su relación con el Estado y en su distribución por zona geográfica.

El artículo de Carlos Rafael Rodríguez complementa el anterior al analizar otra dimensión de la problemática de la clase media: la situación laboral de los graduados universitarios. El autor acoje la idea de una "devaluación de la educación", la confronta con los datos sobre el desempeño laboral de los graduados y señala las implicaciones que podría tener, para la movilidad social de este grupo, el creciente trabajo de profesionales en otras ocupaciones.

La participación laboral de la mujer ha sido una constante en la segunda mitad del siglo y la información reciente muestra que continúa en ascenso. Sin embargo, el estudio de Ana Lucía Gutiérrez y Carlos Rafael Rodríguez pone al descubierto que la mujer costarricense está sufriendo, en los últimos años, una pérdida de presencia en posiciones laborales ventajosas no obstante su creciente inserción laboral.

La publicación de estos cuatro trabajos permite un balance sociológico, desde distintos ángulos, de los alcances y características particulares que va asumiendo el nuevo modelo de desarrollo que se impulsa en el país y de cómo se van redefiniendo en él los distintos grupos sociales y ocupacionales.

Mylena Vega

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL COSTARRICENSE EN UN CONTEXTO DE AJUSTE (1985-1997)

Carlos Castro Valverde

RESUMEN

En Costa Rica durante los años noventa aparecen una serie de tendencias novedosas en la inserción laboral de la población relacionadas con la profundización del proceso de ajuste estructural y la conformación de un nuevo estilo de desarrollo. Son parte de estas tendencias: la terciarización creciente de la población ocupada, la rápida reducción del empleo agrícola, la presencia masiva de inmigrantes nicaragüenses, la pérdida de importancia del Estado como empleador y el incremento del porcentaje de microempresarios en la población ocupada urbana.

1. INTRODUCCIÓN¹

Desde mediados de los años ochenta se ha venido conformando en Costa Rica un nuevo modelo económico y social. Los programas y políticas de ajuste estructural representan uno de los principales hitos de dicho modelo, que a su vez se conforma y modifica en el marco de las acciones de los distintos actores sociales y políticos. En el nuevo estilo de desarrollo se asigna al mercado un rol protagónico, se redimensiona el papel del Estado y se reorienta la actividad productiva, otorgándole prioridad a la promoción de las exportaciones no tradicionales fuera del área centroamericana, conjuntamente con la apertura externa y la liberalización de la economía.

El desarrollo de este nuevo modelo implica un conjunto de transformaciones en la estructura socio-laboral de la población costarricense, aún cuando no se ha presentado un agudo deterioro en las condiciones sociales y laborales.

Los indicadores analizados muestran que pueden distinguirse dos períodos en el proceso de ajuste, que corresponden también a diferentes momentos políticos en la sociedad costarricense. El primero, en los años 80, cuando luego de la crisis de inicios de la década se inicia un proceso de estabilización económica así como los cambios en la estructura productiva con la adopción de los programas de ajuste estructural a partir de 1985. El segundo, en los años 90, cuando se profundizan las tendencias del período anterior y hay claramente una inflexión en el comportamiento del mercado de trabajo.

1 En el presente trabajo se analizan tendencias de índole general sobre el comportamiento del empleo, no así las diferencias por sexo y las características de la participación laboral de la mujer, que son objeto del artículo preparado por Carlos Rodríguez y Ana Lucía Gutiérrez. Ambos trabajos son producto del proyecto "Modificaciones en la estructura social costarricense" del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, conjuntamente con otros artículos que aparecen en el presente número de la *Revista de Ciencias Sociales*.

2. CARACTERÍSTICAS Y ETAPAS DEL PROCESO DE AJUSTE

Los programas de ajuste estructural acordados por el gobierno costarricense con el Banco Mundial en los años 1985 (PAE I) y 1989 (PAE II) constituyen los dos principales hitos institucionales en la implementación del nuevo modelo. El primero tuvo como énfasis apoyar la consolidación del proceso de estabilización económica iniciado en 1983 y sentar las bases para una reorientación del aparato productivo, para lo cual se reformó el sistema de aranceles, reduciendo el proteccionismo del período anterior (MIDEPLAN, 1993; pp. 82 y 25-30). El PAE II profundizó el proceso de apertura externa al establecer reducciones arancelarias paulatinas, redujo la intervención del Estado en el mercado interno mediante la reestructuración del Consejo Nacional de Producción (CNP) e introdujo reformas en el sistema financiero (*ibid.*, pp. 84-88).

Además de dichos programas, han jugado un papel complementario los convenios con el FMI, de los cuales el gobierno recibió un total de 8 préstamos entre 1981 y 1995 por un monto de 365 millones de dólares, y los convenios con la AID, un total de 11 entre 1982 y 1992, por un monto de 873 millones de dólares (Hidalgo, 1996; pp. 82-83). Los primeros se orientaron principalmente a la reducción del déficit fiscal y los segundos a la privatización de las empresas públicas y al fortalecimiento de la banca privada (Raventós, 1997; p.117).

El proceso de ajuste adquiere una serie de especificidades en el caso costarricense, evitando las medidas de "shock" que se han aplicado en otras experiencias latinoamericanas (Rovira, 1995; p.20) y por ende las severas consecuencias sociales de un rápido deterioro de las condiciones de vida de la población. Aún así, existe un cambio de orientación con respecto al modelo vigente hasta los años 70, pues los dos partidos políticos mayoritarios coinciden, con diferencias de matices, en otorgarle un mayor papel al

mercado como instancia organizadora de la sociedad y menor al Estado (*ibid.*, p. 19). Tal y como se ha puntualizado, la discusión sobre la aprobación de los PAES ha estado centrada en los equipos económicos de los gobiernos, dejando por fuera a los actores sociales y limitando el papel de la Asamblea Legislativa a la aprobación de los convenios (Raventós, 1997; p. 125).

En los años 90 el proceso de transformación de la economía y las políticas estatales se ha profundizado. Durante el inicio de la administración Calderón Fournier (1990-1994) se tomaron medidas más rigurosas para estabilizar la economía, en lo que algunos de los críticos del gobierno calificaron como "imposición temporal de la ortodoxia" (Garnier, *et al.*, 1996; p. 26). Sin embargo, durante el último año del gobierno hubo un cambio de orientación "...acorde con una lógica político electoral del manejo de la economía" (Rovira, 1995; p. 47). Aún así, la propuesta del Programa de Ajuste Estructural III (PAE III) se planteaba como énfasis la reforma del Estado, así como la profundización de la apertura externa².

La administración Figueres Olsen (1994-1998) llegó al gobierno luego de una fuerte crítica durante la campaña electoral

2. Entre otras medidas se planteaba la apertura del monopolio de los seguros en un plazo de 30 meses, continuar aplicando un programa de movilidad laboral para reducir el empleo público, la privatización de la Fábrica Nacional de Licores, permitir la participación del sector privado en la construcción y explotación de obras públicas mediante una ley de concesión aprobada en 1993, la desmonopolización y posible venta de RECOPE, la reestructuración de diversas instituciones públicas (MOPT, INCOP, INCOFER, INVU), la integración de servicios de salud entre la Cess y el Ministerio de Salud, la reforma de los presupuestos públicos de acuerdo a un criterio de costos y logro de objetivos y la reducción de las atribuciones del Banco Central en el manejo de la economía (González, 1993, pp 20-29).

de los programas de ajuste estructural. Sin embargo, varias circunstancias llevaron a un compromiso con el PUSC (el pacto Calderón-Figueres)³ y a la adopción de diversas políticas que confirmaron las tendencias prevalecientes desde mediados de la década pasada. Se trata de medidas como la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central con el fin de hacer prevalecer el "criterio técnico monetario" más que el criterio político, la apertura del manejo de cuentas corrientes a los bancos privados, la apertura en la comercialización de los seguros permitiendo la participación de entidades privadas y los bancos del Estado, la continuidad durante 1994 y 1995 de un programa de movilidad laboral para reducir el empleo público, y la reforma en los sistemas de pensiones, entre otras (MIDEPLAN, 1998-a; pp 53-71).

Algunos indicadores económicos y de empleo muestran que la presente década constituye un período distinto en las transformaciones socio-económicas que se han venido desarrollando desde los años 80. Tres son las principales características que apuntan en este sentido. En primer lugar, entre 1991 y 1997 el PIB creció en promedio un 3,7% anual, cifra menor al 4,0% del período 1985-1990⁴. En segundo lugar,

si bien no es un cambio sustancial, las tasas de crecimiento del producto del sector terciario han tendido a ser mayores que en los sectores primario y secundario, de manera que si el primero representaba un 53,8% del PIB en 1980 aumentó a un 56,8% en 1997. Durante los años 1992 y 1993 algunas de las actividades de este sector mostraron tasas de crecimiento sumamente elevadas. El comercio —que incluye el comercio al por mayor y por menor, los hoteles y los restaurantes—, creció en términos reales en un 12,5% en 1992, un 7,5% en 1993 y un 5,0% en 1994, para hacerlo a un ritmo mucho menor en los años siguientes. Los establecimientos financieros crecieron en un 10,8% en 1992, un 12,4% en 1993 y un 7,0% en 1994. El transporte creció en un 14,0% en 1992, un 10,7% en 1993 y un 7,7% en 1994 (MIDEPLAN, 1998-c; p. 212).

En tercer lugar, el ritmo de crecimiento del empleo ha tendido a bajar, pues la tasa de crecimiento de los ocupados disminuyó de un promedio anual de 4,0% entre 1985 y 1990 a un 2,8% entre 1991 y 1997 (cuadro 1). En la década de los años noventa se sucedieron dos períodos recesivos durante los años 1991 y 1995-1996 en los cuales disminuyó el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos.

En ambos períodos se siguió una política salarial restrictiva, pues entre 1985 y 1990 la tasa de variación anual del ingreso mínimo aumentó un promedio de 0,1% y entre 1991 y 1997 un 2,0%. A lo largo de todo el período 1985-1997 se alternaron fases de aumento y deterioro de los ingresos mínimos, aunque podría decirse que no han experimentado una tendencia continua de disminución como consecuencia del ajuste y que los incrementos en promedio superan ligeramente la inflación.

3 El artículo citado de Rovira Mas (1995) es prolífico en analizar la coyuntura política de inicios de la administración Figueres Olsen. Entre otros factores inmediatos que llevaron a dicho pacto cita el debilitamiento ideológico del proyecto político del PLN, una mayoría precaria del gobierno en la Asamblea Legislativa, el incremento del déficit fiscal, el peso de la deuda interna y la recesión económica que asomaba en ese momento en el país (*ibid.* p. 30, 36-37).

4 Los indicadores se seleccionaron a partir de 1985, ya que en este año se aprobó el PAE I. Los años 1981 y 1982 corresponden a la crisis, y 1983-1984 corresponden al proceso de reactivación económica. Mientras que la segunda mitad de la década es el período en el cual comenzó a impulsarse el nuevo modelo económico.

CUADRO 1
COSTA RICA, INDICADORES ECONÓMICOS 1985-1997

INDICADOR	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Promedio 1985-90 1991-97	
VARIACIÓN ANUAL															
PIB real	0,7	5,5	4,8	3,4	5,7	3,6	2,3	7,7	6,3	4,5	2,4	-0,6	3,2	4,0	3,7
Primario	-5,5	4,8	4,2	4,6	5,7	2,5	6,3	4,0	2,4	3,0	4,0	-0,4	-0,7	2,7	2,7
Secundario	2,6	6,6	4,8	1,9	4,8	1,8	0,6	9,2	7,8	3,9	1,8	4,9	6,1	3,8	4,9
Terciario	2,2	5,3	4,9	3,8	5,5	0,3	1,7	8,4	7,1	5,2	2,1	1,2	3,2	3,7	4,1
COMPOSICIÓN PORCENTUAL PIB															
Primario	19,2	19,1	19,0	19,2	19,2	19,3	20,1	19,4	18,7	18,4	18,7	18,7	18,0	19,2	18,9
Secundario	26,4	26,6	26,6	26,2	26,0	25,6	25,2	25,5	25,8	25,7	25,5	24,5	25,1	26,2	25,3
Terciario	54,4	54,3	54,4	54,6	54,5	55,1	54,8	55,1	55,5	55,9	55,8	56,8	56,8	54,6	55,8
Índice Precios															
Consum ¹	10,9	15,4	16,4	25,3	10,0	27,3	25,3	17,0	9,1	19,9	22,6	13,8	11,2	17,6	17,0
Índice salarios															
mínimos	7,2	-1,4	-5,1	-7,2	9,3	-2,5	-2,8	7,7	1,4	-0,3	-1,8	3,6	6,3	0,1	2,0
Tasa anual ocupados	2,7	3,3	8,1	3,0	3,7	3,1	-1,0	3,6	5,1	3,8	2,7	-2,0	7,2	4,0	2,8

1/ Variación porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor

FUENTE. Con base en MIDEPLAN, 1998-c, pp 209-212, 234, 271. MIDEPLAN, 1995, pp 21-25 y cálculos propios a partir de la Encuesta de Hogares del Área de Estadística y Censos del MEIC (AEC-MEIC)⁵

3 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE EMPLEO

Las transformaciones en el modelo económico y social que se han venido operando en el país desde mediados de los años 80, han tenido como consecuencia una serie de cambios en la estructura laboral.

3.1 PARTICIPACIÓN LABORAL Y SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

A lo largo de los años 80 y 90 la participación laboral de la población ha tendido a

crecer. Así, la tasa de participación bruta (fuerza de trabajo como porcentaje de la población total) creció de un 34,7% en 1980 a un 39,8% en 1997, igual que ocurrió con la tasa de participación neta y la tasa de ocupación.

El desempleo y el subempleo durante los años 90 tendieron a crecer, interrumpiéndose una tendencia más o menos constante a la disminución que se había presentado entre 1983 y 1989, luego de la crisis de comienzos de la década pasada. La tasa de subutilización total de la fuerza de trabajo creció durante los años 1990-1991 y 1994-1996, que corresponden al inicio de dos nuevos gobiernos (cuadro 2). Es decir, se confirma lo señalado con anterioridad en el sentido que durante la presente década el proceso de ajuste es más riguroso y que la población ha debido enfrentar mayores problemas de empleo.

5 Denominada hasta 1996 Dirección General de Estadística y Censos. A partir de 1999 se constituye en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

CUADRO 2
TASAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN Y
TASAS DE SUBUTILIZACIÓN⁶ DE LA FUERZA DE TRABAJO (1985-1997)

TASAS	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Participación bruta	34.7	35.0	36.0	35.5	35.3	35.7	35.8	37.5	37.7	37.5	38.0	37.1	37.0	38.1	38.7	39.3	38.1	39.8
Participación neta	49.8	52.6	51.6	49.6	50.3	50.0	50.1	53.9	53.7	53.0	53.5	52.2	51.5	52.6	53.1	53.9	52.2	53.8
Ocupación	46.8	45.6	46.4	45.6	46.6	46.7	46.9	50.8	50.7	51.0	51.5	49.3	49.4	50.5	50.9	51.1	49.0	50.7
Deempleo abierto	5.9	8.7	9.4	9.0	5.5	6.8	6.2	5.6	5.5	3.8	4.6	5.5	4.1	4.1	4.2	5.2	6.2	5.7
Subempleo visible	4.6	5.8	7.0	6.2	5.7	5.0	5.1	3.2	3.0	3.2	3.4	4.0	2.8	2.6	3.5	3.7	4.4	4.2
Subempleo invisible	3.0	2.9	7.4	4.7	3.0	3.9	3.0	3.1	3.4	2.9	2.7	2.6	3.8	2.0	2.4	2.1	3.3	3.2
SUBUTILIZACIÓN TOTAL	13.5	17.2	23.8	19.9	14.2	15.7	14.3	11.9	11.9	9.9	10.7	12.1	10.7	8.7	10.1	11.0	13.9	13.1

FUENTE. Con base en AEC-MEIC. Encuestas de Hogares 1987-1997 y MIDEPLAN, 1995, p. 11.

6 La tasa de participación bruta es la fuerza de trabajo como porcentaje de la población total, la tasa neta es la fuerza de trabajo como porcentaje de la población de 12 años o más y la tasa de ocupación es la población ocupada como porcentaje de la población de 12 años o más.

El desempleo abierto es la población desocupada como porcentaje de la fuerza de trabajo. Las tasas de subempleo visible e invisible son el porcentaje de subempleos convertidos al equivalente entre desempleados abiertos y la fuerza de trabajo. Los subempleos visibles son las personas que trabajan menos de 47 horas por semana, que desean trabajar más y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo. Los subempleados invisibles son las personas ocupadas que trabajan habitualmente 47 horas o más y su ingreso primario mensual (ingreso en la ocupación principal y secundaria sumados) es inferior al *salario mínimo minimorum*. La subutilización total: es la suma de las tasas de desempleo abierto, subempleo visible y subempleo invisible.

3.2 LA TERCIARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

En el contexto del nuevo estilo de desarrollo que se ha venido conformando en el país desde mediados de los años ochenta, se amplió la terciarización de la estructura ocupacional, principalmente en los años 90, cuando el proceso de cambio tendió a profundizarse.

Así, entre 1980 y 1988 no existen grandes cambios en el peso relativo de los sectores primario, secundario y terciario⁷. El sector

7. La clasificación de la actividad económica y de los ocupados en estos tres grandes sectores tiene una función instrumental, principalmente. El sector primario incluye las actividades de extracción de recursos naturales, el secundario son las actividades que transforman las materias primas y comercializan los bienes producidos, y el terciario son las actividades de servicios, es decir, que en lugar de producir bienes ofrecen servicios a los demás (Giddens, 1995; p. 527)

primario captaba un 27,4% de los ocupados en 1980 y un 28,1% en 1988, con algunas oscilaciones en los años intermedios, el sector secundario ocupaba un 24,0% del total en

1980 y un 22,6% en 1988, y el sector terciario representaba un 48,3% en 1980 y un 48,3% en 1988. (cuadro 3)

CUADRO 3

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD*,
EN PORCENTAJES (1980-1997)

SECTOR	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PRIMARIO	27.4	27.6	30.0	28.2	28.7	27.3	26.9	28.1	28.1	26.2	25.9	25.5	24.1	22.6	21.4	21.6	21.6	20.6
SECUNDARIO	24.0	22.1	20.9	21.7	20.7	21.0	22.9	23.4	22.6	25.0	24.6	25.2	24.9	24.2	24.6	23.0	22.3	22.5
TERCIARIO	48.3	49.4	48.3	49.6	50.0	51.0	49.3	47.6	48.4	47.8	48.7	48.4	50.2	51.9	53.0	54.6	55.1	56.2
A N B E	0.3	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	1.2	0.9	0.8	0.9	0.7

(*) Sector primario agricultura Sector secundario minas, industria y construcción Sector terciario "electricidad, gas y agua", comercio, "transporte, almacenamiento y comunicaciones", "establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles", "servicios comunales, sociales y personales"

A N B E son actividades no bien especificadas

FUENTE: Con base en AEC-MEIC, Encuesta de Hogares

El cambio de tendencias se inicia en el año 1989. El porcentaje de ocupados en el sector primario comenzó a reducirse a partir de 1989, hasta representar un 20,6% en 1997, es decir 8 puntos porcentuales menos que en el año 1988. El sector secundario sigue un comportamiento oscilante, entre 1990 y 1992 tendió a crecer hasta captar alrededor de un 25% de los ocupados, para descender en los años subsiguientes hasta un 22,5% en 1997. Mientras que el sector terciario aumentó en 8,4 puntos porcentuales en un lapso de 8 años, pasando de un 47,8% en 1989 a un 56,2% en 1997.

La nueva terciarización de los años 90 viene a reforzar una tendencia de largo plazo, caracterizada por el incremento de las ocupaciones de los servicios. Así, las personas que trabajaban como empleados administrativos, docentes y profesionales, que habían mantenido inalterable su peso en la estructura ocupacional, alrededor de un 7% entre 1927 y 1950, duplicaron su peso relativo en los si-

guientes 23 años, llegando a un 14,6% del total en 1973 (Rodríguez; 1998; p. 171). El sector terciario en su conjunto aumentó de un 29,7% de la fuerza de trabajo en 1950 a un 42% en 1973. A partir de entonces aumentó poco: alcanzó un 44% en 1984 y un 43,8% en 1990 (Céspedes; Jiménez; p. 37). Por tanto no es sino hasta los años 90 cuando se refuerza de nuevo el proceso de terciarización, tal y como se señaló en el párrafo anterior.

Un desglose más específico del sector servicios permite ver que las diferentes ramas de actividad que lo integran registraron un crecimiento principalmente a partir del año 1992. En el caso del comercio, aumentó su participación en la población ocupada a partir de 1992, pasando de 15,6% en 1991 a un 19,1 en 1997. Los servicios sociales, comunales y personales también han tendido a crecer, aunque con un comportamiento más oscilante, lo mismo que el transporte y los establecimientos financieros (cuadro 4).

CUADRO 4

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD, EN PORCENTAJES (1987-1997)

RAMA DE ACTIVIDAD	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agric. Caza Silvicult. Pesca	28,1	28,1	26,2	25,9	25,5	24,1	22,6	21,4	21,6	21,6	20,6
Industrias manufactureras	17,3	16,5	18,7	18,0	18,7	18,9	17,9	17,9	16,5	16,5	15,6
Construcción	5,9	5,9	6,2	6,5	6,3	5,9	6,1	6,6	6,3	5,6	6,8
Explotación minas y canteras	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Serv. Comun. Soc y Person	23,5	24,5	23,9	24,6	23,7	24,1	23,7	23,6	24,6	25,0	25,6
Comercio al por mayor y detalle	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	16,6	17,7	18,4	19,3	19,6	19,1
Est. Financ. Segu. Bien. Inmueb.	3,0	3,0	3,4	3,3	3,7	3,6	4,2	4,4	4,3	4,4	5,1
Transp. Almacen. y Comunic.	4,2	3,9	3,6	3,9	4,3	4,7	4,7	5,1	5,3	5,1	5,4
Electricidad Gas y Agua	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1	1,2	1,4	1,5	1,1	1,0	1,1
No bien Especificados	0,9	0,9	1,0	0,7	0,9	0,8	1,2	0,9	0,8	0,9	0,7

FUENTE: Con base en AEC-MEIC. *op cit*

Contrasta esta tendencia con la evolución de la industria, pues luego de haber aumentado su participación en la población ocupada de un 17,3% en 1987 a un 18,9% en 1992, disminuyó a partir de este año hasta llegar a un 15,6% en 1997.

Si bien no se trata de convertir al proceso de ajuste en una especie de comodín que lo explica todo, no puede ser simplemente casual que los cambios mencionados en la estructura ocupacional se acentúen desde finales de los años ochenta y comienzos de la década de 1990, en una época en la cual, mediante el PAE II, se reduce sustancialmente el proteccionismo en el sector agrícola y se acelera la apertura externa de la economía mediante la disminución de los aranceles. En este sentido, el incremento de la población ocupada en los servicios, y en particular del comercio, estaría vinculado a un mayor dinamismo de la actividad comercial y financiera. lo mismo que al auge del sector turismo. La disminución experimentada por la población ocupada en la industria a partir de 1992 se relaciona probablemente con la reducción del número de industrias, en particular aquellas

afectadas por la apertura externa y la incapacidad para adaptarse al nuevo esquema exportador. Debe tomarse en cuenta que la participación porcentual de la industria en el PIB se ha mantenido estable desde 1980, año en el cual representó un 22,0%, en 1992 alcanzó el mismo porcentaje y en 1997 un 21,5% (MIDEPLAN, 1998-c; pp. 208-210). Esta diferencia entre su participación económica y la generación de empleo podría indicar procesos disímiles en la industria con respecto al nuevo esquema exportador, donde un sector tiene capacidad para insertarse en las nuevas actividades, mientras que otro sector no habría logrado resistir una mayor competencia externa.

Por el contrario, el sector terciario, como se indicó, ha tendido a incrementar su participación en el PIB, registrando algunas de sus actividades, tasas de crecimiento anual muy elevadas durante los años 1992, 1993 y 1994

Constituye un problema de investigación pendiente determinar cuál ha sido el nivel y calidad de empleo generado por las nuevas actividades de exportación. En el estudio realizado

por Jiménez y Céspedes (1994; pp. 97-100)⁸ encontraron que el sector de exportaciones no tradicionales había mantenido relativamente estable su participación porcentual dentro de la población ocupada (un 15,4% en 1987 y un 15,1% en 1993), mientras que el sector de exportaciones tradicionales había disminuido su participación (de un 15,0% a un 12,5%), lo mismo que el sector de bienes importables destinados al mercado interno o centroamericano (de un 15,0% a un 13,0%), y había aumentado el sector de bienes no comerciables, es decir, no exportables (de un 37,0% a un 41,7%). Sin embargo, en las investigaciones realizadas en FLACSO se ha llegado a plantear que como consecuencia del nuevo modelo económico está surgiendo "...un nuevo sector de transables, es decir dirigido o determinado por la competencia mundial", cuyas principales expresiones son la industria maquiladora, las exportaciones agrícolas no tradicionales y el turismo (Bodson, *et al.*, 1995; p. 7). Este sector registra un incre-

mento de su participación en la PEA de un 5,3% en 1983 a un 6,8% en 1989 y un 7,6% en 1992 (Cordero, Mora, 1998; p. 233), y se distingue por constituir una actividad distinta del sector formal tradicional debido a las características ocupacionales de la fuerza de trabajo que emplea, pues se trata principalmente mujeres jóvenes, solteras y con poca escolaridad, cuyas orientaciones laborales se determinan principalmente por una lógica de subsistencia (Bodson, *et al.*; p. 79).

Debe indicarse además que la Encuesta de Hogares presenta una limitación importante para captar la dinámica del empleo estacional, importante en las actividades agrícolas de exportación, debido a que se realiza únicamente en el mes de julio. Igualmente estaría subestimada la presencia de la población nicaragüense que ha llegado a constituir una fuerza de trabajo clave en una serie de actividades económicas.

8. En dicha investigación los autores realizaron una reagrupación de la población ocupada a partir de la clasificación CIU a cuatro dígitos, con el fin de desglosar entre el sector de exportación tradicional y no tradicional, el sector de importables que produce para el mercado interno o cen-

troamericano, y el sector de bienes no comerciables. Sin embargo, indican que la desagregación a partir de la Encuesta de Hogares no permite distinguir adecuadamente al sector turismo y a las exportaciones agropecuarias no tradicionales (Céspedes; Jiménez; 1994; pp 94-95)

RECUADRO 1
LA FUERZA DE TRABAJO NICARAGÜENSE EN COSTA RICA

Durante los años noventa se ha percibido en el país una presencia creciente de trabajadores inmigrantes nicaragüenses. Las actividades laborales en las cuales se insertan son principalmente los cultivos agrícolas de exportación, la construcción y el servicio doméstico.

Las estadísticas laborales existentes en el país no han permitido captar este fenómeno en todas sus dimensiones. En la Encuesta de Hogares se utiliza el concepto de residente habitual (personas con más de seis meses de residir en el país o que piensan permanecer más de ese tiempo) y sólo se entrevista a personas que viven en hogares. Esto dificulta captar a un gran sector de los inmigrantes nicaragüenses, pues un porcentaje importante no tienen una residencia fija en Costa Rica y conviven con grupos que no son familia entre sí.

Aún con esta limitación la Encuesta de Hogares incluyó a partir de 1997 una pregunta sobre nacionalidad que permite captar al menos las características de los inmigrantes en una condición más estable en el país. Se trata principalmente de trabajadores jóvenes, pues el grupo de 20 a 29 años representa un 40,3% de los nicaragüenses ocupados, mientras que en la población nacional constituyen un 26,1% del total de ocupados. Las tasas de participación laboral son considerablemente más elevadas en los inmigrantes, pues la tasa neta alcanza un 69,8%, cifra superior al 53,3% de la población costarricense. El nivel educativo no difiere de cualquier trabajador manual costarricense y es más elevado que el promedio de la población nicaragüense por ser trabajadores más jóvenes. Del total de hombres nicaragüenses ocupados un 31,5% laboran como agricultores, un 36,1% en ocupaciones de producción industrial y un 15,0% en los servicios, mientras que un 56,9% de las mujeres nicaragüenses trabajan en ocupaciones de los servicios.

En tres actividades la presencia de trabajadores nicaragüenses ha sido significativa: la construcción, la producción bananera y el servicio doméstico. En las dos primeras se trata de actividades que demandan una fuerza de trabajo joven con capacidad para laborar largas jornadas laborales con un intenso ritmo de trabajo.

En la construcción los trabajadores nicaragüenses han llegado a representar alrededor de un 70% de la fuerza laboral durante la llamada "obra gris" en las construcciones de mayor magnitud. Se ocupan principalmente en las labores menos calificadas, como peones y ayudantes. Según una encuesta *ad hoc*, un 64% tienen de 20 a 34 años, un 58% habitan en un tugurio, cuarto o rancho, un 69% eran jefes de hogar en Nicaragua y en muchos casos devengan un salario inferior al mínimo legal.

El servicio doméstico es una actividad laboral precaria, caracterizada por el bajo reconocimiento de los derechos de las trabajadoras (tan sólo un 15,8% eran aseguradas directas en 1997). La creciente presencia de trabajadoras nicaragüenses se refleja en la Encuesta de Hogares, pues pese a la subestimación del número de inmigrantes, en 1997 una quinta parte de las trabajadoras domésticas en la zona urbana eran de dicha nacionalidad. Se trata también de una fuerza laboral joven, pues de acuerdo a una encuesta *ad hoc* un 88% tenían de 18 a 39 años. La inestabilidad laboral y el bajo reconocimiento de sus derechos laborales (duración de la jornada laboral, seguro social, vacaciones, aguinaldo, preaviso) son características de la situación laboral de las trabajadoras domésticas inmigrantes, en mayor medida que las trabajadoras domésticas costarricenses.

La actividad bananera, que experimentó una fuerte expansión entre 1985 y 1995 creciendo el valor de las exportaciones 4,3 veces, generó una fuerte demanda de mano de obra, que fue suplida en un alto porcentaje por trabajadores inmigrantes nicaragüenses. En el cantón de Sarapiquí se calcula que los trabajadores nicaragüenses pueden representar un 40% del total de trabajadores, cifra que se eleva hasta un 95% en algunas fincas de productores independientes. Se trata de una fuerza laboral joven, pues un 84,5% son menores de 34 años, de acuerdo a una encuesta *ad hoc* efectuada en el cantón del Matina. Según esta misma encuesta un 46% de los trabajadores tenía más de un año de trabajar en la finca, un 54% tenía menos de un año y un 20% menos de tres meses, lo cual indica que un sector ha tendido a lograr cierta estabilidad laboral, mientras que otro sector se encuentra en condiciones de gran inestabilidad. De hecho, una de las características de la expansión bananera ha sido la utilización del mecanismo de los contratistas, como una forma de evadir las garantías laborales de los trabajadores, aunque su importancia ha tendido a reducirse en los últimos años debido a denuncias internacionales de los sindicatos.

FUENTE: Morales, Castro, 1999

3.3. LOS CAMBIOS SOCIO-OCUPACIONALES E INSTITUCIONALES

Un cambio de primer orden en la estructura laboral en Costa Rica es la reducción del peso del empleo público, particularmente significativa en una serie de ocupaciones que dependían en un alto grado del empleo en el Estado, pese a que han continuado creciendo como porcentaje de la población ocupada. A esto debe sumarse la pérdida de las condiciones de garantía de la estabilidad laboral que había caracterizado al empleo público en Costa Rica con el desarrollo de programas de movilidad laboral en la primera mitad de los años noventa.

El corte público/privado ha constituido una diferenciación importante en el mercado laboral en Costa Rica pues los empleados del Estado gozaban de mayores niveles salariales, diversas garantías de estabilidad en el puesto, en algunos sectores sistemas de pensiones más ventajosos⁹ y en general derechos laborales mayores que los trabajadores del sector privado.

A partir de los años 80 se abre una clara tendencia a la reducción del peso del empleo

público dentro de la población ocupada, que por su constancia en el tiempo constituye una tendencia de largo plazo. De esta manera, el porcentaje de empleados públicos con respecto al total de ocupados se redujo de un 19,6% en 1980 a un 14,2% en 1997. Debe puntualizarse que entre 1980 y 1986 el empleo público como porcentaje del empleo total se mantuvo estable, y que la tendencia a la disminución se presentó claramente a partir de 1990 (cuadro 5), lo cual coincide con una mayor rigurosidad en los programas de ajuste estructural y con el desarrollo de programas de movilidad laboral para reducir el empleo en el Estado.

La tendencia mencionada adquiere un mayor significado desde el punto de vista de la estructura social cuando se observa la reducción de la importancia del empleo público en aquellos grupos ocupacionales que dependen en mayor medida del mismo. Este es el caso de los profesionales y técnicos, pues en 1980 laboraban para el sector público un 75,4%, cifra que se redujo a un 54,9% en 1997. En el caso de los trabajadores administrativos, el porcentaje de ocupados en el sector público se redujo de un 53,9% en 1987 a un 38,9% en 1997, es decir, disminuyó en casi una tercera parte

CUADRO 5

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR INSTITUCIONAL, EN PORCENTAJES (1980 - 1997)

SECTOR	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SECT PRIVADO*	80,3	80,3	81,9	80,9	80,5	80,7	80,0	83,4	82,3	83,1	82,9	84,1	83,7	83,9	84,7	85,2	85,4	85,7
SECT PÚBLICO	19,6	19,5	17,7	18,9	19,3	19,1	19,7	16,3	17,6	16,8	17,0	15,9	16,2	16,1	15,3	14,7	14,6	14,2
Gobierno Central	8,6	8,7	8,2	8,9	8,8	8,7	9,5	7,5	8,5	8,2	8,1	7,5	7,7	7,3	7,0	6,5	6,9	7,0
Instit. Autónomas	11,0	10,8	9,5	10,0	10,5	10,4	10,3	8,2	8,5	7,9	8,4	7,6	7,8	8,0	7,6	7,6	7,1	6,5
Gobiern. locales**								0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8
SECT. IGNORADO	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* A partir de 1987 el sector privado incluye "organismo internacional".

** Antes de 1987 no se incluían los gobiernos locales.

FUENTE: Con base en AEC-MEIC, *op. cit.*

9. Las reformas a los sistemas de pensiones en el país y su efecto sobre los sectores sociales medios, principalmente sobre los educadores, constituye

una problemática en el análisis de los cambios socio-políticos en los años noventa que desborda las posibilidades de análisis del presente artículo.

en un lapso de 11 años. Los trabajadores de los servicios personales ocupados en el Es-

tado disminuyeron de un 26,1% en 1987 a un 19,7% en 1997 (cuadro 6).

CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS OCUPACIONALES POR SECTOR INSTITUCIONAL,
EN PORCENTAJES 1980-1997

GRUPO OCUPACIONAL	1980	1984	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector público	74,4	70,4	68,8	64,0	63,5	62,4	61,4	60,5	59,9	57,8	58,2	55,5	57,0	54,9
Sector privado	25,6	29,6	31,2	36,0	36,5	37,6	38,6	39,5	40,1	42,2	41,8	44,5	43,0	45,1
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	n.d.*	n.d.*	n.d.*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector público	n.d.*	n.d.*	n.d.*	53,6	54,8	51,4	51,8	48,8	47,9	46,4	43,4	42,6	39,1	38,9
Sector privado	n.d.*	n.d.*	n.d.*	46,4	45,2	48,6	48,2	51,2	52,1	53,6	56,6	57,4	60,9	61,1
TRAB. DE LOS SERVICIOS PERS.	n.d.*	n.d.*	n.d.*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector público	n.d.*	n.d.*	n.d.*	26,1	28,3	26,8	26,7	25,3	26,3	23,7	22,5	21,0	21,3	19,7
Sector privado	n.d.*	n.d.*	n.d.*	73,9	71,7	73,2	73,3	74,7	73,7	76,3	77,5	79,0	78,7	80,3

(*) Debido a los cambios en la clasificación de ocupaciones de la Encuesta de Hogares a partir de 1987 no se dispone de datos para estos grupos para los años anteriores.

FUENTE: Con base en AEC - MEIC, Encuestas de Hogares y Castro (1995, cuadro 12 anexo).

Este cambio en la estructura ocupacional no ha implicado una reducción del peso relativo de cada una de dichas ocupaciones como porcentaje de la población ocupada total, pues más bien aumentaron durante el período 1987-1997. En este lapso, los profesionales y técnicos crecieron de un 8,9% de la población ocupada a un 10,9%, los empleados administrativos de un 7,7% a un 8,5% y las ocupaciones de los servicios de un 13,4% a un 15,4% (cuadro 7).

Esta tendencia forma parte del proceso más general de terciarización de la fuerza de trabajo. De esta manera, también aumentaron su participación entre 1987 y 1997 los grupos de los comerciantes y vendedores, de un 10,4% a un 12,3% y las ocupaciones relativas al transporte y el almacenamiento, de un 6,3% a un 7,7%.

Por el contrario, disminuyó considerablemente el grupo de los agricultores, de un 27,4% de los ocupados en 1987 a un 19,6% en 1997.

En las ocupaciones de producción industrial, luego de presentarse un incremento de un 21,7% de los ocupados en 1987 a un 23,2% en 1990, se produjo un descenso a partir del año 1991, colocándose en 1997 en un 21,3% (cuadro 7).

Desde el punto de vista del cambio socio-ocupacional las tendencias más importantes en este período son por lo tanto el crecimiento de aquellas ocupaciones relacionadas con el proceso de terciarización de la fuerza de trabajo, conjuntamente con la reducción de la importancia del Estado como empleador, el descenso de los ocupados en la industria a partir de 1991 y de los agricultores durante todo el período en estudio.

CUADRO 7

POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, EN PORCENTAJES (1987-1997)

GRUPO OCUPACIONAL	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Profesionales y técnicos	8,9	9,6	9,8	9,6	9,5	10,2	10,8	10,1	10,6	10,6	10,9
Directores y Gerentes	3,4	3,0	3,0	3,1	3,7	2,8	2,7	3,4	4,5	3,8	3,7
Empleados Administrativos	7,7	8,0	8,2	7,8	7,2	7,9	8,2	8,2	8,6	8,2	8,5
Comerciant. y vendedores	10,4	10,6	10,6	10,4	10,3	10,9	11,4	12,3	12,4	12,6	12,3
Agricultores	27,4	27,4	25,3	25,0	24,3	23,2	21,7	20,3	20,1	20,8	19,6
Ocup. de producción industrial ¹	21,7	21,2	23,2	23,5	23,2	22,2	22,1	22,2	21,2	20,6	21,3
Ocup. transporte y almacenam. ²	6,3	6,0	6,1	5,5	6,5	7,0	7,0	8,1	7,7	7,9	7,7
Ocupaciones de los servicios	13,4	13,3	13,0	14,0	14,5	14,8	14,8	14,5	14,5	15,0	15,4
A.N.B.E.	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	1,0	0,4	0,5	0,5

1/ Incluye las ocupaciones de producción industrial I y II

2/ Incluye las ocupaciones relativas al transporte y las ocupaciones de estiba, carga y almacenamiento

Fuente Con base en AEC-MEIC, Encuestas de Hogares.

3.4 LOS CAMBIOS EN EL MUNDO AGRÍCOLA

La agricultura, en particular, y el mundo rural, en general, constituyen dos de los espacios productivos y sociales donde se manifiestan con mayor profundidad los cambios en la estructura social y laboral de la última década. El proceso de ajuste implicó un conjunto de transformaciones en las políticas agropecuarias, que se orientaron a favorecer las actividades vinculadas con el mercado externo y reducir la protección en aquellas destinadas al mercado interno. Las medidas que buscaban la liberalización de los mercados son principalmente las siguientes: la reducción del papel del Consejo Nacional de la Producción (CNP) en la regulación del mercado interno, mediante su salida de la comercialización de granos básicos y la eliminación de su monopolio en la importación de granos; la disminución gradual de la protección arancelaria; la eliminación de subsidios directos a los precios de los granos básicos y la limitación del crédito subsidiado a los pequeños agricultores (Proyecto Estado de la Nación, 1997; p. 218).

El proceso de apertura y liberalización ha implicado un reacomodo del peso relativo de las distintas actividades productivas, caracte-

terizado por el incremento significativo de las exportaciones no tradicionales y de la producción bananera, así como la reducción de las actividades destinadas al mercado interno, con diversas consecuencias sobre la estructura social en el agro.

El principal cambio en la estructura laboral de la actividad agrícola es la reducción sustancial de la importancia de los campesinos y los trabajadores familiares no remunerados dentro de la población ocupada. Los primeros disminuyeron de un 27,3% del total de ocupados en 1987 a un 22,7% en 1997, mientras que los segundos redujeron su participación de un 14,5% a un 8,0% en el mismo período (cuadro 8). Si se toman ambos grupos en su conjunto, podría decirse que las unidades productivas campesinas que no utilizan trabajadores asalariados perdieron una cuarta parte de su fuerza laboral. Por el contrario, los obreros agrícolas mantuvieron su participación relativa dentro de la población ocupada agrícola, alrededor de un 49% en el período en estudio, e incrementaron su participación los pequeños y medianos productores agrícolas que contratan mano de obra asalariada. Si se toma en cuenta que estos dos grupos aumentaron en conjunto de un 3,6% a un 9,3% de los ocupados en la

agricultura, es decir multiplicaron su participación 2,5 veces, mientras que los campesinos y los trabajadores familiares no remunerados disminuyeron de un 41,8% de la población ocupada agrícola a un 30,7%, es decir redujeron su participación en casi una tercera parte, se puede hablar de un importante proceso de descampesinización. Pero, a su vez, este dato nos indica la presencia de una recomposición social en la cual algunos sectores tienen capacidad para insertarse en nuevos procesos productivos, vinculados probablemente a la agricultura de exporta-

ción. Este sector estaría representado por el incremento de los pequeños y medianos productores agrícolas que emplean trabajadores asalariados. Además, el aumento de las ocupaciones manuales no agrícolas, de un 4,3% a un 7,3% entre 1987 y 1997, indica en alguna medida la presencia de nuevos procesos productivos, relacionados posiblemente con el empaqueo y procesamiento de productos agrícolas. Los empresarios agrícolas que contratan a más de 10 trabajadores mantuvieron su participación relativa en cifras de alrededor de un 0,3% (cuadro 8).

CUADRO 8

RAMA AGRICULTURA, COMPOSICIÓN POR GRUPOS SOCIO-OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA. EN PORCENTAJES (1987-1997)

GRUPO SOCIAL	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Empresarios (más de 10 trabajadores)	0,3	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Medianos productores (5-10 trabajadores)	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8	1,0	1,0	1,7	1,1	1,1	1,6
Pequeños productores agrícolas (1-4 trab)	3,0	5,3	4,4	6,0	4,3	5,4	5,2	7,0	5,8	6,9	7,7
SUBTOTAL pequeños y medianos prod.	3,6	6,1	5,3	6,6	5,1	6,4	6,2	8,7	6,9	8,0	9,3
Campesinos *	27,3	25,4	26,9	25,2	26,7	27,0	24,4	21,0	22,4	23,4	22,7
Trabajadores campesinos no remunerados	14,5	12,2	11,1	12,0	10,6	9,1	9,4	8,5	8,8	8,1	8,0
SUBTOTAL campesinos y no remunerados	41,8	37,6	38,0	37,2	37,3	36,1	33,8	29,5	31,2	31,5	30,7
Obreros agrícolas	48,3	50,1	49,5	48,2	49,3	48,7	50,1	51,3	49,4	50,3	49,7
Ocupaciones manuales no agrícolas	4,3	4,0	5,1	5,9	5,7	6,5	6,8	7,8	9,4	7,0	7,3
Otras ocupaciones	1,7	1,6	1,9	1,8	2,2	2,0	2,8	2,3	2,8	2,9	2,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Incluye a los agricultores por cuenta propia que no emplean fuerza de trabajo asalariada.

FUENTE. Proyecto "Modificaciones en la estructura social costarricense", tabulados especiales sobre clases sociales, con base en Estadística y Censos, Encuestas de Hogares, Módulo de Empleo

Los cambios se presentaron no sólo en la agricultura, sino en el mundo rural en general, donde se ha modificado de forma muy significativa la inserción ocupacional de la población. El aporte de la agricultura a la captación de empleo en la zona rural disminuyó sustancialmente, al caer su participación en la población ocupada de un 47,5% en 1987 a un 35,3% en 1997. El sector secun-

dario se ha mantenido relativamente estable, mientras que el sector terciario ha registrado un importante aumento, pasando de un 33,4% de la población ocupada en 1987 a un 42,6% en 1997 (cuadro 9). Es probable que este incremento se relacione con el peso del sector turismo en muchas zonas rurales y con los servicios requeridos por las nuevas actividades de exportación.

CUADRO 9
POBLACIÓN OCUPADA EN LA ZONA RURAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD,
EN PORCENTAJES (1987-1997)

SECTOR DE ACTIVIDAD	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agricultura	47,5	47,8	44,8	44,1	43,2	40,6	38,3	37,0	36,8	37,2	35,3
Industria, Construcción	18,3	18,4	21,0	21,9	21,6	22,1	22,3	23,2	21,5	19,8	21,7
Comercio y servicios (*)	33,4	33,3	33,3	33,4	34,6	36,7	38,6	39,2	41,0	42,1	42,6
No bien especificados	0,7	0,5	0,9	0,7	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,4

(*) Incluye electricidad, gas y agua, comercio, transporte y comunicaciones, establecimientos financieros; servicios comunales y personales

FUENTE: Con base en Estadística y Censos, Encuestas de Hogares, Módulo de Empleo

3.5 LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL SECTOR INFORMAL

El concepto de sector informal urbano (SIU) ha sido objeto de múltiples definiciones y cuestionamientos en el contexto de las ciencias sociales. Aquí, más que adentrarnos en la discusión sobre la pertinencia del concepto, nos interesa partir de una definición usual, con el fin de percibir algunas tendencias en la evolución del sector y contar con elementos que permitan definir líneas de investigación hacia futuro. Por tanto, y con fines operativos, utilizamos la definición de sector informal urbano (SIU) desarrollada por PREALC-OIT, en la cual se busca captar este fenómeno a partir de las Encuestas de Hogares. Esta definición incluye en el sector informal a

"...el conjunto de actividades productivas no agrícolas, realizadas dentro del ámbito privado de la economía y caracterizadas por su pequeña escala y reducida rotación de capital humano. Operativamente, esta definición se traduce en incorporar como trabajadores del SIU a todos aquellos que, sin poseer algún grado de instrucción universitaria, laboran para empresas privadas no agrícolas que cuentan como máximo cuatro trabajadores" (Trejos, 1991; pp. 259-260).

La principal tendencia que puede captarse es un incremento del sector informal durante los años noventa, pues pasó de representar un 29,4% de la población ocupada urbana en 1993 a un 32,1% en 1997 (cuadro 10). Este incremento se presentó principalmente entre los asalariados de las microempresas y los microempresarios, no así en los cuenta propia que muestran un comportamiento muy oscilante a lo largo de todo el período en estudio¹⁰. Debe considerarse que el tamaño del sector informal en 1997 es superior al año 1987 y que entre este año y 1991 se había mantenido en cifras de alrededor de un 29%. Además, durante 1997 se presenta un cambio de tendencias con respecto al período 1992-1996, pues aumentaron los cuenta propia con respecto al año anterior y disminuyeron los asalariados de las microempresas (gráfico 1).

10 El dato del año 1992 en cierto modo representa una tendencia anómala, pues el sector informal bajó de un 29,9% en 1991 a un 26,1% en 1992, para aumentar a un 29,0% en 1993

CUADRO 10

POBLACIÓN OCUPADA EN LA ZONA URBANA POR SECTOR FORMAL
E INFORMAL, EN PORCENTAJES (1987-1997)

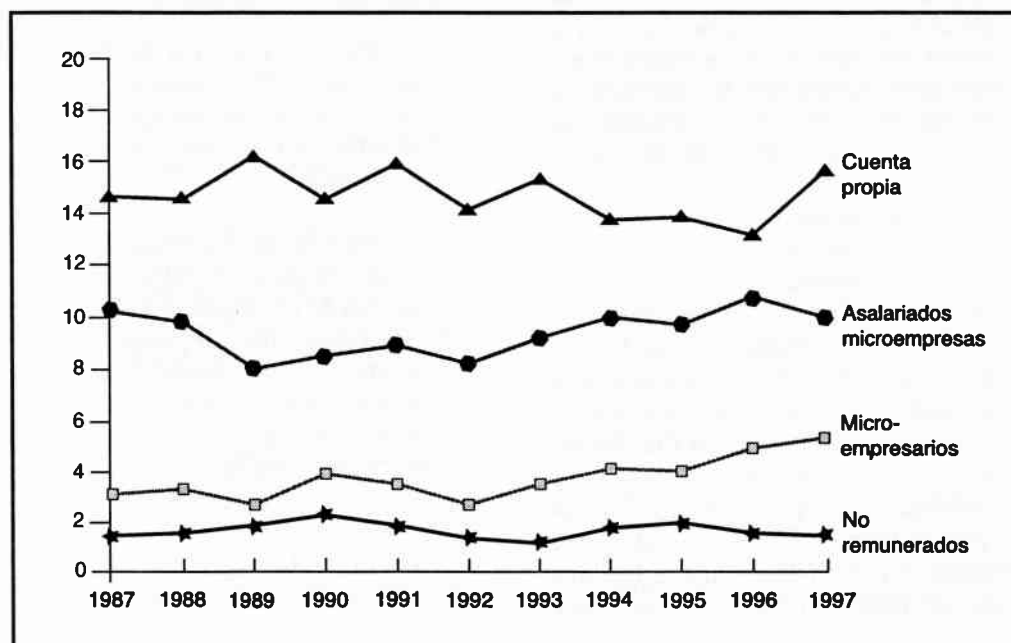
ACTIVIDAD	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SECTOR FORMAL	62,1	61,7	61,1	61,4	59,6	65,1	61,7	60,1	62,2	61,0	59,0
ASALARIADOS	59,2	59,2	58,4	58,4	56,5	62,2	58,6	56,7	58,1	57,3	55,3
INDEPENDIENTES	2,9	2,5	2,7	2,9	3,1	2,9	3,1	3,5	4,1	3,7	3,7
Patrones	1,4	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,2	2,1	2,1	2,1	1,9
Cuenta propia (profesionales)	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,9	1,4	2,0	1,6	1,8
SECTOR INFORMAL	29,1	28,8	28,5	28,9	29,9	26,1	29,0	29,4	29,3	30,2	32,1
ASALAR. MICROEMPRESAS ^{1/}	10,1	9,7	7,9	8,4	8,8	8,1	9,1	9,9	9,6	10,7	9,9
MICROEMPRESARIOS ^{2/}	3,0	3,2	2,6	3,8	3,4	2,6	3,4	4,0	3,9	4,8	5,2
CUENTA PROPIA (NO PROFESIONALES)	14,6	14,5	16,2	14,5	15,9	14,1	15,3	13,7	13,8	13,1	15,6
NO REMUNERADOS	1,4	1,5	1,8	2,2	1,8	1,3	1,1	1,7	1,9	1,5	1,4
SERVICIO DOMÉSTICO	3,6	3,3	3,9	4,3	4,1	3,4	3,2	3,8	3,4	3,8	3,4
OTROS	5,2	6,2	6,5	5,4	6,4	5,5	6,1	6,7	5,0	5,0	5,4

1/ Como asalariados del sector formal se incluyeron aquellos que laboran en empresas de 5 y más trabajadores. En el sector informal se incluyeron los que laboran en empresas que emplean de 1 a 4 trabajadores.

2/ Patronos que ocupan de 1 a 4 trabajadores.

FUENTE. Con base en AEC-MEIC, Encuesta de Hogares, tabulados especiales.

GRÁFICO 1

SECTOR INFORMAL, GRUPOS OCUPACIONALES COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
OCUPADA URBANA (1987 - 1997)

Estas tendencias muestran, por una parte, un mayor dinamismo de las actividades del sector informal durante los años noventa en la generación de empleo en comparación con el sector formal. Por otra parte, un comportamiento muy oscilante del sector informal, que debe ser objeto de análisis más específicos.

Al respecto, en varias investigaciones realizadas en FLACSO-Costa Rica se ha cuestionado la utilidad del corte formal/informal para el análisis de los mercados laborales, en el sentido que representaba el período histórico de la modernización previa a los 80 y su respectiva crisis, mientras que la reestructuración productiva parece materializar la constitución de un nuevo modelo acumulativo representado por

“... la constitución de un sector de bienes y servicios transables que se insertan dentro de la lógica de la globalización” (Bodson, *et al.*; p. 32). Este nuevo sector escapa al corte previo formal/informal, mientras que tiende a perder importancia y a erosionarse el empleo formal. Igualmente, siguiendo este mismo planteamiento, existirían establecimientos con menos de 5 empleados que no se pueden asimilar al sector informal, pues los cambios tecnológicos permitirían la conformación de un nuevo sector de pequeñas empresas dinámicas (*ibid.*; pp. 34-35).

Por ende, las tendencias mencionadas de acuerdo a la clasificación tradicional entre sector formal e informal durante el período 1987-1997, si bien evidencian un mayor dinamismo de las actividades informales durante los años noventa, plantean una serie de interrogantes nuevas, principalmente sobre el significado del crecimiento de las pequeñas empresas. Por tanto, se requieren otras investigaciones que permitan ahondar en las nuevas formas de inserción laboral de la población en Costa Rica durante los años noventa, en particular incorporando varia-

bles sobre el tamaño y nivel tecnológico de las empresas.

4 CONCLUSIONES

A partir de la investigación se desprende que el proceso de cambio en el modelo económico y social en Costa Rica durante los años ochenta y noventa está acompañado por una serie de transformaciones en la estructura laboral.

Si bien no se observa un fuerte deterioro de las condiciones laborales, se observa un panorama de cambio durante los años noventa en diversas dimensiones:

- * Un ritmo más lento de creación de empleos nuevos en comparación con el quinquenio 1985-1990, así como mayores problemas de empleo debido a coyunturas recesivas en las cuales creció la subutilización de la fuerza de trabajo
- * El incremento de la terciarización de la población ocupada y un rápido descenso del porcentaje de ocupados en el sector primario, así como, en menor grado, una reducción del empleo en la industria dentro del sector secundario.
- * La presencia masiva de trabajadores inmigrantes nicaragüenses en actividades como la construcción, el servicio doméstico y los cultivos agrícolas de exportación.
- * La pérdida de importancia del Estado como empleador, particularmente significativa en aquellas categorías ocupacionales que dependen en mayor medida de su inserción laboral en el sector público, como son los profesionales, los empleados administrativos y, en menor grado, los trabajadores de los servicios personales.
- * En el sector agrícola, la reducción sustancial de los campesinos y los

trabajadores familiares no remunerados, así como el incremento de los pequeños y medianos productores que emplean trabajadores asalariados y de las ocupaciones manuales no agrícolas. De forma paralela, el aumento en las zonas rurales del empleo en el comercio y los servicios.

La terciarización es un fenómeno que debe ser objeto de mayores indagaciones, pues no se puede asimilar directamente a una continuidad en el proceso de modernización, debido a que incluye desde actividades calificadas como los profesionales, hasta ocupaciones poco calificadas como los servicios personales. Igualmente, la reducción del peso del empleo en la industria es un fenómeno que debe ser objeto de una mayor atención, pues ambos aspectos manifiestan cambios importantes en la inserción laboral de los trabajadores costarricenses, desde el punto de vista de la calidad del empleo y de la dinámica del aparato productivo.

Igualmente, existen fenómenos que no pueden ser captados adecuadamente por las estadísticas laborales del país, como la creciente presencia de trabajadores inmigrantes nicaragüenses, tema que requiere ser objeto de investigaciones específicas.

Asimismo, la evolución errática seguida por las actividades informales, aún cuando en el caso de los microempresarios hay una tendencia al aumento de su relevancia, plantea la necesidad de replantearse esta problemática desde un abordaje distinto al que se ha venido empleando hasta el momento en las investigaciones sobre mercados laborales.

En general, los cambios en la inserción ocupacional de la población de Costa Rica en los años noventa son un elemento de primer orden en la estructura social que se está configurando como parte de un nuevo estilo de desarrollo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bodson, Paul; Cordero, Allen; Pérez Sáinz, Juan Pablo. *Las nuevas caras del empleo*. San José: FLACSO-Programa Costa Rica, 1ª ed., 1995, 92 p.
- Castro V., Carlos. "Estado y sectores medios: redimensionamiento de un pacto social". San José: FLACSO-Costa Rica, *Cuadernos de Ciencias Sociales* No. 81, junio 1995, 74 págs.
- Céspedes, Víctor Hugo; Jiménez, Ronulfo. *Apertura comercial y mercado laboral en Costa Rica*. San José: Academia de Centroamérica, 1994, 161 págs.
- Cordero, Allen; Mora, Minor. "Costa Rica: el mercado de trabajo en el contexto del ajuste". En: Funkhouser; Pérez Sáinz. *Mercado laboral y pobreza en Centroamérica: Ganadores y perdedores del ajuste estructural*. San José: FLACSO-SSRC, 1ª ed., 1998, pp. 219-279.
- Giddens, Anthony. *Sociología*. Madrid: Alianza Universidad, 2ª ed., 1ª reimpresión, 1995, 864 págs.
- González, Mauricio. "El PAE III: una obra en ejecución". En: *Costa Rica, balance de la situación*, San José, Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS), No. 2, segunda época, julio 1993, pp. 11-62.
- Hidalgo Capitan, Antonio Luis. "Costa Rica: Apertura económica y cambio estructural (1980-1996)". Huelva: Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida (Huelva), *Tesis de Maestría* sobre Desarrollo Económico en América Latina, edición 1995, diciembre 1996, 157 págs.
- MIDEPLAN (1993). *Costa Rica: Balance del ajuste estructural 1985-1991*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), enero 1993, 132 págs. y anexos.

- MIDEPLAN (1995). *Costa Rica: Tendencias sociodemográficas, económicas y ambientales 1980-1994*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 1995, 101 págs.
- MIDEPLAN (1998-a). *Gobernando en tiempos de cambio: Administración Figueres Olsen*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 1998, 390 págs.
- MIDEPLAN (1998-b). *Costa Rica: Panorama Nacional 1997, balance anual social, económico y ambiental*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 1998, 359 págs.
- MIDEPLAN (1998-c). *Principales indicadores de Costa Rica*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 1998, 500 págs.
- Morales, Abelardo; Castro V., Carlos. *Inmigración laboral nicaragüense en Costa Rica*. San José: FLACSO-Fundación Friedrich Ebert-Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Defensoría de los Habitantes, 1999, 160 p.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo. *Neoinformalidad en Centroamérica*. San José: FLACSO-Programa Costa Rica, 1ª ed., 1996, 132 págs.
- Proyecto Estado de la Nación (1997). "Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible", *informe* No. 3. San José: Proyecto Estado de la Nación, 1ª ed., 1997, 306 págs.
- Proyecto Estado de la Nación (1998). "Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible", *Informe* No. 4. San José: Proyecto Estado de la Nación, 1ª ed., 1998, 354 págs.
- Raventós, Ciska. "De la imposición de los organismos internacionales al 'ajuste a la tica': Nacionalización de las políticas de ajuste en Costa Rica en la década de los años ochenta". En: *Revista de Ciencias Sociales*, Universidad de Costa Rica, No. 76, junio 1997, pp. 115-126.
- Rodríguez, Carlos. "Estratificación social y movilidad ocupacional en Costa Rica en el período 1950-1995". México D.F.: *Tesis de doctorado* en Ciencias Sociales, El Colegio de México, 1997, 418 págs. y anexos.
- Rovira Mas, Jorge. "La actual coyuntura política nacional: notas para su comprensión". San José: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales, *Contribuciones* No. 22, octubre 1995, 54 págs.
- Szasz, Ivonne; Pacheco, Edith. "Mercados de trabajo en América Latina". En: *Perfiles Latinoamericanos*. FLACSO-México, vol. 4, No. 6, junio 1995.
- Trejos, Juan Diego. "Informalidad en el Área Metropolitana de San José, Costa Rica". En: Pérez Sáinz, Juan Pablo; Menjívar, Rafael. *Informalidad urbana en Centroamérica. Entre la acumulación y la subsistencia*. San José: FLACSO-Nueva Sociedad, 1a. Ed. 1991, pp. 259-260.

LA CLASE MEDIA EN TRANSICIÓN: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS AL FINALIZAR EL SIGLO VEINTE

Mylena Vega Martínez¹

RESUMEN

¿Desaparece la clase media costarricense? El estudio trata de demostrar que contrario a prenociones muy divulgadas la clase media en Costa Rica no está desapareciendo al finalizar el siglo si bien se encuentra sometida a algunas transformaciones importantes. El objetivo del estudio es analizar el crecimiento de la clase media, sus cambios internos, la modificación de sus vínculos con el Estado, su presencia en las zonas rurales y urbanas, así como las ramas de actividad económica en que participa. También realiza algunas reflexiones sobre las perspectivas de desarrollo de esta clase social en el actual contexto histórico.

ABSTRACT

Is the Costa Rican middle class disappearing at the end of the Century? Contrary to well spreaded prenotions this study demonstrates the size increase of this group as well as the important changes it is undergoing. The study analyses the growth of the middle class, the internal modifications, the changing link to the State, the increasing presence in rural areas and the economic activities in which it participates. It also makes considerations about the future development of this social group.

1. INTRODUCCIÓN

La evolución de la clase media costarricense en la segunda mitad del siglo veinte está muy ligada al modelo de desarrollo vigente en nuestra sociedad en sus distintas fases.

Durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta el esquema prevaleciente se nucleó en torno al intervencionismo estatal, la banca nacionalizada, las protecciones y subsidios a ciertos sectores sociales; así mismo, a las políticas redistributivas y la sustitución de importaciones. En este contexto histórico, la clase media conoció un rápido

crecimiento y en buena medida fue el apoyo y a la vez la beneficiaria de muchas de las acciones estatales.

La década de los ochenta, y en particular sus primeros años, marca el inicio de un quiebre frente a la orientación anterior: el Estado comienza a ceder en sus acciones intervencionistas; en contraposición, el sector privado va cobrando mayor importancia y

1. Agradezco la valiosa colaboración de Alonso Villalobos en la recolección de información para este artículo.

los ejes de desarrollo se van desplazando de la industria, el café, el banano y la caña hacia ciertas actividades como la banca privada y las llamadas exportaciones no-tradicionales (plantas, flores, verduras, ciertos productos manufacturados, etc.), pero también hacia el turismo y más recientemente hacia las empresas transnacionales de alta tecnología. Estos procesos sin duda influyen o influirán, a mediano y largo plazo, en la evolución de la estructura de clases.

En el seno de esos cambios la suerte de la clase media parece estar en entredicho y se ha generado una serie de prenociones en torno a los efectos del ajuste estructural sobre ella y sobre el conjunto de la sociedad. El más difundido es el que, con buena caja de resonancia, sostiene la tesis de la desaparición de la clase media². Por supuesto que la pregunta inmediata es si esta tesis goza de algún asidero real o si es más bien un estado de ánimo catastrofista que merece explicación.

La intención del presente trabajo es justamente ubicar tendencias en la evolución de esta clase y por esa vía aproximarse a una posible respuesta a la pregunta anterior. Igualmente interesa analizar qué pueden expresar los cambios de la clase media sobre las modificaciones más generales de la sociedad costarricense.

El análisis se basa en la conceptualización (vid. nota 4) y los resultados del estudio "Cambios en la estructura de clases costarricense (1987-1994)" del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) (Vega *et al.*, 1995) y en sus actualizaciones posteriores.

2. LA CLASE MEDIA: CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Abundan criterios definitorios y perspectivas de análisis de la clase media. Es cierto que el neo-marxismo y el neo-weberianismo han superado, en buena medida, el debate sobre las clases sociales de sus fundadores y con ello han logrado entender mejor la emergencia de nuevos grupos de agentes. Pero el consenso sobre las características de este agrupamiento dista de ser una realidad.

Pareciera más cercano el acuerdo en torno a la denominada vieja clase media o pequeña burguesía, configurada por pequeños empresarios, que en lo concerniente a la clasificación de los nuevos y diversos grupos ocupacionales. Estos últimos son tan poco unitarios entre sí como lo son, por ejemplo, los profesionales y los asalariados de cuello blanco. Pareciera que lo que comparten estos grupos es el hecho de ocupar una posición intermedia entre los trabajadores manuales y los grandes empresarios.

Justamente la heterogeneidad interna de este conglomerado denominado clase media ha llevado a algunos autores a preferir hablar de "clases medias", en plural, para aludir a lo que sería esa amalgama sin unidad de funciones técnicas o económicas (Mann, cit. por Butler, 1995, p. 26).

De todas formas y más allá de la cuestión de denominación, existe la propuesta de incluir en ella a tres grupos definidos a partir de criterios distintos que son básicamente la propiedad y los credenciales educativos (Savage, cit. por Butler, 1995, p. 34). Se trata de

- a) los trabajadores de cuello blanco, que presentan pocas diferencias frente a los trabajadores manuales, ya que usualmente, al igual que estos, desempeñan trabajos rutinarios y de escasa autonomía, pero cuyas actividades no pueden considerarse totalmente manuales, lo cual los suele ubicar

2. Así, por ejemplo, durante la campaña electoral de 1994, la candidata a la segunda vicepresidencia, Rebecca Grynspan, afirmó que el árbol se estaba partiendo por la mitad. La revista *Rumbo* dedicó un extenso artículo en 1996 al tema de la desaparición de la clase media. También la portada de esta revista se ocupaba del tema que, además es motivo de debate en el medio académico.

- en diferente posición social que a los segundos³.
- b) la tradicional pequeña burguesía definida por la propiedad;
 - c) la denominada "clase de servicios" constituida por profesionales, administradores y gerentes caracterizados por sus posesiones culturales y organizativas.

En este contexto definitorio merece la pena mencionar que el uso de la noción "clase de servicios" que hacen autores de diferente proveniencia teórica como, por ejemplo, Renner, Dahrendorf, Goldthorpe, Urry (Butler, 1995, p. 27 sg.) ha tenido bastante aceptación en la sociología anglo-sajona como concepto aglutinador de los profesionales y administradores que surgen en décadas pasadas. Renner señala, dentro de ella, tres formas de servicio distintivas: los agentes vinculados al "servicio económico", como son los gerentes; los agentes ligados al "servicio social", como son los distribuidores de las prestaciones del estado benefactor; y, finalmente, el denominado "servicio público" del cual forman parte los funcionarios de la administración pública (Renner, cit. por Butler, 1995, p. 27). La principal particularidad de los profesionales es que controlan y regulan la reproducción con base en una serie de credenciales que los distinguen notablemente de los empleados de cuello blanco.

La clasificación de la clase media en el caso costarricense que sirve de base al presente estudio muestra afinidad con la que se plantea en los párrafos anteriores, aunque con matices propios. Al igual que ella, toma dos criterios diferenciadores: la propiedad y las particularidades de las ocupaciones (educación y autonomía); pero no usa el concepto "clase de servicios", el cual, por lo demás, puede resultar importante para un análisis

más desglosado de la clase media alta. El estudio del IIS diferenció dos estratos dentro de la clase media (la media alta y la media baja) con el fin de jerarquizar a aquellos agentes que por razones de propiedad o bien de educación y autonomía en el trabajo podían considerarse en una situación estructural diferente. El esquema clasificatorio general de las clases sociales en Costa Rica se resume en una nota⁴ y en lo que compete a la clase media es el siguiente:

4 El estudio del Instituto de Investigaciones Sociales consideró que las posiciones de las clases sociales pueden estudiarse por medio de dos dimensiones en primer lugar, la propiedad o no de medios de producción recuperable empíricamente, en el caso costarricense, por medio de la variable *categoría ocupacional* utilizada en los censos y en las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos. Esta clasificación censal permite diferenciar a los empleadores de los asalariados y de los trabajadores por cuenta propia. Además, a pesar de limitaciones, posibilita diferenciar el tamaño de los empleadores según el número de trabajadores que tienen sus empresas. La segunda dimensión del concepto de clase es la *posición en los mercados laborales*, estudiable por medio de la variable *ocupación*. Para distinguir las ocupaciones sirven como criterios clasificatorios las cualidades que les son propias (calificación, carácter manual o no de la actividad), así como el papel en la organización de los procesos de trabajo (autonomía, dominio sobre otras personas). La propuesta anterior se resume en el siguiente esquema:

	Dimensiones	Variables
Posiciones de clase	1 Propiedad o no de medios de producción	1 Categoría ocupacional
	2 Posición en los mercados laborales	2. Grupo ocupacional

El ingreso y la educación no se tomaron como variables definitorias del objeto de estudio por dos razones. Primeramente, porque ambas variables son resultado de las relaciones de apropiación y dominación. Segundo, porque el integrarlas a la clasificación hubiera significado una incursión en el terreno de la estratificación social. Con base en los criterios enunciados líneas atrás, la propuesta para Costa Rica consta de la definición de tres grandes clases con subdivisiones internas. La primera, positivamente privilegiada desde el punto de vista de la propiedad o la dominación en

3. Rodríguez (1997) utilizó, para el caso costarricense, una metodología similar a la del proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y la ratificó mediante análisis de conglomerados.

- a) La clase media alta: a ella pertenecen los profesionales y técnicos⁵ y los medianos empresarios y comerciantes que ocupan entre cinco y nueve trabajadores;
- b) La clase media baja: de ella forman parte los trabajadores de cuello blanco –cuyas actividades no pueden tomarse como totalmente manuales, aún cuan-

do a veces son monótonas y poco autónomas y se diferencian sustantivamente del trabajo de los profesionales y de su nivel de calificación– y los pequeños propietarios (empleadores de entre una y cuatro personas)⁶.

3. LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE Y EL ESTADO INTERVENCIONISTA (1948-1982): CRECIENDO JUNTOS

Durante la convulsionada década de los cuarenta se sentaron los fundamentos, primero institucionales y legales –con la

los procesos de trabajo: la *clase alta*. Esta clase incluye a los grandes empresarios y a los profesionales empleadores (con más de diez trabajadores), así como a los ejecutivos y dirigentes estatales y privados, quienes desempeñan las tareas de dirección de los procesos de trabajo. Debe advertirse que la captación empírica de esta clase social cuenta con dos limitaciones fundamentales: no hay medios para detectar procesos de acumulación de capital que son propios de la propiedad de medios de producción, por otra parte, las fuentes de información como las encuestas de hogares, no permiten diferenciar a un patrono con diez trabajadores de otro con ciento cincuenta o más. Esto, sin duda, distorsiona cualquier aproximación a la medición empírica de la clase alta.

Una segunda clase, negativamente privilegiada según los criterios considerados de apropiación y dominación, es la *clase baja*. Pertenecen a esta clase los trabajadores manuales, urbanos y rurales, así como también los trabajadores por cuenta propia que no emplean mano de obra asalariada.

Entre ambas clases polares estarían agentes que, en caso de ser empleadores lo hacen en menor escala (menos de diez trabajadores), así como aquellas ocupaciones no-manuales que gozan de variable autonomía y calificación, lo cual las diferencia sustantivamente de las clases bajas subordinadas o dependientes. Dentro de la denominada *clase media* habría dos subgrupos según el mayor o menor grado de autonomía y calificación y el tamaño, en el caso de los patronos. En primer lugar, la *clase media alta*, que incluye a los profesionales, sean estos independientes o asalariados y a los medianos empresarios o propietarios (de cinco a menos de diez trabajadores). En segundo lugar, la *clase media baja*, compuesta por los trabajadores de cuello blanco (que realizan tareas no-manuales, pero sin autonomía y sin requerimientos profesionales) y los pequeños empresarios (con menos de cinco trabajadores) (Vega *et al.*, 1995, primera parte, I).

5. La investigación del Instituto de Investigaciones Sociales no separó a los profesionales de los técnicos. Esto sin duda introduce un sesgo y acrecienta el tamaño de la clase media alta. Sin embargo, los

datos de las encuestas de hogares no permiten hacer la diferenciación entre ambas categorías de agentes. Más allá de las tendencias que referiremos más adelante, es preciso señalar que el análisis del nivel educativo de la clase media alta, en particular de los profesionales y técnicos, insinúa la diferencia de capital cultural entre profesionales y técnicos: si bien el grueso de esta categoría goza de educación superior (los profesionales), alrededor de un tercio no lo hace, porcentaje que correspondería, supuestamente, a los técnicos (Vega *et al.*, 1995, cuadros 4 y 9 del anexo estadístico). Esto plantea la duda sobre la pertinencia de incluir ambos grupos en una sola categoría, en especial dado el hecho de que su elemento definitorio es el capital cultural: deberían conformar categorías separadas y en diferente jerarquía dentro de la clase media. El trabajo de un técnico no goza de iguales credenciales, autonomía intelectual, etc. que el de un profesional, al que posiblemente se encuentra subordinado (técnicos dentistas, técnicos radiólogos, técnico de laboratorio). Sin embargo, la información de las encuestas de hogares a dos dígitos que maneja el proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica obliga a tomarlos unitariamente.

6. Por otro lado, un análisis más detallado de la clase media debería diferenciar, en la coyuntura actual y por razones que aparecen en el punto 7, a la clase media adscrita al Estado de la vinculada al sector privado. Los lazos identificatorios en el caso de la primera son manifiestos en las acciones organizativas que la cohesionan como fracción de clase y en el hecho de que, como indicaremos posteriormente, podría ser la más afectada por el síndrome de la desaparición. También cabe una diferenciación por rama de actividad, distinguiendo a las actividades de punta, de aquellas a las que ha ido desplazando. Quizás aquí se encuentre la principal segmentación futura de la clase media del país.

aprobación del Código de Trabajo, de las Garantías Sociales y la creación del Seguro Social— y luego, pasada ya la guerra civil de 1948, los fundamentos políticos y socio-económicos de lo que sería el nuevo modelo de desarrollo —nueva constitución, creación de entes estatales descentralizados, estatización de la banca, sustitución de importaciones.

La evolución del país en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta se basó en el papel preponderante del Estado como gestor de la actividad económica mediante créditos de la banca estatal, creación de infraestructura y servicios, subsidios y protecciones a diferentes grupos sociales, al igual que como ejecutor de políticas redistributi-

vas. El eje del desarrollo económico estaba en el proceso de sustitución de importaciones llevado a cabo mediante una producción industrial local protegida y destinada principalmente al mercado interno y a los países de la región centroamericana.

En este contexto, la clase media tuvo una evolución importante que se manifestó en un incremento acelerado (cuadro 1) con el cual se asocian dos factores: la expansión estatal (gobierno central e instituciones descentralizadas) y el incremento institucional y de cobertura del sistema educativo público. En otras palabras el Estado y la clase media tuvieron un crecimiento paralelo y estrechamente interrelacionado.

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LAS CLASES SOCIALES EN COSTA RICA 1950-1984
(EN PORCENTAJES)

CLASE	1950	1963	1973	1984
ALTA	12,1	3,4	6,9	4,2
MEDIA	11,8	18,2	21,8	28,4
BAJA	76,0	78,4	71,6	67,4

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995, con base en datos de los Censos de Población de 1950, 1963, 1973 y 1984.

Entre 1950 y 1980 surgieron alrededor de 216 nuevas instituciones estatales, cifra que casi duplica, en sólo treinta años, las 110 creadas desde la independencia, en 1821, hasta 1950. Durante el período también creció el gasto público con un promedio anual del 9,0%, mientras que el PIB lo hizo en un 6,6% durante los mismos años (Castro, 1994, p. 43-47). Esta situación expansiva del Estado significó un rápido aumento en el empleo estatal, el cual pasó de representar el 6,2% de la fuerza de trabajo en 1950 a un 9,0% en 1970 y un 18% en 1980 (Castro, 1994). Estos datos ponen de manifiesto la relación existente entre el estado intervencionista y la generación de empleo tanto de profesionales y técnicos, como de empleados de cuello blanco.

El auge del empleo estatal fue acompañado de mecanismos de ascenso y de estabilidad laboral garantizados por el estatuto de Servicio Civil de 1953 que permiten, entre otros, la consolidación de una burocracia y el establecimiento de una estructura jerárquica en la distribución de puestos públicos (Castro, 1994, p. 44).

Las condiciones antes señaladas no sólo facilitaron, en buena medida, la modificación de la estructura de clases de Costa Rica, sino que hicieron viable que la clase media fuera tanto agente de las políticas públicas del estado intervencionista como su beneficiaria. El Estado se constituyó así en fuente laboral segura para esta agrupación y

en canal de concreción de una movilidad social ascendente.

El otro factor que estimuló el crecimiento de la clase media fue la expansión de las posibilidades de educación secundaria y superior. Entre 1948 y 1980 creció significativamente el número de instituciones, lo mismo que los servicios educativos.

La educación primaria y secundaria se expandió rápidamente y el analfabetismo se redujo del 21,2% en 1950 al 6,9% en 1984 (Mideplan/Sides, 1998, p. 30). Simultáneamente aumentaron los educadores y los funcionarios administrativos (Rojas, 1992, p. 103) y con ello la clase media.

Durante ese período el número de universidades estatales subió con el establecimiento de tres nuevas entidades públicas –el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Estatal a Distancia– y una privada –la Universidad Autónoma de Centroamérica–.

La clase media logró, a lo largo de las décadas en cuestión, un mejoramiento en su nivel de vida que se expresa no sólo por el acceso a servicios de salud y educación, sino en datos sobre la distribución del ingreso que revelan la existencia en el país de lo que se ha denominado “concentración mesocrática” (Graciarena, cit. por Rovira, 1987, p. 30), sin que esto, en forma alguna, implique afirmar que la sociedad costarricense haya sido o sea de clase media (Vega *et al.*, 1995).

También, durante esos años, se fueron estructurando nuevos hábitos de consumo con el uso cada vez más amplio y generalizado de electrodomésticos, en particular del televisor, la radio, la cocina y la refrigeradora (Aguilar, 1996) y, en buena medida, los sectores medios constituyeron el mercado consumidor de la producción industrial local o centroamericana.

Por otra parte, parece factible que las condiciones anteriores fueron influyentes en

la adhesión de esta clase al proyecto del estado intervencionista o de bienestar y configuraron su base de sustentación socio-política e ideológica que aún hoy se sigue manifestando en diversas encuestas de opinión pública (Unimer, 1995 y 1996).

4. CAMBIOS RECIENTES EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE: EL AJUSTE ESTRUCTURAL

La crisis económica de fines de los setenta e inicios de los ochenta puso en evidencia los límites del modelo de desarrollo basado en la fuerte presencia estatal, a la vez que el proceso de sustitución de importaciones mostró sus limitaciones. En otras palabras, el esquema de desarrollo que había guiado las décadas anteriores hizo aguas. El alto endeudamiento externo y el déficit del sector público, condujeron, al igual que en otros países, a realizar ajustes y a suscribir convenios con organismos financieros internacionales tendientes a sanear las finanzas públicas y a reorientar el esquema productivo. A pesar de que el ajuste estructural en Costa Rica ha sido lento y negociado conforme a las tradiciones políticas del país, esto no obvia el hecho de que ha producido una serie de modificaciones que es preciso resaltar seguidamente.

En 1985, se concretó el primer préstamo para el ajuste estructural, que será seguido de otros dos, el último de ellos ya en la década de los noventa. Los objetivos de estos préstamos pueden resumirse en tres puntos (Vega, 1996):

- a) lograr una reforma del Estado mediante el saneamiento de las finanzas públicas, la venta de activos y la reforma institucional;
- b) realizar una reforma financiera con el fin de liberalizar y flexibilizar la banca estatal;
- c) estimular una política económica de apertura para liberalizar la actividad

económica, eliminando subsidios y protecciones, a la vez que estimulando las exportaciones no-tradicionales.

Dentro de esta perspectiva de desarrollo el país ha restringido la expansión del Estado, ha privatizado ciertas empresas de producción (cemento, azúcar, aluminio), ha abandonado el monopolio estatal de la banca, ha terminado o limitado ciertos subsidios y protecciones y los aparatos estatales han dejado atrás su papel dinámico como empleadores (Vega, 1996). Por otra parte, las políticas públicas se inclinan a la liberalización en lo económico y a más focalización en lo social. Según un trabajo de hace unos años la política social ha propiciado un debilitamiento de las políticas sociales universalistas tradicionales que, por lo demás, son una fuente importante de derechos en los beneficiarios (Valverde *et al.*, 1993, II). Según los mismos autores, el grueso de los servicios públicos ha sufrido un deterioro que pesa sobre los usuarios y ha implicado para muchos miembros de la clase media gastos paralelos para cubrir servicios privados en particular en educación y salud. A la vez, las importaciones de bienes de consumo han crecido con la apertura comercial y se han diversificado, incorporando nuevos bienes a las pautas crecientemente consumistas del costarricense (Vega, 1998).

La exportación de bienes no-tradicionales a nuevos mercados ha surgido como el nuevo eje del desarrollo económico y su crecimiento ha ido de la mano del de la banca privada que ha cumplido un relevante papel en el financiamiento de esas actividades (Vargas, 1989; Vega, 1984). A pesar de las tendencias privatizadoras, el Estado mantiene siempre una importantísima presencia en la banca, pero ahora en competencia con la privada. También retiene un papel proteccionista de las exportaciones no-tradicionales y apoya el turismo, así como la instalación de empresas de alta tecnología. Por esta razón, las décadas de los ochenta y noventa, más que de un cambio radical y abrupto, han si-

do de transición hacia nuevas formas de estructuración política y social.

Como parte de la reforma del Estado empezó, en la década pasada, la aplicación de programas de movilidad laboral de los órganos públicos hacia el sector privado. En sus distintas formas y momentos, la movilidad laboral ha implicado congelamiento de plazas por vejez, muerte o renuncia, así como despidos y adhesión voluntaria a la movilidad (Valverde *et al.*, 1993, I). A la altura de enero de 1993 se habían movilizado 12 531 trabajadores públicos según palabras del Ministro de Planificación y Política Económica de entonces (cit. por Valverde *et al.*, 1993, I, p. 15). Esta movilidad parece haber redundado, según los investigadores del tema, en un retroceso en los derechos laborales de muchos de los involucrados, en un aumento e intensificación de las jornadas laborales, en una disminución de la capacidad organizativa. Así mismo, el trabajo de Valverde, Trejos y Mora, realizado a inicios de la década actual, llamó la atención sobre ciertas evidencias de lo que podría ser el inicio de una transformación ideológica de los movilizadores, más proclive a los postulados privatizadores del momento (Valverde *et al.*, 1993, I, p. 81-114).

Dentro de la reforma institucional del Estado se insertan los cambios a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional que ha sido un beneficio, de larga data, de este sector de la clase media. Los cambios introducidos a mediados de 1995 afectaron negativamente las condiciones de jubilación, condujeron a una larga huelga y causaron una profunda herida en este sector.

Si el Estado fue, en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, un polo dinámico del desarrollo junto al sector privado, este se desplaza hoy con toda fuerza hacia el último, sin que esto signifique el abandono total, por el momento, de las tareas benéficas y gestoras de los aparatos estatales. No puede pensarse, sin embargo, en la

permanencia indefinida de esta situación por largo tiempo. Las últimas dos décadas son de transición, es cierto, pero esta transición podría estar próxima a finalizar pues la agenda política actual contempla una mayor privatización: de las telecomunicaciones y los seguros, la venta de bancos estatales y la creciente apertura de la generación de energía eléctrica. De aprobarse estas transformaciones, el Estado se convertirá cada vez más en regulador que en prestador de servicios.

En este contexto de transformaciones ha ido tomando fuerza el discurso sobre la desaparición de la clase media, alimentado por cierta orfandad político-ideológica generada en el acercamiento de las propuestas y prácticas de los dos partidos mayoritarios en torno a las transformaciones que requiere el país. El Partido Liberación Nacional, promotor del Estado intervencionista, de las protecciones y subsidios a la sustitución de importaciones, ha mostrado desde el gobierno y en las dos últimas décadas, su adhesión al proceso de ajuste estructural y con ello ha roto su vínculo con lo que fue su trayectoria histórica. Se ha generado así un cierto divorcio entre las opiniones de los ciudadanos que mayoritariamente siguen

avalando al estado de bienestar (Unimer, 1995 y 1996) —no obstante ciertas e incipientes fisuras ideológicas— y las acciones privatizadoras que los gobiernos sucesivos han ido poniendo en marcha.

5. LA CLASE MEDIA. ENTRE 1987 Y 1996: PRINCIPALES TENDENCIAS

Más allá de cualquier nostalgia por el paraíso perdido que fueron en particular para los grupos ligados al Estado, las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, el análisis de información del Instituto de Investigaciones Sociales permite sustentar afirmaciones sobre lo que ha sido la evolución de la clase media entre 1987 y 1998 y con ello esbozar algunas consideraciones sobre el tipo de sociedad que se va delineando en la Costa Rica de fin de siglo.

Contrariamente a lo que indican ciertas preconcepciones, la clase media no ha desaparecido, ni tampoco parece estar sujeta a un debilitamiento de su presencia dentro de la estructura de clases. Por el contrario, el peso cuantitativo del conjunto de esta clase (media alta y media baja), mantiene un ritmo de crecimiento sostenido (cuadro 2).

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LAS CLASES SOCIALES EN COSTA RICA
1987-1998
(EN PORCENTAJES)

CLASE SOCIAL	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Clase Alta	2,4	2,4	2,4	2,5	2,9	2,6	2,7	3,3	4,0	3,3	3,1	3,3
Clase Media Alta	10,5	11,4	11,5	11,4	11,0	12,0	12,6	12,4	12,8	12,7	13,3	14,4
Clase Media Baja	14,0	15,1	14,7	15,2	14,5	15,3	15,5	16,7	16,9	17,8	18,0	18,6
Clase Baja	72,1	70,1	70,3	69,8	70,4	69,0	67,8	66,6	65,7	65,4	64,9	63,0
No Identificable	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,1	0,6	0,8	0,7	0,7
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1997
la Encuesta de Hogares, Instituto Nacional de Estadística

y actualizaciones posteriores, con base en tabulados especiales de estadística y Censos (INEC).

Entre 1987 y 1998, la clase media en conjunto aumenta en 8,5 puntos porcentuales (en 3,9 puntos la media alta y en 4,6 la media baja). Esto significa que las transformaciones estructurales no muestran, por el momento, un impacto importante sobre el tamaño de la clase media. La afirmación anterior no significa, de ningún modo, que dentro de ese crecimiento no se den cambios que la irán moldeando de manera distinta a su trayectoria anterior y que, sin lugar a dudas, están relacionados con los cambios generales apuntados líneas atrás.

El primer cambio atañe a la composición interna que puede observarse en el cuadro 3. El grueso de la clase media está compuesto por trabajadores de cuello blanco (principalmente administrativos) y por profesionales y técnicos asalariados, pero ambos grupos muestran propensión a decrecer. Este hecho revela el primer cambio importante dentro de la clase media: el for-

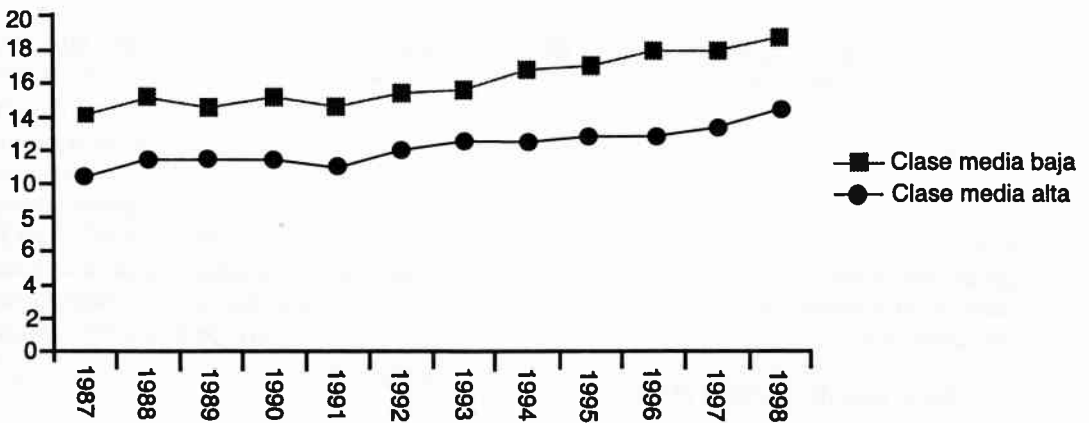
talecimiento tendencial de los grupos de propietarios privados.

Los profesionales y técnicos ocupados por el Estado configuran el primer grupo en importancia dentro de la clase media alta y su descenso de 3,5 puntos porcentuales evidencia la pérdida de importancia relativa del estado costarricense como empleador. Sin embargo, debe mencionarse, que sus similares empleados en la empresa privada muestran una mejoría en su participación porcentual.

Los trabajadores de cuello blanco y principalmente los ubicados en actividades administrativas, constituyen el principal sector de la clase media baja. Sin embargo, su presencia es descendente (-6,4 puntos porcentuales) a lo largo del período estudiado. El espacio de este grupo lo llenan los pequeños empresarios quienes incrementan su participación relativa en 5,3 puntos con un mayor dinamismo de los pequeños empresarios no-agrícolas.

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE* (1987-1998)



* En porcentajes de la población ocupada.

FUENTE: Elaborado a partir del cuadro 2.

CUADRO 3
COMPOSICIÓN INTERNA DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE 1987-1998
(EN PORCENTAJES)

GRUPOS SOCIALES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CLASE MEDIA ALTA												
Profesionales y técnicos	36,0	35,9	37,0	35,5	36,4	36,7	37,8	33,9	35,2	33,9	34,5	35,8
Por cuenta propia	3,8	3,6	3,9	4,2	4,5	3,8	4,9	4,7	5,5	4,8	6,0	5,4
Asalariados	32,2	32,2	33,2	31,3	31,9	32,9	32,9	29,2	29,6	29,2	28,6	30,4
Estado	23,1	22,8	23,1	21,8	22,1	22,0	21,9	19,8	19,5	19,4	19,0	19,6
Empresa Privada	9,2	9,4	10,1	9,5	9,9	11,0	11,0	9,4	10,1	9,8	9,6	10,8
Comerciantes	4,9	5,3	5,5	5,4	4,9	5,3	5,1	5,6	5,5	5,2	5,5	5,3
Medianos empresarios	2,0	1,8	1,5	1,8	1,9	2,0	1,9	3,0	2,4	2,5	2,5	2,4
SUBTOTAL CLASE MEDIA ALTA	42,9	42,9	44,0	42,8	43,2	44,0	44,8	42,5	43,1	41,7	42,5	43,6
CLASE MEDIA BAJA												
Trab. de cuello blanco	46,2	43,8	45,0	42,5	42,6	43,9	43,5	42,6	43,7	42,3	41,2	39,8
Administrativos	30,8	29,7	30,7	28,8	27,7	28,3	28,7	27,5	28,3	26,2	26,0	24,5
Empleados del comercio	15,4	14,1	14,3	13,7	14,9	15,6	14,7	15,1	15,3	16,2	15,2	15,4
Pequeños empresarios	11,3	13,3	10,9	14,7	14,1	12,1	11,8	14,8	13,3	16,0	16,2	16,6
No agrícolas	7,4	7,6	6,5	8,9	9,7	7,3	7,5	9,6	9,0	11,1	11,2	11,8
Agricultoras	3,5	5,6	4,4	5,8	4,4	4,8	4,2	5,2	4,3	4,9	5,1	4,8
SUBTOTAL CLASE MEDIA BAJA	57,1	57,1	56,0	57,2	56,8	56,0	55,2	57,5	56,9	58,3	57,5	56,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

Parece claro que el crecimiento de la clase media durante los años estudiados está basado, en buena medida, en una revitalización de grupos no ligados al Estado.

El segundo cambio importante dentro de la clase media está relacionado con su adscripción institucional al sector privado o estatal y su análisis complementa la afirmación anterior.

Poco más de la mitad (54%) de la clase media alta (profesionales y técnicos) la-

boraban en el Estado en 1987. Sin embargo, esta inserción institucional tiende a debilitarse, cayendo al 45,8% en 1998 e invirtiéndose el peso de los sectores. Por el contrario, los trabajadores de cuello blanco han estado y están en 1998 vinculados principalmente al sector privado -71,1% en 1987 y 83,8% en 1998- y esta relación tiende a fortalecerse con el incremento de 12,7 puntos porcentuales a lo largo de los años estudiados (cuadro 4).

CUADRO 4

DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE POR SECTOR INSTITUCIONAL. 1987-1998
(EN PORCENTAJES)

SECTOR INSTITUCIONAL	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CLASE MEDIA ALTA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector público	54,1	53,6	53,1	51,6	51,5	50,0	49,4	47,2	45,9	47,3	45,4	45,8
Sector privado	45,9	46,4	46,9	48,4	48,5	50,0	50,6	52,8	54,1	52,7	54,6	54,2
CLASE MEDIA BAJA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector público	28,9	28,5	28,2	26,1	23,8	24,2	24,1	20,8	21,2	17,5	17,6	16,2
Sector privado	71,1	71,5	71,8	73,9	76,2	75,8	75,9	79,2	78,8	82,5	82,4	83,8

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

Parece clara la pérdida de importancia relativa del Estado como generador de empleo, lo cual ratifica, también en este segundo caso, el creciente dinamismo que va cobrando el sector privado durante el período.

Sin embargo, hay que señalar un hecho: en un análisis interno del sector público destaca el incremento relativo de los profesionales y técnicos ocupados en él (cuadro 5), aunque su significado como empleador haya decaído a nivel social. Merece señalarse que, los mis-

mos datos del cuadro 5, ponen de manifiesto el descenso de las ocupaciones administrativas estatales de clase media baja que en números relativos son menores en 1998 que en 1987. La comparación de ambos fenómenos podría sugerir que la reforma del Estado estaría afectando, dentro de la clase media, principalmente a la clase media baja o bien que, dentro de la reforma del Estado, los puestos menos capacitados son los que tienden a restringirse. Una situación que también incluye a la clase baja (vid Vega *et al.*, 1995).

CUADRO 5

COMPOSICIÓN DE LA CLASE MEDIA EN EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE 1987-1998
(EN PORCENTAJES)

GRUPO SOCIAL *	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CLASE MEDIA ALTA												
Profesionales y técnicos	58,1	58,0	59,0	59,0	61,5	61,8	61,7	62,3	61,2	64,6	64,4	67,4
Comerciantes	0,4	0,5	0,7	0,8	0,6	0,1	0,7	0,0	0,9	1,2	1,1	1,1
SUBTOTAL CLASE MEDIA ALTA	58,5	58,5	59,7	59,7	62,2	61,9	62,4	62,3	62,1	65,8	65,6	68,6
CLASE MEDIA BAJA												
Trabajadores administrativos	41,5	41,5	40,3	40,3	37,8	38,1	37,6	37,7	37,9	34,2	34,4	31,4
SUBTOTAL CLASE MEDIA BAJA	41,5	41,5	40,3	40,3	37,8	38,1	37,6	37,7	37,9	34,2	34,4	31,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* En el sector público no tienen presencia los siguientes grupos ocupacionales de la clase media: medianos empresarios, empleados del comercio y pequeños empresarios.

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

El análisis anterior permite considerar que los aparatos estatales van dejando de ser, para cierta clase media, el polo dinámico de empleo que fueron en otro momento. Esto no significa que no sigan teniendo importancia, la tienen pero en forma decreciente. Por otra parte, estos grupos han perdido su distintiva seguridad laboral, puesto que la reforma y la privatización constituyen una amenaza que se cieme constantemente sobre los funcionarios públicos. Acciones como la modificación a la Ley de Pensiones del Magisterio no han hecho más que reforzar el sentimiento de incertidumbre y temor por los derechos alcanzados a lo largo de muchas décadas.

El tercer cambio se refiere a modificaciones en la adscripción urbana o rural de este grupo social. La clase media ha sido, a lo largo del tiempo, de extracción funda-

mentalmente urbana asociada a la alta concentración poblacional, ocupacional y de la actividad económica y política que ha caracterizado al país.

Durante el período de estudio esta realidad va cambiando y justamente la tercera transformación que vive esta clase es el incremento en las zonas rurales frente a las zonas urbanas⁷. En efecto, la clase media alta crece en esa zona en 7,8 puntos porcentuales a lo largo del período y la media baja en 5,5 (cuadro 6). La situación se perfila como una de las tendencias más importantes en relación con la clase media y podría acentuarse en el futuro conforme se fortalezcan actividades como la exportación de bienes no tradicionales en el agro, el turismo, así como procesos de desconcentración y de descentralización política que forman parte de la agenda del momento.

CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE POR ZONA GEOGRÁFICA 1987-1998
(EN PORCENTAJES)

CLASE SOCIAL/ ZONA	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CLASE MEDIA ALTA												
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zona urbana	78,2	76,0	75,6	76,1	75,7	73,0	72,5	71,4	70,1	69,8	68,9	70,4
Zona rural	21,8	24,0	24,4	23,9	24,3	27,0	27,5	28,6	29,9	30,2	31,1	29,6
CLASE MEDIA BAJA												
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zona urbana	63,8	63,3	63,2	60,3	59,1	62,1	62,4	61,4	60,8	58,4	59,4	58,3
Zona rural	36,2	36,7	36,8	39,7	40,9	37,9	37,6	38,6	39,2	41,6	40,6	41,7

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

7. El concepto de zona rural utilizado por las Encuestas de Hogares incluye la zona periférica urbana como parte de la rural (Céspedes y Jiménez, 1994, p. 137).

Dentro de la clase media alta el sector de mayor crecimiento en zona rural es el de los profesionales y técnicos asalariados (1,7 puntos porcentuales). Sin embargo, el cambio más notorio se da entre los pequeños empresarios quienes incrementan su presencia relativa en 6,1 puntos (cuadro 7). Ambos fenómenos podrían ser reveladores de dos orientacio-

nes en el agro costarricense: primeramente, de un tímido desarrollo de empresas más modernas y tecnificadas propensas a contratar un mayor número de profesionales y técnicos y, en segundo lugar, del importante papel que podrían tener los pequeños empresarios, no necesariamente dedicados a la producción agrícola, en la nueva dinámica de la zona rural.

CUADRO 7

COMPOSICIÓN DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN LA ZONA RURAL 1987-1998
(EN PORCENTAJES)

GRUPOS SOCIALES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CLASE MEDIA ALTA												
Profesionales y técnicos	26,1	25,7	29,2	25,3	25,4	28,1	29,1	26,1	28,9	27,2	27,7	27,8
Comerciantes	2,0	4,0	2,1	3,0	2,7	4,4	5,1	4,2	4,2	2,8	4,4	3,4
Medianos empresarios	3,0	3,2	2,9	2,8	3,0	3,4	3,0	5,2	3,6	4,1	4,1	4,2
Subtotal clase media alta	31,2	32,9	34,2	31,1	31,1	35,9	37,2	35,5	36,7	34,1	36,2	35,4
CLASE MEDIA BAJA												
Trabajadores administrativos	28,6	24,6	28,5	26,1	25,3	23,5	23,3	19,8	23,9	21,7	21,6	22,1
Empleados del comercio	22,2	17,5	16,9	16,4	18,5	17,7	18,9	18,8	18,3	19,1	16,4	18,3
Pequeños empresarios	18,1	25,0	20,4	26,4	25,1	23,0	20,5	26,0	21,1	25,1	25,8	24,2
No agrícolas	8,1	8,3	7,4	9,8	12,5	10,2	9,8	12,5	10,6	12,6	13,1	12,6
Pequeños product. agrícolas	10,0	16,6	13,0	16,6	12,6	12,8	10,7	13,4	10,6	12,4	12,6	11,6
Subtotal clase media baja	68,8	67,1	65,8	68,9	68,9	64,1	62,8	64,5	63,3	65,9	63,8	64,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

Además, la expansión de la clase media en esta zona puede interpretarse como indicativa de que, más allá de los datos globales sobre concentración poblacional y económica del país, estaría en vías de tomar forma, de manera aún no visible en esos datos, una posible reversión de esa tendencia. Refuerza esto la información relativa al crecimiento de las exportaciones no-tradicionales del sector agrícola que, según datos de PROCOMER, pasaron de representar el 9,9% del total de exportaciones en 1984 al 30,5% en 1990 y al 30,3%

en 1996, lo cual permite presumir, de proseguir esta tendencia, un dinamismo nuevo en las zonas rurales con posibles efectos descentralizadores, a mediano plazo, de la población y de la actividad económica.

El cuarto cambio atañe a las actividades económicas en que participan los diferentes grupos de la clase media y que muestran su ligamen con el sector terciario. La actividad más importante para la clase media alta son los servicios sociales y personales:

el 63,9% laboraba en esa rama. Sin embargo, entre 1987 y 1998 aparece una tendencia decreciente (cuadro 8) y, más bien, cobra auge la rama que agrupa a establecimientos financieros, electricidad, gas y agua. Pareciera que el despliegue de la actividad bancaria en estas dos décadas, con la creación de

bancos privados y sus sucursales podría estar teniendo ya un impacto, digno de mencionar, en la estructura ocupacional y de clases. Sin embargo, el agrupamiento de ramas efectuado por el Instituto de Investigaciones Sociales no permiten analizar el caso en detalle.

CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE POR RAMA DE ACTIVIDAD*
1987-1997
(EN PORCENTAJES)

Clase social / Rama de actividad	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
CLASE MEDIA ALTA											
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agricultura	2,4	3,7	3,3	2,1	3,4	3,1	3,3	3,9	3,1	3,1	3,3
Industria, exp. minas y construcción	12,1	14,2	13,3	13,9	14,9	15,0	13,5	14,5	14,0	12,9	14,4
Electricidad, gas, agua y estab. financieros	10,7	9,5	11,2	11,5	13,4	12,6	12,9	14,9	11,8	13,1	14,3
Comercio	10,2	9,1	9,0	8,9	7,5	8,8	8,2	8,4	9,7	11,1	9,1
Servicios sociales y personales	63,9	62,6	62,5	62,9	59,8	60,2	61,2	57,2	60,3	59,2	58,4
A.N.B.E.	0,7	0,8	0,8	0,7	1,0	0,3	0,9	1,1	1,2	0,5	0,6
CLASE MEDIA BAJA											
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agricultura	7,5	10,8	9,2	11,5	9,1	9,7	9,3	10,4	9,2	9,8	10,0
Industria, exp. minas y construcción	14,0	13,2	14,0	13,6	14,3	12,2	12,9	14,5	12,2	11,8	13,9
Electricidad, gas, agua y estab. financieros	12,1	10,7	11,6	10,2	9,8	8,8	12,2	10,9	10,6	10,6	10,7
Comercio	37,1	36,3	34,2	35,8	36,9	39,5	39,8	39,6	40,5	42,8	40,1
Servicios sociales y personales	28,0	28,0	30,0	27,6	28,6	28,4	24,9	23,6	26,8	24,3	24,5
A.N.B.E.	1,3	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8

(*) Por razones metodológicas se agruparon las ramas: industria con explotación de minas y construcción; electricidad, gas y agua con establecimientos financieros. Los datos cubren hasta el año 1997 pues durante 1999 esta información no fue actualizada por el IIS.

A.N.B.E. son actividades no bien remuneradas.

FUENTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

Por su parte, para la clase media baja tiene particular relevancia el comercio y ese significado ha ido en ascenso. Siguen en importancia los servicios, pero perdiendo dinamismo al pasar de representar el 28% de la clase media baja, en 1987, al

24,5% en 1997. Merece señalamiento el hecho de que si bien la agricultura es poco significativa para este grupo social, su importancia tiende a aumentar en 2,5 puntos, conforme se ve en el cuadro 8.

¿DESAFARECE LA CLASE MEDIA?

Como se dijo antes, durante el período de ajuste estructural los medios de comunicación y algunos políticos han hablado de la desaparición de la clase media. La información analizada permite sostener que esta aseveración carece de asidero empírico en lo que respecta al tamaño de la clase: la clase media, como grupo ocupacional y de propietarios, ha crecido entre 1987 y 1998 en 15 puntos porcentuales. Sin embargo, la diluación y aceptación que ha tenido la tesis de la "desaparición" entre políticos, académicos y periodistas, revela un sentir colectivo que merece explicación.

Como se ha señalado, las décadas de los ochenta y noventa son de transformación en lo económico, en lo político y en lo cultural (cambio de valores, de pautas de consumo, de interacción, etc.) (Vega, 1996). Un proceso de cambio así genera incertidumbre y ciertos indicadores pueden reforzar esos sentimientos en los distintos agrupamientos sociales. En el caso de la clase media hay dos posibilidades que podrían, entre otras, estar a la base de ese pesimismo colectivo: la incertidumbre generada por los posibles alcances de la reforma del Estado —que gravita como

amenaza para algunos de sus miembros— y la falta de estabilidad en los ingresos promedio.

La reforma del Estado conmueve un cimiento sobre el cual se había asentado la sociedad costarricense: los aparatos estatales perdieron o van perdiendo el lugar central de antaño, dejaron de constituir el nicho laboral seguro y ya no se presentan, socialmente, como la mejor opción laboral. Si a esto se añade la eventualidad de un aceleramiento de la reforma estatal, la incertidumbre se agudiza, en particular entre los funcionarios públicos.

En lo que respecta a los ingresos, el hecho más importante que se desprende del cuadro 9, es que a lo largo de los años 1988 a 1998 el índice del ingreso promedio real de la clase media alta ha sido oscilante, con predominio de una tasa de variación negativa (cinco años de nueve). La situación ha sido menos desfavorable para la clase media baja en el sentido de que ha dispuesto de tasas de variación positivas durante seis años; sin embargo, las oscilaciones han sido más drásticas (por ejemplo, entre 1994 y 1995), aumentando con ello la sensación de inseguridad, pero también de amenaza del nivel de vida.

CUADRO 9

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL INGRESO PROMEDIO REAL POR CLASE SOCIAL 1988-1998

CLASES SOCIALES	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Clase Alta	-11,4	8,8	0,3	-10,9	17,3	-3,2	11,2	-0,6	-10,4	7,5	-3,7
Clase Media Alta	-1,9	-1,3	1,0	-2,8	-1,8	16,0	2,7	-6,9	-0,8	0,4	9,5
Clase Media Baja	1,4	2,3	-7,5	-4,4	3,6	6,3	12,0	-5,9	1,5	-1,5	5,2
Clase Baja	-7,6	-0,5	1,8	-8,2	4,5	13,3	5,3	-5,4	-1,6	0,1	2,1
TOTAL	-5,6	0,3	0,0	-6,2	3,9	13,2	7,6	-3,8	-3,2	0,8	6,5

NTE: Vega, Castro, Gutiérrez y Rodríguez, 1995 y actualizaciones posteriores.

Por otra parte, la inestabilidad en los ingresos que, por lo demás, afecta al conjunto de las clases sociales, ocurre en un período caracterizado por el desarrollo de nuevos patrones de consumo facilitados por las políticas de apertura económica y por toda una serie de modelos que transmiten los medios de comunicación de masas, en especial la televisión (Vega, 1998). Cada vez más la posesión de objetos constituye una fuente de consolidación social y los bienes se consumen, a menudo, más por su valor simbólico que por el real. Por eso, el sentido de derumbe puede radicar también en el temor a la pérdida del status asociado a la dificultad o imposibilidad de adquirir ciertos bienes que forman parte de los hábitos y símbolos colectivos. Una investigación realizada en 1996 reveló las estrategias de los costarricenses para enfrentar la recesión económica de los años 1995-1997 y que consistían fundamentalmente en reducir los gastos en alimentación y en transporte (Sosa *et al.*, 1996), así como reducciones en las diversiones y en productos alimenticios de lujo como gaseosas, cervezas y licores (Garnier/BBDO, 1997). Si bien el costarricense parecía propenso a reducir el consumo de estos bienes, más que a eliminarlos totalmente de su presupuesto, este hecho es suficiente como para sentirse amenazado en su nivel de vida.

Se suma a lo anterior, el tener que recurrir con frecuencia a la compra de servicios privados en educación y salud, dado el deterioro de las prestaciones estatales. La creciente demanda de servicios educativos privados es clara: las instituciones de educación primaria privada pasaron de representar el 2,82% en 1970 al 5,80% en 1997 y las de educación secundaria privada, que representaban solamente el 11,98% en 1980, aumentaron al 30,86% en 1997 (Mideplan/Sides, 1998, p. 52-53). No puede pensarse que esa demanda signifique, en todos los casos, un esfuerzo económico para compensar las deficiencias de la educación pública, pero tampoco puede excluirse que lo sea para algunos y que signifique una carga adicional sobre sus ingresos.

A los dos elementos anteriores puede sumársele el contexto político caracterizado por varios factores. Primeramente, por la incapacidad del Estado actual para satisfacer las expectativas creadas en la población por la vieja trayectoria intervencionista y que, como se mencionó, obligan a la clase media, en muchos casos, a comprar servicios privados en educación y salud. En segundo lugar, por un cierre de canales de participación política de la población a causa del excesivo centralismo estatal, del afianzado bipartidismo y de la pérdida de funciones de las municipalidades (Vega, 1992). Aunque ha habido intentos por revertir esta tendencia, aún no ha cristalizado con fuerza. A lo anterior se suman notorios actos de corrupción política. Todo esto se conjuga para incidir en un sentimiento de desencanto político que ha tenido como corolario un incremento del abstencionismo electoral en los últimos comicios. Desde el punto de vista del objeto del presente trabajo, al desapego político se añade, en el caso de la clase media, el temor a la pérdida del status y bienestar alcanzados y esto, sin duda, ahonda los sentimientos derrotistas.

7. PERSPECTIVAS DE LA CLASE MEDIA: ¿ENTRE GANADORES Y PERDEDORES?

El presente análisis ha planteado la situación actual de la clase media como parte de un proceso de transición de un modelo de desarrollo hacia otro que todavía está en vías de consolidarse plenamente. La reestructuración económica que experimenta el país tiene como centro ciertas actividades que hemos denominado de punta: las bancarias privadas, las de exportación no-tradicional y el turismo. El crecimiento y centralidad que va adquiriendo el consumo, convierten al comercio, la publicidad y el mercadeo en actividades de gran relevancia. Asimismo, la presencia y el impacto de empresas de alta tecnología introduce una nueva variable en el panorama social y económico del país que merece una detenida observación en el futuro.

La clase media costarricense, en particular la media alta, creció y se formó en buena medida con base en el empleo en el sector público y desempeñando tareas administrativas y de extensión de las acciones de bienestar y empresariales del Estado costarricense. Este hecho hizo que buena parte de la clase media alta y, en menor medida, de la media baja se movieran en la esfera pública. Además los profesionales y técnicos que componen mayoritariamente a la clase media alta han sido, posiblemente, producto del sistema de educación superior público. Esta última situación tiende a cambiar en los últimos años con el avance de la universidad privada cuya presencia ha pasado de una institución en 1975 a treinta y ocho en 1997 (Mideplan/Sides, 1998, p. 52-53).

El papel preponderante que tuvo el Estado en las décadas de los sesenta y setenta, era sin duda un elemento diferenciador de primer orden dentro de la clase media. En otras palabras la inserción institucional de los agentes sociales en el sector estatal o privado era significativa a la hora de establecer segmentaciones dentro de esta clase social. Los grupos ligados a los órganos públicos gozaban de privilegios laborales, de seguridad, de protección sindical y de un ambiente poco competitivo y exigente que los distinguía de sus similares del sector privado.

Hoy, con el desarrollo de las nuevas actividades de punta y con el debilitamiento de la importancia del Estado, es posible pensar que la diferenciación principal dentro de la clase media se irá desplazando hacia nuevas direcciones y que el cambio estructural ha ido y seguirá debilitando la importancia de las posiciones burocráticas como fuente posible de empleo e incluso de prestigio.

Según la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) (1997), las carreras más solicitadas en la actualidad, aparte de educación, son administración, computación e ingenierías. Todas son profesiones (exceptuando la educación) cuyo futuro está

preferentemente en el sector privado y posiblemente en buena medida en las actividades de punta.

Un anuncio de la empresa Intel (*La Nación*, 10/5/98) podría ser representativo del profesional y técnico requerido por las nuevas empresas de alta tecnología y dar así indicios sobre la configuración de parte de ese nuevo segmento dentro de la clase media. Esta empresa busca personal profesional y técnico totalmente bilingüe (inglés-español), capaz de comunicarse con todos los niveles administrativos, así como con individuos de diversas disciplinas y trasfondos culturales. Debe demostrar destrezas de liderazgo grupal y trabajar eficientemente en equipo. Según información periodística Intel daría empleo a cuatro mil personas en la fabricación y montaje de procesadores de computadora y, muchos de ellos han recibido o recibirán entrenamiento en el extranjero. Así, por ejemplo, sesenta empleados se encontraban en Singapur en diciembre de 1997 (*La Nación*, 8/12/98). Además los empleados de esta firma gozan de una serie de incentivos como compra de acciones con descuento, bono efectivo anual que es parte de las ganancias de la empresa a nivel mundial, etc. y estos incentivos no son exclusivos de la compañía, también los tienen otras similares como Acer, Baxter Healthcare, etc. Conforme se intensifique la política de atracción de inversiones de esas empresas, la situación tendería a acentuarse.

Pero también el auge de otras actividades como la banca principalmente la privada, podría ser indicativa de los cambios en curso y de una mayor demanda de profesionales.

¿Se puede hablar, dentro de la clase media, de ganadores y perdedores del ajuste estructural? Es aún prematuro y arriesgado, pues se carece de suficiente base empírica para ubicar a los primeros. Lo que sí parece claro es el debilitamiento de la clase media más ligada al Estado y encargada de sus políticas benefactoras y redistributivas actualmente en

crisis. Sin duda, estos parecen ser los perdedores de los nuevos procesos socio-económicos y políticos. Pero ir más allá de esta afirmación requeriría una caracterización social y económica de los agentes vinculados a las principales actividades del momento, sin dejar de lado sus inclinaciones ideológicas. También requeriría elementos claros sobre el impacto de estas actividades en los mercados laborales y en general en la vida económica. Sólo así se puede llegar a establecer ese posible distanciamiento entre sectores de la clase media que se presume hipotéticamente aquí.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Durante el período de ajuste estructural la clase media, si bien no reduce su presencia dentro de la estructura de clases, sí experimenta una serie de cambios. El primer cambio está relacionado con su adscripción institucional al sector público o privado y justamente la característica más sobresaliente es que el Estado va perdiendo, a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, su dinamismo como empleador, en particular de profesionales y técnicos ya que el sector privado se convierte en el primer empleador de este sector de la clase media. La segunda transformación compete a la proveniencia tradicionalmente urbana que ha distinguido a la clase media y que tiende a variar durante el período de ajuste con una creciente presencia en zonas rurales. La tercera modificación atañe a la composición interna. En este caso es notorio el incremento pequeños patronos. Además de las modificaciones anteriores, es importante destacar que la clase media enfrenta, durante el período estudiado, una situación inestable en sus ingresos promedio que podría explicar parcialmente las opiniones y sentimientos sobre su desaparición que se han divulgado.

Sobre este polémico tema deben hacerse observaciones adicionales. El presente estudio llega a ciertas conclusiones sobre el tamaño de la clase media y, en consecuen-

cia, afirma que no está desapareciendo. Ahora bien, su propósito no ha sido demostrar una eventual pérdida de bienestar o calidad de vida pues para ello requeriría de estudios específicos, así como distinguir sectores dentro de esta clase social y determinar los posibles alcances diferenciales de tal situación. Sólo así se obtendrían bases sólidas para situar, dentro de la clase media, a los ganadores y perdedores del ajuste estructural.

La evolución de la clase media no puede dejar de verse como expresión de tendencias más generales de cambio que vive la sociedad costarricense en diferentes planos: en el Estado, en las relaciones sociales y en las zonas rurales. Así, el decreciente papel del Estado como empleador de grupos de clase media es revelador de la pérdida de importancia del Estado en la vida nacional. La relevancia creciente de su contraparte, el sector privado, se manifiesta en dos aspectos: en su ascendente papel como generador de empleo, pero igualmente en el significado que van adquiriendo los patronos sobre todo pequeños, un fenómeno que, a largo plazo, podría significar una reestructuración de las relaciones sociales en el país. El avance de la clase media en zonas rurales puede tomarse como expresión del dinamismo que adquieren ciertas actividades en estas zonas, así, por ejemplo, las exportaciones no-tradicionales agrícolas y la mayor presencia de actividades turísticas, comerciales y financieras.

Habría interrogantes, aparte de las relativas a la pérdida de bienestar, que lógicamente quedan sin responder, pues trascienden también los objetivos de este estudio y de la investigación en que se fundamenta. Una de las más significativas, desde el punto de vista del cambio social y de cómo afecta a la clase media es la relativa al impacto que tienen las políticas de atracción de inversiones en alta tecnología, de promoción del turismo, de apertura del sistema financiero, etc. sobre la configuración estructural e ideológica de sectores dentro de la clase media. Justamente, estos grupos, junto con los patronos

en aumento, podrían llegar a configurar la base de sustentación del nuevo modelo de desarrollo basado en la apertura económica, en la creciente liberalización y en el papel preponderante del sector privado.

9. FUENTES UTILIZADAS

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. "Actualización de indicadores (1995-1998). Cambios en la estructura clases costarricense (1987-1994)", Proyecto Modificaciones en la estructura social costarricense a partir de la década del ochenta. San José.

Aguilar, Irene (1996): "Publicidad, empresas transnacionales y 'comercialización de sueños'" en: *Contribuciones*, n°26, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, San José.

Butler, Tim (1995): "The debate over the middle classes" en Butler, T. y M. Savage: *Social change and the middle classes*, UCL Press, Londres, p. 26-36.

Castro, Carlos (1994): "Estado y sectores medios en Costa Rica: el redimensionalamiento de un pacto social (1980-1992)", *Tesis para optar al grado de Magister Scientiae*, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, San José.

Céspedes, Víctor Hugo y Ronulfo Jiménez (1994): *Apertura comercial y mercado laboral en Costa Rica*, Academia de Centroamérica, San José.

Mideplan/Sides (1998): *Principales indicadores de Costa Rica*, n°4, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), San José.

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) (1998): *Análisis de la demanda de profesionales en los periódicos La Nación y la República*. 1997, San José.

Periódico *La Nación* (varias fechas).

Rodríguez, Carlos Rafael (1997): "Los efectos del ajuste. Estratificación y movilidad ocupacional en Costa Rica en el período 1950-1995". *Tesis de doctorado en Ciencias Sociales*, Colegio de México, México.

Rojas, Yolanda (1992): "Transformaciones recientes en la educación costarricense" en: Villasuso, J. M. (editor), *El nuevo rostro de Costa Rica*, CEDAL, Heredia, Costa Rica, pp. 97-122.

Rovira, Jorge (1992): "Las universidades en los años ochenta" en Villasuso, J. M. (editor), *op. cit.*, pp. 123-139.

Unimer (6/1995): EBP-XVII, San José.

Unimer/*La Nación* (9/1996): EOP XX, San José.

Valverde, José Ml., María E. Trejos y Minor Mora (1993, I): "La movilidad laboral al descubierto", Aseprola, San José.

_____. (1993, II): *Integración o disolución socio-cultural: El nuevo rostro de la política social*, Editorial Porvenir, San José.

Vargas Vargas, José Joaquín (1989): "El auge de la banca privada en Costa Rica (1982-1988): Incidencia de la A.I.D. y de factores internos en su desarrollo", *Tesis de licenciatura*, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica, San José.

Vega, Mylena (1984): "La recomposición del bloque en el poder en Costa Rica, la política norteamericana y el Fondo Monetario Internacional (1982-1984). Coyuntura y perspectivas" en: *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Vol. 10, p. 59-67.

_____. (1992): "Democracia económica versus democracia política en Costa Rica. ¿Dos tendencias divergentes en

la segunda mitad del siglo veinte?" en: Villasuso, J. M. (ed): *op.cit.*

———. (1996): "Cambios en la sociedad costarricense en las décadas de los ochenta y noventa": *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Universidad de Costa Rica, Vol. 22(2).

———. (1998): "Cambios generales en los patrones de consumo de los costarricenses (1980-1997): primera aproximación" en: *Contribuciones*, No. 32, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.

Vega, M., C. Castro, A.L. Gutiérrez y C.R. Rodríguez (1995): "Cambios en la estructura clases costarricense (1987-1994)", Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. *Informe final.*

Mylena Vega
mylena_vega@hotmail.com

CAMBIOS EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL PERÍODO 1973-1997

Carlos Rafael Rodríguez Solera

RESUMEN

En el artículo se analiza la inserción laboral de la Población Económicamente Activa que cuenta con estudios universitarios en Costa Rica durante el período 1973-1997. Se estudian los cambios que ha experimentado la educación superior como mecanismo de movilidad social en un contexto caracterizado por una fuerte ampliación de la oferta educativa y por una reducción del sector público que ha sido tradicionalmente el mayor empleador de profesionales. Se identifica un proceso de polarización social de los egresados universitarios y una reducción de sus posibilidades de emplearse como asalariados.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes temas de los estudios sobre estratificación es el análisis de los mecanismos de la movilidad social¹. De

1. El concepto de "movilidad social" hace referencia al cambio que experimenta un individuo dentro de un sistema de estratificación. La movilidad puede ser horizontal, cuando el cambio no implica un ascenso o descenso en la estructura jerárquica. Cuando sí se produce un movimiento de este tipo se trata de movilidad vertical ascendente o descendente según sea el caso. Hay a su vez dos tipos de movilidad vertical: la movilidad individual, de intercambio o de circulación es la que se produce cuando hay individuos que ascienden o descienden en la jerarquía sin que los estratos cambien de tamaño. Cuando el cambio en la posición vertical de las personas se origina en un cambio en el tamaño de los estratos se trata de movilidad estructural, que es la que ocurre por ejemplo cuando se amplía la clase media. La movilidad puede

ser intergeneracional, cuando el cambio se produce en las posiciones de los hijos con respecto a sus padres o intrageneracional cuando se experimenta un cambio, no con respecto a la extracción social de los padres, sino en relación a la propia posición anterior del individuo; para profundizar en aspectos teóricos de la movilidad social véase Gilbert y Kahl (1993), así como Filgueira y Geneletti (1981). Aparte de esta acepción sociológica, la palabra "movilidad" tiene distintos significados en otros contextos, se emplea por ejemplo para referirse al movimiento físico de las personas en el territorio. En el lenguaje cotidiano de Costa Rica la palabra movilidad se asocia generalmente con la reducción de la planilla estatal, debido a que el programa gubernamental para reducir el empleo público se denominó en sus inicios "programa de movilidad laboral". Para evitar equívocos, en el presente trabajo empleamos el término movilidad en su acepción sociológica y más precisamente estaremos interesados en identificar los cambios que ha experimentado la educación superior como mecanismo de movilidad vertical ascendente, en un contexto caracterizado por importantes limitaciones a la movilidad estructural que otrora caracterizara a nuestro país.

hecho, una de las principales características del sistema de estratificación que se presenta en sociedades como la nuestra es su carácter formalmente abierto, debido a que no existen barreras legales ni religiosas que impidan la movilidad vertical, como ocurre en los sistemas de castas, en la esclavitud y en el sistema de estamentos, formas de estratificación en las cuales se desapruaba la movilidad, se considera moralmente justo que exista desigualdad de oportunidades entre las diferentes personas y se prohíbe cualquier intento de que éstas cambien su posición social (Barber, 1964:332).

Por otra parte, la legitimación de un sistema de desigualdad social como el nuestro descansa precisamente en el llamado mito de la movilidad: la desigualdad entre las personas se considera como "justa" pues los individuos gozan de un status adquirido por medio de su trabajo, su disciplina y su capacidad personal y no les es adscrito al nacer, como ocurría en la esclavitud y en otros sistemas de estratificación que hoy se considerarían moralmente inaceptables. De hecho, gran parte de los estudios sobre movilidad social que se realizan en los países desarrollados se interesan en clarificar que tan real es la idea de que en esas sociedades existan altas probabilidades de movilidad individual intergeneracional sustentada en méritos, o hasta qué punto influye aún la herencia social en la posición que una persona ocupa (Erickson, Golthorpe y Portocarrero, 1979; Rytina, 1992; Sin-Kwok, 1990), tal como lo señala Giddens (1991:263) los resultados de algunos de estos estudios permiten concluir que la adquisición meritocrática de posiciones en la jerarquía social no es tan frecuente como se piensa.

En nuestro criterio, la paz social que ha vivido nuestro país desde mediados del siglo XX se debe en gran parte a la aceptación general de la idea de que la nuestra es una sociedad que permite amplias oportunidades de movilidad social. No se trata de que todos sean iguales, sino de que todos

tengan oportunidades similares de ubicarse en la cúspide de la pirámide social. Uno de los antiguos problemas en la lucha contra la desigualdad social ha sido la distinción entre la igualdad de resultados y la igualdad de oportunidades (Turner, 1986:37)². Los planteamientos socialistas buscan la igualdad de resultados, promoviendo por ejemplo la redistribución del ingreso para que las diferencias de riqueza que existen entre los miembros de una sociedad se reduzcan y eventualmente desaparezcan. Una sociedad equitativa sería aquella en la que todos logran un nivel similar de bienestar y se elimina la concentración de la riqueza en pocas manos. Desde esta perspectiva nuestro país estaría lejos de ser una sociedad justa, puesto que es bien sabido que existe una gran desigualdad en la distribución de los bienes. No obstante, desde una posición liberal, no es necesario que se busque la igualdad de resultados, que no se considera posible en una sociedad libre, sino que basta con que se luche por la igualdad de oportunidades, que las reglas sean equitativas, de modo que todos puedan competir y obtener lo que merecen de acuerdo a su capacidad y esfuerzo; esta última concepción es la que prevalece en sociedades democráticas con economía de mercado como la nuestra. Cuando se acepta que las oportunidades son equitativas, la búsqueda del bienestar se convierte en un asunto individual. Si alguien es pobre se considera que está en esa situación porque no estudió, porque tiene vicios o incluso por mala suerte, pero no porque el sistema social no le haya permitido surgir. Cuando existen grandes grupos de personas que consideran que su situación desventajosa se debe a un

2. El debate sobre el tema de la equidad es muy amplio en las ciencias sociales, además de los clásicos trabajos de Rawls, los siguientes trabajos parecen sugerentes para quienes quieran profundizar en el tema: Eysenck, 1973; Sen, 1979; Sanders, 1990; Van Parijs, 1992.

sistema de reglas injustas que les impiden progresar, no importa los esfuerzos que hagan, se presentan las condiciones para que existan movimientos sociales que pugnen por cambiar las reglas, que luchen por la revolución o al menos porque se realicen transformaciones radicales en la sociedad³.

Por ello, los mecanismos de adquisición de status en una sociedad abierta es un elemento de trascendental importancia, no sólo por un imperativo ético, sino porque constituye el fundamento sobre el cual se legitima el sistema de desigualdad social. La creencia de que existen reglas claras, transparentes e iguales para todos refuerza la idea que se vive en una sociedad justa. En el juego social hay ganadores y perdedores, como en toda competencia no se puede garantizar que todos ganen, pero sí que exista un "juego limpio" que garantice que el éxito es resultado de los méritos, no de reglas de adscripción que perpetúen la desventaja de ciertos grupos y garanticen privilegios a otros.

Uno de los principales mecanismos para ascender en la sociedad costarricense en las últimas décadas ha sido sin duda alguna la educación⁴. Contrario a lo que ocurría

en la Costa Rica de principios de siglo, que era una sociedad cerrada en la que las principales posiciones sociales eran ocupadas casi exclusivamente por la oligarquía cafetalera, en el período 1950-1980 las puertas de la movilidad se abrieron y los jóvenes de familias pobres tuvieron acceso a la educación pública, lo que les permitió contar con nuevas capacidades de mercado⁵ que les dieron acceso a niveles de ingreso mucho mayores a los que habían tenido sus progenitores, a mejores condiciones de vida y en fin a todo ese complejo conjunto de cambios sociales que en forma sintética se conoce como la expansión de los sectores medios o la movilidad intergeneracional ascendente.

En los últimos años se han dado indicios de que la adquisición de credenciales educativas ha perdido importancia como mecanismo de movilidad social. Por la prensa se denuncia constantemente la proliferación de abogados y médicos así como de otros egresados universitarios (Ver por ejemplo: Ávalos, 1998: 16A). Los colegios profesionales promueven exámenes de incorporación y diversos mecanismos para seleccionar

-
3. Un ejemplo dramático de ello fue lo ocurrido en nuestro país en la cuarta década del siglo XX, cuando se produjeron amplias luchas sociales que culminaron en la guerra civil de 1948. En nuestro criterio ese conflicto tuvo sus orígenes en las escasas posibilidades de movilidad social que caracterizaron al modelo oligárquico, en el que las oportunidades económicas, políticas y sociales eran concentradas por un pequeño grupo de familias cafetaleras. Las profundas reformas que se pusieron en práctica luego del conflicto, permitieron una democratización de las oportunidades lo que hizo posible la paz social que caracterizó a nuestra sociedad en la segunda mitad del siglo XX.
 4. La educación ha sido uno de los mecanismos empleados para definir la posición del individuo en la jerarquía social, formando parte de lo que en la literatura sociológica anglosajona se conoce como "Allocation Processes", o sea los proce-

-
- dimientos por los cuales se ubica a las personas en posiciones sociales, la naturaleza de las mismas, los prerequisites para ocuparlas y el poder de que gozan, así como los criterios que son usados para determinar cuáles individuos ocupan las distintas posiciones (Blalock, 1991:1).
 5. Una capacidad de mercado puede ser entendida como una propiedad con valor en el mercado que le permite a quien la posee la obtención de ingresos, de acuerdo con Giddens (1979:122) existen tres tipos de capacidad de mercado que son importantes: la posesión de medios de producción físicos, la posesión de calificaciones educativas y la propiedad de fuerza de trabajo. En la medida en que éstas tienden a estar unidas a pautas cerradas de movilidad intrageneracional e intergeneracional, se tiende al establecimiento de un sistema estratificado en tres clases: la alta, que posee los principales medios de producción, la media, cuya capacidad de mercado distintiva es la posesión de calificaciones profesionales o técnicas y la clase baja que no tiene más opción que la venta de su fuerza de trabajo.

a sus agremiados con el argumento de mejorar la calidad de los servicios que se prestan al usuario, pero también con el objetivo implícito de limitar el número de personas habilitadas legalmente para el desempeño profesional. Es creciente el número de jóvenes que después de cursar una carrera universitaria no logran ejercer la profesión que estudiaron y, en general, se presentan síntomas de un fenómeno que ha ocurrido en muchos países latinoamericanos caracterizado como la "devaluación de la educación", esto es, que el esfuerzo educativo que los individuos deben hacer para alcanzar un cierto nivel de ocupación e ingreso es cada vez más alto (Faletto, 1993:171).

En el presente trabajo intentamos aportar elementos para identificar las dimensiones del problema, discutir cuáles son sus orígenes e identificar los efectos que podría tener en la configuración de la estructura de desigualdad social que actualmente se presenta en nuestro país.

2. EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA

Un primer aspecto que debe considerarse es el extraordinario aumento en la oferta educativa a nivel superior que ha existido en el país en los últimos 25 años. Las personas con educación universitaria pasaron de 56 903 en 1973 a 314 457 en 1998, presentando una tasa de incremento anual de 7% mientras la población total sólo crecía a un ritmo de 2% anual⁶. Como resultado de lo anterior, quienes cuentan con estudios universitarios pasaron de representar el 3,66%

en 1973 a constituir el 10,44% de la población en edad de estudiar en 1998⁷. Como se ve, la educación universitaria, que a mediados de siglo era un privilegio al que podían acceder sólo unos pocos se democratizó a tal grado que al finalizar la centuria uno de cada diez costarricenses ha recibido algún tipo de educación superior.

El acceso de la población a los estudios superiores, implica una mayor calificación de la fuerza de trabajo y una creciente exigencia de alcanzar niveles cada vez más altos para poder competir en el mercado de trabajo. Para 1997 el 15,75% de la Población Económicamente Activa (PEA) había cursado algún tipo de educación universitaria, no obstante, son los trabajadores más jóvenes los que muestran un mayor acceso a la educación superior.

Los datos sobre nivel educativo por grupos de edad correspondientes a 1995, indican que en ese año el 21,3% de los ocupados con entre 21 y 30 años tenía algún tipo de estudios universitarios, porcentaje que es del 22,5 en el grupo de 31 a 40 años, por contraste, en el grupo de 51 a 60 años sólo el 11% tuvo algún tipo de educación universitaria⁸.

6. Estos datos provienen del Censo de población de 1973 y de la Encuesta de Hogares de 1998 y corresponden a la población de 5 años o más que realizó estudios universitarios o parauniversitarios. Según el censo de 1984 había en ese momento 141 483 personas que contaban con este tipo de estudios. Las tasas de crecimiento fueron calculadas por el autor a partir de los datos absolutos aportados por estas fuentes.

7. Este dato corresponde al porcentaje que representan los universitarios en la población de 5 años o más. De acuerdo a los censos de 1973 y 1984 esta población ascendía a 1 554 437 y 2 093 987 respectivamente. La encuesta de hogares de 1998 indica que en ese año la población mayor de cinco años era de 3 010 829 personas.

8. Datos tabulados por el autor a partir de micro datos de la Encuesta de Hogares de 1995, habría sido deseable realizar este ejercicio con información más reciente, pero al momento de elaborar este trabajo no se había tenido acceso a los archivos digitales de información primaria, que son necesarios para realizar tales tabulados, no obstante, dado que se trata de diferencias educativas

CUADRO 1

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL MAYOR DE 12 AÑOS QUE CUENTA CON CUATRO AÑOS Y MÁS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 1973, 1984 Y 1997

INDICADOR	1973	1984	1997
Total de personas con más de cuatro años de educación superior	56 903	141 483	280 513
Personas con más de cuatro años de educación superior económicamente activas	39 336	89 836	204 953
Personas con más de cuatro años de educación superior desempleadas	N.D	1961	7941
Personas con más de cuatro años de educación superior económicamente inactivas	17 567	51 647	79 179
PEA total del país	585 313	804 193	1 301 625
Porcentaje de las personas con más de cuatro años de educación superior que están económicamente activas	69,13	63,50	73,06
Tasa de desempleo de las personas con cuatro años y más de educación superior	N.D	2,18	3,87
Porcentaje de la PEA total del país que cuentan con cuatro años y más de estudios superiores	6,72	11,17	15,75

FUENTES: Censos de Población de 1973 y 1984; Encuesta de Hogares de 1997.

El crecimiento de la oferta de profesionales parece ser el resultado de la conjugación de varios factores. Por una parte influyen las aspiraciones de movilidad social de los sectores populares que saben que, al menos en el pasado reciente, la educación constituyó un efectivo mecanismo de movilidad social. Por otra parte, los jóvenes de familias de clase media que quieren lograr al menos niveles de vida similares a los de sus progenitores⁹. Todas estas aspiraciones

legítimas de movilidad social han creado un floreciente mercado para los estudios superiores que ha sido captado principalmente por el descontrolado crecimiento de las universidades privadas, aunque las instituciones estatales han contribuido también al proceso duplicando el número de sus graduados en el lapso de una década. Según los datos aportados por las mismas instituciones al *Informe Estado de la Nación*, en 1987 el conjunto de las universidades estatales graduaba 4185 estudiantes, mientras en 1997 este número ascendía ya a 9133. Pero estos datos, aún cuando impresionan, quedan eclipsados con el extraordinario crecimiento de los títulos otorgados por los centros privados, que pasan de un total de 751 graduados en 1987 a 8434 diez años más tarde, un crecimiento mayor al 1000% en sólo una década.

intergeneracionales, se estima que con una diferencia de dos o tres años en la recolección de los datos no se tendrían resultados significativamente distintos a los expuestos.

9. Para una definición del concepto de clase social que empleamos en este trabajo véase la nota 14.

CUADRO 2
DIPLOMAS OTORGADOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE COSTA RICA
EN EL PERÍODO 1987-1997

	AÑO										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Diplomas otorgados por UNIVERSIDADES PÚBLICAS											
Número	4 185	4 416	5 381	5 629	7 773	6 281	6 911	7 043	7 119	8 084	9 133
Porcentaje del total	86,79	83,05	84,58	81,7	80,99	77,19	76,6	71,17	69,55	68,87	67,56
Diplomas otorgados por UNIVERSIDADES PRIVADAS											
Número	751	1 132	1 200	1 625	1 771	2 634	3 040	4 797	5 546	6 669	8 434
Porcentaje del total	13,21	16,95	15,42	18,3	19,01	22,81	23,4	28,83	30,45	31,13	32,44
Total	4 936	5 548	6 581	7 254	7 544	8 915	9 951	11 840	12 665	14 753	17 567

FUENTE: *Informe Estado de la Nación*, 1998:329.

Podría cuestionarse que los títulos otorgados sean un indicador de la producción de nuevos profesionales, considerando que en los datos anteriores se incluyen diplomas de posgrado, por lo que se trataría de personas que ya eran profesionales titulados al momento de recibir un nuevo grado, sin embargo, esto altera poco los resultados, pues según la misma fuente citada, en 1997 los diplomas de posgrado constituyeron el 2,09% de los otorgados por las universidades estatales y el 12,53% de los entregados por las privadas. En otras palabras, la gran mayoría de los graduados que aparecen en los datos del cuadro corresponden a nuevos profesionales que entran a presionar a un mercado de trabajo ya de por sí pequeño y que por mucho que haya aumentado en los últimos años no está en capacidad de absorber una cantidad de profesionales que crece en proyección geométrica.

Tal como lo señala Juan Manuel Villasuso,

“En el caso de la educación, el auge de los centros docentes superiores y el aumento desbordante de la población universitaria, ha producido un aumento en la oferta de profesionales, una

desvalorización de los títulos y una saturación, al menos coyuntural, de un mercado laboral relativamente pequeño. Miles de nuevos profesionales ven con preocupación cómo sus aspiraciones salariales y de status quedan insatisfechas; y cómo modelos referenciales en cuanto a vivienda, vehículo, bienes de consumo durable y nivel de vida en general resultan imposibles de alcanzar.” (Villasuso, 1998: 183).

Si a la gran cantidad de graduados de los últimos años se agrega los miles de estudiantes que actualmente están en las aulas universitarias, es posible prever una mayor devaluación de las credenciales educativas a mediano plazo. Hasta ahora el sistema de movilidad social ha funcionado bien gracias a las llamadas “pautas de gratificación diferida”: se acepta la idea de que las limitaciones del presente serán recompensadas porque habrá un futuro mejor. No obstante, las inversiones en tiempo y en dinero que muchos jóvenes han hecho para mejorar su nivel educativo, no se traducen en mejoras en su nivel de vida. Esta situación no se origina sólo en el extraordinario aumento de la oferta de graduados, sino también en la escasa

demanda de profesionales que tiene el sistema económico, que es el tema que analizamos en el siguiente apartado.

3. LA CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA

Un aspecto importante que debe ser tomado en consideración es la fuerte dependencia de los sectores medios en general y de los profesionales en particular de la expansión del empleo público. La vieja estructura agroexportadora de mediados de siglo sufrió sin duda un cambio cualitativo entre 1950 y 1980. Se vivió un proceso de modernización que se expresa en la expansión de las relaciones mercantiles, la diversificación de la economía, la democratización de las oportunidades educativas y el crecimiento de la clase media. No obstante, el eje más dinámico de este proceso no fue la industrialización del país, como tradicionalmente se ha planteado¹⁰, sino más bien el crecimiento de las instituciones estatales del gobierno central y principalmente de las instituciones autónomas que fueron las artífices del extraordinario desarrollo experimentado por el país en materia

de comunicaciones, salud, educación, infraestructura vial, y en una infinidad de rubros que van desde los seguros y la banca hasta la promoción de actividades culturales.

El espacio privilegiado de trabajo de las personas que se capacitaban en las aulas universitarias eran las instituciones estatales, siendo más bien modesta la proporción de graduados que se empleaban en el sector privado. De acuerdo con una investigación realizada por Castro (1995:39) en 1980 tres cuartas partes de los profesionales y técnicos del país laboraban para el Estado¹¹.

Hasta principios de la década de los ochenta el gobierno de la República y sus instituciones autónomas eran por tanto los que generaban empleo para tres de cada cuatro graduados universitarios. A inicios de 1984 esta demanda sufrió el primer golpe con la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. A partir de ese momento la generación de nuevas plazas en el Estado fue severamente restringida. Las instituciones gubernamentales pierden la potestad de determinar por sí mismas la formación de nuevos

10. Todavía en un trabajo reciente se plantea la vieja idea de que "... la cooperativización del café junto con la industrialización sustitutiva fueron la base para el surgimiento de la clase media a mediados de este siglo ..." (Sauma y Garnier, 1997: 19); no obstante, la industrialización tuvo en realidad un impacto mínimo en la estructura ocupacional. Al comparar los datos de los censos de población de 1950 y 1984 es claro que se redujo la cantidad de agricultores que pasaron de representar un 54% de la PEA en el primer año a sólo un 31% en el segundo, no obstante, el personal desplazado de la agricultura no fue absorbido por la industria, el sector secundario pasó de emplear a un 16% de la PEA en 1950 a un 20% en 1984, pero cuando analizamos en detalle, vemos que las ocupaciones que realmente aumentaron fueron las de carácter artesanal, que pasaron de 2,97% en 1950 a 6,63% en 1984, mientras que los trabajadores industriales mantienen inalterado su peso relativo, pasan de representar un 13% de la PEA en 1950 a constituir

un 13,7% en 1984. Por contraste, el sector que realmente aumentó vertiginosamente fue el de los trabajadores de los servicios, que pasaron de representar un 26% en 1950 a constituir un 45% de la PEA en 1984. Al interior de este sector los grupos que más aumentaron fueron los de empleados administrativos, docentes, técnicos medios y profesionales, ocupaciones que se ejercen principalmente en el Estado. Nuestra hipótesis es que la clase media costarricense se expandió principalmente gracias al gran crecimiento del aparato del Estado y por eso ha sido altamente dependiente del modelo estatista que existió en el país hasta principio de la década de los ochenta.

11. Esta situación no se produjo únicamente en nuestro país, según se desprende de un trabajo de Echeverría (Citado por Infante y Klein, 1991:31) en Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela más del 60% de los profesionales trabajaban para el sector público en la década de los ochenta.

puestos de trabajo y sólo se crean nuevas plazas en casos excepcionales, previa aprobación de la Autoridad Presupuestaria.

Esta primera medida se enmarca en las políticas de ajuste estructural impulsadas por el gobierno en cumplimiento de acuerdos con organismos financieros internacionales y afectó principalmente a los nuevos profesionales que egresaron a partir de ese momento, pues se cerraba la principal fuente de empleo que absorbía tradicionalmente a los nuevos graduados en el período anterior al ajuste, pero no perjudicaba a quienes ya estaban ejerciendo sus cargos. Un segundo conjunto de medidas, que afectó esta vez a los que ya tenían sus empleos en el sector público, fue la promulgación de los programas de "movilidad laboral" a finales de los ochenta, cuyo propósito fundamental era reducir la planilla del Estado, esta situación se agudiza posteriormente con el cierre de instituciones gubernamentales en las que laboraban una gran cantidad de profesionales.

El sector privado, que ya de por sí generaba muy poco empleo para los profesionales, se ve así doblemente presionado por los nuevos graduados que en forma creciente inundan el mercado de trabajo, debido a la ya señalada expansión de los graduados en universidades públicas y privadas, aunado a los exempleados estatales que abandonan el sector público con los programas de movilidad laboral y con el cierre de instituciones. Esto no habría sido tan grave si existiera en el país una fuerte empresa privada moderna que estuviera en capacidad de absorber a un creciente número de profesionales, por el contrario, en los últimos años los ejes más dinámicos de la economía han sido principalmente el turismo y las exportaciones no tradicionales (Sauma y Garnier, 1997: 17), el empleo ha crecido sin duda pero en actividades no tradicionales de exportación agrícola, en maquila y en turismo, pero ninguno de estos sectores está en capacidad de ocupar al

creciente número de profesionales que salen todos los años de las aulas universitarias. Si bien la instalación de empresas de alta tecnología puede ser un factor que permita dar empleo a profesionales y técnicos altamente calificados, su demanda se limita a ciertas ramas profesionales y aunque su impacto en el aumento de las exportaciones se prevé que sea grande, no es previsible que la instalación de este tipo de empresas pueda permitir la absorción del gran número de profesionales que, en todas las áreas, saturan el mercado de trabajo. Ante este panorama cabe preguntarse ¿qué ha ocurrido con las personas que cuentan con educación universitaria en los últimos años? ¿Habrán vivido un proceso de movilidad descendente? Estas son las interrogantes que intentamos contestar a continuación.

4. EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD SOCIAL

Un primer aspecto que el sentido común nos lleva de inmediato a deducir, cuando se señala que la oferta de profesionales se ha incrementado sin que su demanda aumente, es la idea de que debe haber aumentado mucho el desempleo entre las personas con estudios universitarios. No obstante, si bien la tasa de desempleo abierto que se presenta entre esta población se ha incrementado, no es en la forma desproporcionada en que podría pensarse. La tasa de desempleo entre personas con estudios universitarios pasó de 2,18% en 1984 a 2,42 en 1987, para incrementarse a un 3,87% en 1997¹². Estos datos son coincidentes con los encontrados en estudios específicos sobre graduados universitarios realizados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de acuerdo con dicha institución, de los graduados en

12 El primero de los datos proviene del Censo de Población, los otros dos de las encuestas de hogares en los años citados.

1995, sólo un 5,2% estaban desocupados¹³ (CONARE 1997b: 67). Como se ve, hasta el momento no se ha producido un desempleo masivo entre las personas que han tenido acceso a algún tipo de estudios superiores.

Los universitarios continúan empleados, sólo que se han modificado las condiciones en que desarrollan su trabajo. En una sociedad como la nuestra, en la que no se cuenta con seguro de desempleo, no se puede permanecer sin trabajar mucho tiempo, así que si no se encuentra el empleo que se desea se debe buscar una ocupación alternativa. Los graduados universitarios no están desempleados por el simple hecho de que trabajan en actividades distintas a su carrera, tal como se aprecia en el cuadro 6, si analizamos las ocupaciones desempeñadas por las personas económicamente activas ocupadas que contaban con más de cuatro años de educación superior, vemos que ha existido una creciente disminución del porcentaje que trabaja como profesionales; debido a lo anterior, quienes laboran en actividades distintas a su profesión pasaron de representar un 14% en 1973 para constituir un 34% en 1997. Los datos de ese mismo cuadro permiten apreciar que la opción que más se ha reducido es la del empleo como profesional asalariado; en 1973 el 80,5% de los ocupados con educación universitaria laboraban en este tipo de empleos en contraste con sólo un 54% en 1997. Estos cambios en la inserción laboral de los graduados han tenido importantes consecuencias en sus posibilidades de movilidad social. Tomando como universo a los ocupados que hubieran cursado al menos cuatro años de estudios universitarios, procedimos a clasificar a las personas

en clases socio ocupacionales, para tratar de determinar cuáles son los efectos que las nuevas condiciones de incorporación al mercado de trabajo están teniendo en las personas que cuentan con estudios superiores¹⁴.

13. Si bien esta es la situación que existe a nivel general, es importante señalar que entre los egresados de algunas carreras la tasa de desempleo era mucho mayor, según el mencionado estudio los egresados que presentan mayores niveles de desocupación son los de educación preescolar (42,3%), relaciones internacionales (38,1%), trabajo social (27,6%), historia (25%), economía (25%), sociología (23,5%), planificación (22,2%) y fitotecnología (22,2%).

14. El concepto de "clase social" es ampliamente usado en la tradición teórica marxista, pero en modo alguno es exclusiva de esta corriente. En el presente trabajo empleamos la noción de clase social utilizada por Weber. Para este autor la clase consiste en la posición ocupada por el individuo en un sistema productivo. Entendemos por "situación de clase" el conjunto de las probabilidades típicas: 1. De provisión de bienes, 2. De posición externa, 3. De destino personal, que derivan, dentro de un determinado orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de disposición (o la carencia de él) sobre bienes y servicios y de las maneras de aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos. Entendemos por "clase" todo grupo humano que se encuentra en una misma situación de clase" (Weber, 1964:242). Posteriormente Giddens (1979) amplía este planteamiento señalando que las "situaciones de clase" en las sociedades capitalistas se definen a partir de las "capacidades de mercado" con las que cada uno participa en una sociedad abierta. Como ya se señalara existen tres capacidades de mercado que son importantes para definir a las clases sociales en las sociedades capitalistas contemporáneas: la propiedad de medios de producción, de calificaciones educativas y de fuerza de trabajo. A partir de esta orientación teórica se procedió a clasificar a los miembros de la PEA de acuerdo a su ocupación y categoría ocupacional en cuatro clases: la Clase Alta compuesta por empresarios, directores y gerentes de empresas e instituciones públicas, la Clase Media Alta, compuesta por profesionales, comerciantes patronos y agentes de venta, la Clase Media Baja, constituida por trabajadores administrativos, técnicos y micro empresarios y la Clase Baja constituida por el sector informal, los trabajadores agrícolas asalariados, los campesinos, los empleados del comercio y por todos los trabajadores no calificados que realizan actividades no agrícolas en la industria, la construcción, el transporte y los servicios. Si bien existe un amplio consenso en cuanto al uso de la ocupación como un indicador de la clase social (Germann, 1955; Runcman, 1970; Faletto, 1993) en nuestro estudio no incluimos a toda la población sino que nos limitamos al análisis de la Población Económicamente Activa ocupada, por lo que preferimos hablar de clases socio ocupacionales. La metodología empleada para realizar esta distribución en clases sociales fue desarrollada por el autor en otro trabajo (Rodríguez, 1997), sólo que aplicada en este caso para clasificar a los ocupados con estudios universitarios.

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN EN CLASES SOCIO OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA QUE CUENTA CON CUATRO AÑOS Y MÁS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÍODO 1973-1984

Clase socio ocupacional	1973		1984		1995		1997	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Alta	1 340	5,09	2 462	5,82	15 607	16,91	18 103	16,55
Media Alta	22 821	86,69	30 739	72,66	56 185	60,89	70 070	64,07
Media Baja	1 084	4,12	4 505	10,65	13 194	14,30	13 270	12,13
Baja	1 015	3,86	3 315	7,84	6 543	7,09	6 649	6,08
Desconocida	65	0,25	1 287	3,04	744	0,81	1 281	1,17
TOTAL	26 325	100	42 308	100	92 273	100	109 373	100

FUENTE: Elaborado por el autor a partir del procesamiento de micro datos de los censos de población de 1973 y 1984 y de las encuestas de hogares de 1995 y 1997.

Como puede verse, se han producido algunos cambios importantes en la estratificación social de las personas que han cursado estudios superiores. En la década de los setenta ir a la universidad era prácticamente una garantía de movilidad social, pues el 87% de los que completaban sus estudios accedían a la clase media alta. A partir de la década de los ochenta esta situación cambia. Si bien aún existen altas probabilidades de acceder a los sectores medios si se cuenta con estudios universitarios, la proporción de personas en estas posiciones ha disminuido, constituyendo un 73% en 1984, un 61% en 1995 y un 64% en 1997. Por contraste se incrementó el porcentaje de quienes acceden a posiciones de clase media baja o baja de un 8% en 1973 a cerca de un 20% en los siguientes años en que se hicieron observaciones, pues como puede observarse en el cuadro 3, la proporción de personas con más de cuatro años de educación universitaria que se ubican en las clases socio ocupacionales baja y media baja es de 18% en 1984, 21% en 1995 y 18% en 1997. No obstante lo anterior, la proporción de los que se ubican en la clase alta tendió a aumentar debido al incremento de graduados universitarios que

optan por convertirse en empresarios. De esta forma asistimos a una suerte de polarización social: los sectores altos y bajos se incrementan mientras que los sectores medios se reducen.

Si las personas con más de cuatro años de estudios superiores han visto disminuir sus posibilidades de acceder a los sectores medios, algo similar ocurre con los que no completaron su formación universitaria. En la década de los setenta estas personas se ubicaban principalmente en la clase media baja, compuesta principalmente por trabajadores administrativos, oficinistas y empleados de cuello blanco. En el período de estudio las posibilidades de estas personas de incorporarse a este tipo de ocupaciones pasaron de un 65% a un 45%, mientras que las que tenían de estar en trabajos manuales de clase baja pasó de un 13% a un 31%. La única excepción lo constituye el ligero aumento experimentado por quienes se posicionan en la clase media alta, el grupo de los que cuentan con estudios superiores incompletos que acceden a esta posición laboran principalmente como agentes de seguros y bienes raíces o como agentes de venta.

CUADRO 4

DISTRIBUCIÓN EN CLASES SOCIALES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA QUE ASISTIÓ A LA UNIVERSIDAD Y CUENTA CON MENOS DE CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERÍODO 1973-1984

Clase socio ocupacional	1973		1984		1995		1997	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Alta	683	5,17	1 744	3,21	6 519	6,19	4 256	3,50
Media Alta	2 107	15,96	8 531	15,70	19 710	18,72	24 604	20,22
Media Baja	8 545	64,73	28 069	51,65	53 330	50,66	54 263	44,60
Baja	1 703	12,90	14 195	26,12	25 095	23,84	37 360	30,71
Desconocida	163	1,23	1 803	3,32	615	0,58	1 183	10,97
Total	13 201	100,00	54 342	100,00	105 269	100,00	121 666	100,00

FUENTE: Elaborado por el autor a partir del procesamiento de micro datos de los censos de población de 1973 y 1984 y de las encuestas de hogares de 1995 y 1997.

Como hemos visto, se han modificado las posibilidades de acceder a una determinada posición social de las personas con estudios universitarios, no obstante, aún la proporción de universitarios que se ubican en los sectores medios y altos continúa siendo muy alta. Existe todavía una fuerte correlación entre nivel educativo y clase social,

por ejemplo, el porcentaje de personas sin instrucción que pertenecen a la clase baja es en todos los años superior al 96% y es un indicador que baja sistemáticamente conforme aumenta el nivel de estudios¹⁵. Otro indicador importante es el relativo a los ingresos. Para 1997 el nivel de ingresos de la PEA ocupada seguía el siguiente comportamiento.

CUADRO 5

INGRESO MENSUAL TOTAL PROMEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, EN COLONES CORRIENTES, 1997

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	INGRESO PROMEDIO MENSUAL (¢)
Sin instrucción	28 451
Primaria Incompleta	40 829
Primaria completa	53 942
Secundaria Incompleta	61 799
Secundaria Completa	80 810
Universitaria Incompleta	99 047
Universitaria Completa	190 325
Promedio General	64 141

FUENTE: Elaborado por el autor a partir del procesamiento de micro datos de la Encuesta de Hogares de 1997. Por "Universitaria Completa" se consideró haber cursado cuatro años o más de educación superior.

15. Esta observación se hace a partir de la tabulación de los micro datos de los censos de población de 1973 y 1984, así como de las encuestas de hogares de 1995 y 1997. Se tomó

como universo a las personas económicamente activas ocupadas y se procedió a clasificar a la población según clases socio ocupacionales y nivel educativo.

Como puede apreciarse, a pesar del incremento en el número de graduados y las restricciones que enfrenta su mercado de trabajo, la educación superior, con algunas restricciones, continúa siendo un factor que ayuda a ubicarse en las mejores posiciones de la jerarquía social y a percibir mejores remuneraciones que aquellos que no realizaron estudios de este tipo. No obstante estos datos deben de considerarse con cuidado debido a que, como ocurre siempre con las medidas de tendencia central, pueden ocultar las desigualdades que existen al interior de un grupo; aunque el ingreso promedio de las personas con estudios superiores sea alto, puede darse el caso de que existan algunos con un ingreso muy elevado y otros con remuneraciones muy bajas. El procesamiento de datos de ingreso según nivel educativo y clase socio ocupacional de la Encuesta de Hogares de 1995 indica que si bien los universitarios que están en posiciones ocupacionales de clase baja ganan en promedio el doble que los otros miembros de este sector, sólo obtienen el 64,26% de lo que ganan los universitarios de clase media alta y el 42,96% del ingreso mensual de los graduados que están en la clase alta. Como se ve, la situación de las personas con educación superior es difícil. La oferta de graduados se ha incrementado a un ritmo elevadísimo, el Estado, que era el principal empleador de profesionales, no sólo dejó de contratarlos sino que incluso los despidió o les aplica la "movilidad laboral". ¿Han adoptado los graduados universitarios otras estrategias para tratar de mantener sus aspiraciones de movilidad social? Veamos lo que nos dice la información disponible.

5. LAS NUEVAS RUTAS DE LA MOVILIDAD

La población con estudios universitarios ha visto cerrarse sus fuentes tradicionales de empleo, pero ha buscado otros caminos para mantenerse en la clase media. En la década de los setenta, el 86% de los ocupados con más de cuatro años de estudios superiores laboraba como profesional, este

porcentaje disminuye sistemáticamente y, si bien en 1997 hay una ligera alza, lo cierto es que la proporción de presuntos graduados que se emplean en este grupo disminuyó en al menos 20 puntos porcentuales entre 1973 y 1997. Ante la disminución de las fuentes de empleo, los egresados de universidades optaron por el ejercicio liberal, cuando ejercen profesiones que posibilita esta modalidad de trabajo. Por ello, la proporción de profesionales por cuenta propia se duplicó en el período de estudio. Los profesionales asalariados, por el contrario, sufrieron una drástica disminución. En la década de los setenta ocho de cada diez personas con estudios superiores se desempeñaba como profesional asalariado, en los noventa es cerca de la mitad de los que estudiaron los que desempeñan estos puestos.

Los datos del cuadro anterior deben llamar a la reflexión a los responsables de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Al parecer, la expectativa de egresados que se desempeñen como profesionales asalariados en grandes organizaciones empresariales o gubernamentales es cada vez más difícil de alcanzar, por lo que el perfil del profesional que se formaba para ese tipo de labor tiende a perder importancia.

Veamos a qué se dedica ese 35% de los egresados que no se desempeñan como profesionales. Por una parte, se ha incrementado la proporción de personas con estudios superiores que trabajan como empresarios; ahora éstos representan una proporción dos veces mayor a la que tenían en las décadas del setenta y el ochenta. El otro grupo que creció fue el de los que trabajan como empleados administrativos y como "otros trabajadores", grupo en el cual se incluye a todo tipo de trabajadores manuales, así como a comerciantes. En este caso se estaría presentando un fenómeno que ha sido ampliamente descrito en otros países de América Latina, que consiste en una inadecuación entre los niveles y tipos de conocimiento que tiene la población y las necesidades ocupacionales

CUADRO 6

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA QUE CUENTA CON CUATRO AÑOS Y MÁS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÍODO 1973-1984

OCUPACIÓN	1973		1984		1995		1997	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Gerentes y Empresarios	1 153	4,38	2 034	4,81	12 664	13,72	12 607	11,53
Profesionales	<u>22 606</u>	<u>85,87</u>	<u>30 407</u>	<u>71,87</u>	<u>55 843</u>	<u>60,52</u>	<u>71 753</u>	<u>65,60</u>
Cuenta Propia	[1 408]	[5,35]	[3 256]	[7,70]	[8 434]	[9,14]	[12 796]	[11,70]
Asalariados	[21 198]	[80,52]	[27 151]	[64,17]	[47 409]	[51,38]	[58 957]	[53,90]
Empleados administrativos	1 073	4,08	4 388	10,37	11 816	12,81	13 194	12,06
Otros Trabajadores	1 428	5,42	4 192	9,91	11 206	12,14	10 538	9,63
Ocupación desconocida	65	0,25	1 287	3,04	744	0,81	1 281	1,17
TOTAL	26 325	100,00	42 308	100,00	92 273	100,00	109 373	100,00

FUENTE: elaborado por el autor a partir del procesamiento de micro datos de los censos de población de 1973 y 1984 y de las encuestas de hogares de 1995 y 1997.

que genera el sistema económico, lo cual se aprecia en los porcentajes crecientes de educación universitaria que se registran en personas que desempeñan actividades administrativas bajas (Faletto, 1993:171).

Por otra parte, las personas que cuentan con menos de cuatro años de educación universitaria tienden a perder su ubicación tradicional en labores administrativas. En la

década de los setenta, quienes tenían lo que se puede imputar como educación universitaria incompleta, laboraban principalmente como empleados administrativos. A partir de los ochenta se reduce la proporción de personas que trabajan en este tipo de ocupaciones, ampliándose mucho el porcentaje de quienes trabajan como comerciantes o en actividades manuales para las que no se requiere ningún tipo de estudios superiores.

CUADRO 7

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA QUE CUENTA CON MENOS DE CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÍODO 1973-1984

OCUPACIÓN	1973		1984		1995		1997	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Gerentes y Empresarios	678	5,14	1 660	3,05	5 917	5,62	3 558	2,92
Profesionales	<u>1 729</u>	<u>13,10</u>	<u>7 160</u>	<u>13,18</u>	<u>15 938</u>	<u>15,14</u>	<u>19 777</u>	<u>16,26</u>
Cuenta Propia	[53]	[0,40]	[315]	[0,58]	[1 187]	[1,13]	[1 354]	[1,11]
Asalariados	[1 676]	[12,70]	[6 845]	[12,60]	[14 751]	[14,01]	[18 423]	[15,14]
Empleados administrativos	8 545	64,73	28 069	51,65	59 156	56,20	54 263	44,60
Otros Trabajadores	2 086	15,80	15 650	28,80	23 643	22,46	42 885	35,25
Ocupación desconocida	163	1,23	1 803	3,32	615	0,58	1 183	0,97
TOTAL	13 201	100,00	54 342	100,00	105 269	100,00	121 666	100,00

FUENTE: elaborado por el autor a partir del procesamiento de micro datos de los censos de población de 1973 y 1984 y de las encuestas de hogares de 1995 y 1997.

Cuando relacionamos los datos anteriores con los expuestos sobre la estratificación vemos que el aumento de personas que se dedican a otras actividades tiene un doble carácter, el principal aumento se origina en el incremento de los trabajadores manuales que se expresa en el aumento de la clase baja. Por otra parte, se produce un incremento en la participación de las personas con estudios universitarios en la clase alta debido, al aumento de los empresarios. La clase media alta tiende a disminuir, aunque algunos logran mantenerse en este sector ya no como profesionales asalariados, que era lo típico en la década de los setenta, sino como profesionales liberales o como vendedores y comerciantes.

Los estudios realizados por el CONARE entre personas recién egresadas encuentran que del total de graduados que trabajan, cerca del 30% lo hacen en puestos que requieren un grado académico inferior al obtenido.

"Por otra parte, se detectó que existe cerca de una cuarta parte de los graduados cuyos trabajos tienen una relación entre media y ninguna con la carrera cursada, porcentaje similar al que se encontró en el estudio anterior." (CONARE, 1997b: 68).

De acuerdo con este informe, un 49,5% de los graduados que trabajan en labores que tienen poca o ninguna relación con su campo profesional lo hacen principalmente porque no han podido conseguir trabajo en su área. Si bien el desempeño de ocupaciones distintas a la carrera estudiada es un fenómeno generalizado, se presenta con mucha mayor importancia entre los egresados de ciencias sociales, según el citado estudio del CONARE, las oportunidades académicas cuyo grado de relación trabajo-carrera son más bajos son las que presentan los egresados de ciencias políticas, relaciones internacionales, historia, economía y sociología (CONARE, 1997b:73). Si recordamos lo ya planteado al inicio del artículo, en el

sentido de que en algunas de estas carreras se presentan altos niveles de desempleo, tenemos entonces el caso de disciplinas, particularmente en el campo de las humanidades, donde los graduados enfrentan una seria dificultad para conseguir empleo y, cuando lo hacen, trabajan en actividades no relacionadas con su carrera.

6. CONCLUSIÓN

Las modificaciones descritas de la inserción económica de las personas con estudios superiores se caracterizan por la pérdida de importancia del trabajo como profesionales asalariados, en el grupo de mayor nivel educativo o como empleados administrativos, en el caso de los que cuentan con menos años de educación. Las pocas oportunidades de trabajo como asalariados ha llevado a los universitarios económicamente activos a ejercer su profesión en forma liberal o a laborar en ocupaciones distintas a las de su carrera. La tendencia a trabajar en actividades para las que no necesariamente se requieren estudios superiores presenta dos facetas: un fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios, que permiten una permanencia de las personas con estudios superiores en los estratos medios y altos, por otra parte, se ha ampliado la proporción de personas con estudios universitarios que laboran en ocupaciones manuales de baja calificación, lo cual es particularmente evidente en los ocupados que cuentan con menos de cuatro años de estudios superiores, en 1997, último año para el que se tienen datos, más de la tercera parte de estas personas laboraban en actividades para las que no se requiere contar con estudios universitarios.

La información disponible permite apreciar que se está dando una polarización social entre los graduados. La inserción privilegiada en la clase media como profesionales asalariados al servicio del Estado, que se daba en la década de los setenta, se ha transformado en una mayor incorporación de los

universitarios en actividades ajenas a su carrera, algunos de los cuales se convierten en empresarios, mientras que otros laboran en otras actividades para las que no se requiere calificaciones especiales. Esta situación es por ahora particularmente grave entre los egresados de ciencias sociales, que fue la primera área en que al parecer se saturó el mercado de trabajo por una oferta que supera en mucho a la demanda, aunque es previsible que una situación similar se presente en otras carreras; ya en 1995 el estudio de CONARE encontró tasas de desempleo de un 18% en egresados de las carreras de agronomía, ingeniería eléctrica e ingeniería industrial (CONARE, 1987b: 67) y en la actualidad ya se presentan síntomas de sobre oferta en las carreras de medicina, derecho y periodismo.

Si bien en algunas disciplinas se enfrentan problemas particularmente graves, aún los estudios superiores permiten acceder a posiciones de clase media a importantes sectores de la población, no obstante, la tendencia en los últimos años ha sido que las oportunidades de conseguir un empleo remunerado se reduzcan y que las personas que han estudiado deban dedicarse a actividades distintas a aquellas en que se formaron. La devaluación de las credenciales educativas ya se ha iniciado, la saturación del mercado de trabajo para los profesionales de muchas carreras ya es un hecho, la educación empieza a perder su carácter de mecanismo idóneo para la movilidad social y no se vislumbra que existan otras formas alternativas para escalar en forma legítima en la jerarquía social, por lo que es de esperar que en un futuro se presenten tensiones debido a expectativas no cumplidas, principalmente entre los jóvenes que hoy se forman en las aulas universitarias. La total anarquía que prevalece en la regulación de la educación superior privada y la ausencia de opciones educativas y económicas alternas podrían estar minando las bases de los mecanismos meritocráticos que legitiman nuestra estructura de desigualdad social, alimentando un problema social de consecuencias impredecibles.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Blalock, Hubert. "Why Study Allocation Processes?". Primer capítulo de su libro *Understanding Social Inequality. Modeling Allocation Processes*. Sage Publications, California, 1991.
- Castro, Carlos. "Estado y sectores medios en Costa Rica: redimensionamiento de un pacto social". *Cuadernos de Ciencias Sociales*, FLACSO, 1995.
- CONARE (Consejo Nacional de Rectores). *Análisis de la demanda de profesionales en los periódicos La Nación y La República 1995*. Oficina de Planificación de la Educación Superior, San José, 1996.
- CONARE (Consejo Nacional de Rectores). *Análisis de la demanda de profesionales en los periódicos La Nación y La República 1996*. Oficina de Planificación de la Educación Superior, San José, 1997a.
- CONARE (Consejo Nacional de Rectores). *La situación laboral y otras características de los graduados de 1995 de las universidades estatales*. Oficina de Planificación de la Educación Superior, San José, 1997b.
- CONARE (Consejo Nacional de Rectores). *Análisis de la demanda de profesionales en los periódicos La Nación y La República 1997c*. Oficina de Planificación de la Educación Superior, San José, 1998.
- Dirección General de Estadísticas y Censos. *Censo de Población de 1973*. San José, 1973.
- Dirección General de Estadísticas y Censos. *Censo de Población de 1984*. San José, 1984.

- Dirección General de Estadísticas y Censos. *Encuesta de hogares de propósitos múltiples 1987*. San José, 1987.
- Dirección General de Estadísticas y Censos. *Encuesta de hogares de propósitos múltiples 1998*. San José, 1973.
- Erickson, R.; Golthorpe, J. y Portocarrero, L. "Intergenerational Class Mobility in three Western European Societies: England, France and Sweden". *British Journal of Sociology*. Volumen 30, Número 4, diciembre, 1979.
- Eysenck, Hans. *The Inequality of man*. The Trinity Press, Londres, 1973.
- Faletto, Enzo. "Formación histórica de la estratificación social en América Latina". *Revista de la CEPAL*. Número 50, agosto de 1993.
- Filgueira, Carlos y Geneletti, Carlo. *Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina*. CEPAL, Santiago de Chile, 1981.
- Fonseca Tortós, Eugenio. "Democracia e igualdad de oportunidades". *Combate*, San José, Volumen 4, Número 22, mayo-junio de 1962.
- Franco, Rolando y León, Arturo. "Estilos de desarrollo, papel del Estado y estructura social en Costa Rica". *Pensamiento Iberoamericano*, Madrid, Número 6, julio-diciembre de 1984.
- Germani, Gino. *La estructura social de la Argentina*. Editorial Raigal, Buenos Aires, 1955.
- Giddens, Anthony. *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*. Alianza Universidad, Madrid, 1979.
- Giddens, Anthony. *Sociología*. Alianza Editorial, Madrid, 1991.
- Gilbert, Dennis y Kahl, Joseph. *The American Class Structure*. Wadsworth Publishing Company. California, 1993.
- Infante, Ricardo y Klein, Emilio. "Mercado latinoamericano del trabajo en 1950-1990". *Revista de la CEPAL*. Número 45, diciembre, 1991.
- Mendiola, Haydée María. "The Impact of Higher Education Expansion on Social Stratification and Labor Markets; the Case of Costa Rica". *Tesis (Doctor of Philosophy)*, Stanford University, 1988.
- Mendiola, Haydée. "Expansión de la educación superior en los 70s.: impacto en la estratificación social y en el mercado de trabajo". *Revista de Ciencias Sociales*. San José, Número 42, septiembre-diciembre de 1988.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). *Informe sobre el Estado de la Nación 1997*. San José, 1998.
- Rodríguez, Carlos. "Los efectos del ajuste. Estratificación y movilidad social en Costa Rica en el período 1950-1995". *Tesis doctorado en Ciencias Sociales*, El Colegio de México, México D.F., 1997.
- Runciman, Walter. *Sociology in its Place and Other Essays*. Cambridge University Press, Londres, 1970.
- Rytina, Steve. "Scaling the Intergenerational Continuity of Occupation: Is Occupational Inheritance Adscriptive After All?" *American Journal of Sociology*. Volumen 97, Número 6, mayo, 1992.
- Sanders, Peter. "Thinking About Social Inequality". En: *Social Class and Stratification*. Routledge, Londres, 1990.
- Sen, Amartya. "Equality of What?". En: Rawls, John, et al. *Liberty, Equality, and Law*. Selected Lectures on Moral Philosophy.

- University of Utah Press, Salt Lake City, 1987.
- Sauma, Pablo y Garnier, Leonardo. *Efecto de las políticas macroeconómicas y sociales sobre la pobreza en Costa Rica*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1997.
- Sin-Kwok Wong, Raymond. "Understanding Cross-National Variation in Occupational Mobility". *American Sociological Review*. Volumen 55, agosto, 1990.
- Tunmer, B. "Types of Equality". Capítulo II de su libro *Equality*. Tavistock Publications, Londres, 1986.
- Van Parijs, Philippe. *¿Qué es una sociedad justa? Introducción a la práctica de la filosofía política*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1991.
- Villasuso, Juan Manuel. "Política económica y social en tiempos de la transformación estructural". En: Fernández, Óscar (compilador). *Política social y descentralización en Costa Rica*. UNICEF, San José, 1998.
- Weber, Max. *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

REFERENCIA DE PRENSA

- Ávalos, Ángela. "9 escuelas, 5 mil estudiantes. Boom de Medicina. Preocupa disponibilidad de campos clínicos para prácticas hospitalarias". *La Nación*. Página 16A, 21 de noviembre de 1998.

Carlos Rafael Rodríguez Solera
Centro para el Desarrollo y la Investigación
de las Ciencias Sociales (CEDICSO XXI)
Carretera Pachuca-Acuapán, Km 4
Pachuca, Hidalgo, México
crrodrig@prodigy.net.mx
crrodrigsol@hotmail.com

University of Utah Press, Salt Lake City, 1987.

Sauma, Pablo y Garnier, Leonardo. *Efecto de las políticas macroeconómicas y sociales sobre la pobreza en Costa Rica*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1997.

Sin-Kwok Wong, Raymond. "Understanding Cross-National Variation in Occupational Mobility". *American Sociological Review*. Volumen 55, agosto, 1990.

Tunmer, B. "Types of Equality". Capítulo II de su libro *Equality*. Tavistock Publications, Londres, 1986.

Van Parijs, Philippe. *¿Qué es una sociedad justa? Introducción a la práctica de la*

filosofía política. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1991.

Villasuso, Juan Manuel. "Política económica y social en tiempos de la transformación estructural". En: Fernández, Óscar (compilador). *Política social y descentralización en Costa Rica*. UNICEF, San José, 1998.

Weber, Max. *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

REFERENCIA DE PRENSA

Ávalos, Ángela. "9 escuelas, 5 mil estudiantes. Boom de Medicina. Preocupa disponibilidad de campos clínicos para prácticas hospitalarias". *La Nación*. Página 16A, 21 de noviembre de 1998.

Carlos Rafael Rodríguez Solera
Centro para el Desarrollo y la Investigación
de las Ciencias Sociales (CEDICSO XXI)
Carretera Pachuca-Acuapam, Km 4
Pachuca, Hidalgo, Mexico
crrodrig@prodigy.net.mx
crrodrigsol@hotmail.com

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO REMUNERADO EN COSTA RICA, DURANTE EL PERIODO 1950-1997

Ana Lucía Gutiérrez Espeleta
Carlos Rafael Rodríguez Solera

"Mi madrina era famosa para aliviar algunas dolencias. Tenía mano suave y muy hábil para sobar lisiaduras y sacar empachos; conocía remedios muy seguros para cortar un pasmo, detener un colerín o terminar con un ataque de lombrices. Por el pago de esos servicios, cuando los prestaba, recibía lo que le dieran: unos cuantos centavos, una tapa de dulce, un racimo de plátanos o un puñado de café. Todo era bien recibido. Y con eso, lo poco que se ganaba rezando, lo que podía ayudar el San Jerónimo con sus milagros y los cuatro huevos de las gallinas, ella hacía verdaderos prodigios de economía para engañar el estómago e impedir que yo muriera de hambre."

Carlos Luis Fallas

RESUMEN

En este artículo se analiza la participación de las mujeres costarricenses en el mercado de trabajo durante los distintos modelos económicos que han imperado en el país desde 1950, con mayor énfasis en los más recientes, para concluir con un análisis sobre las diferencias de ingresos que prevalecen en la actualidad entre personas de distinto género.

INTRODUCCIÓN

En la novela *Mi Madrina*, de Carlos Luis Fallas, se narran las peripecias que debe pasar una mujer soltera y pobre en la Costa Rica rural de principios de siglo, para obtener los recursos necesarios para sostenerse a sí misma y a un pequeño ahijado huérfano que hubo de adoptar. No existían por entonces industrias maquiladoras, desarrollos turísticos o grandes instituciones públicas que le dieran empleo a las mujeres, prevalecía una

fuerte división sexual del trabajo que daba por supuesto que los hombres eran los encargados de ganarse el pan y que las mujeres eran las responsables de atender los asuntos domésticos. Por ello en aquellos hogares donde no habían varones adultos que llevaran el sustento, enfrentaban graves dificultades para subsistir.

La sociedad de hoy es mucho más diversificada, además de la agricultura existen muchas actividades industriales y de

servicios, tal como lo planteaba Durkheim, la existencia de una intensa división del trabajo social aumenta las posibilidades de los individuos de encontrar una tarea que se adapte a sus capacidades y necesidades (Durkheim, 1967: 227). Por ello, la diversificación ha permitido una mayor incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentando las oportunidades de éstas de desempeñar un empleo remunerado. Desde siempre las mujeres han trabajado y casi la totalidad desempeña labores de trabajo doméstico. En el presente artículo nos concentraremos únicamente en la incorporación de las mujeres a actividades laborales realizadas a cambio de una remuneración monetaria, incluyendo además aquellas actividades no remuneradas pero que se realizan fuera del ámbito del trabajo doméstico. No obstante, aún prevalecen serias dificultades para las mujeres que deben complementar su rol tradicional en la esfera de la reproducción con una participación activa en las actividades productivas. En el presente artículo trataremos de identificar las modalidades que ha asumido la incorporación de las mujeres costarricenses al trabajo remunerado, a partir de mediados de siglo.

Partimos de la hipótesis de que los distintos modelos de desarrollo seguidos por el país a lo largo de su historia estimulan algunas actividades económicas en detrimento de otras, generando una mayor demanda para cierto tipo de ocupaciones, lo cual permite que se configure una estructura de estratificación social que le es característica al modelo y que explica también el grado de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. En este artículo analizaremos la participación de las mujeres costarricenses en el trabajo remunerado en los modelos económicos que han imperado en el país desde 1950, con mayor énfasis en los modelos económicos más recientes, para concluir con un análisis sobre las diferencias de ingresos que prevalece en la actualidad entre personas de distinto género.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES ANTES DEL AJUSTE

En la primera mitad del siglo XX prevalecía en Costa Rica un modelo agroexportador. Se exportaba café y banano y se importaban casi todas las mercancías del exterior, no sólo productos industrializados, sino incluso artículos alimenticios de consumo básico (Rovira, 1983:64).

El modelo agroexportador imponía serios límites a la división social del trabajo, a la diversificación económica y al desarrollo del mercado interno. Según el Censo de Población de 1927 el 63,5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajaba en agricultura; un 12,4% laboraba en la producción artesanal, un 14% trabajaba en los servicios de transporte, comercio, vigilancia, limpieza y cocina y sólo un 7% desempeñaba puestos administrativos, docentes y profesionales. La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado era escasa, en un estudio que hicieramos con las boletas del Censo de 1927, encontramos que de las 1 895 personas económicamente activas de la muestra, sólo un 8,4 por ciento eran mujeres, la mayoría de las cuales se dedicaban a la producción artesanal (pureras, costureras), trabajaban en los beneficios como escogedoras de café, se desempeñaban como cocineras, niñeras o empleadas domésticas o eran maestras de escuela primaria.

Durante el período agroexportador imperaba todavía un modelo campesino de reproducción social en el cual las mujeres tenían una amplia participación económica en el seno de las unidades domésticas, esta situación, unida a la estricta segmentación sexual de las actividades productivas, a la escasa diversificación económica y a la débil división social del trabajo que por entonces se presentaba, nos permiten entender por qué se producía una participación tan baja de las mujeres en las actividades extradomésticas.

El cambio que trajo consigo la guerra civil del 48 es de fundamental importancia, dado que se trata de un quiebre en el modelo oligárquico dominante en el país el cual, según pensamos, imponía obstáculos insalvables a la movilidad estructural. La vieja oligarquía cafetalera no sólo manejaba el jugoso negocio de la agroexportación, poseía también la banca y monopolizaba en la práctica el poder político, lo que la colocaba en una posición en la que podía controlar a su conveniencia todas las principales posiciones en la jerarquía social, constituyendo un sistema de estratificación cerrado en el que era muy difícil ascender en la escala social.

El grupo que gana la guerra civil desplaza del poder político a la oligarquía y aprovecha esta posición para generar las condiciones que permitieran romper con las trabas a la movilidad social; no es casual que su primera medida económica importante sea precisamente la nacionalización de la banca, con lo que se pretendía estimular el surgimiento de nuevas empresas, promover el desarrollo y acceder al poder económico (Rovira, 1988:18-19). Dichas medidas, unidas al fuerte crecimiento del Estado que se produjo a partir de 1950, posibilitaron que muchas personas de los sectores más pobres se movilizaran a posiciones de clase media, la cual amplió su peso en la sociedad tanto en términos absolutos como relativos. En los 23 años que transcurrieron entre 1927 y 1950 quienes trabajaban como empleados administrativos, docentes y profesionales, mantuvieron su peso en la estructura ocupacional en cerca de un 7%, debido a las escasas posibilidades de movilidad social que ofrecía el modelo oligárquico. Por el contrario, en los 23 años que separan a 1950 de 1973, estos mismos sectores duplicaron su peso relativo, pues pasan de representar un 7,5% de la PEA en 1950 a un 14,6% de la misma en 1973. Este aumento relativo es de una extraordinaria importancia si se considera el enorme crecimiento demográfico que se experimentó durante el período, pues para duplicar el peso relativo de estos grupos el aumento en tér-

minos absolutos tuvo que ser muy alto. Por ejemplo, en 1950 habían en el país 3778 profesionales, mientras en 1973 su número era ya de 24 143 (Rodríguez, 1977:171).

El acelerado desarrollo económico que se produjo a partir de 1950, trajo consigo cambios importantes en la estructura ocupacional del país. La modernización de la estructura productiva significó la desaparición de algunas ocupaciones y el surgimiento de otras, así como cambios en la proporción de personas ocupadas en distintos sectores de la economía. El porcentaje de personas que trabajaban en el sector primario pasó de un 54% en 1950 a un 31% en 1984, mientras quienes lo hacían en el sector secundario, pasaron de un 16 a un 20 por ciento en el mismo período. Sin embargo, el sector que aumentaría en forma realmente vertiginosa es el de los servicios, que pasan de representar un 26% en 1950 a un 45% en 1984¹. Al interior del sector servicios los grupos que más aumentaron fueron los de empleados administrativos, los docentes, los técnicos medios y los profesionales, ocupaciones que se ejercen principalmente en el Estado, lo cual evidencia el carácter que adquiere la modernización económica que vive el país a partir de 1950.

1 La tasa neta de participación es la relación entre la población de mujeres económicamente activas y la población de mujeres mayores de 12 años, en otras palabras, es la relación entre la Población Económicamente Activa y la Población en Edad Activa. Se define como tasa de subutilización, la suma de las tasas de desempleo abierto, de subempleo visible y del subempleo. Este es un rasgo que se presenta en una forma muy similar en toda América Latina, de acuerdo con Infante y Klein entre 1950 y 1980 el incremento de la PEA latinoamericana se registró principalmente en los servicios, que crecieron en un 16%, mientras que en la industria aumentaba en sólo un 7% (Infante y Klein, 1991:130).

Aún cuando las nuevas políticas estimulan la industrialización, no se produce un traslado masivo de trabajadores del agro a la industria. De ahí que si bien el sector secundario tuvo el ligero incremento ya señalado, los que realmente aumentaron en este sector fueron los artesanos, que pasan de representar un 3,0% en 1950 a un 6,6% en 1984; mientras tanto, los trabajadores manuales no agrícolas que trabajan como asalariados mantienen inalterado su peso relativo. En 1950 eran un 13% de la PEA, en 1984 constituían el 13,7% de los activos. Aún cuando la industrialización era, en teoría, el eje del nuevo modelo, su impacto en la población fue prácticamente nulo. Por el contrario, algo que nunca se planteó como uno de los objetivos de la política de desarrollo, pero que es lo que en la práctica se fue realmente dando, es el fortalecimiento del Estado. Nos enfrentamos con el problema de un "juego" social en el que participan millones de actores que entran y salen constantemente, y que van conformando estructuras de relaciones que se comportan como hechos no planeados por nadie, ciegos y que no tienen realmente ningún fin supremo, ni pueden ser dirigidos ni manipulados por ninguno de los actores individuales, aún cuando se trate de jugadores que gozan de un gran poder.

De esta forma no se produce realmente un fuerte proceso de industrialización, lo que sí ocurre es un enorme crecimiento del Estado, el cual interviene en las más diversas actividades por medio, principalmente, de sus instituciones autónomas. Mientras los trabajadores industriales mantuvieron el mismo peso relativo en la PEA, los empleados públicos triplicaron su participación porcentual. En 1950 los servidores del Estado constituían un 6,2% de los activos, ya para 1980 representan el 18,5% de éstos, en tanto que el 25,9% de los asalariados del país trabajaban para el Estado (Castro, 1995: 17).

El Sector Público se convirtió no sólo en el principal empleador del país, sino también en el sector más dinámico y moderno.

En una nación donde las empresas privadas todavía eran pequeñas y de carácter familiar, surgen instituciones administradas con métodos racionales que adoptan rápidamente las innovaciones científicas y tecnológicas. El Estado se convierte así en el principal agente de la modernización del país. Se convirtió a su vez en el principal empleador de profesionales, técnicos y empleados de cuello blanco, y por lo tanto en la principal fuente de ingresos para la mayor parte de la clase media; en 1980 un 75,4% de los profesionales y técnicos con que contaba el país trabajaban para el sector público² (Castro, 1995:39).

Ya se han mencionado rápidamente algunos procesos que cambiaron radicalmente en términos cuantitativos y cualitativos la demanda de fuerza de trabajo en el país a partir de 1950, veamos ahora qué ocurrió con la oferta.

La oferta de empleo puede variar con muchos factores, en particular con el tiempo que pasan los individuos en el sistema de enseñanza, con la posesión o no de medios de producción, con la incorporación o no de las mujeres al mercado de trabajo, entre otros. Un factor de importancia lo es la estructura de edades de la población. En el caso de Costa Rica, el acelerado proceso de crecimiento demográfico trajo consigo un fuerte aumento en la población en edad activa, la cual tuvo su mayor tasa de crecimiento en la década de los setenta.

El aumento en la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar pudo

2. Esta es una característica que comparte nuestro país con muchas otras naciones de Latinoamérica. Según un trabajo de Echeverría (citado por Infante y Klein, 1991:131) en Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela más del 60% de los profesionales trabajaban para el sector público en la década de los ochenta.

haber significado un incremento en la Población Económicamente Activa mayor al que vivía la población total, máxime si se considera que aumentó la tasa de participación femenina sin que disminuyera la masculina. Sin embargo, este aumento demográfico fue contrarrestado por una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, por lo que la tasa bruta de participación (PEA/Población total) se mantuvo estable representando un 33% tanto en 1950 como en 1992. De esto se deduce que necesariamente se produjo un cambio en la composición por edades de la PEA, resultado lógico del paso de una economía con un alto componente de unidades de producción familiar a otra mucho más formalizada. En síntesis, si bien la PEA tuvo un fuerte incremento en términos absolutos, pues pasó de 271 984 personas en 1950 a 1 043 148 en 1992, en términos relativos no cambió la proporción de personas que se incorporan al mercado de trabajo, si no más bien sus características.

La modernización de la sociedad costarricense trajo consigo un importante proceso de urbanización. Este proceso se originó en masivas migraciones desde las zonas rurales hacia las cuatro principales ciudades del Valle Central y en especial hacia San José, ciudad que entre 1945 y 1980 aumentó su tamaño 19 veces (Vargas, 1985).

Ese proceso de urbanización tiene relación con la pérdida de importancia del sector agrícola y el crecimiento del sector terciario de la economía, aunado a la descomposición de las formas campesinas de producir, que trajo consigo el desarrollo de las relaciones capitalistas en el campo costarricense. El aumento de la urbanización debe entenderse en el contexto de un proceso mucho más amplio de modernización de la fuerza de trabajo, que se expresa también en un incremento de las relaciones salariales, así como en una mayor participación de las mujeres en el trabajo remunerado.

CUADRO 1

INDICADORES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN COSTA RICA DURANTE EL PERÍODO 1950-1997

INDICADORES	AÑOS				
	1950	1973	1984	1995	1997
PEA no agrícola (%)	45,5	62,9	69,0	80,0	79,8
PEA campesina (%)	21,9	15,5	14,5	8,7	5,4
Mujeres en la PEA (%)	15,4	19,9	22,3	30,0	31,4
Asalariados en la PEA (%)	66,4	75,6	73,2	71,4	70,3
Tasa Bruta de Participación	34,0	31,3	32,9	39,3	39,8
Mujeres	10,4	12,1	14,5	24,0	24,9
Hombres	57,6	50,3	51,2	54,4	54,7

FUENTE: Elaborado a partir de datos de los censos de población de 1950, 1973 y 1984 y de la Encuesta de Hogares de 1995 y 1997. Por PEA campesina se entiende a los agricultores que trabajan por cuenta propia o sin remuneración.

Tal como puede apreciarse en el cuadro, los cambios en la ubicación espacial de la población y la urbanización de antiguas zonas rurales fueron acompañados por una creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, produciéndose el mismo proceso que se presentó en el resto de América Latina, donde se produjo un acelerado aumento en la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, particularmente entre 1970 y 1980, cuando el crecimiento anual de la mano de obra femenina fue de un 4,7% en comparación de sólo un 2,8% en los varones (Infante y Klein, 1991: 129). En el período de estudio aumenta por tanto la participación de las mujeres en la población económicamente activa, pasando de representar un 15,4% en 1950 a constituir el 22,3% de los ocupados en 1984, sufriendo un significativo aumento después de la crisis de principios de los ochenta, lo cual se analizará más adelante.

Otro aspecto importante es el cambio en el tipo de ocupaciones desempeñadas por las mujeres. Hasta los años cincuenta las mujeres trabajaban principalmente en actividades asociadas con sus roles tradicionales, por lo que preferiblemente laboraban como empleadas domésticas o en actividades similares: en 1950 casi la mitad (45,4%) de las mujeres que trabajaban realizaban este tipo de labores. No obstante, este dato debe sopesarse con el hecho de que en 1950 la mayoría (53,7%) de los profesionales y técnicos (fundamentalmente educadores) con que contaba el país eran del sexo femenino (Censo de Población, 1950). Esta situación, unida a la que ya se mencionaba, de la incorporación a actividades relacionadas con el trabajo doméstico, llevaba en 1950 a que se diera una polarización de las mujeres activas; un pequeño grupo que desempeñaba labores profesionales y una gran mayoría que realizaba trabajos relacionados con la limpieza y la cocina, con una escasa incorporación de las mujeres en actividades administrativas. De hecho, los únicos grupos ocupacionales donde las mujeres representaban la mayoría eran precisamente el de "profesionales y técnicos" y el de trabajadores de servicios domésticos.

El crecimiento del Estado y de los servicios permitió una masiva incorporación de las mujeres en trabajos no manuales, tanto en la burocracia pública o privada como en las actividades de educación y salud; para 1984 las mujeres representaban el 44 por ciento de los profesionales y el 45 por ciento de los empleados administrativos. Gracias a lo anterior, en 1984, el 41% de quienes desempeñaban posiciones ocupacionales de clase media alta³ eran del sexo femenino. Este porcentaje es significativo, si se considera que en ese año sólo el 22% de la PEA estaba constituida por mujeres. En 1984 el 16,4% de los hombres ocupados se ubicaban en posiciones de clase media, mientras el 40,0% de las mujeres que trabajaban aparecían en este tipo de posiciones⁴. Sin embargo, esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se presenta en condiciones de desventaja salarial y con tasas más elevadas de subutilización de la fuerza de trabajo, lo cual analizaremos posteriormente. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo cambia después de la crisis de los ochenta. La inserción del país en la globalización, las políticas neoliberales y la crisis económica, provocarán importantes transformaciones en la forma como las mujeres se incorporan al mercado laboral, siendo ahora el sector informal el que da empleo a una creciente cantidad de personal femenino.

LOS EFECTOS DEL AJUSTE

El modelo económico basado en el fortalecimiento del Estado de bienestar, que

-
3. Por ocupaciones de clase media alta se contemplan profesionales y técnicos (cuenta propia y asalariados), comerciantes y medianos empresarios (con 5 a 9 empleados).
 4. Esta es una situación que es favorecida por el alto nivel educativo que han tenido las mujeres en nuestro medio. Como veremos más adelante, las mujeres suelen tener mayor escolaridad que los hombres y participan tradicionalmente en labores que, como la docencia, requieren del desarrollo de habilidades cognitivas.

había sido construido principalmente por los gobiernos liberacionistas de José Figueres (1953-1957 y 1970-1974), Francisco Orlich (1962-1966) y Daniel Oduber (1974-1978), entra en crisis a finales de la década de los años setenta. Es al gobierno socialcristiano de Rodrigo Carazo (1978-1982) al que le corresponde hacer frente a lo más duro de la crisis.

Las causas de la crisis económica y las mejores formas de solucionarla han sido objeto de un fuerte debate que sería imposible reproducir aquí. Independientemente de cuales sean los motivos que llevaron al país a esta crisis, lo cierto es que la misma supuso el principio del fin del modelo económico impulsado por los socialdemócratas. A partir de la década de los ochenta las autoridades estatales de distintos partidos políticos y de las más diversas posiciones ideológicas, impulsan todas un mismo tipo de medidas, tendentes a una redefinición del papel económico del Estado, aumento de las exportaciones y liberalización de la economía (Rovira, 1992: 450-453).

Uno de los efectos sociales importantes de las políticas de ajuste ha sido una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Así, entre 1980 y 1986 aumentó la tasa neta de participación femenina de un 24% a un 26% y entre 1987 y 1997 se incrementó de un 29% a un 34%⁵. En el período anterior al ajuste, la incorporación de las mujeres a las actividades remuneradas creció a una tasa anual de 1%, después de 1984 dicha tasa se incrementa a un 3% anual. Un análisis de los distintos grupos ocupacionales permite constatar que este incremento no se produjo en forma uniforme en todas las

actividades. A lo largo del tiempo se produjo un incremento de la participación de las mujeres en el grupo ocupacional de directores, gerentes y administradores, pasando de un 22% en 1987 a un 28% en 1997, en el grupo comerciantes y vendedores, aumentó de un 30% a cifras del 37% en 1995 y el 33% en 1997 y las ocupaciones de producción industrial, en las cuales se pasó de un 21,8% en 1987 a un 22,4% en 1995, para disminuir a un 18,6% en 1997.

Tanto en el sector privado como público, se ha presentado una creciente incorporación de las mujeres. En el sector privado aumentó de un 24,7% a un 28,2% entre 1987 a 1997, mientras que en el sector público creció de un 38,6% a un 46,4%, para esos mismos años. Al interior del sector público, existe una mayor participación femenina en el gobierno central que en las instituciones autónomas, pasando de un 41% a un 46,1% entre 1980 y 1986 y de un 46,1% en 1987 a un 55,6% en 1997; es decir, un incremento de diez puntos porcentuales entre 1987 y 1997. Lo cual puede estar asociado a una mayor especialización del gobierno central en actividades de servicios y de las instituciones autónomas en empresas cuyas funciones tienden a utilizar en mayor medida fuerza de trabajo masculina.

La composición por sexo de las distintas categorías ocupacionales, muestra que en todos los grupos se ha presentado un incremento en la participación femenina. En los asalariados, las mujeres aumentaron su participación de un 26,9% en 1980 a un 32,7% en 1997. En 1980 un 17% de los que trabajaban por cuenta propia eran mujeres, mientras que en 1997 este porcentaje era ya de 28,3%. En los patronos es donde más crece la participación de la mujer de 1980 a 1996, de un 8,9% pasa a un 18,3%, duplicándose su presencia. Sin embargo, de 1996 a 1997, la participación de las mujeres como patronas decrece en tres puntos porcentuales, es decir, de presentar un 18,3% en 1996 pasa a un 14,9% en 1997. Lo que permite pensar que se está presentando

5. La tasa neta de participación es la relación entre la población de mujeres económicamente activas y la población de mujeres mayores de 12 años, en otras palabras, es la relación entre la Población Económicamente Activa y la Población en Edad Activa.

la tendencia de que la participación de la mujer como cuenta propia es más significativa. Pero donde el incremento en la participación femenina es más marcado es en la categoría de familiar no remunerada que pasa de un 23,2% en 1980 a un 35,7% en 1996, para subir a un 40,9% en 1997, es decir, que mientras los hombres tienden a dejar el trabajo no remunerado, las mujeres amplían su participación. Es importante señalar que esta categoría muestra un decrecimiento significativo en el nivel nacional.

El aumento en la participación de las mujeres que trabajan por cuenta propia o familiar sin remuneración se relaciona con una mayor incorporación de las mujeres al sector informal⁶. En el período anterior a las políticas de ajuste la participación de las mujeres en el sector informal se mantuvo muy estable: en 1973 representaban el 15%, en 1984 eran el 16% de los informales. En el período caracterizado por las políticas de ajuste esta situación varía radicalmente, en 1997 el 40% de los informales son mujeres, cifra que para los hombres era de un 33%. De ahí que el aumento de la informalidad haya sido un fenómeno experimentado en una forma muy distinta por los hombres y por las mujeres.

El porcentaje de la PEA masculina ocupada en el sector informal pasó de un 10,5% en 1984 a un 12,6% en 1995. En ese mismo lapso la proporción de las mujeres activas

que trabajaban en el sector informal pasó de 7% a 19%. En el período 1973-1984 la tasa de crecimiento anual del sector informal tanto para hombres como para mujeres se mantuvo en un 5%. En el lapso comprendido entre 1984 y 1995 la tasa de crecimiento anual del sector informal en los hombres continuó siendo de un 5%, mientras que para las mujeres la tasa se incrementó a un 17% anual.

La información disponible permite concluir que durante el período de ajuste si bien las mujeres experimentaron un incremento de su participación en la actividad económica, ésta se da bajo condiciones desventajosas, a excepción de las que se incorporan en puestos de dirección y gerencia, los grupos en los que las mujeres han crecido más rápidamente son precisamente los que, como el sector informal, presentan las peores condiciones. Esta precarización del trabajo femenino se aprecia claramente si analizamos al sector campesino. Durante el período de ajuste se ha producido un fuerte proceso de descampesinización, que se aprecia en una reducción tanto absoluta como relativa de los agricultores por cuenta propia en la PEA. No obstante, mientras esto ocurría, la participación de las mujeres en el sector campesino iba en aumento, específicamente como familiar no remunerada. Tanto en 1984 como en 1973 las mujeres representaban menos del 1% de los productores campesinos; para 1995 constituyen el 5,7% de los mismos. La descampesinización afectó solamente a los hombres, cuya disminución se produjo a una tasa anual de -2,4% en el período 1984-1995. En este mismo lapso las mujeres incrementaron su participación a una tasa de 17,6% anual, cuatro veces más alta que el crecimiento de la PEA.

En síntesis, las evidencias disponibles señalan que el deterioro que han producido las políticas de ajuste han afectado en forma diferente a los distintos sexos, siendo las mujeres de los sectores populares las más afectadas, en tanto que su presencia ha sido,

6. En el presente trabajo, hemos considerado como parte del sector informal a las trabajadoras no agrícolas (excluyendo profesionales y técnicos) que trabajan por cuenta propia o sin remuneración. Existe un amplio debate sobre la conceptualización del sector informal y las formas de contabilizarlo. Algunas definiciones incluyen por ejemplo a las asalariadas en establecimientos que emplean a menos de 10 personas. En nuestro caso hemos optado por una definición que, además de ser ampliamente aceptada por los estudiosos del tema permite realizar comparaciones con datos recogidos en distintos momentos.

en el sector informal y en el campesinado que es donde se presentan las peores condiciones de trabajo y las más bajas remuneraciones. Esto se plasma en el hecho de que son las mujeres las que presentan tasas de subutilización más elevadas a lo largo del período analizado, así como también en períodos económicos recesivos. Así, durante los años 1988 y 1991, y durante el período de 1994 a 1996 se ensancha la brecha entre hombres y mujeres, siendo en las mujeres donde la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo crece en mayor medida.

Durante 1997 la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo ascendió para las mujeres a un 15,2% y para los hombres a un 12,2%, es decir una diferencia de tres puntos porcentuales. Algo similar ocurrió durante el año 1991 cuando se presentó una tasa para las mujeres de 14,2% y para los hombres de 11,3%.

Las tasas que son más elevadas para la mujer son las de desempleo abierto y subempleo visible⁷, es decir, aquellas que indican ausencia total de empleo o falta de un empleo de tiempo completo. Así, en 1997 la tasa de desempleo abierto para las mujeres fue de 7,5% y para los hombres de 4,9%, la tasa de subempleo visible fue de 5,6% para las mujeres y de 3,6% para los hombres.

Para completar el análisis de las inequidades de género se hace referencia en el siguiente apartado a las inequidades salariales.

CLASES, GÉNERO E INGRESOS

Los datos de que disponemos proporcionan abundantes evidencias de que dada una misma inserción en el mercado de trabajo en términos de ocupación y categoría ocupacional, los hombres tienden siempre a recibir ingresos más altos que las mujeres. Esta es una situación que se da en casi todos los grupos analizados y en todas las clases sociales. En la clase alta las mujeres ganan el 72 por ciento de lo que reciben los hombres; en la clase media alta es donde las diferencias son menores, pero aún así las mujeres obtienen sólo el 82 por ciento de lo que reciben los varones; en la clase media baja las remuneraciones femeninas corresponden a un 74 por ciento de las masculinas y finalmente, en la clase baja es donde las diferencias son más marcadas, pues las mujeres ganan sólo el 64 por ciento de lo que obtienen los hombres. Los resultados de nuestra investigación son coincidentes con los encontrados en numerosos estudios hechos en diversas partes del mundo. Tanto en naciones desarrolladas como subdesarrolladas existe esta misma tendencia, pues en todos los países los hombres ganan siempre más que las mujeres. Según datos de la OECDE citados por Isabella Bakker, en 1980 las mujeres recibían en Inglaterra el 70 por ciento del ingreso que obtenían los varones, siendo este porcentaje de 72% en Alemania, 75% en Canadá, 79% en Francia, 83% en Italia y 89% en Suecia (1988:26).

La relación entre los ingresos de las mujeres y de los hombres por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional podría evidenciar no sólo un fenómeno de discriminación, sino también incidencia de la división sexual del trabajo, en el sentido que por el papel de reproductora asignado por la sociedad, la mujer no dispone de tiempo completo para laborar fuera del seno familiar, como se desprende del hecho ya señalado de que la tasa de subempleo visible es mayor en las mujeres que en los hombres; de hecho, según datos aportados por el

7. Se define como tasa de subutilización, la suma de las tasas de desempleo abierto, de subempleo visible y del subempleo invisible. Por subempleo visible se entiende la fuerza de trabajo ocupada que labora menos de 47 horas semanales por falta de trabajo y por subempleo invisible, aquella que percibe una remuneración por debajo del salario mínimo *minimorum*, laborando 47 horas o más semanales.

Informe del Estado de la Nación 1998 (página 63), las mujeres laboran en promedio 10 horas menos que los hombres.

Los datos por sector institucional sobre el ingreso medio de las mujeres como porcentaje del ingreso de los hombres muestran que las diferencias son menores en el sector público que en el sector privado. En el año 1997 este porcentaje es de 94,8%, mientras que en el sector privado es de 78,8%. Lo anterior se puede explicar señalando que en el sector público existen regulaciones de mayor "objetividad" sobre el salario que en diversas actividades privadas, como aquellas ubicadas en el sector informal y en los servicios personales. Por otra parte, la inserción de la mujer en el sector público se da sobre una base de calificación educativa, particularmente en sectores como la educación y la salud, donde existe un mayor número de profesionales y personal calificado femenino.

Las diferencias salariales por grupo ocupacional son mayores en los profesionales y técnicos y el personal de servicio. Las mujeres profesionales y técnicas recibían en 1997 un 69,4% del ingreso medio de los hombres y en el sector servicios un 51,4%.

Los ingresos de las mujeres son inferiores a los ingresos de los hombres en las distintas ramas y durante todo el período analizado. En aquellas ramas que son significativas desde el punto de vista de la inserción laboral de la mujer, las diferencias son particularmente elevadas. En 1997 en la industria el ingreso promedio femenino representa un 85% del ingreso de los hombres, en el comercio un 71% y en los servicios comunales y personales un 75%.

Dado que esta es una situación que se presenta repetidamente en muchos países, el problema no es ya si las diferencias de ingreso entre los géneros se producen, está ampliamente demostrado que sí se producen. El problema más bien es por qué se dan estas diferencias. Numerosas hipótesis se han ensayado para explicar esta situación.

Una idea que aparece con frecuencia es que las mujeres son relegadas a los peores empleos, a los menos atractivos y mal remunerados, produciéndose una segmentación por razones de género del mercado de trabajo. Existiría entonces una discriminación de género mediante la cual los hombres ocuparían los mejores empleos y las mujeres serían relegadas a las posiciones marginales.

"Los trabajos disponibles para las mujeres son aquellos recientemente creados por la expansión del sector servicios que generalmente son los peores. Las mujeres ocupan la base de la jerarquía ocupacional en empleos poco calificados y mal remunerados (...) El mercado de trabajo se mantiene altamente segregado, con las mujeres trabajadoras concentradas en ocupaciones que de algún modo se relacionan con la división sexual del trabajo. De este modo las mujeres son relegadas a ghettos laborales relacionados con los servicios o los cuidados personales, o con labores que requieren paciencia y destreza. Los estereotipos, que están profundamente arraigados en ideas sobre lo que se considera como los roles y las relaciones de género adecuadas, se presentan incluso en países progresistas e igualitarios como Suecia." (Hagen y Jenson, 1988:9, traducción nuestra).

Tal como lo señala Bakker en las conclusiones de su trabajo:

"La concentración de las mujeres en las ocupaciones de baja remuneración, es el principal factor que contribuye a crear la brecha de ingresos que existe entre hombres y mujeres." (Bakker, 1988: 40, traducción nuestra).

En el caso de nuestro país esta explicación es muy poco satisfactoria por varias razones:

a) En primer lugar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres no se produce

sólo a nivel general sino en cada uno de los grupos ocupacionales que hemos analizado. La segmentación de género podría explicar las diferencias generales diciendo que, en promedio, las mujeres reciben menos ingresos que los hombres porque hay más mujeres trabajando en los peores empleos, pero no podría explicar por qué aún en los "buenos empleos", o sea en los grupos de profesionales, ejecutivos o empresarios, las mujeres también ganan menos que los hombres. La situación de desigualdad en los ingresos para personas de distinto sexo que desempeñan ocupaciones similares es clara en el análisis que al respecto se hace en el Informe Estado de la Nación 1998 en que se afirma que:

"... las mujeres en ocupaciones con niveles de calificación similares tienen ingresos por hora inferiores a los hombres. Esto sucede para casi todas las ocupaciones, incluidas las de mayor calificación y responsabilidad, como lo son las de índole profesional y técnica y las directivas" (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 1998: 63).

b) En Costa Rica no existe una concentración de mujeres en los peores empleos, por el contrario, a pesar del deterioro que han sufrido en los últimos años, las mujeres aún están sobre-representadas en los grupos de clase media y sub-representadas en la clase baja. En 1997 la participación bruta (porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la PEA total) de las mujeres era del 25 por ciento a nivel general, pero alcanzaba el 46 por ciento en los profesionales asalariados, siendo de sólo un 5 por ciento entre las trabajadoras rurales. Si analizamos la tasa de feminización por clases, vemos que ésta alcanza el 43 por ciento de la clase media alta, el 41 por ciento de la clase media baja y el 27 por ciento de la clase baja.

c) La idea de que las mujeres son relegadas a los peores empleos podría explicar la diferencia de ingresos en las ocupaciones que

desempeñan como asalariadas, pero no así cuando trabajan por cuenta propia o como patronas. Si la hipótesis de la segmentación fuera cierta, las brechas de ingresos se producirían sólo en los empleos asalariados, no así cuando el ingreso depende de la propia iniciativa. Pero la situación es muy distinta; cuando tabulamos en forma conjunta las variables sexo y categoría ocupacional encontramos que es precisamente en las categorías de "patrono" y "cuenta propia", donde las brechas de ingreso son mayores. Las mujeres que trabajan como empleadas públicas, tal y como se indicó anteriormente, ganan en promedio un 95 por ciento del salario de sus compañeros varones. Las que trabajan como asalariadas en las empresas privadas ganan un 79 por ciento del sueldo de los hombres que laboran en ese mismo sector. Sin embargo, entre las mujeres que trabajan por cuenta propia, que no tienen un patrono que pueda ejercer con ellas prácticas discriminatorias, su ingreso es de sólo un 68 por ciento del que obtienen los hombres que trabajan por su propia cuenta. Pero donde las diferencias son realmente marcadas es en el grupo de los patronos. Las mujeres que realizan actividades empresariales generan en este tipo de posiciones únicamente un 62 por ciento de lo que obtienen los empresarios varones. Esta situación lejos de corregirse tiende a acentuarse, según el último informe sobre el Estado de La Nación los últimos datos indican que:

"En general, las mujeres tienen retribuciones monetarias al trabajo, inferiores a los hombres en todas las clasificaciones económicas. Estas diferencias son bastante amplias por categoría ocupacional, especialmente al considerar el trabajo independiente, donde las mujeres perciben remuneraciones que en promedio son la mitad de los ingresos de los hombres". (Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 1998: 61).

Otra explicación que se ha dado a las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres es la relativa al capital humano. Se plantea

que los individuos realizan inversiones en capital humano para colocarse en una posición favorable en el mercado de trabajo. Los empleadores, por su parte, tratarían de contratar en sus empresas a los trabajadores mejor calificados y, en la competencia por captar a los mejores elementos, ofrecerían buenos salarios y condiciones de trabajo (Posición comentada por Rubery, 1996: 28). Los varones son los que realizan mayores inversiones en capital humano y por lo tanto los que reciben las mayores remuneraciones. En otras palabras, las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres no se originan necesariamente en problemas de discriminación de género, si no que simplemente la competencia hace que los más preparados obtengan mejores remuneraciones. En el caso de nuestro país esta explicación resulta tampoco satisfactoria, puesto que si bien se presenta una remuneración diferencial de acuerdo al nivel educativo, las mujeres de todas las clases y grupos ocupacionales cuentan por lo general con niveles de escolaridad mayores a los de los varones. De ahí que si controlamos las variables de educación, categoría ocupacional y ocupación, es claro que las personas que se dedican a las mismas ocupaciones en las mismas condiciones y con la misma escolaridad, tienden siempre a diferir en sus ingresos de acuerdo con su género. No hay relación entre las brechas de ingreso que se presentan entre los grupos ocupacionales de hombres y mujeres y los que se dan en sus niveles educativos. Mientras las diferencias en ingresos son en muchos casos abismales, los niveles de escolaridad son muy similares, siendo el promedio de años de educación formal de las mujeres igual o superior al de los hombres. Por otra parte, esta hipótesis del capital humano está íntimamente relacionada con la hipótesis de la segmentación: Se supone que como las mujeres están menos preparadas deben concentrarse en los peores empleos, lo cual es algo que, como vimos, no se presenta en nuestro país.

Otra forma posible de abordar las diferencias de ingresos entre géneros es explicar

dicha brecha por variables que podrían estar asociadas con el sexo. En un trabajo realizado en la comunidad Italiana de Bassano del Grappa, donde predominan las industrias metalmecánicas y de confección textil, Bagnasco encuentra que las diferencias de ingresos no se originan en la condición de género, sino más bien en la edad de las trabajadoras.

“Las mujeres tienen un modelo de breve permanencia en el mercado del trabajo, por tanto, son siempre jóvenes. A su vez, también los jóvenes que se presentan en el mercado del trabajo están poco o nada cualificados. En consecuencia, los jóvenes tienden a tener salarios semejantes sin distinción de sexo. En otras palabras, las mujeres están peor pagadas, pero no porque son mujeres, sino porque son jóvenes. En conclusión: La fuerza del trabajo, con independencia del sexo y de actitudes de tipo cultural y de estrategias relacionadas con éstas, tiende, a igualdad de edad, a ser pagada a su precio de mercado”. (Bagnasco, 1989: 25).

En el caso de Costa Rica la situación es muy diferente a la encontrada en esa región italiana. En nuestro país también los jóvenes son parte de los grupos mal pagados, lo que no ocurre es que las trabajadoras sean siempre las mujeres más jóvenes. Los datos a nuestra disposición indican una distribución por edades muy similar para hombres y mujeres y si bien el 45 por ciento de las mujeres que trabajan tienen menos de 30 años, esta situación no es exclusiva de éstas, pues el 43 por ciento de los varones están en ese mismo rango de edad. Por otra parte, la proporción de mujeres en cada grupo de edad (Tasa de feminización) es similar en el grupo de 16 a 20 años a la que se presenta entre los 21 y los 50 años, mientras que dicha tasa es baja en el grupo de los más jóvenes; ocurriendo algo muy similar con el indicador sobre la cantidad de mujeres que se incorporan al trabajo remunerado por cada 100 hombres activos.

Para poder considerar la hipótesis de Bagnasco como plausible, debería de darse una alta concentración de las mujeres activas en los grupos de edad más jóvenes, lo cual, al menos en Costa Rica no ocurre, por lo que sería inútil continuar con análisis más sofisticados.

Hemos revisado ya varias de las propuestas que se han hecho para explicar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres que se presenta en las sociedades contemporáneas y hemos visto como para el caso de nuestro país ninguna parece ser del todo satisfactoria. En nuestro criterio, la desigualdad en los ingresos monetarios entre géneros está estrechamente relacionada con el problema de las capacidades de mercado. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, podrían explicar quizá la desigualdad de remuneraciones en aquellas ocupaciones que requieren del concurso de la fuerza física; no obstante, dado el desarrollo tecnológico actual este tipo de atributos son cada vez menos importantes, pues desde hace mucho tiempo el hombre ha sido sustituido en esta clase de labores por animales y máquinas. Además, estas diferencias no podrían explicar las desigualdades en ocupaciones no manuales, donde este tipo de atributos carece de toda importancia. Si descartamos las características fisiológicas, sólo existe entonces una diferencia entre hombres y mujeres que podría constituirse en una capacidad de mercado negativa para éstas y que sí puede explicar en todos los casos la brecha de remuneraciones. Nos referimos claro está a las responsabilidades en la esfera de la reproducción que les han sido socialmente asignadas a las mujeres y no así a los hombres, que pueden desarrollarse sin ataduras en la esfera de la producción.

La responsabilidad en el cuidado y educación de los niños, así como su participación compulsiva en la producción doméstica de bienes y servicios que el mercado no suple, constituyen factores que les impiden a las mujeres una participación plena en las ac-

tividades económicas remuneradas. Por ejemplo, una investigación realizada entre personal directivo de Inglaterra, encontró que la principal diferencia entre los hombres y las mujeres que ocupaban estas posiciones, radicaba en que las mujeres debían realizar una serie de elecciones para acomodar su carrera a las necesidades familiares, en una forma que los hombres no tenían que hacerlo.

“A pesar de que proporciones similares de hombres y mujeres señalaron las ‘responsabilidades familiares’ como una de las barreras para el desarrollo de sus carreras, más de dos tercios de las mujeres ejecutivas no tenían hijos, mientras que dos terceras partes de los ejecutivos varones vivían con niños dependientes: más aún, la cuarta parte de los hombres tenían esposas que no trabajaban y casi todos vivían con su pareja, en contraste con cerca de tres cuartas partes de las mujeres que eran solteras, separadas o divorciadas.” (Crompton, *et al.*, 1996:15, traducción nuestra).

Las responsabilidades en las actividades de reproducción sí pueden explicar por qué las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres se mantienen tanto entre los asalariados como entre empresarios y autoempleados, al tiempo que permite entender por qué a igualdad de educación y ocupación las diferencias persisten, además de que es un argumento que no es incompatible con el hecho de que la brecha se mantenga en todo tipo de posiciones ocupacionales y que se dé en países con diferente grado de desarrollo. Las mujeres que tienen distintos niveles educativos, que se dedican a las más diversas ocupaciones y que se desempeñan como asalariadas o como trabajadoras independientes tienen todas algo en común: una responsabilidad socialmente impuesta de velar por el cuidado de los niños y por las actividades domésticas, lo cual, a nuestro juicio, funciona en el mercado como un obstáculo para alcanzar remuneraciones similares a las de sus

contrapartes masculinos. Lo que se denominó anteriormente como subempleo visible, aún cuando este se refiera a la fuerza de trabajo ocupada que labora menos de 47 horas semanales por falta de trabajo y agregamos la disponibilidad de tiempo para completar la jornada laboral.

Para demostrar adecuadamente esta hipótesis se requiere de mucha información, de la cual por el momento no disponemos. Habría por ejemplo, que comparar ingresos por hora de mujeres solteras y casadas, sin hijos y con hijos de distintas edades, que se dediquen a las mismas ocupaciones y que tengan los mismos niveles educativos, relacionando esa información con los patrones que siguen los ingresos de los varones. No obstante, con los limitados datos que disponemos es posible hacerse una idea de la influencia que tienen las actividades reproductivas en la desigualdad del ingreso entre géneros. Entre los trabajadores más jóvenes las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres son realmente ínfimas. Entre los 20 y los 30 años la brecha se ensancha paulatinamente y es justo en las edades cuando las actividades reproductivas son más intensas cuanto la brecha de ingresos alcanza su máximo nivel, para reducirse de nuevo en las edades avanzadas. Aquí se aprecia claramente que la desigualdad económica entre géneros no es algo "natural", sino que es un fenómeno que está íntimamente relacionado con el ciclo vital de las personas.

Por las razones expuestas es difícil analizar el mundo del trabajo con los supuestos de la economía clásica, como si se tratara de un mercado regido únicamente por la oferta y la demanda de trabajo, en el cual las remuneraciones se fijan sólo por factores económicos. Como muchas otras instituciones humanas, el mercado laboral está profundamente influenciado por el poder y la división de las personas en clases o en géneros lo que refleja es finalmente el resultado de un intenso proceso de lucha por la vida en el que intervienen diferentes formas de poder político, económico y social. No obstante lo anterior, consideramos que es

posible identificar algunas capacidades de mercado que pueden tener una fuerte incidencia en la forma final que adopta la distribución del ingreso en nuestra sociedad.

Tomando en consideración a la Población Económicamente Activa ocupada menor de 60 años, podemos concluir luego de realizarse un análisis de regresión múltiple, que los aspectos que mayor influencia tienen en la determinación del ingreso son la ocupación, la escolaridad, la categoría ocupacional, el género y la edad. Quedaría para otro artículo la demostración de dicha afirmación. No obstante, lo importante de retener por el momento es que el género, aunque no es el único factor que interviene en la determinación del ingreso, sí es uno de los más importantes.

REFLEXIÓN FINAL

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha variado sustancialmente a lo largo de la historia, dependiendo de los distintos modelos económicos que el país ha adoptado. Durante el período agroexportador su participación en el trabajo extradoméstico era mínima, debido a que se trataba de una sociedad agraria, poco diversificada y donde aún predominaban las formas campesinas de producir, donde las actividades de producción y reproducción no estaban aún muy diferenciadas. El establecimiento de un modelo desarrollista con una amplia participación del Estado en la economía, permitió la ampliación de los sectores medios y un fuerte incremento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Una fuerza de trabajo femenina con niveles educativos iguales o superiores a los de los varones pudo aprovechar las amplias posibilidades de movilidad social ascendente que traía consigo la ampliación de los puestos de "cuello blanco", logrando colocarse en buenos empleos, lo cual se expresa en el mayor peso de las mujeres en posiciones de clase media

en relación con los hombres. La crisis de principios de la década de los ochenta y las políticas de ajuste impulsadas por el nuevo modelo neoliberal trajeron nefastas consecuencias para las mujeres, las cuales pierden parte de las posiciones ventajosas a las que habían alcanzado durante el período desarrollista. En el nuevo modelo los sectores más dinámicos en cuanto al crecimiento del personal femenino son el campesinado, como familiar no remunerada y el sector informal, como cuenta propista, que son ámbitos donde se presentan las peores condiciones, por otra parte, aún en la clase media y alta las mujeres aumentaron su participación principalmente en aquellas actividades que han perdido importancia en los últimos años. En la era neoliberal las mujeres han aumentado mucho su participación en la PEA, no obstante, mientras en el período desarrollista este incremento podía ser interpretado como el resultado de un aumento en las oportunidades de progreso y movilidad social para las mujeres, que se incorporaban crecientemente a trabajos calificados, en el modelo neoliberal su mayor participación obedece más bien a la necesidad de garantizar un ingreso familiar básico, ya sea como jefa de hogar o en calidad de compañera, en momentos en que el Estado ha abandonado sus políticas de subsidios, reduciendo además muchos de los servicios que antes prestaba. En una economía cada vez más privatizada los gastos tienden a crecer más que los ingresos y las mujeres han debido enfrentar la situación de múltiples formas, el problema es que las nuevas políticas han significado un claro deterioro de su condición social. Si bien la posición de las mujeres ha sufrido un menoscabo, aún la estructura ocupacional de la PEA femenina arrastra muchas de las características heredadas por el período desarrollista. No obstante, esta posición ventajosa en la estructura ocupacional contrasta con los niveles más bajos de remuneración a los que tienen acceso, situación que en nuestro criterio se origina en las obligaciones en la esfera reproductiva que nuestra sociedad le impone a las muje-

res. Esta, sin embargo, es todavía una hipótesis que valdría la pena evaluar a profundidad en futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Bagnasco, Arnaldo. "Mercado y mercados de trabajo". *Sociología del Trabajo*. Nueva Época, Número 6, Madrid, Primavera de 1989.
- Bakker, Isabella. "Women's Employment in Comparative Perspective". En: Hagen, Elisabeth; Jenson, Jane y Reddy Ceallaigh (Editoras). *Feminization of the Labor Force. Paradoxes and Promises*. Oxford University Press, New York, 1988.
- Barahona, Francisco. *Reforma agraria y poder político*. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, 1980.
- Castro, Carlos. "Estado y sectores medios en Costa Rica: redimensionamiento de un pacto social". *Cuaderno de Ciencias Sociales*, FLACSO, 1995.
- Castro, Carlos y Gutiérrez, Ana Lucía. "Informe de investigación: Cambios y tendencias en los mercados laborales en Costa Rica (1980-1996)". Versión Preliminar. Junio de 1998 (Inédito).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*. Organización de las Naciones Unidas, Chile, números publicados entre 1980 y 1994.
- Crompton, Rosemary; Gallie, Duncan y Purcell, Kate. "Work, Economic Restructuring and social regulation" En: Crompton, Rosemary; Gallie, Duncan y Purcell, Kate (Editoras). *Changing Forms of Employment. Organizations, Skills and Gender*. Routledge, Londres y Nueva York, 1996.

- Dirección General de Estadísticas y Censos. *Censo de Población*. San José, 1927, 1950, 1963, 1973 y 1984.
- Durkheim, Emilio. *De la división del trabajo social*. Editorial Schapire, Buenos Aires, 1967.
- Esquivel, Francisco y Solís, Manuel. *Las perspectivas del reformismo en Costa Rica*. Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, 1980.
- Facio, Rodrigo. *Estudio sobre economía costarricense*. Editorial Surco, San José, 1942.
- Fallas, Carlos Luis. *Mi Madrina*. Editorial Costa Rica, San José, 1994.
- Hagen, Elisabeth y Jenson, Jane. "Paradoxes and Promises. Work and Politics in the Postwar Years." En: Hagen, Elisabeth; Jenson, Jane y Reddy Ceallaigh (Editoras). *Feminization of the Labor Force. Paradoxes and Promises*. Oxford University Press, New York, 1988.
- Infante, Ricardo y Klein, Emilio. "Mercado latinoamericano del trabajo en 1950-1990". *Revista de la CEPAL*. Número 45, diciembre de 1991.
- Ministerio de Economía y Comercio. *Anuario Estadístico de Costa Rica*. San José, 1954, 1960 y 1970.
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. "Reseña histórica de los transportes en Costa Rica". (Mimeo), San José, 1984.
- Ministerio de Transportes. "Diagnóstico de los transportes de Costa Rica". Versión preliminar (Mimeo), San José, 1964.
- Mora, Jorge. *Cooperativismo y desarrollo agrario*. San José, Costa Rica, EUNED, 1987.
- Proyecto Estado de la Nación. *Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores actuales: 1997*. 4º informe. San José, Costa Rica, Editorama, 1998.
- Reuben, Sergio. *Capitalismo y crisis económica en Costa Rica*. Editorial Porvenir, San José, 1982.
- Rodríguez, Carlos. *Tierra de labriegos*. FLACSO, San José, Costa Rica, 1993.
- Rodríguez, Carlos. *Estratificación social y movilidad ocupacional en Costa Rica en el período de 1950-1995*. México D.F: Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de México, 1997, 418 páginas y anexos.
- Rovira, Jorge. *Estado y política económica en Costa Rica 1948-1970*. Editorial Porvenir, San José, 1983.
- Rovira, Jorge. *Costa Rica en los años ochentas*. San José, Editorial Porvenir, 1988, 2ª edición.
- Rovira, Jorge. "El nuevo estilo de desarrollo". En: Villasuso, Juan Manuel (editor). *El nuevo rostro de Costa Rica*. San José, CEDAL, 1992, pp 441-456.
- Rubery, Jill. "The Labour Market Outlook and the Outlook for Labour Market Analysis". En: Crompton, Rosemary; Gallie, Duncan y Purcell, Kate (Editoras). *Changing Forms of Employment. Organizations, Skills and Gender*. Routledge, Londres y Nueva York, 1996.
- Solís, Manuel. *Desarrollo rural*. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, 1985.

Vargas, Jorge. "Repercusiones del proceso de metropolización sobre la más antigua zona cafetalera del Valle Central". En:

Revista de Historia. Número especial, San José, Costa Rica, 1985.

Ana Lucía Gutiérrez Espeleta
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad de Costa Rica

Carlos Rafael Rodríguez Solera
Centro para el Desarrollo y la Investigación
de las Ciencias Sociales (CEDICSO XXI)
Carretera Pachuca-Actopan, Km 4
Pachuca, Hidalgo, Mexico
crrodrig@prodigy.net.mx
crrodrigsol@hotmail.com

GOBIERNO Y CONCERTACIÓN

EL PROCESO DE CONCERTACIÓN NACIONAL COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Flory Fernández Chaves

RESUMEN

En el presente artículo se realiza una conceptualización general sobre la participación, los requisitos, grados y diversas formas de participación ciudadana, y se ilustra con el caso del proceso de concertación nacional, llevado a cabo por el Gobierno de Miguel Angel Rodríguez, durante 1998.

ABSTRACT

In this article a general conceptualization is done about the requisites, grades and diverse forms of citizen's political participation, illustrated with the Miguel Angel Rodríguez government's national concertation process case, during 1998.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene el propósito de analizar el proceso de concertación nacional, realizado durante el año 1998 por el Gobierno del Presidente Miguel Angel Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como una forma novedosa de participación de la sociedad civil, en su articulación con el Estado, para la construcción del interés público.

En la primera sección se hacen unas consideraciones generales sobre el concepto de participación y su significado originario, sus bases motivacionales, las condiciones para su uso eficaz y eficiente y su utilidad para los sistemas políticos.

En la segunda sección se describen los diferentes tipos y facetas de la participación

ciudadana, su papel en las democracias liberales, los diferentes tipos de cultura política, su relación con las distintas concepciones sobre el poder y la resistencia al cambio por parte de los administrados.

En la tercera sección se identifican los requisitos mínimos que deben cumplirse para que se dé una adecuada participación y los diferentes grados en que puede presentarse, junto con ejemplos de tipologías de los fenómenos participativos.

En la cuarta sección se analiza el caso del proceso de concertación nacional, indicando sus antecedentes, sectores representados, conocimiento del mismo por parte de la población costarricense, resultados del proceso y conveniencia de otras formas de participación democrática.

1. CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL

El concepto de la participación es uno de los menos aceptados unánimemente por todos los interesados, pues mientras que algunos la elogian y la consideran como la panacea, casi con un carácter de fórmula mágica para la solución de todos los problemas; otros la condenan y lo consideran como una forma fácil de abandonar la responsabilidad por parte de los encargados, que a largo plazo se saldrá de control y socavará todas sus prerrogativas.

La base motivacional de la participación ciudadana, consiste en que al proporcionar la sensación de pertenecer y de ser necesitados, reconoce el ego del participante y le brinda un necesario sentido de importancia; por lo que a los ciudadanos les agrada que el gobierno les pida su opinión, siempre y cuando tengan algún grado de seguridad de que sus ideas y sugerencias poseen cierto valor en el accionar administrativo subsiguiente.

Con lo que se obtiene un alto grado de compromiso psicológico entre los gobernantes y los gobernados, donde los segundos internalizan el sentimiento de que sus metas personales coinciden plenamente con las metas del Estado, porque las mismas no son impuestas unilateralmente de arriba hacia abajo, y asocian su éxito con el éxito de las gestiones del gobierno.

En sus investigaciones

“Almond y Verba descubrieron que además de los miembros de grupos, quienes tienen mayor probabilidad de sentirse políticamente competentes son los individuos que han podido participar en la toma de decisiones en la familia, la escuela y el trabajo. En otras palabras, el hábito de participar es contagioso.” (Rasmussen, 1971: 57).

Es por lo anterior que se supone que la participación necesita de una dedicación

mental y emocional de parte de los involucrados, para contribuir en el proceso de toma de decisiones sobre aquellos asuntos que los afectan directa, o indirectamente, e implica que los interesados asumen la cuota de responsabilidad correspondiente.

El uso eficaz y eficiente de la participación es producto de una perspectiva de la administración que supone confianza en las capacidades potenciales de los administrados, conciencia de que la primera depende de los segundos y deseo de evitar las consecuencias negativas que en el largo plazo acarrea el uso indiscriminado de la autoridad, por más legítima que haya sido inicialmente.

De acuerdo con las áreas de interés de la Ciencia Política y de la Administración Pública su conceptualización adecuada reviste particular importancia, dada su utilidad para describir y analizar los sistemas políticos, ya sea con fines teóricos de estudio científico o fines prácticos de contienda política.

Desde ese punto de vista vale la pena recordar que

“el significado originario de la palabra participación en latín era el de tomar parte en un reparto y, también, comunicar algo. Y estos dos significados tienen aún vigencia en el contexto de las democracias liberales¹. La participación política está referida ahora, principalmente, al tomar parte en el proceso de elección de los gobernantes. Un proceso mediante el cual se asigna partes (votos) por parte de los ciudadanos y se reparte y adjudica el poder político.” (Rivero, 1997: 225).

1. Entendiendo por democracias liberales aquellos “sistemas políticos que combinan las instituciones típicamente liberales de limitación del poder (separación de poderes, derechos individuales) con mecanismo de elección de los gobernantes en los que participa la mayor parte de la población adulta.” (Rivero 1997: 210).

En ese sentido a continuación se desarrolla una descripción de los diferentes tipos y facetas de la participación ciudadana, su papel en las democracias liberales, los distintos tipos de cultura política, su relación con las variadas concepciones sobre el poder y la resistencia al cambio por parte de los administrados.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participar es

“dar señales fehacientes de pertenencia a nuestra comunidad. Acudir a votar en unas elecciones; llamar la atención pública sobre algo que no va bien a través de una carta publicada en la prensa, o mandársela a las autoridades; manifestarse en la calle a favor de cualquier causa respetable; estar presente en una asociación de padres de alumnos, y tantas actividades más, compatibles con las tareas de cada cual.” (Camps y Giner 1998: 117)

Por participación ciudadana se entiende la práctica democrática de integrar a todos los ciudadanos de un Estado-nación en instancias de trabajo para la elaboración de políticas públicas efectivas, con el propósito de que las decisiones tomadas consideren las opiniones de todos los afectados y no solamente las de las autoridades gubernamentales.

Al actuar de ese modo, en el accionar estatal se evita la formación de grupos contrarios y antagónicos: de un lado los gobernantes, quienes son los encargados de pensar, tomar decisiones y dirigir y, por el otro, de la ciudadanía pasiva, que se limita únicamente a emitir su voto cada cierto período y el resto del tiempo se dedica a obedecer las órdenes emanadas de sus supuestos representantes.

En términos políticos la participación contiene dos facetas claramente diferenciadas: la concreta cuando se ejerce el derecho

al voto para autorizar y legitimar a los gobernantes y la imprecisa cuando se trata de influir en el gobierno mediante el ejercicio de los derechos políticos.

Especialmente en las democracias liberales donde la participación política

“consiste básicamente en un tipo de actividad orientada a influir sobre el gobierno mediante el ejercicio de los derechos políticos. La articulación de esta influencia puede tomar la forma central de la elección de los gobernantes (las elecciones) o encarnarse en diversas actividades orientadas a influir en las decisiones políticas de los mismos.” (Rivero, 1997: 209).

En todo caso, existe una relación inversamente proporcional entre el grado e intensidad de la participación y el número de los participantes, es decir, conforme aumenta la primera disminuyen los segundos y viceversa; por lo cual, para que la participación forme parte integral de la cultura política del país, se deben cambiar los valores tradicionales de indiferencia por parte de los ciudadanos, rediseñar las estructuras rígidas del aparato del Estado y redefinir el perfil básico de las relaciones Estado-ciudadanos.

En ese sentido se debe tratar de brindar las condiciones necesarias para pasar del tipo de cultura política mínima (localista) al máximo (de participante) de acuerdo con las siguientes caracterizaciones de cada una de ellas:

Cultura política localista: es la que caracteriza a los individuos que manifiestan muy poco interés o ninguno con respecto al sistema político nacional.

Cultura política de súbdito: que caracteriza a los ciudadanos que se saben integrantes de un conjunto político nacional, acatan sus normas y aceptan los beneficios generales que

les proporcionan, pero se muestran poco interesados en asumir una posición activa para influir en el sistema.

Cultura política de participante: es la que se presenta en los individuos que muestran una orientación dirigida hacia la integración de los procesos políticos. Conocen el sistema y su funcionamiento y se interesan en la participación activa para tratar de intervenir en los mecanismos de toma de decisiones." (Andrade, 1983: 78).

Especialmente se debe cambiar el esquema mental, por parte de los gobernantes, de una concepción autocrática sobre el poder, donde se piensa que el mismo es una cantidad fija: lo que uno gana el otro lo pierde, proviene de la estructura de la autoridad legítima, lo ejerce la administración del aparato del Estado y fluye de arriba hacia abajo.

Y cambiarlo por una concepción participativa sobre el poder, donde se considera que, por el contrario, el poder es una cantidad variable, que proviene de las personas y se ejerce al compartir ideas y actividades en un grupo, por lo que fluye en todas direcciones.

Así se puede evitar la idea de que la participación ciudadana tenderá, inevitablemente, a erosionar las bases del poder legítimo de los representantes estatales, minando concomitantemente su autoridad para ser obedecidos, y se aceptará la idea de que en un sistema social democrático el poder puede aumentar sin que otro lo pierda, pues se transforma en "influencia" que rendirá sus frutos en el momento adecuado.

De esa manera, la participación permite las contribuciones de los ciudadanos para la definición de los asuntos de su interés, junto con las sugerencias sobre la forma en que pueden llevarse a cabo, fomenta la creatividad y es un gran aliado en el vencimiento de la resistencia al cambio, ya que la mayoría

de ellos aceptará más fácilmente cualquier decisión de la cual se sientan parte integral.

Especialmente, porque al participar los ciudadanos necesariamente deben intercambiar información, discutir y justificar opiniones, idear y defender las sugerencias ofrecidas, todo lo cual los lleva a comprometerse con los cambios y no solamente a aceptarlos pasivamente; con la consecuencia final de que conforme aumenta la participación disminuye la resistencia al cambio.

De ese modo la ciudadanía se siente segura ante el cambio, porque previamente sus necesidades han sido consideradas, se siente protegida de modificaciones bruscas, percibe que sus ideas han sido tomadas en cuenta y no tendrá razones para oponerse a algo de lo cual ha formado parte integral desde el principio.

Sin embargo, existen opiniones diferentes con respecto a la utilidad real de la participación, sobre todo en los asuntos políticos donde lo que sigue contando en última instancia es quién posee el poder y qué uso hace de él; como es el caso de Lipset, quien cuestiona la participación ciudadana como condición necesaria o suficiente para la influencia de los ciudadanos sobre la política gubernamental:

"Por una parte, los miembros pueden presentar un bajo nivel de participación política en una organización o sociedad, pero sin embargo influir en la política por su capacidad de retirar o brindar el apoyo electoral a una u otra de las diferentes burocracias que rivalizan por el poder.

Por otro lado, una sociedad o ciudadanía puede asistir regularmente a reuniones, pertenecer en gran número a varias organizaciones políticas y hasta poseer una elevada proporción de votantes que concurren a las urnas, y sin embargo tener poca o ninguna influencia en la política." (Lipset, 1981: 155).

Es importante identificar los requisitos mínimos que deben cumplirse para que se dé una adecuada participación y los diferentes grados en que puede darse, junto con ejemplos de tipologías de los fenómenos participativos, lo que se hace en la siguiente sección.

3. REQUISITOS, GRADOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Por todo lo anterior es que debe tomarse en cuenta que la participación no puede ser aplicada independientemente del tiempo y el espacio históricos correspondientes, de manera que para que sea exitosa deben considerarse los siguientes requisitos mínimos:

- Los objetivos del gobierno deben estar expresados claramente y ser conocidos por todos los ciudadanos.
- Se debe disponer de las condiciones materiales y temporales adecuadas para la efectividad de la participación.
- Los involucrados deben poseer los conocimientos necesarios sobre el tema en discusión.
- Los ciudadanos deben estar interesados y dispuestos a asumir las responsabilidades correspondientes a las decisiones tomadas.
- Los beneficios de la participación deben ser mayores que los costos de hacerlo.
- Ninguna de las partes involucradas debe sentir que la participación constituye una amenaza para el *statu quo*.

Debe además recordarse, que la participación no es algo discreto y discontinuo, sino que aumenta a lo largo de un continuo, donde los encargados de la actividad gubernamental cambian su relación con los ciudadanos en cuanto a la toma de decisiones que los afectan:

- Los gobernantes toman solos todas las decisiones, considerando única y exclusivamente la información disponible.
- Los gobernantes recaban información de los ciudadanos y posteriormente toman las decisiones por su cuenta.
- Los gobernantes comentan las situaciones con los ciudadanos, les piden ideas y sugerencias, pero finalmente son ellos los que deciden.
- Los gobernantes analizan las situaciones con los ciudadanos y buscan soluciones de común acuerdo.
- Los gobernantes delegan en los ciudadanos la búsqueda de soluciones y les permite la toma de decisiones correspondientes.

Tomando en cuenta la naturaleza continua del proceso participativo se está más claro que el grado, tipo y nivel de la participación depende entonces de muchos factores, entre ellos: la naturaleza de las situaciones involucradas, las actitudes, conocimientos y experiencias de los ciudadanos, las habilidades negociadoras de los administradores gubernamentales, el tipo de sistema político, etc.

En ese sentido, las tipologías de la participación política ciudadana pueden ir desde muy generales hasta muy específicas. Un ejemplo del primer caso es la de Lester W. Milbrath, comentada por Merkl, al referirse a una escala de participación donde se:

“empieza con las actividades de espectador que van desde exponerse a los estímulos políticos hasta expresiones de involucramiento tales como tratar de influir en el voto ajeno y exhibir una divisa en la solapa o en el automóvil durante una campaña electoral. Luego vienen las actividades de transición, como las de establecer contacto con candidatos a puestos públicos o

con dirigentes políticos, aportar fondos y asistir a los mitines políticos.

Finalmente están las actividades de lucha tales como dedicar tiempo, ser miembro activo de un partido político, reunir fondos, presentarse como candidato a un cargo público o del partido y desempeñarlo." (Merkl, 1968: 139-140).

Un ejemplo del segundo caso, es la de Rivero, para quien la participación política ciudadana es ejercida no desde el Estado, sino desde la sociedad civil, por lo que una tipología normal de la misma debería incluir las siguientes formas:

- a) "la discusión política cotidiana y el seguimiento de la vida política;
- b) la participación en campañas electorales;
- c) la más obvia y central al sistema político, el voto;
- d) la presión sobre los representantes políticos;
- e) la militancia en grupos y asociaciones, ONG's, grupos de interés, etc.;
- f) la participación en manifestaciones legales y, por último,
- g) la desobediencia civil y hasta la revuelta (estas últimas formas llamadas también participación no convencional)." (Rivero, 1997: 227-228).

Para ilustrar con un caso real, en la siguiente sección se analiza el proceso de concertación nacional, indicando sus antecedentes, sectores representados, conocimiento del mismo por parte de la población costarricense, resultados del proceso y conveniencia de otras formas de participación democrática.

4. ANÁLISIS DEL CASO DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN NACIONAL

Nuestro país se ha caracterizado por tener una cultura, donde la dinámica de la política se ha orientado más hacia ponerse de acuerdo, que hacia la confrontación abierta; muestra de ello es el hecho de que nuestro primer texto constitucional se llama precisamente "Pacto de Concordia", resaltando la búsqueda de una solución pacífica que lograra la reconciliación nacional.

Más recientemente, durante las dos últimas décadas se han dado varios intentos de lograr acuerdos nacionales a diferentes problemas, como por ejemplo, jornadas de reflexión, comisiones bipartidistas, diálogos nacionales, pacto Figueres-Calderón, foros sobre diversos temas, agendas nacionales, etc.

En el Programa de Gobierno 1998-2002 del PUSC se habla específicamente de que

"los socialcristianos nos proponemos devolver la credibilidad a la función pública, mejorando la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. En esa dirección, promoveremos la modernización institucional a la par que propiciaremos mecanismos para la participación ciudadana." (PUSC, 1997: 224).

Dentro de tales mecanismos la Administración Rodríguez Echeverría, después de ganar las elecciones con solo una tercera parte del voto electoral y ante la imposibilidad real de contar con una mayoría parlamentaria, que le asegurara la viabilidad de sus iniciativas legislativas, promueve nuevas formas de participación, como el proceso de concertación nacional, donde busca el apoyo de la sociedad civil para la aceptación de sus propuestas acciones de gobierno.

Por ello desde el principio el proceso se considera como un "diálogo de actores

sociales", conformado por representantes de distintos sectores² de la sociedad y llamado Foro Nacional. En un inicio la lista de participantes incluye 3 representantes por cada uno de 15 sectores de la sociedad costarricense. Posteriormente se amplía para incluir delegados de los 7 partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, para un total de 76 participantes.

Una debilidad del proceso es la ignorancia que sobre el mismo tiene gran parte de la población costarricense, ya que según una investigación realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA llamada "La población costarricense y sus demandas al nuevo gobierno", el 73% de los consultados de la clase baja ignora qué es la concertación, y un 54% de las clases media y alta no logra responder qué entiende por concertación. Lo cual pone en evidencia, que los grupos más marginados de la sociedad, no son precisamente los grupos que pueden ejercer mayores presiones ante el aparato estatal, para reivindicar sus derechos ciudadanos. Especialmente porque pareciera, según los resultados de dicho estudio; que

"los que saben o dan una definición de concertación no se sienten actores. La gente piensa que la concertación es un asunto de los políticos" (*La Nación*, 8 de julio 1998, 16A).

El mismo desconocimiento se evidencia en los resultados de otra encuesta realizada por CID-Gallup para el periódico *La República*, donde apenas un 27% de los entre-

vistados dice haber escuchado algo sobre el proceso de concertación nacional; pero que sin embargo un 70% de ellos no conoce los temas tratados en el mismo, mencionando principalmente el asunto de la privatización de los servicios públicos.

Lo más interesante para nuestros efectos son las opiniones expresadas sobre el proceso mismo, las cuales van desde un 28% que considera la concertación como

"un proceso que fortalece la democracia y permite la participación", [un 14% que opina que] "solo así se podrá encontrar alguna solución viable a los problemas nacionales".

En contraposición a otro 14% que toma el proceso

"como una forma de pasar el tiempo y al final no se hará nada", [un 7% para el cual la concertación se trata de] "una forma de dar publicidad al Gobierno", [o la posibilidad de que sea] "una forma de eludir responsabilidades", [un 6% lo ve como] "la única forma de gobernar porque el PUSC no tiene suficiente apoyo en el Congreso" y "la posibilidad de que sea una forma de evadir responsabilidades" (*La República*, 7 de agosto 1998, 6A).

Los mecanismos que nuestra democracia permite para la participación ciudadana como intervención de la sociedad civil en la administración, y el control de la gestión pública, son muy limitados, lo que ha dado pie a sucesivos y crecientes casos de arbitrariedades en el ejercicio del poder, lo mismo que la corrupción en todos los niveles por parte de los funcionarios públicos.

Con la participación, o su abstención, en las jornadas electorales como única posibilidad de cuestionamiento efectivo del gobierno, los ciudadanos ven en el proceso de concertación nacional una oportunidad para

2. Sus integrantes son representantes de los sectores cooperativo, financiero, campesino, sindical, femenino, empresarial, detallista, solidarista, comercial e industrial, desarrollo comunal, exportador, magisterial, minorías étnicas, comercio autónomo (trabajadores informales), ambientalista, alta tecnología, microempresas, juvenil, partidos políticos y representantes del Gobierno.

opinar y discutir sobre aspectos importantes para Costa Rica; aunque reconocen que las decisiones verdaderas, y la última palabra, la tenga la Asamblea Legislativa como institución legítima de la democracia representativa vigente en nuestro país.

Es por ello que para que dichas instituciones no pierdan legitimidad, los acuerdos del proceso de concertación nacional no pueden verse como acuerdos de la voluntad popular, sino como meras propuestas presentadas por algunos representantes de diferentes grupos de la sociedad civil, basadas en la participación ciudadana, y realizadas con el aporte de los técnicos en cada materia.

A la luz de los frutos obtenidos, puede decirse aproximadamente, que *desde el punto de vista de los objetivos perseguidos por los organizadores*, el proceso de concertación es exitoso, en cuanto a que pone a dialogar a representantes de sectores civiles, sociales, económicos y políticos, sobre algunas de las principales necesidades del país. *Pero al mismo tiempo evidencia la debilidad de la sociedad civil*, pues los grupos organizados que forman parte de la misma no manifiestan capacidad organizativa ni de respuesta propia ante las propuestas oficiales, limitándose a discutir las y terminando por hacerle variaciones, unas más significativas que otras.

También puede haber contribuido la premura de la invitación a participar, sin dar tiempo a que los grupos discutieran entre sí y elaboraran una propuesta alternativa con la cual llegar a las mesas de discusión; lo mismo que el plazo tan breve para obtener los resultados en forma de acuerdos. Plazos justificados por la necesidad de aprovechar el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Esta forma novedosa de participación puede verse como un adelanto de la manera cómo podrían funcionar en Costa Rica los

mecanismos de democracia participativa³, pero también como una manera, muy efectiva, de mediatizar a las agrupaciones políticas y a los sindicatos, fuera de los dos partidos políticos tradicionales.

En todo caso, el proceso indudablemente contribuye a fortalecer la imagen del Presidente, pues en el diálogo se logra la participación de grupos y líderes representantes de diversas formas de concebir la naturaleza del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil.

Sin embargo, los dirigentes de algunos grupos lo consideran únicamente como una plática entre los dirigentes de la clase política y los sectores económicos y sociales más fuertes, apoyados en la *pseudo participación del resto de la sociedad civil*, en un intento por legitimar el ideario neoliberal del Presidente con las propuestas del Gobierno, tendentes a privatizar las instituciones estatales más rentables y a vender los activos patrimoniales para financiar el pago de la deuda interna.

Aunque la democracia auspicie la igualdad política en muchos aspectos, dicha igualdad no será "democrática" en términos reales, mientras no vaya acompañada de la igualdad económica, pues mientras no sea así, la participación política, en los regímenes democráticos políticamente, se convierte en una pseudo participación, donde fácilmente se pasa de la inclusión abstracta a la exclusión concreta.

3. Sobre todo si se recuerda que la democracia participativa "constituye —teóricamente— una forma de organización social, en la que por encima de todo debe darse un proceso de formación, deliberación y confrontación de opiniones, es decir, debe ser el resultado del debate de ideas; basado —desde luego— en el principio de la igualdad del ser humano; el cual exige que todos —sin distinción alguna— tengamos los mismos derechos, en la búsqueda y formulación de soluciones." (*Semanario Universidad*, 30 de setiembre al 6 de octubre de 1998, 15).

De ese modo la democracia, como forma de organización política, se convierte en la forma más útil para los intereses económicos de los grupos más poderosos de las sociedades modernas, y se transforma en un totalitarismo económico disfrazado, pues en ningún momento se habla de cómo y cuándo se va a repartir la riqueza, como un medio para eliminar las desigualdades.

Para evitar lo anterior, lo ideal es que un proceso novedoso de participación como el descrito contribuya efectivamente a la generación de bienestar para el pueblo costarricense, y se convierta en un mecanismo real y verdadero de perfección de la democracia, no sólo política, sino también, y sobretodo, social, cultural y económica.

Pero sin considerarlo una panacea capaz de resolver todos nuestros problemas sociales, económicos y políticos, o una manera disimulada por la cual la Presidencia obtenga el apoyo del que carece en las pasadas elecciones, o un modo indirecto de convencer a los grupos más poderosos, o mejor organizados, para que identifiquen sus intereses particulares con el interés general.

Tampoco debe quedarse como una iniciativa aislada y única, sino que debe constituirse en instancia obligada de mejora de los canales de comunicación en los procesos de negociación para la toma de decisiones, conducentes a la formulación de políticas públicas, dada la ausencia de mecanismos participativos de democracia directa en nuestra legislación.

Sobretodo para rescatar la opinión de grupos y sectores, que si bien son interlocutores válidos de la sociedad civil, de otro modo no podrían fácilmente hacer llegar sus posiciones a los jefes gubernamentales o a los miembros del régimen político. Pero siempre con el cuidado de que no tienda a convertirse en un sustituto cómodo de las diferentes instituciones legales y mecanismos legítimos, formales e informales, del sistema

democrático, encargados de canalizar las demandas de los ciudadanos y de transformarlas en acciones concretas, tales como los partidos políticos, los cuerpos legislativos, el Poder Judicial, etc.

Adicionalmente se estima que en el ánimo de incursionar en otras formas de participación ciudadana directa, podría pensarse en establecer las condiciones adecuadas y necesarias para un referéndum exitoso, donde se dé la oportunidad de participar, sin exclusión de ninguna clase, a todos los sectores de la sociedad y como complemento a los procesos de decisión por mayoría.

A grandes rasgos, el referéndum consiste en convocar a los votantes para la aprobación o el rechazo de determinados proyectos de ley, tanto regulares como del tipo de enmiendas a la Constitución Política, o bien, de asuntos meramente de índole administrativa y también el permitirles la presentación de iniciativas de ley propias, con el apoyo de un determinado porcentaje de los electores.

Puede ser tanto controlado como no controlado, según sea convocado por el gobierno, el cual decide cuándo y sobre qué tema se hará, o bien, se dejen esos aspectos a la iniciativa popular. También puede ser obligatorio o discrecional, según se exija o no para la validez de determinadas leyes o actos administrativos. Igualmente puede ser prohegemónico cuando apoya el régimen o antihegemónico si más bien va en su detrimento.

Con ello se alcanzaría una profundización real en el régimen democrático, proporcionando a los ciudadanos las herramientas necesarias para la purificación de los dirigentes políticos, y la reivindicación de las instancias democráticas; junto con un aumento en la intensidad de su participación como ciudadanos, activos y conscientes del país que se quiere construir para las futuras generaciones.

Paralelamente se lograría un aumento en la participación política, con la posibilidad de influir en la toma de decisiones acerca de asuntos de interés colectivo, pues a medida que el régimen político permita un incremento en el nivel de debate público, y mayor participación política por parte de sus ciudadanos, mayor será el nivel de democratización real.

Esa sería una manera de ir realizando la transición de formas de democracia representativa a nuevas formas de democracia participativa, con mecanismos de consulta popular, donde diferentes sectores de la sociedad, en condiciones igualitarias de participación, encuentren espacios para expresar sus opiniones acerca de los temas de interés nacional; dado que las actuales instituciones no ofrecen las oportunidades adecuadas para que la ciudadanía pueda participar más activamente en la toma de decisiones de interés colectivo.

Todo lo cual evidencia la necesidad de que en nuestro país se replanteen las relaciones entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, con el propósito de buscar formas novedosas de participación que le permitan a los ciudadanos comunes y corrientes, su cuota de participación activa en la toma de decisiones que lo afectan, ya sea directa o indirectamente, y en procura que los servicios estatales estén en función de la mayoría de la población.

Especialmente en un momento como el actual, donde el sistema democrático vive un clima de aumento de la desconfianza pública en las instituciones democráticas tradicionales, más que todo en los partidos políticos y la Asamblea Legislativa; junto con un aumento en el abstencionismo electoral por la pérdida de confianza en los políticos tradicionales, producto tanto de la ineptitud como de la corrupción de los gobernantes, que puede conducir a tener no una verdadera democracia, sino un simulacro de la misma.

CONSIDERACIONES FINALES

De los requisitos mínimos para una efectiva participación ciudadana, el citado foro no cuenta con la mayoría de ellos, especialmente los tres primeros; por lo que puede clasificarse como un tipo de participación intermedia, donde los gobernantes comentan las situaciones con los ciudadanos, les piden ideas y sugerencias, pero finalmente son ellos los que deciden.

Debe tenerse presente que uno de los mayores inconvenientes de la participación es utilizarla con propósitos de manipulación, convirtiéndose en una pseudo participación, donde fácilmente se pasa de la inclusión abstracta a la exclusión concreta, porque los encargados de la administración gubernamental la usan como un subterfugio para que los ciudadanos hagan lo que ellos desean, haciéndoles creer que tienen voz y voto en la toma de decisiones que los afectan.

Usada con esos propósitos, la participación real se convierte en una manera sofisticada de hacer que los ciudadanos se consideren importantes, al considerar como "propias" decisiones tomadas previamente por los encargados del aparato del Estado para sus fines particulares específicos.

En ese sentido, el principal obstáculo para la participación consiste en que las instituciones existentes

"no ofrecen oportunidades adecuadas para que los ciudadanos participen más en las decisiones de desarrollo de su nación. Participación más amplia es necesaria para introducir una definición más adecuada del desarrollo sostenible, y para generar la información requerida para la administración efectiva de programas complejos." (Cox, 1994: 64).

Y es esencial que los ciudadanos participen en la toma de decisiones sobre los

asuntos que los afectan directa, o inclusive indirectamente, para garantizar que las mismas sean sanas y respondan verdaderamente a los intereses de la mayoría; por lo que, al impedir o reducir la participación ciudadana, se disminuye la efectividad de las gestiones gubernamentales, por más buenas intenciones que posean.

Al contrario, si se permite la participación de la mayor cantidad posible de ciudadanos interesados, informados y con criterios para hacerlo bien, aumenta proporcionalmente la cantidad de personas comprometidas con dichas gestiones, y se disminuye concomitantemente la posible vulnerabilidad de las acciones gubernamentales.

Especialmente en un contexto como el latinoamericano, donde el fomento de mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía, mediante su participación en la toma de decisiones que la afectan, es requisito necesario e imprescindible para el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, Eduardo. *Introducción a la ciencia política*. Editorial Harla. México, 1983.
- Asamblea Legislativa. "La participación ciudadana en el quehacer político: ¿cómo incrementarla de manera positiva?" En: *Revista Parlamentaria: La revalorización del quehacer político*. San José. 1998.
- Camps, Victoria y Giner, Salvador. *Manual de civismo*. Editorial Ariel, primera edición. Barcelona, 1998.
- Cox, Steve. "Participación ciudadana y el desarrollo sostenible en América Latina". En: *Revista INCAE*. San José, Vol VII, No. 2, 1994: 63-76.
- Lijphart, Arend. *Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo*. Editorial Ariel, S.A., primera edición. Barcelona, 1987.
- Lipset, Seymour M. *El hombre político*. Editorial Tecnos. Madrid, 1981.
- Merkel, Peter H. *Teorías políticas comparadas*. Editorial Roble, copyright. México, 1968.
- Partido Unidad Social Cristiana. *Soluciones para el futuro: Programa de Gobierno 1998-2002*. San José. 1997.
- Periódicos: *Al Día, La Nación, La República, La Prensa Libre, La Extra, El Herald, Semanario Universidad*, de mayo a octubre de 1998.
- Rasmussen, Jorge. *El proceso político. Estudio comparativo*. Editorial Diana, primera edición. México, 1971.
- Rivero, Angel. "Representación política y participación." En: Del Aguila, Rafael (Editor). *Manual de ciencia política*. Editorial Trotta. Valladolid, 1997.
- Sánchez, Luis. *Principios de teoría política*. Editora Nacional, séptima edición. Madrid, 1983.

¿CONCERTACIÓN NACIONAL EN COSTA RICA? UNA LECTURA CRÍTICA DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN NACIONAL EN COSTA RICA, 1998-99¹

Alberto Cortés Ramos

“ Si lo leemos desde los grupos discriminados, desde los sectores populares, la concertación está muy lejos de ser un éxito (...) lo que resta es que esos mismos sectores discriminados y sus dirigentes, planteen su propia plataforma para que la concertación sea efectivamente un espacio de negociación, que no ha existido en Costa Rica”.

Helio Gallardo

RESUMEN

El presente artículo analiza el proceso de concertación nacional desarrollado por el gobierno de Costa Rica (correspondiente a la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez, durante el primer año de su mandato, 1998-1999), caracteriza sus principales elementos y su dinámica política. El autor argumenta que este proceso fue convocado por el Gobierno como respuesta al resultado electoral que, debido al incremento de la abstención, fue interpretado como un mandato débil. Con la convocatoria a la concertación nacional, el gobierno buscó impulsar su agenda “oculta”, orientada hacia la ruptura de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros bajo una modalidad aparentemente democrática. El autor señala que, pese a su forma novedosa, la concertación nacional se inscribe dentro de una larga tradición de la cultura política dominante de cooptar, incluir y desorientar a las organizaciones sociales que pueden ser una amenaza para su estrategia política-económica de dominio.

ABSTRACT

The present article analyzes the process of “concertación nacional” developed by the government of Costa Rica (corresponding to the administration of president Miguel Ángel Rodríguez, during the first year of its mandate, 1998-1999), characterizes its main elements and their political dynamics. The author argues that this process was summoned by the Government like answer to the electoral result that, due to the increase of the abstention, was interpreted like a weak mandate. With the call to the “concertación nacional”, the government looked for to impel his agenda “hides”, oriented towards the rupture of the state monopolies of telecommunications and insurances under an apparently democratic modality. The author indicates that, in spite of its novel form, the “concertación nacional” registers within one long tradition of the dominant political culture to coopt, to include and to disorient the social organizations who can be a threat for their political-economic strategy of dominion.

1. Este documento fue discutido con el grupo de estudio Germinal, para ser presentado en la mesa redonda “Concertación: Balance desde la sociedad

civil” (17/11/98) y presentada como ponencia en el Instituto de Iberoamérica y Portugal, Universidad de Salamanca, en marzo de 1999.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	96
LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA A LA CONCERTACIÓN NACIONAL	97
Factor "1".- Creciente pérdida de credibilidad política	97
Factor "2".- El pacto Figueres-Calderón	97
Factor "3".- Un mandato débil	98
Factor "4".- Margen de maniobra política	98
Factor "5".- Bajo riesgo político	99
Factor "6".- Manejo de imagen	99
Factor "7".- Contexto internacional favorable	99
¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CONCERTACIÓN NACIONAL? APUNTES SOBRE LA DINÁMICA DEL PROCESO	100
Actores sociales y políticos frente a la convocatoria al proceso de Concertación Nacional	101
La estructura de participación y de toma de decisiones: cinco órganos	103
Composición de los Órganos	103
Reglas del proceso	104
Definición de temas	104
Metodología de trabajo	105
Manejo del "ritmo" político	106
BALANCE DE RESULTADOS	106
CONCLUSIONES	108
BIBLIOGRAFÍA	109

INTRODUCCIÓN

1998 fue año electoral en Costa Rica. El primer domingo de febrero se realizaron las votaciones en las cuales resultó electo el Dr. Miguel Angel Rodríguez del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), frente a su principal opositor, el Lic. José Miguel Corrales, del partido Liberación Nacional (PLN).

Las elecciones de 1998 fueron atípicas respecto de las últimas diez elecciones² por

la irrupción de tres fenómenos novedosos: Primero, un incremento muy marcado de la abstención, que pasó del 18%³ al 31,8%. Segundo, la diferencia entre los dos candidatos con opción real de ganar fue muy ajustada, de menos del 2%, pese a que diversas encuestas de opinión señalaron que la diferencia sería de alrededor del 10%, favorable al candidato del PUSC y, tercero, un incremento de la quiebra de voto o voto dual⁴, que debilitó el bipartidismo en el poder legislativo y municipal⁵.

2. En Costa Rica las elecciones se realizan el primer domingo de febrero cada cuatro años. En dicho proceso se elige al presidente, a 57 diputados de la Asamblea Legislativa y a los regidores y síndicos de los consejos municipales.

3. Desde 1962 hasta 1994 hubo nueve elecciones en Costa Rica, cuya abstención en promedio fue del 18%.

4. Es decir, se vota para presidente por un partido y se vota por otro (s) para diputados y regidores.

5. El número de diputados de los partidos "emergentes", pasó de cuatro a siete. En el régimen municipal, lograron ocupar el ejecutivo o incidir en la composición del ejecutivo en la gran mayoría de los gobiernos de dicho régimen.

Pocos días después de su triunfo, el presidente electo formuló un llamado a iniciar un proceso de concertación nacional. El propósito de dicho proceso era "conciliar a los costarricenses alrededor de una visión compartida de futuro"⁶. El 13 de junio del mismo año, el presidente Rodríguez firmó el decreto N°27106-MP, que contenía el reglamento⁷ del proceso de concertación "Consenso para un futuro compartido" y nombró a los miembros de los distintos órganos del mismo (casa presidencial, 1998: 1).

Este artículo plantea cuáles fueron los principales factores que incidieron en la convocatoria a dicho proceso, cuál fue la dinámica que tuvo y cómo la concertación, pese a su forma novedosa, se inscribió dentro de la tradición de inclusión y cooptación que, históricamente desarrolló la élite del poder en Costa Rica.

LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA A LA CONCERTACIÓN NACIONAL

A continuación se formularán siete factores que podrían contribuir a un debate sobre los elementos que incidieron en la decisión del gobierno para convocar a un proceso con las características de la concertación nacional.

FACTOR "1". CRECIENTE PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD POLÍTICA⁸

Esta tendencia, que tiene una dimensión internacional, se consolidó en Costa Ri-

ca en el último lustro. Tiene dos manifestaciones centrales: una creciente apatía o desencanto ciudadano con la política y lo político, con sus actores e instituciones, y el surgimiento de nuevos actores sociales que compiten con los actores políticos tradicionales (principalmente con los partidos políticos) por las funciones de mediación y representación de sectores sociales o por la reivindicación de temas sectoriales (movimiento de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones ambientalistas, entre otras).

En ese sentido, la convocatoria al proceso de concertación nacional respondía a la necesidad de intentar crear un mecanismo alternativo de legitimación para el gobierno (que se expresó en el discurso oficial acerca de la importancia de la participación de la sociedad civil) y, también, respondía a la necesidad de tratar de cooptar e incluir a estos nuevos actores sociales en la estrategia político-económica de la administración del presidente Rodríguez.

FACTOR "2". EL PACTO FIGUERES-CALDERÓN

En 1995 se llevó a cabo otro importante proceso de concertación en Costa Rica, que tuvo un impacto nacional: La concertación entre los hijos de los dos caudillos⁹ o, como fue llamado en su momento, el pacto Figueres-Calderón (abril de 1995)¹⁰. Este

6. La clase política y la élite del poder, en este caso expresada por el propio presidente, hace un llamado a todos los costarricenses para dejar de lado diferencias y buscar el consenso nacional (por supuesto, en torno a las propuestas del gobierno).

7. El reglamento establecía las instancias de toma de decisión, los criterios de participación, la metodología de trabajo, los temas en los que se concertaría y que se entendía por consenso. En el presente trabajo, la forma en que el gobierno fue modificando su interpretación del reglamento es uno de los indicadores principales para demostrar la existencia de una agenda gubernamental oculta.

8. La pérdida de credibilidad se expresa en un desencanto ciudadano con la clase política, que en este artículo hace referencia a quienes ocupan puestos de representación política o de gestión en la administración pública. En ese sentido, son parte de la élite del poder, pero no la agotan.

9. Los dos grandes caudillos de la historia contemporánea costarricense y padres de los dos firmantes del pacto Figueres-Calderón, son el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, reformador social de los años 40 y don José "Pepe" Figueres Ferrer, líder triunfante de la revolución del 48 y tres veces presidente de Costa Rica (1948-49, 1953-58, 1970-74).

10. Se denomina "pacto Figueres-Calderón" al acuerdo firmado en abril de 1995, por el presidente José María Figueres (94-98) con el ex-presidente Rafael Angel Calderón (90-94). Dicho acuerdo fue sumamente criticado, tanto por su

pacto fue percibido como un arreglo de cúpulas¹¹ y, por lo tanto, visto de manera negativa por la ciudadanía. La imagen de Miguel Ángel Rodríguez fue una de las más dañadas por dicho acuerdo, en tanto que fue uno de los principales responsables de su ejecución¹². La necesidad de diluir esa imagen influyó en la convocatoria de la concertación.

FACTOR "3". UN MANDATO DÉBIL

Los resultados del proceso electoral cuestionaron la legitimidad del mandato con el cual el Dr. Miguel Ángel Rodríguez asumió el gobierno, sobre todo, lo cuestionaron por impulsar una profundización neoliberal-privatizadora del proceso de la reforma del estado.

Al margen de esos resultados, la elección presidencial de 1998 proyectó un dato inesperado con el cual hay que contar de ahora en adelante. Ese dato fue el crecimiento del abstencionismo, que pasó del 18% a poco más del 30%. Si a este porcentaje, se le agregan los votos nulos y en blanco, se obtiene una cifra que representa a un número de ciudadanos, cifra mayor que la cantidad de personas (32,2%), que eligieron al Dr. Miguel Ángel Rodríguez como presidente de la República (31,8%). Otro dato inesperado

do fue el incremento significativo de la llamada "quiebra de voto" (voto dual) para diputados y, de manera mucho más acentuada, para las municipalidades.

La escasa diferencia en el resultado final de las elecciones y, sobre todo, el incremento de la abstención, minó la fortaleza del mandato del gobierno del presidente Rodríguez. Por eso, dicho resultado puede ser interpretado como una ausencia de aval al proyecto político y económico neoliberal-privatizante propuesto por el PUSC. Esta ausencia se constituyó en otra necesidad para convocar el proceso de concertación.

FACTOR "4". MARGEN DE MANIOBRA POLÍTICA

El apretado triunfo electoral produjo, también, una composición muy fraccionada del poder legislativo. El PUSC no obtuvo la mayoría absoluta, aunque se constituyó en la principal fuerza de minoría en el congreso¹³. Esta situación es problemática para el gobierno, en tanto que sus propuestas de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) requieren de la modificación de varios artículos constitucionales, lo cual sólo puede lograrse con mayoría calificada (dos tercios) de la Asamblea Legislativa durante tres períodos consecutivos.

En un escenario complicado como éste, un resultado positivo del proceso de concertación podría ser utilizado por el gobierno para presionar a los partidos de oposición a ceder, bajo el argumento de que los proyectos presentados eran resultado del

procedimiento, como por el contenido. Sobre el procedimiento, cabe decir que fue firmado de manera poco transparente y, por su contenido, más allá de que iniciaran proclamándose como los hijos de los dos caudillos, era claro que el contenido apuntaba al desmantelamiento de las reformas sociales y del estado de bienestar que sus padres habían contribuido a crear.

11. En una encuesta realizada por la empresa encuestadora Unimer en setiembre de 1995, un 67% dijo estar informado del pacto y de ese porcentaje, un 57% señaló que no era provechoso para el país, frente a un 33,5%, que dijo que sí lo era. Unimer. Encuesta Nacional. Setiembre, 1995.
12. De hecho, en la encuesta ya mencionada, ante la pregunta ¿se ha perjudicado Miguel Ángel Rodríguez en sus aspiraciones? Un 45,6% contestó que sí, frente a sólo un 36,5 que respondió que no.

-
13. Las fuerzas políticas quedaron compuestas de la siguiente manera en la Asamblea Legislativa (57 diputados): PUSC, 27 diputados; PLN, 24 diputados; PALA (extracción rural, campesina), 1 diputado; partido Independiente Nacional (PIN, centro derecha), 1 diputado; partido Libertario (ultraliberal), 1 diputado; partido Renovación Costarricense (cristiano evangélico, derecha), 1 diputado y partido Fuerza Democrática (FD, progresista), 3 diputados.

consenso entre "gobierno y sociedad civil" y, por tanto, incuestionables.

Así, esta búsqueda de inmediato pragmatismo político constituyó otra necesidad para auspiciar un proceso de concertación.

FACTOR "5". BAJO RIESGO POLÍTICO

La convocatoria de un proceso de concertación con las características enunciadas por el gobierno, era favorable por la desarticulación existente entre las organizaciones populares, que aún no se recuperaban de la derrota del movimiento contra la reforma del régimen de pensiones del magisterio, impulsado y aprobado durante el gobierno anterior (PLN), con el apoyo del PUSC.

El movimiento contra la reforma del régimen de pensiones del magisterio contó con un gran apoyo ciudadano, de diversos gremios y de la opinión pública. Sin embargo, en el momento más fuerte de la movilización popular, la dirigencia del gremio aceptó negociar con el gobierno en términos que fueron interpretados, por diversos grupos que apoyaron la lucha, como una claudicación. Al final, la propuesta gubernamental fue aprobada en la Asamblea Legislativa sin mayores modificaciones¹⁴.

Esto dividió a la dirigencia sindical y a las organizaciones populares y también debilitó su credibilidad y su capacidad de movilización ciudadana, lo que ofrecía al gobierno una buena oportunidad para convocar a la

concertación nacional sin mayores resistencias desde las organizaciones populares.

FACTOR "6". MANEJO DE IMAGEN

Miguel Angel Rodríguez llegó a la presidencia de la República, bajo la sombra del pacto Figueres-Calderón, con la imagen de ser un intransigente neoliberal. De allí que la concertación tendría un doble propósito: distanciar al nuevo gobierno del pacto Figueres-Calderón y desdibujar la imagen de ortodoxo neoliberal y de hombre insensible que el presidente Rodríguez transmitía. Por eso, impulsar el proceso de concertación era una necesidad prioritaria.

FACTOR "7". CONTEXTO INTERNACIONAL FAVORABLE

En la actualidad, términos tales como "sociedad civil", "governabilidad" y "concertación social" están de moda y forman parte de la jerga oficial del mundo de la cooperación para el desarrollo. En el caso costarricense, era evidente para el gobierno entrante del presidente Rodríguez que, en dicho contexto, la concertación nacional podría recibir gran cobertura y apoyo internacional.

De hecho, contó con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, además, en la etapa preparatoria del proceso se tomaron, como referencias, las siguientes experiencias internacionales de concertación social: la Acción Concertada Alemana; el pacto de la Moncloa; el proceso de Solidaridad Mexicana; las experiencias de procesos de concertación en

14. Esta lucha fue importante por varias razones: Primero, fue la movilización popular más amplia que vivió Costa Rica en muchos años, contando la misma con un mayoritario apoyo en la opinión pública. Segundo, dicha reforma al régimen de pensiones era resultado directo del pacto Figueres-Calderón, antes mencionado. Tercero: La tradición política costarricense indica que, después de la movilización popular, viene el acuerdo y la negociación. Figueres Olsen rompió esa tradición. En fin, cabe señalar que rompió esa regla no con cualquier sector, sino con

un gremio que tiene un gran peso simbólico en el imaginario costarricense: el gremio de educadores. No en vano, con orgullo, los costarricenses se vanaglorian de tener más maestros que soldados. De alguna manera ese fue un triunfo pírrico para Figueres Olsen pues a partir de ese momento pasó a los niveles más bajos de popularidad que haya tenido un presidente de la República en la historia reciente de Costa Rica.

los casos de Guatemala y El Salvador y el proceso de diálogo social en la República Dominicana (Vargas Pagán, 1998: 18). Este contexto fue favorable para promover la iniciativa de la concertación.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CONCERTACIÓN NACIONAL?

APUNTES SOBRE LA DINÁMICA DEL PROCESO

La élite del poder costarricense ha tenido una gran capacidad de crear consenso en la sociedad alrededor de su proyecto político y económico durante las últimas cinco décadas¹⁵. Esto lo logró, tanto por medio del control y uso de la sociedad política (aparatos del Estado), como con la construcción de una clara hegemonía ideológica en la esfera de la sociedad civil¹⁶. Dicho proceso tuvo dos rasgos característicos: una capacidad de inclusión social y de cooptación de las organizaciones sociales en sus estrategias político-económicas y, una capacidad de fragmentar, atomizar y desorientar a las organizaciones sociales y populares, promoviendo contradic-

ciones entre ellas y/o aislando a aquéllas que se resistían a ser cooptadas e incluidas¹⁷.

El proceso de concertación nacional se inscribió dentro de esta tradición política, pues trató de desarticular una potencial resistencia popular a las propuestas oficiales, en este caso, a las políticas privatizadoras de dos instituciones estratégicas, el ICE y el INS.

A continuación, se argumentará en el sentido de presentar las razones de esta percepción, sobre todo, a partir de la forma en que el gobierno y los actores sociales y políticos cercanos (organizaciones o cámaras empresariales y principales medios de comunicación, en particular, el periódico *La Nación*) actuaron en el marco de la realización de dicho proceso.

ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS FRENTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE CONCERTACIÓN NACIONAL

Más allá del entusiasmo con que fue acogido por algunos sectores sociales y a pesar de contar con la participación de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), este aparentemente “novedoso” proceso¹⁸ de participación social, no fue convocado por la presión o demanda de

-
15. Costa Rica, después de la guerra civil de 1948 ha tenido dos estrategias nacionales de desarrollo: De los 50s a finales de los 70s, la desarrollista o de sustitución de importaciones, que fue acompañada del desarrollo de un estado de bienestar social y, de los 80s al presente, el estilo agro-exportador o de ajuste estructural. La capacidad de inclusión y cooptación se desarrolló de manera principal en la primera estrategia. En la segunda se han debilitado muchos de los mecanismos de cooptación e inclusión social.
16. Se usan ambos términos en su sentido gramsciano, que la define como una totalidad compleja con un campo de acción muy amplio y con una vocación por dirigir el bloque histórico. Incluye tres niveles: i. como ideología de la clase dirigente, que abarca todas las ramas de la ideología; ii. como concepción del mundo difundida a las capas sociales a las que liga de este modo la clase dirigente y; iii. como dirección ideológica de la sociedad, con tres niveles: la ideología, la estructura ideológica y el “material ideológico”. Para un mayor desarrollo, ver: Portelli, Hugues. *Gramsci y el bloque histórico*. 12 ed. en español México: Siglo XXI editores, 1985, pp. 18-29.

-
17. Para un mayor desarrollo teórico de cómo las élites dominantes de los países de América Latina fragmentaron y desorientaron a las clases populares, se recomienda leer a Binder, 1992: 22-26.
18. El actual gobierno presentó su convocatoria al proceso de concertación como una gran novedad. En realidad, los procesos de concertación no son nuevos en Costa Rica. Quizás lo que varió fue su forma. Sólo para mencionar algunos casos recientes de concertación en la presente década: En agosto de 1986 la administración del presidente Oscar Arias convocó a unas jornadas de concertación, que fueron suspendidas quince meses después. En 1990 la administración del presidente Calderón Fournier llamó a un diálogo nacional, en el cual se creó el Consejo Superior de Trabajo (Vargas, 1998:18). En 1993, durante esta administración, se firmó el convenio bilateral Costa Rica-Holanda para el desarrollo sostenible, que estableció un mecanismo de concertación que incluía

las organizaciones sociales y populares. Por el contrario, fue convocado por el presidente Rodríguez, lo que le permitió tomar la iniciativa política y darle forma, límites y reglas al proceso, aún antes de iniciar su administración¹⁹. Frente a dicha iniciativa, los principales actores sociales y políticos asumieron distintas posiciones que, a continuación, se resumen:

El proceso recibió un decidido apoyo de importantes instituciones, tales como los principales medios de comunicación²⁰, la iglesia católica, personalidades políticas (los ex-presidentes, por ejemplo). Además, el gobierno logró comprometer el apoyo de las universidades públicas, y neutralizarlas por medio de una petición de asesoría técnica para el proceso, solicitud que éstas aceptaron.

En cambio, en lo que respecta a los partidos políticos, el PLN, principal partido de oposición, se dividió entre quienes creían, con reservas, que había que apoyar el proceso, y quienes señalaban que toda concertación debía darse en la Asamblea Legislativa. De hecho, este partido no participó activamente en el proceso (*La Nación*, 15 de mayo de 1998: 6A).

cuatro partes en los dos países: el gobierno holandés, el gobierno costarricense, la sociedad civil holandesa y la sociedad civil costarricense. Esta última, en el caso costarricense incluye los siguientes sectores sociales: los empresarios (cámaras), las universidades (CONARE), así como las ONGs y organizaciones sociales (CONAO). Durante la administración del presidente Figueres Olsen (1994-98) dicho mecanismo se insertó dentro un marco más amplio, creando en 1994 el sistema nacional para el desarrollo sostenible, SINADES, que no funcionó por falta de voluntad política del gobierno (Cortés, 1997: 23-24). Este gobierno realizó en setiembre de 1994 el Foro: "Un Acuerdo Nacional Razonable. Por un Camino Económico Seguro y Sostenible", que fue un diálogo nacional sobre política fiscal, que tampoco tuvo gran alcance o incidencia.

19. En Costa Rica las elecciones se realizan cada cuatro años, el primer domingo de febrero. El gobierno electo inicia el primero de mayo.
20. Aunque el periódico *La Nación*, el principal y el más conservador del país, tuvo una actitud cambiante. En un primer momento, le dio un apoyo tibio e insistió en que el presidente tenía el man-

La mayoría de los partidos minoritarios le dieron su apoyo al proceso, con la excepción de Fuerza Democrática²¹. En este caso, hubo dos posiciones. Por un lado, la del ex-candidato presidencial, Vladimir de la Cruz, quién fue invitado por el presidente Rodríguez a participar en la junta de mediadores²². Aunque la participación de De la Cruz en esta instancia fue de carácter personal, se percibió por distintos sectores sociales como una actitud demasiado cercana al gobierno, lo que afectó negativamente la imagen de dicho partido. Por otro lado, estaba la posición mayoritaria dentro del partido, encabezada por el diputado José Merino del Río, quien sostenía que había que participar en la concertación para tensionar al máximo el mecanismo de tal manera que se evidenciaran los límites del mismo y los posibles intentos de manipulación por parte del gobierno.

Otras organizaciones participantes fueron el grupo de cámaras y organizaciones empresariales y el grupo de las organizaciones sociales y populares. El sector empresarial, pronto se mostró a favor de la realización de la concertación y apostó por una fuerte presencia y activa participación en el proceso. Esta actitud del sector empresarial puede explicarse por varias razones: primero, el presidente Rodríguez es un empresario. Segundo, el sector empresarial tenía interés en apoyar las propuestas estratégicas del

dato para gobernar. Es decir, la concertación no era más que una concesión a la sociedad civil. Posteriormente, cuando se hizo evidente que el gobierno lograba imponer su dirección a la concertación, apostó decididamente por ésta.

21. Fuerza Democrática se viene constituyendo en el referente progresista o de izquierda en el escenario de partidos políticos en Costa Rica. Gracias al lema de su campaña "métele un naranjazo al bipartidismo" (el color del partido es naranja), lograron apelar a un sector del voto difuso y de protesta, obteniendo tres diputados, uno más que en la anterior elección.
22. Más adelante se detallan cuáles son las principales instancias dentro de la concertación.

gobierno dentro del foro, en especial, las referidas a la privatización del ICE y del INS, propuestas por las cuales, dicho sector venía clamando hace muchos años.

Las organizaciones sociales, populares y ONGs, se dividieron en tres posiciones:

En el *primer grupo* se encontraban las organizaciones sociales que valoraron la concertación como un mecanismo novedoso e interesante de participación social y que, por lo tanto, había que involucrarse para fortalecerlo. En esta posición se encontraban ubicadas la mayor parte de las ONGs, organizaciones del Comité Socio-Laboral y el Foro Autónomo de Mujeres. Este grupo de organizaciones puso su *énfasis* en el *procedimiento* y en la posibilidad de participar en la toma de decisiones que la concertación abría para la sociedad civil. La mayoría de sus objeciones o señalamientos se inscriben en este nivel del proceso.

En el *segundo grupo* se encontraban la mayoría de los sindicatos del sector público y el Consejo de Defensa Institucional (CDI)²³, cuya *preocupación central no giraba en torno al procedimiento, sino en torno al contenido de las propuestas* presentadas por el gobierno. Este grupo de organizaciones sociales participó con gran desconfianza desde el inicio. Para ellas, el mecanismo de participación de la concertación buscaba, sobre todo, la legitimación de las propuestas privatizadas del gobierno. Pese a eso, participaron porque valoraron que quedarse fuera tendría un costo político muy alto frente a la opi-

nión pública, ya de por sí desfavorable hacia ellos²⁴. Además, porque el reglamento establecía que las tesis presentadas sólo serían aprobadas, como propuestas de la concertación, si obtenían consenso (unanimidad). Ergo, bastaba el voto negativo de una organización social para que cualquier propuesta presentada no saliera como de consenso de la concertación, lo cual le daba garantía de veto a estas organizaciones²⁵.

El *tercer grupo* de organizaciones, el más reducido de los tres grupos, fue el de las organizaciones sociales que se excluyeron del proceso por considerarlo una "burda" maniobra del gobierno para legitimar sus propuestas. Además, acusaron a las organizaciones sociales participantes de estar respaldando la manipulación del gobierno. Por eso, hicieron esfuerzos para articular un foro social popular con pocos o nulos resultados. Las dos principales organizaciones que sostuvieron esta posición fueron el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) y el Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE).

Mención aparte merece la posición de las universidades públicas²⁶. Desde un inicio, el gobierno solicitó el apoyo técnico de estas

23. El CDI fue creado en 1995 para la defensa de los activos del estado, en una coyuntura en la que el gobierno del presidente Figueres planteaba la urgencia de vender dichos activos, para pagar la deuda interna que, según el gobierno, se había vuelto inmanejable. Este Consejo es presidido por el ex-presidente Rodrigo Carazo O. (1978-82) y aglutina a una gran cantidad de sindicatos del sector público, organizaciones sociales y personas. Tiene una orientación política progresista y un carácter supra-partidario.

24. Es decir, como a todo gobierno que iniciaba había que darle el beneficio de la duda.

25. El artículo 4 del capítulo I del reglamento "Proceso de concertación: Consenso para un futuro compartido", establece que los acuerdos se toman por consenso. (Presidencia de la República, 13 de junio de 1998). "En aquellos casos donde existan dificultades para obtenerlo, se pedirá la intervención de una junta de mediadores. De no alcanzarse el consenso necesario el asunto deberá ser trasladado al Sr. presidente de la República para las consideraciones y determinaciones respectivas." (Casa Presidencial, 1998). Según el Diccionario de la Lengua Española, consenso es: "Consentimiento. II ACUERDO DE TODAS LAS PERSONAS QUE COMPONEN una corporación, dos o más partidos políticos, un grupo social, etc., en torno a un tema de interés general." (Remarcado del autor).

26. En Costa Rica, el sistema de educación superior pública consta de cuatro universidades, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto Tecnológico

instituciones, primero en la elaboración de la propuesta de la concertación misma, posteriormente en la secretaría técnica de la concertación y, además, su asesoría técnica en la parte metodológica y estadística en el transcurso del proceso (casa presidencial, 1998). Las universidades accedieron a dichas demandas gubernamentales y, de este modo, olvidaron los ejemplos de oposición crítica de la tradición universitaria y se apartaron de los principios establecidos en sus estatutos orgánicos. Así, la participación de las universidades públicas se agotó en una dimensión "técnica", políticamente "neutra".

Una posible explicación de la actitud de las principales autoridades universitarias es que, mientras se desarrollaba la concertación, las universidades públicas y el gobierno negociaban la renovación del mecanismo de financiamiento (convenio FEES) para el período 1999-2003. De hecho, el gobierno mantuvo el mecanismo de financiamiento del convenio.

LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN Y DE TOMA DE DECISIONES: CINCO ÓRGANOS

La estructura de toma de decisiones quedó constituida de la siguiente manera:

- a) *Foro nacional para la concertación.* Máximo órgano de la concertación nacional. Estaría conformado por un número igual y representativo de trabajadores, empresarios y representantes del gobierno. Además, se invitarían a otras organizaciones de la sociedad civil para discutir temas específicos. En realidad, este foro quedó constituido por 79 representantes de 26 sectores (MIDEPLAN, 1998; *La Nación*, 31 de octubre de 1998).

de Cartago y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tienen una instancia de coordinación denominada el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La asesoría técnica al gobierno la brindaron dos de las cuatro universidades: la UCR y la UNA, por medio de CONARE.

- b) *Mesa directiva del foro de la concertación.* Órgano presidido por un representante del gobierno, acompañado por representantes de los actores sociales. Esta instancia coordinó el foro.
- c) *Junta de mediadores.* Órgano responsable de emitir criterio sobre aquellos temas que puso en su conocimiento el foro nacional de concertación, en los que no había consenso. Estuvo integrada por los ex-presidentes de la República, el arzobispo de San José y las dos vice-presidentas del actual gobierno.
- d) *Comisión de verificación de acuerdos.* Órgano responsable de corroborar la ejecución de los acuerdos logrados, y de evitar que por incumplimiento de los mismos se obstruyera el proceso. Esta instancia estuvo conformada por una serie de personalidades políticas.
- e) *Secretaría técnica de la concertación.* Fue el órgano ejecutivo de la concertación (Presidencia de la República, 1988).

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS

Fue evidente que el gobierno puso énfasis en el diseño e integración de los cinco órganos de la estructura de participación. En el caso del foro de la concertación, hubo un claro predominio de organizaciones empresariales que, unidas a los representantes del Gobierno y de los partidos políticos con orientación neoliberal o clientelista, sumaron más de la mitad del total de las organizaciones participantes. En esta misma instancia, el gobierno ejerció su derecho²⁷ para invitar a nuevas organizaciones, la mayoría cercana a sus posiciones. También ejerció su derecho a veto para rechazar solicitudes de participación de organizaciones con posiciones adversas a las propuestas gubernamentales, por ejemplo, rechazó la solicitud de participación con derecho a voto del CDI (*La Nación*, 31 de octubre de 1998).

27 Establecida en los artículos 8 y 20, inciso b), párrafo IV del reglamento de la Concertación.

Las otras instancias, la de filtración (mesa coordinadora)²⁸ y la de mediación²⁹ (junta de mediadores), tenían una composición favorable a las posiciones oficiales, lo cual sería fundamental en la resolución de los puntos en que hubiera conflicto.

En síntesis, el gobierno tuvo un enorme peso en la definición y escogencia de las organizaciones que participaron en el proceso y en la composición de las distintas instancias de toma de decisiones de la concertación nacional.

REGLAS DEL PROCESO

Tanto en la elaboración e interpretación del reglamento, como en la definición de los temas, hubo un claro predominio de las prioridades gubernamentales. En lo que respecta al reglamento, fue elaborado unilateralmente por el gobierno antes del inicio del proceso y no hubo oportunidad de modificarlo en el marco más amplio del foro.

La interpretación de los artículos que generaron conflicto fue favorable a las posiciones gubernamentales. Particular mención merece la reinterpretación que hizo el gobierno del artículo 9 del reglamento, referido a la necesidad de que las propuestas que salieran con el sello de la concertación fueran resultado del consenso (unanimidad) de los participantes. La reinterpretación propuesta planteaba que serían de consenso las propuestas aprobadas por el 75% o más de los votos en el foro de concertación.

Esta interpretación fue cuestionada en el plenario del foro (30 de octubre de 1998) por diversas organizaciones sociales y fue remitida a la junta de mediadores, instancia que resolvió, con la excepción del presidente Carazo, autorizar al gobierno para preparar proyectos de leyes sobre la base de los acuerdos que fueron tomados por lo menos con el 75% de apoyo (*La Nación*, 31 de octubre de 1998; *La Nación*, 4 de noviembre de 1998). Este cambio "a posteriori" modificó, de manera radical, las reglas establecidas y dejó en una situación muy complicada a las organizaciones sociales que se oponían a la apertura de mercado en los campos de seguros y telecomunicaciones. Con dicha modificación, el gobierno podía presentar ante la Asamblea Legislativa dichos dictámenes como resultado del consenso de la concertación.

DEFINICIÓN DE TEMAS

Los temas fueron definidos unilateralmente por la administración Rodríguez, lo que respondió a sus intereses estratégicos (*La Nación*, 18 de julio de 1998). Los temas escogidos fueron los siguientes: mercado de telecomunicaciones, mercado de seguros, corrupción, pensiones, servicios ambientales, asignaciones familiares y desarrollo, desarrollo rural, libertades sindicales³⁰, política salarial y cesantía³¹.

Desde el inicio quedó claro que sólo habría conflicto en las propuestas referidas a la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros y, en menor medida, en

28 Por invitación expresa del gobierno, estuvo integrada por las siguientes personalidades: Danilo Chaverri, Vladimir de la Cruz, Rose Mary Karpinsky, Walter Kissling, Arnoldo López, Rodrigo Oreamuno y Ricardo González.

29 Estuvo integrada por los ex-presidentes de la República, Monseñor Arrieta y las dos vicepresidentas. De este grupo, sólo hubo una voz abiertamente disonante, la del ex-presidente Rodrigo Carazo.

30 En Costa Rica no existen sindicatos en el sector privado, sobre todo por la política de persecución y despido de los empresarios a cualquier intento de sindicalización de sus trabajadores. Esto con la permisividad de los gobiernos de turno y en contra de lo que establece el Código de Trabajo.

31 Estos tres últimos temas mencionados, no fueron discutidos por todos los sectores participantes en Mesas de Trabajo, sino por una comisión tripartita en la que participaron los sindicatos del sector público, las cámaras empresariales y el Gobierno.

las propuestas orientadas a la reforma al régimen de pensiones. Fue, en estos tres temas, que el gobierno forzó la reinterpretación del reglamento en lo referido al consenso, en vista de que ninguna de estas propuestas lo obtuvo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología seguida en la concertación fue la de establecer mesas de trabajo para cada tema, las cuales se reunieron simultáneamente en distintos lugares (*La República*, martes 7 de julio de 1998). Esta situación, sumada a la ausencia de una coordinación de las organizaciones sociales y populares, tuvo varios "efectos":

- Compartimentó el trabajo de las mesas, lo cual, al aislar a las organizaciones sociales y populares, les impidió orientar el proceso y articular una estrategia común frente al gobierno, el cual sí tenía una visión global del proceso.
- Impidió que los representantes de las organizaciones sociales y populares establecieran mecanismos de consulta, con su propia base, sobre lo que estaban negociando en las comisiones. En esa dirección, las decisiones que se tomaron en las mesas de trabajo terminaron siendo decisiones individuales.
- Profundizó la desorientación social y la desconfianza entre las organizaciones sociales y populares participantes, las cuales se cruzaron múltiples acusaciones en el transcurso del proceso.

La combinación de estos "efectos" facilitó que las posiciones gubernamentales fueran aprobadas por consenso (unanimidad) en el caso de los proyectos de temas no conflictivos, tales como desarrollo rural, pagos ambientales, corrupción, libertad sindical y política salarial y, por un porcentaje superior al 75%, en los temas relativos a la apertura de los mercados del INS y del ICE (*La Nación*, 31 de octubre de 1998).

Estas resoluciones fueron elevadas, por la administración del presidente Rodríguez, a la comisión de mediadores a la que se le solicitó el aval para su interpretación del "consenso" entendido éste como una votación igual o mayor al 75%, interpretación que le permitiría presentar, a la Asamblea Legislativa, los "proyectos sin unanimidad" como "resultado unánime" del proceso de concertación.

La mayoría de la comisión avaló dicha interpretación, con la excepción de dos de sus nueve miembros: el ex-presidente Carazo y el ex-presidente Echandi. En el caso del primero, ya era conocida su posición crítica al proceso. Sin embargo, en el caso del segundo, su posición fue sorpresiva por ser un simpatizante del partido de gobierno. Con énfasis, Echandi negó haber avalado los acuerdos y denunció la presión del gobierno para obtener un dictamen favorable a la ruptura de los monopolios estatales del ICE y del INS. En palabras del ex-Presidente Echandi, "... existe un desmesurado interés en vender activos para pagar la deuda interna, aunque no halla garantías de que el país no volverá a endeudarse" (*La Nación*, viernes 6 de noviembre de 1998).

A pesar de estas dos objeciones, el gobierno decidió elaborar proyectos de ley sobre todos aquellos temas en que se hubiera alcanzado el 75% o un porcentaje mayor de la votación. Estos proyectos serían presentados a la Asamblea Legislativa durante el período de sesiones extraordinarias del período 1998-1999.

Esta decisión del gobierno, así como el aval de la mayoría de los miembros de la comisión de mediadores, recibió críticas y reacciones negativas de algunas organizaciones sociales que habían participado en el proceso de concertación. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1998 el Foro Autónomo de Mujeres envió una carta a la mesa coordinadora en la que señalaba que,

"... Forzar acuerdos donde no los hay atenta contra la naturaleza misma del proceso. El resultado de la reunión de

la Junta de Mediadores, tal y como lo han informado los medios de prensa, amenaza con deslegitimar el proceso y pone serios obstáculos para la institucionalización de esta valiosa iniciativa en etapas sucesivas" (*Foro Autónomo de Mujeres, 5 de noviembre de 1998*).

MANEJO DEL "RITMO" POLÍTICO

Desde la instalación del foro, la administración Rodríguez presionó por obtener resultados concretos en un corto plazo. De hecho, la fecha original de conclusión de todo el proceso era el mes de octubre de 1998, objetivo que se cumplió un mes más tarde, en noviembre.

¿Por qué tanta prisa por parte del gobierno en la obtención de resultados? Las razones principales están asociadas, por un lado, a los períodos legislativos requeridos para una reforma constitucional³² (como la que requerirían la ruptura de monopolios de mercados en seguros y telecomunicaciones) y, por otro lado, se asocian con la dinámica electoral del país. Así, si los resultados de la concertación se obtenían en el año 98, el gobierno los podría incluir en las sesiones extraordinarias³³ de la Asamblea Legislativa, para someterlos a primer debate y ratifica-

ción en el período 98-99, de tal modo que el tercero y último debate de dichas modificaciones constitucionales se realizaría en el año 2001, un año antes de las siguientes elecciones nacionales.

Esto es fundamental, dada la percepción positiva que tiene una mayoría de la ciudadanía sobre las instituciones públicas o activos del estado, en singular acerca del ICE. En ese sentido, cualquier partido político que, dentro de la coyuntura electoral, aparezca defendiendo la ruptura de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros, cometería un suicidio político³⁴.

BALANCE DE RESULTADOS

En términos generales, hasta diciembre de 1998 y pese a las objeciones realizadas por algunas organizaciones sociales, el balance del proceso de concertación era favorable al gobierno³⁵ en dos niveles principales:

1. Nivel sobre el mecanismo y el procedimiento

En este primer nivel, el Gobierno planteó la posibilidad de una segunda etapa de la Concertación, pero la mayoría de las organizaciones participantes manifestaron que estarían dispuestas a continuar, siempre

32 Según el Artículo 195 de la Constitución Política, en su inciso 7) señala: "La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia."

33 La Asamblea Legislativa tiene dos tipos de períodos de sesiones, ordinarios y extraordinarios. El ordinario se divide a su vez en dos períodos que van del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del treinta de setiembre al treinta de noviembre. En este período la iniciativa de presentación de propuestas corresponde tanto a los diputados como al Gobierno. El período extraordinario se inicia en diciembre y concluye el treinta de abril. Este período será convocado por el Gobierno y se discuten nada más las iniciativas presentadas por el mismo (Constitución Política, 1998: 24-32).

34 La percepción positiva de los costarricenses sobre el ICE tiene que ver tanto con la calidad de la cobertura telefónica y eléctrica (superior al 90% y 95% respectivamente), como con la buena calidad de su servicio y una tarifa de costos aceptable. De hecho, durante los últimos 15 años se han realizado gran cantidad de encuestas de opinión en las que se mide la percepción de los costarricenses sobre el ICE y, de manera constante, la percepción positiva es superior al 80%, mayor que la que obtiene la iglesia católica, por ejemplo. De hecho, los diversos gobiernos han hecho múltiples intentos para privatizar el ICE y siempre han tenido que detenerse al acercarse el año electoral.

35 Sin lugar a dudas, el papel favorable de los principales medios de comunicación jugaron un papel clave en este balance inicial.

y cuando se hicieran algunas modificaciones al procedimiento, para permitir un funcionamiento autónomo del proceso, "autónomo" en el sentido de que el gobierno tuviese una injerencia menor.

2. Nivel sobre el contenido de los resultados obtenidos

En este segundo nivel, aparte del consenso real que obtuvo en varios de los temas, el gobierno logró el aval de una mayoría muy clara de las organizaciones participantes para sus propuestas estratégicas. Esto le permitiría formular proyectos de ley con el sello de la concertación o, en palabras del ministro de la presidencia, con el sello de la sociedad civil costarricense representada en el foro de la concertación.

Esto colocaba al gobierno en una posición de fuerza en la Asamblea Legislativa frente a los partidos de oposición, mientras mantenía a las organizaciones sociales y populares, y a los sindicatos del sector público en una situación de división y enfrentamiento, lo cual impedía una resistencia efectiva a sus propuestas privatizadoras.

Esta situación cambió significativamente en enero y febrero de 1999, por varios hechos del gobierno, algunos relacionados con la concertación y otros, no. Se mencionan, a continuación, los que tuvieron más impacto. De los hechos sin relación con el proceso de concertación, los dos más significativos fueron:

Primero, el incremento salarial que se decretó el presidente, desestabiliza, de manera abrupta, la imagen positiva que el mandatario se había venido construyendo. De hecho, en una encuesta realizada en febrero de 1999, por la empresa UNIMER para el periódico *La Nación*, la imagen del presidente era negativa y había caído más de un 14% de un solo golpe.

Segundo, la directriz bancaria emitida por el Consejo de Gobierno que puso un to-

pe del 26% a la expansión del crédito de los bancos del estado, lo cual generó una fuerte reacción de diversos sectores, incluyendo a los gerentes de los bancos afectados y a la fracción del PLN en la Asamblea Legislativa. De hecho, este partido político en algún momento condicionó la discusión de la propuesta de reforma constitucional para la ruptura de los monopolios de seguros y de telecomunicaciones, a que el gobierno retirara dicha directriz. Si bien es cierto, al final, el PLN cedió, su posición inicial retrasó el inicio del debate sobre la reforma constitucional en la Asamblea Legislativa.

Con respecto a los hechos relacionados directamente con la concertación, se menciona la acusación de diversas organizaciones sociales y populares que participaron en el proceso, en el sentido de que el Gobierno incumplió varios de los acuerdos y que, además, envió proyectos de ley que no respondían a lo aprobado por el foro de la concertación (*La Nación*, lunes 1 de febrero de 1999).

También, se mencionan a varias organizaciones sociales (ANEP, UPINS), las cuales denunciaron que el gobierno envió a las sesiones extraordinarias sólo el proyecto de reforma constitucional que afectaba al ICE y al INS, siendo estos los proyectos que no obtuvieron unanimidad en el foro y, en cambio, dejó por fuera los proyectos que obtuvieron unanimidad, lo cual —según estos sectores— dejó al desnudo el interés principal del gobierno en todo este proceso.

Esta percepción fue reforzada por la denuncia que hizo el diputado Merino del Río (FD) sobre la realización de un panel acerca del futuro de las telecomunicaciones en Costa Rica, actividad organizada por el CINDE, que se llevó a cabo en Miami, el día 17 de febrero de 1999 y contó con la participación aproximada de 16 empresas multinacionales y de tres asesores del presidente Rodríguez. Estos últimos presentaron un cronograma del proceso gradual de apertura de las telecomunicaciones, a pesar de que la

Asamblea Legislativa no había aprobado nada al respecto (Merino del Río, 4 de marzo de 1999).

Por último, se menciona que el domingo 14 de marzo de 1999, Javier Chávez, representante del gobierno, dio declaraciones al diario *La Nación* en las que afirmó que el gobierno quería vender el INS, contradiciendo el discurso oficial de la “no venta de activos” que mantenía el gobierno (*La Nación*, domingo 14 de marzo de 1999).

La combinación de todos estos factores hizo que la gran mayoría de las organizaciones sociales y populares desearan la posibilidad de una segunda etapa del proceso de concertación. Además, fortaleció la articulación de las organizaciones sociales y populares y la resistencia social a las propuestas de reforma constitucional. Asimismo, el escenario legislativo se complicó, en tanto que un sector de la fracción legislativa del PLN³⁶ y la fracción de FD se opusieron a la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno. De hecho, la propuesta perdió fuerza y se archivó.

CONCLUSIONES

El recuento y el análisis presentados en las páginas anteriores acerca del proceso de concertación nacional en Costa Rica, permiten arribar a varias conclusiones:

A. La convocatoria al proceso de concertación nacional fue una aceptación tácita, por parte de la élite del poder, de que los mecanismos institucionales de representación, así como los actores políticos que participan institucional-

mente han perdido legitimidad frente a la ciudadanía costarricense. A la vez, la concertación nacional fue un buen intento (aunque fallido al final) de la misma élite por cooptar, incluir y controlar a los nuevos actores sociales, quienes están compitiendo con (o contra) los partidos políticos del país, por asumir la función de representación y mediación social.

B. La concertación no fue un proceso horizontal y democrático, tal y como lo pretendió exhibir y proyectar el presidente Rodríguez. Por el contrario, fue un proceso hegemonizado desde su inicio por el gobierno en sus distintas instancias y etapas. En ese sentido, se confirma la hipótesis de que este proceso puede explicarse como parte de una tradición de la élite del poder costarricense de desarrollar mecanismos y procesos que le permiten cooptar, incluir, fragmentar y desorientar a las organizaciones sociales y populares, para seguir imponiendo, así, su proyecto político-económico al resto de la sociedad costarricense.

C. En apariencia, la apuesta estratégica del gobierno y de la élite del poder era lograr la ruptura de los monopolios estatales del ICE y del INS, pero hay suficientes indicios para sostener que, en realidad, la agenda oculta (del gobierno) en el proceso de concertación, era obtener una legitimidad social que le permitiera ampliar su margen de maniobra en la Asamblea Legislativa y lograr así, la modificación constitucional necesaria para la ruptura antes mencionada.

D. En términos de la articulación del discurso dominante, se subraya la capacidad que tuvo la élite del poder para incorporar el tema de la participación de la sociedad civil, dentro del tradicional discurso de la “unidad nacional”

36 Se trata de entre 8 y 10 diputados cercanos al ex-candidato presidencial, Lic. José Miguel Corrales, quien abiertamente se pronunció en contra de la apertura de los mercados de seguros y de telecomunicaciones. (*La Nación*, domingo 14 de marzo de 1999).

y de la búsqueda del “consenso democrático”. Este discurso contribuyó a la desorientación social porque hubo organizaciones participantes que, sobre todo, en el inicio del proceso, se asumieron como la expresión de la sociedad civil costarricense.

- E. Esta experiencia de concertación social deja la enseñanza de que para que ésta llegue a ser un real mecanismo democrático, es necesario que se den dos condiciones:

Condición “1”. El proceso, su reglamento, su agenda, su membresía y sobre todo, sus instancias de toma de decisiones, deben ser el producto de una negociación previa entre todas las partes y no el producto de la imposición del gobierno. Por lo tanto, esa negociación previa debe orientarse de la base hacia arriba, lo que implicaría que el respectivo reglamento es definido antes del proceso, con la participación activa e igualitaria de todos los participantes. Esta condición no se cumplió en el proceso de concertación del lapso 1998-1999, pues en su procedimiento, el gobierno definió el reglamento sin una verdadera participación democrática.

Condición “2”. Además, como contraparte a la posición gubernamental, será necesario crear una efectiva coordinación de las organizaciones sociales y populares. Sólo, así, la concertación o cualquier otro mecanismo de negociación, podrá servir para profundizar la democracia costarricense.

- F. En resumen, el elemento que más desacreditó la concertación nacional fue la creciente “transparencia” con la que el Gobierno fue evidenciando que su interés fundamental o su agenda oculta era la ruptura de monopolios estatales del ICE y del INS.

La reacción y creciente oposición social a esta propuesta revela que Costa Rica sigue

siendo un país con una fuerte tradición estatista. De ahí que, la privatización de los activos del estado tendrá un costo político muy alto. Esto para desgracia de la élite del poder.

BIBLIOGRAFÍA

- Binder, Alberto. “La sociedad fragmentada”. *Revista Pasos*, Número Especial, 3/1992.
- Casa Presidencial. “Proceso de concertación”. *Documento mimeografiado*. 1998.
- Casa Presidencial. Reglamento “Proceso de Concertación: consenso para un futuro compartido”. *La Nación*, sábado 13 de junio de 1998, Directorio/ p.15.
- Cortés Ramos, Alberto. *Social participation within the Bilateral Agreement for Sustainable Development in Costa Rica: The case of CONAO, 1994-98*. The Hague: ISS, Research Paper, 1997.
- Foro Autónomo de Mujeres. *Carta a la Mesa Coordinadora del Proceso de Concertación Nacional*. San José, 5 de Noviembre de 1998.
- MIDEPLAN, Presidencia de la República. “Proceso de Concertación, Organizaciones del Foro”. San José, Costa Rica. *Documento mimeografiado*. 23/9/1998.
- Portelli, Hugues. *Gramsci y el bloque histórico*. -12 ed. en español- México: Siglo XXI editores, 1985.
- Merino del Río, José. *Carta sobre Telecomunicaciones*. San José, 4 de marzo de 1999.
- República de Costa Rica. *Constitución Política*. San José: Editorial Porvenir, 1998.
- Tribunal Supremo de Elecciones. *Información para los invitados internacionales. Elecciones Nacionales, 1 de febrero de 1998*. San José, Costa Rica, 1998.

- UNA. Foro "Un acuerdo nacional razonable": por un camino económico seguro y sostenible (22-24 set. 1994: San Isidro de Coronado, C.R.). – Heredia, C.R.: EFUNA, 1994.
- Unimer. *Encuesta Nacional*. Setiembre, 1995.
- Valverde, Jaime (coordinador). *La concertación social en la región centroamericana. (una visión desde la sociedad civil)*. San José: ICAL, 1996.
- Vargas, Albino. "Participar en la Concertación fue una decisión muy difícil". *Ponencia* presentada a la Mesa Redonda "Concertación: Un balance desde la sociedad civil". Grupo Germinal, 17 de Noviembre de 1998.
- Vargas Pagán, Carlos. "El proceso de concertación costarricense: su génesis". *Revista Fragua*, Año 1, N° 1, 1998, pp. 14-21.
- Periódicos**
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Negociarán privatización". 26 de abril de 1998.
- La Nación*. "Reglas para Concertar". 15 de mayo de 1998, p. 6-A.
- La Nación*. Editorial "Lances de la concertación". 17 de junio de 1998, 13-A.
- La Nación*. Editorial "La acción política". 27 de junio de 1998, p. 13-A.
- La República*. "Gobierno continúa la presentación de propuestas". 7 de julio de 1998.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. Concertación: ¿qué es?. 8 de julio de 1998.
- Al Día*. "Rodríguez apela a patriotismo". 14 de julio de 1998, p.7.
- La Nación*. "Rodríguez llama a concertar". 14 de julio de 1998, p.4A.
- La Nación*. Editorial "La prueba de la verdad". 15 de julio de 1998, p.13-A.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Listos los grupos de debate". 18 de julio de 1998.
- La Nación*. Editorial "Pensiones: reforma o quiebra". 25 de julio de 1998, p. 13-A.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Rodríguez amarra consenso". 1 de agosto de 1998.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Intensa lucha por consenso". 31 de octubre de 1998.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Respaldo a acuerdos". 4 de noviembre de 1998.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Echandi critica mediación". 6 de noviembre de 1998.
- <http://www.nacion.co.cr>. *La Nación Digital*. "Gobierno acusado de incumplir". 1 de febrero de 1999.
- La Nación*. "En Defensa de Costa Rica. Campo Pagado del Lic. José Miguel Corrales". 14 de marzo de 1999, p. 18-A.
- La Nación*. "Queremos vender el INS caro". 14 de marzo de 1999, p. 18-A.

IMPACTO DE LA CRISIS ASIÁTICA EN COSTA RICA

Daniel Villalobos Céspedes
Arlette Pichardo Muñiz

RESUMEN

El análisis de los posibles impactos de la crisis asiática en la economía costarricense, busca plantear importantes fortalezas que tiene el país. Sin embargo, el principal objetivo es destacar la necesidad de mejorar el grado de preparación del país acorde a un cierto tipo/calidad de inserción internacional debidamente planeada. El grado de preparación del país tiene que enfocarse no sólo en las estructuras, la elegibilidad y las políticas económicas y comerciales, sino poner especial énfasis en el grado de preparación institucional, adecuándolo a las nuevas dinámicas en el contexto de la globalización.

ABSTRACT

The analysis of the possible impacts of the Asiatic crisis on the Costa Rican economy, aim to expound important strengths that has the country. However, the main objective is highlight the necessity of improving the preparation degree of the country with accord to certain type/quality of international insertion properly developed. Preparation degree of the country has to focus not only in the structures, the eligibility and the economic and trade policies, but put special emphasis in the institutional preparation degree, fitting it to the new dynamics on the globalization context.

INTRODUCCIÓN

En julio de 1997 se inicia en el Asia Oriental una crisis financiera, desencadenada por una devaluación de la moneda de Tailandia. El impacto de tal medida sobre las monedas de otros países de la región, tales como Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea del Sur, desata un pánico financiero

que pone en alerta a los gobiernos del mundo entero. La especulación generalizada ocasionó bajas en distintas bolsas en el ámbito mundial. Japón fue el país más inmediatamente afectado, debido a su cercanía y afinidad económica con tales países.

La crisis asiática se atribuye a seis elementos estructurales ligados al mercado de

dinero¹ (Dornbusch, 1998:9): a) un débil sistema financiero, b) otorgamiento de créditos para financiar proyectos e inversiones poco rentables, c) malas prácticas crediticias, entre ellas créditos excesivos en dólares y a corto plazo, d) influencia política en el otorgamiento del crédito, e) corrupción política y del sistema financiero, f) concentración del crédito en un sólo grupo de empresas. Todo ello conlleva a que, cuando las empresas pierden valor accionario, se ven obligadas a suspender los pagos de sus obligaciones financieras, haciendo explotar la ya existente crisis de disponibilidad bancaria de fondos. La incertidumbre provoca la salida de capitales del mercado asiático, y la reducción de la oferta divisas induce la devaluación de la moneda de esos países².

Por su parte, el impacto de la crisis financiera asiática se manifiesta en Rusia en el mes de agosto de 1998. El problema se inicia debido a un enorme déficit fiscal y una fuerte emisión monetaria sin respaldo. En medio de una crisis política interna, el gobierno ruso decide suspender temporalmente las transacciones financieras y el pago de la deuda

externa³. Dicha medida desata el temor de los inversionistas, quienes especulaban una posible escasez de recursos estatales para enfrentar las pérdidas bursátiles, de manera que el valor de las acciones bajó significativamente. Pero el detonante de la crisis rusa fue el anuncio que hiciera el primer ministro Sergei Kiriyenko, en torno a la devaluación de la moneda en un 34%. Ante tal medida, algunos bancos elevaron el precio del dólar como respuesta a la creciente demanda del público, quienes estaban ansiosos por deshacerse de la moneda nacional (*La Nación*, 1998:28A). Ucrania fue impactada de manera inmediata por la crisis rusa, y desde Asia hasta América Latina⁴, aumenta la presión sobre los mercados⁵.

La crisis asiática y rusa se desata en un contexto económico bastante singular. Los países mostraban un crecimiento económico con baja inflación, bajo desempleo y una divisa estable⁶. El desenlace de la misma impacta principalmente sobre aquellos países que mantienen tipos de cambio fijos por mucho tiempo, y en donde las tasas de interés son relativamente elevadas. Fernando Romero, de ABM Amro, N.Y., interpreta que

1. Al igual que otras crisis financieras-económicas de alcance mundial, también en esta oportunidad surgen algunas opiniones en Asia que tratan de ubicar los orígenes de dicha crisis en una conspiración. En este contexto, se destacan dos elementos: a) Los especuladores financieros invierten grandes sumas de dinero con el fin de obtener desmedidas ganancias en muy corto plazo y a la vez abatir el valor de las empresas asiáticas para que luego sean adquiridas por compañías y bancos de Estados Unidos y Europa. b) El FMI y el BM que persiguen forzar la apertura y liberalización de los mercados asiáticos e introducir reformas en el régimen político, económico, laboral y de la propiedad. A este asunto hay que ponerle atención, puesto que los cuestionamientos asiáticos y su insistencia en que los Estados Unidos quieren comprar barato a Asia, corresponde con los intereses más dominantes en algunos importantes grupos empresariales estadounidenses y europeos.
2. La mayoría de dichos países no podían aumentar ni disminuir la tasa de interés. En cualquier caso, la situación de crisis se profundizaba.

3. El gobierno ruso justificó dichas medidas como necesarias para evitar el colapso del sistema financiero y del gobierno central.
4. La Secretaría Permanente del SELA, en documento *Impacto de la crisis asiática en América Latina*, elaborado por los doctores Egidio L. Miotti y Carlos Quenan, de la Universidad de París 13, señala que Chile y Perú se verían seriamente impactados debido a su importante vínculo comercial con Asia. En menor medida, Argentina y Brasil (SELA, 1998:195-196).
5. La política de devaluación de la moneda rusa provocó especulaciones que condujeron a la caída de los mercados bursátiles en Tokio, Seúl, México, Argentina y Brasil, y levemente en los mercados europeos.
6. Otro aspecto que hay que tener presente, es que la inversión extranjera en los países asiáticos ha jugado un importante papel en su desarrollo económico (Arroyo, 1998:2).

“la orden es salir del mercado, sin importar el precio. Estamos atorados en un ciclo perverso de profecías anunciadas. El mercado quiere sangre y la está consiguiendo” (*La Nación*, 1998: 23A).

Mientras tanto, León Britton, Comisario de Comercio Europeo, expresó que no es posible atribuir la crisis al mercado, ni a la liberalización del comercio en el ámbito mundial. En el caso de Rusia, señala que

“el problema es que la economía de mercado necesita completarse, mientras que en los otros países asiáticos la apertura de las economías no se acompañó de una adecuada supervisión de los mercados financieros” (*La Nación*, 1998:36A).

Por parte de los organismos financieros internacionales, la actitud fue proponer una serie de medidas fiscales y monetarias, a la vez que otorgar préstamos a los países en cuestión⁷.

EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO

Siendo el objeto de estudio del presente artículo los impactos de la crisis asiática

7. Los economistas no tienen aún una salida a la crisis financiera asiática. Paul Krugman recomienda austeridad fiscal y del crédito, sin promover devaluación monetaria, así como establecer controles temporales para evitar la fuga de capitales. Jeffrey Sachs, por su parte, considera que los países tienen que devaluar su moneda, reducir el déficit fiscal evitando incrementos en las tasas de interés. Para él, los países que no han abandonado el patrón oro sufren más severamente los impactos perversos de la crisis. La misma línea de pensamiento mantiene Joseph Stiglitz, del Banco Mundial. R. Dornbusch no se aparta del esquema cuando parafrasea a Yogui Berra: “*La ópera no ha concluido hasta que no cante la gorda*”, en alusión al tradicional papel del FMI en casos de crisis financieras-económicas. Hay que recordar que desde la crisis de México, *la gorda* tiene dificultades para salir al escenario y hacer su debut.

ca en Costa Rica, a continuación se desarrollan aspectos de mayor relevancia de la dinámica económica, crediticia, fiscal, comercial y financiera de dicho país. Se realiza un esfuerzo por presentar la situación actual del país y mostrar los cambios en tales aspectos durante el período 1997-1998. Asimismo, se plantea la necesidad de no desestimar el vínculo de Costa Rica con los países del continente asiático. En la medida de lo posible, se señalan en el artículo algunos elementos para ser tenidos en cuenta tanto por las autoridades gubernamentales y públicas en general, como por el sector privado. Principalmente, se destaca el hecho de que a pesar de mostrar el país una situación socioeconómica estable, es necesario que las autoridades gubernamentales no pierdan de vista la necesidad de continuar con la ejecución de políticas económicas prudentes.

En inicios de la década de los ochenta, Costa Rica toma la iniciativa de realizar importantes esfuerzos por mejorar su grado de preparación, con el objetivo de lograr una inserción ventajosa en el mercado mundial. Un conjunto de políticas de estabilización macroeconómica ejecutadas a partir del año 1982, le permite al país elevar su grado de elegibilidad frente a organismos financieros internacionales y otros países. A mediados de los años ochenta el país ejecuta importantes Programas de Ajuste Estructural. Se inician procesos de reconversión productiva, comercial, financiera e institucional de gran envergadura. El propósito fue mejorar las condiciones en torno a las ventajas comparativas y elevar el potencial del capital, y permitir a los inversionistas directos desarrollar y ejecutar estrategias competitivas⁸.

En la década de los años noventa, Costa Rica inicia una nueva etapa en el desarrollo de su estrategia de inserción internacional. En

8. Paul Krugman realiza una acertada crítica al criterio, y uso del mismo, de competitividad. Véase: “Competitiveness: a dangerous obsession”. En: *Foreign Affairs*, marzo-abril, 1994.

el contexto de la globalización y en el marco de los procesos de liberalización de los mercados, en donde impera la conformación de espacios económicos mediante *tratados de libre comercio regulado*, Costa Rica firma un Tratado de Libre Comercio con México en el año 1994, el cual queda vigente a partir del 1ero de enero de 1995. En 1998 se firma otro tratado semejante con República Dominicana. En este sentido, el país también ha logrado una serie de Acuerdos Bilaterales de Inversión con varios países de Latinoamérica y Europa (Villalobos y Peraza, 1999).

A pesar de ello, el país es altamente susceptible de recibir los efectos de la crisis financiera/económica mundial, si ésta impactara a los Estados Unidos. La diversificación de los mercados y de la producción, y el grado de preparación estructural e institucional, no ha alcanzado aún niveles óptimos como para reducir la vulnerabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, el proceso ha permitido el desarrollo de a) políticas económicas razonables y b) mecanismos de supervisión de las actividades económicas y financieras de los agentes económicos; y con ello, cierto control de los problemas económicos domésticos desalentando la actividad de los capitales especuladores.

PRINCIPALES RASGOS DE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE FRENTE A LA CRISIS ASIÁTICA

Con base en el contexto precedente en torno a Costa Rica, se puede realizar un intento por evidenciar la capacidad del país para enfrentar los posibles impactos de la crisis asiática. Si bien es cierto que ello no pone directamente en prueba el grado de preparación del país, para una estrategia de inserción internacional ventajosa, sí deja de manifiesto que es indirectamente susceptible frente a dicha situación de crisis, debido a su vulnerabilidad macroeconómica. Precisamente es éste aspecto lo que hace interesante el análisis siguiente:

a) ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

En el contexto de la crisis económica y financiera de Asia, es importante destacar que la economía costarricense presenta un panorama relativamente estable durante el período 1997-1998. El Producto Interno Bruto (PIB) real muestra un crecimiento de 5,4% al primer semestre de cada año. El índice de precios al consumidor muestra una variación de 12,87% al mes de octubre de cada año, mientras que el índice de precios al productor industrial es de 8,73%. Sin embargo, el saldo comercial del país es negativo (-8,86); las exportaciones acumuladas a agosto de cada año crecen a una tasa de 10,7% en el año 1997 y de 16,7% en el año 1998. Debe ponerse atención al déficit comercial toda vez que su relación con el PIB muestre un deterioro. En el año 1998, dicho déficit representa el 2,7% del PIB, mientras que en el año anterior fue de 2,3%⁹. Las reservas monetarias internacionales cayeron en \$64,8 millones, lo cual puso en alerta al país (Banco Central de Costa Rica, 1998: 19-22)¹⁰. Como resultado global, dicha variable disminuyó en \$149.1 millones en el período 1997-1998. La balanza de pagos anota que la cuenta de capital ha sufrido un deterioro, a causa de una menor entrada neta de capitales privados¹¹.

-
9. En este caso, hay que tener presente que el incremento del déficit comercial puede deberse a las adquisiciones que representan las inversiones extranjeras directas. La puesta en funciones de las mismas contribuirían nuevamente, en determinado plazo, a contrarrestar el impacto en la balanza comercial, a través de sus exportaciones. Sin embargo, hay que ver el resultado final de la balanza de pagos al cotejar con la cuenta de capital, y determinar el balance neto de los flujos de capitales.
 10. Sin embargo, las autoridades del Banco Central de Costa Rica consideran que dichas reservas permiten al país financiar cerca de tres meses de importaciones futuras (Banco Central de Costa Rica, 1998:22).
 11. El Banco Central de Costa Rica atribuye a las políticas crediticias de algunos bancos nacionales que tienen por objetivo incitar a los inversionistas a endeudarse en colonos (Banco Central de Costa Rica, *idem.*).

Destaca el hecho de que el sistema bancario nacional tuvo en su poder buena parte de dichas reservas, con lo cual evitó que se desatara la incertidumbre entre los inversionistas y público en general, frente a la crisis asiática. Pero también contribuye a ello el que las tasas de interés activas en moneda nacional han tendido a la baja desde el año 1995. En promedio, en el período 1997-1998, al primer semestre de cada año, la tasa en cuestión es menor de 25,0%. En comparación con otros países, los rendimientos de dichas tasas son relativamente bajos. Este es un buen criterio para alentar la inversión real en el país. Sin embargo, en el ámbito de los ahorrantes y especuladores, podrían desatarse el interés por dolarizar sus cuentas, tal como ocurrió en los primeros meses del año 1998¹².

El Banco Central de Costa Rica ha ejecutado una serie de medidas tendentes a: evitar la preferencia de la moneda extranjera por parte del público; desalentar la actividad financiera del inversionista especulador; procurar un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda de recursos en los mercados financieros; regular la actividad de los intermediarios financieros privados; establecer medidas de seguridad financiera para los inversionistas, entre las que destaca las tasas de encaje mínimo legal para depósitos a la vista y para las captaciones en moneda extranjera y para nuevos instrumentos financieros.

En cuanto refiere a la política cambiaria, el ente rector de la economía nacional ha mantenido, desde inicio de la década de los ochenta, una política de minidevaluaciones. La misma está destinada a mantener la competitividad de las actividades económicas del país frente al mercado internacional. Ello ha contribuido a que el país tenga cierta capacidad de

maniobra en torno a la necesidad de modificar las tasas de interés, con lo cual se evita alentar en exceso a los inversionistas especuladores y promover la inversión real. En otros aspectos, la deuda interna bonificada del sector público general y la deuda interna del gobierno central, muestran un incremento a noviembre y junio, respectivamente, del período 1997-1998.

En el primer caso, el gobierno central es responsable de más del 80% de dicha deuda, y los principales tenedores de la misma son el sector instituciones públicas (39,6%) y el sector privado interno (39,9%). En el segundo caso, la deuda del gobierno central con el Sistema Bancario Nacional, aumentó en ₡17 558.7 millones durante el primer semestre de 1998¹³. La caída en las exportaciones y el incremento en las importaciones, así como de los ingresos tributarios aplicados en otros ámbitos internos, podrían empeorar la capacidad del Estado para satisfacer demandas sociales y atender las deudas.

Asimismo, el déficit del gobierno central, como porcentaje del producto interno bruto, se reduce apenas en 1,4% en el período 1997-1998, a junio de cada año. En el primer semestre del año 1998, dicho indicador representó el -1,8% del producto interno bruto, ligeramente inferior al igual período del año anterior, como resultado de un incremento en la recaudación fiscal. Los impuestos sobre la renta muestran su mayor participación principalmente al eliminarse los beneficios por contratos de exportación. El incremento en las exportaciones e importaciones también contribuyó en los ingresos fiscales del período. Sin embargo, el gasto fiscal se elevó en dicho período.

12. De hecho, en el primer semestre de 1998 los depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera presentaron mayor dinamismo dentro de los componentes de liquidez, y con una tasa anual de crecimiento muy significativa.

13. Dicha deuda implica a esa fecha un aumento de ₡23 420. 0 millones por el registro de intereses devengados y no pagados por el gobierno central de las pérdidas cuasifiscales del Banco Central. A pesar de que esta operación no tiene impacto monetario (*idem*: 8), sí influye en las tasas de interés.

Un elemento al que hay que poner atención en este sentido es el relacionado con los Certificados de Abono Tributario (CAT), otorgados a los exportadores de productos no-tradicionales. Los recientes escándalos de corrupción en el otorgamiento y uso de tales incentivos, demuestran que es necesario un mayor control de las implicaciones de las políticas de incentivos fiscales del gobierno, para evitar falsas expectativas en torno a la dinámica del sector productivo y comercial del país¹⁴. En cuanto se refiere al crédito interno total, crece en promedio a una tasa de 14,0% en el año 1997. En el primer semestre del año 1998 dicho indicador es de 10,0%, apenas 0,01 menor al igual período del año 1997. El sector privado recibe el 53,0% aproximadamente del crédito en cuestión. El crédito a dicho sector creció durante el primer semestre del año 1998, probablemente en respuesta a una mayor actividad económica y a una mayor demanda inducida por la relativa estabilidad de las tasas de interés¹⁵.

Conviene señalar que los bancos estatales controlan gran parte del crédito total al público. Además, el sector privado muestra todavía resistencia a endeudarse con los intermediarios financieros privados. Por otro lado, un aspecto a considerar en el marco de la crisis asiática, es que existe una preferencia por el endeudamiento en moneda nacional, lo cual permite al país no comprometer sus reservas internacionales en caso de ataques especulativos contra la moneda nacional. Sería interesante poder conocer la morosidad de los deudores, la recuperación del crédito y el destino de los mismos, por cuanto este es uno de los principales aspectos que aceleraron la crisis asiática. La apertura

del sistema financiero tiene que estar regulada por el Estado, para evitar que el sector financiero privado pierda el sentido en torno al *riesgo moral*¹⁶.

En cuanto refiere a la deuda externa del país, la misma se adquiere en un 70,5% a una tasa de interés fija. Esto significa que sólo un 29,5% del total de la deuda estaría en posibilidades de permitir al país algún nivel de ahorro con la baja en las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Las crisis asiática y rusa podrían constituir una oportunidad al país de ahorrar divisas por concepto de servicio de la deuda. Por otro lado, si el país logra mejorar su estabilidad macroeconómica a corto plazo, podría beneficiarse de la venta de títulos de la deuda a inversionistas extranjeros.

Asimismo, el sector empresarial privado, tiene también la oportunidad de sacar ventaja de las oportunidades que muestra el entorno externo desde el punto de vista financiero. Las empresas que logren mostrar índices de rendimiento mayores al promedio de los sectores en que opera, podrán cotizar mejor sus acciones entre los inversionistas extranjeros deseosos de colocar sus dineros en negocios seguros.

b) DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR

El país había sufrido una fuerte caída de sus exportaciones en el año 1996 (3,6%), debido a la baja en los precios de algunos productos tradicionales como el café; el precio de este producto se eleva nuevamente en el primer semestre del año 1998. Sin embargo, el motor del país ya no se sustenta tan sólo en el dinamismo de las exportaciones tradicionales. Las exportaciones no-tradicionales (industriales y servicios) conforman el

14. Una situación semejante ya se había presentado a finales de la década de los ochenta.

15. Según el Banco Central de Costa Rica, la competencia interbancaria ha generado también activas políticas de colocación como estrategia para mejorar los resultados financieros y posesionarse en el mercado.

16. El riesgo moral es una situación en la que caen los intermediarios financieros cuando no existen regulaciones en el sistema financiero nacional.

principal rubro (69,0% en el año 1997) en la estructura de las exportaciones del país.

El Régimen de Zonas Francas y de Perfeccionamiento Activo juegan un importante papel en el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo económico costarricense. Las exportaciones de Zona Franca crecen 48,12% en el año 1996 y 27,83 en el año siguiente, mientras que las exportaciones de Perfeccionamiento Activo crecen 12,95% en el año 1997, habiendo perdido dinamismo en el año anterior (-20,29%). Las importaciones del país muestran una tendencia a la alza durante el período 1996-1998. Destaca el incremento de las importaciones de bienes de capital con respecto a las de bienes de consumo y materias primas. Entre los años 1997-1998 (al mes de junio), las importaciones de bienes de capital crecen 24,0%, mientras que las de bienes de consumo y de materias primas crecen 22,5% y 9,4% respectivamente. El sector transporte es el que muestra mayor dinamismo en las importaciones de bienes de capital (35,1%), seguido por el sector agricultura (32,5%). Las adquisiciones de materias primas muestran una tendencia domi-

nante del sector industria y minería (10,3%). Las importaciones de bienes duraderos marcan la pauta (31,1%) dentro de las importaciones de bienes de consumo duradero.

Los principales socios comerciales del país son los Estados Unidos de América y los países de la región centroamericana. El primer país representa cerca del 40% de las exportaciones costarricenses, mientras que Centroamérica representa cerca del 14%. Asia, Alemania e Italia componen aproximadamente un 5%, 7% y 5% respectivamente. Mientras tanto, las importaciones de Costa Rica se realizan en un 45% de los Estados Unidos de América, y un 23% provienen de Centroamérica, México y Venezuela. En Asia el principal proveedor del país es Japón, de donde se adquiere cerca del 4% del total de las importaciones costarricenses.

En cuanto a los países asiáticos se refiere, se muestra en el cuadro siguiente que Costa Rica incrementa sus exportaciones hacia el continente en 16% durante el período 1996-1997. Sin embargo, en el período 1997-1998, a setiembre de cada año, las exportaciones del país crecen en más del

COSTA RICA: BALANZA COMERCIAL CON ASIA
TASA DE CRECIMIENTO (\$US)

Países asiáticos	Exportaciones 1996-1997	Importaciones 1996-1997	Exportaciones a setiembre 1997-1998
ASIA	15,99	37,63	135,80
Japón	-7,8	53,37	-4,00
Hong Kong	21,77	-0,03	-1,40
Israel	-41,22	143,46	79,70
Corea del Sur	105,18	37,00	-0,80
Taiwan	-1,19	23,85	60,00
Singapur	40,37	4,56	327,70
India	-58,68	158,00	54,70
China Continental	199,09	-22,29	143,42
Malasia	0,20	-96,43	
Filipinas	110,64	-68,96	
Tailandia	41,56	100,99	
Sri Lanka	100,00	10,00	
Turkía	-83,02	323,08	
Kuwait	242,86	0,00	

En conjunto estos países muestran una variación acumulada de 2 406,3

100%. En términos generales, puede apreciarse que la crisis del continente no impactó las exportaciones a costarricenses. Sin embargo, la crisis sí afecta las posibilidades de expansión y dinamismo de las relaciones comerciales de Costa Rica con los países del Asia-Pacífico.

En el caso de Japón, que es el principal destino de las exportaciones costarricenses en el continente asiático, en el período 1996-1997 las ventas caen en -7,8%, mientras las importaciones de Costa Rica desde ese país crecen en 53,4%. La tendencia a la baja de las exportaciones costarricenses en dicho mercado se mantiene en el período 1997-1998, mostrando una caída de -4%. En el caso de Hong Kong, las exportaciones costarricenses declinan en -1,4% durante el último período en cuestión, después de haber mostrado un crecimiento de 21,8% en el período anterior. Asimismo, las ventas a Corea del Sur se precipitan levemente en -0,8% durante los años 1997-1998, mientras que en el período 1996-1997 el dinamismo de las ventas costarricenses en dicho país mostraba un crecimiento superior al cien por cien.

Israel, Taiwan, India y Turquía también muestran una tendencia a la baja en las compras que realizan a nuestro país. Durante el período 1996-1997, las exportaciones costarricenses hacia Israel caen en -41,2%; hacia Taiwan decrecen en -1,2%; hacia la India decrecen significativamente en -58,7%; hacia Turquía la caída de las exportaciones costarricenses también es muy significativa, al mostrar un decrecimiento de -83%. Es importante

no subestimar las relaciones comerciales de Costa Rica con el continente asiático¹⁷. En la década de los noventa el comercio ha tendido a incrementarse entre Costa Rica y Asia. Principalmente Japón, Hong Kong, Israel, Corea del Sur, Taiwan y Singapur, muestran una dinámica tendencia de crecimiento de las compras y ventas con respecto a Costa Rica.

Entre las principales exportaciones del país dirigidas al Asia, se encuentran café, pescado y subproductos de pescado, plantas ornamentales, conservas y jaleas, textiles, circuitos modulares, y otros. Es necesario poder determinar si la dinámica de las exportaciones costarricenses se debe a elasticidades precios de tales productos, o bien responde a elasticidades ingresos de los mercados asiáticos en el momento de la crisis económica provocada por la crisis financiera. De cualquier manera, por concepto de exportaciones no realizadas al mercado asiático, Costa Rica dejó de percibir divisas por un monto cercano a los \$11 millones, suma nada despreciable para el país¹⁸.

En lo que se refiere a las importaciones costarricenses desde dicho continente, las mismas muestran una tendencia alcista durante los años noventa, excepto con Filipinas y Malasia. Obsérvese que en el período 1996-1997, las compras costarricenses en el mercado de Hong Kong cayeron en -0,03%; en el mercado de China Continental caen en -22,3%; mientras que en el mercado de Malasia la baja fue de -69%. Es probable que las devaluaciones de las monedas de los países asiáticos tienda a provocar un incremento de las compras de Costa Rica. Sobre todo porque los principales productos importados por el país desde Asia son automóviles y partes, vehículos para transporte de mercancías, juguetes, calzado,

17. Johnny Alvarado y Luis Carlos Peralta, en un artículo publicado en el periódico *El Financiero*, de Costa Rica, consideran que en lo que respecta al impacto comercial de la crisis asiática y rusa en Costa Rica "...desde el punto de vista de socio comercial, como comprador, Japón y el resto de las naciones de Asia, juntamente con Rusia, no tienen una posición relevante." (*El Financiero*, 1998:6). Igual criterio sostienen Jorge Madrigal *et al.*, funcionarios del Banco Central de Costa Rica (Madrigal, 1998:8-10).

18. Mariela Arroyo ha elaborado un estudio interesante que ejemplifica lo importante que es el mercado asiático para Costa Rica, destacando las fuertes disminuciones en las ventas y su impacto en algunas empresas del país. Asimismo, dicho estudio muestra las ventajas de algunas empresas al importar desde Asia productos a precios más bajos (Arroyo, 1998:8-11).

y aparatos de conmutación telefónica, fungicidas, textiles, coches de turismo, motores eléctricos, lingotes y alambrón de hierro, entre otros.

La década de los noventa muestra que Costa Rica tiene una balanza comercial negativa con Asia; exceptuando Kuwait. En el período 1995-1997 solamente con Hong Kong evidencia Costa Rica una balanza comercial revertida, debido a que las exportaciones tienden a crecer mientras que las importaciones tienden a la baja.

c) EVOLUCIÓN DEL MERCADO BURSÁTIL

Durante el primer semestre del año 1997 las transacciones bursátiles en Costa Rica muestran una tasa de crecimiento de 14,3% con respecto al segundo semestre del año anterior. Sin embargo, en el segundo semestre de ese mismo año las negociaciones cayeron en -2,3%. No existe información disponible que permita determinar si la caída en el dinamismo de las transacciones es normal en los mercados de valores del país, o si se debe a un ligero impacto de la crisis asiática. No obstante, las características que presenta dicho mercado hace pensar que no es susceptible a tal situación de crisis. Nótese que las transacciones en cuestión crecen en 21,5% en el primer semestre del año 1998, superando la caída del segundo semestre del año anterior. Comparado con igual período del año anterior, las transacciones de las bolsas del país crecen 7,17 puntos más en el primer semestre del año 1998 que en el año 1997.

Por otro lado, las negociaciones de mercados primarios dominaban el volumen de las transacciones hasta el año 1997. Para el primer semestre del año 1998 se puede observar que el mercado bursátil había evolucionado significativamente. Las transacciones del mercado primario pasan a un segundo plano con respecto a las de mercado secundario. La participación relativa de las mismas en el volumen total de las transacciones es de 49,6% y 50,4% respectivamente. El

Banco Central de Costa Rica es del criterio de que el auge mostrado en ese momento por el mercado secundario, responde tanto a una reducción de la oferta de títulos de corto plazo como a la tendencia a la baja en el rendimiento de las inversiones. Los inversionistas prefieren entonces los títulos de largo plazo, tanto en colones como en dólares (Banco Central de Costa Rica, 1998: 14).

El sector privado también ha aumentado su participación en las negociaciones bursátiles durante el primer semestre del año 1998. El sector público, que años atrás venía dominando más del 90% de las transacciones bursátiles, en el primer semestre en cuestión evidencia una participación de 88,4% en el total de las negociaciones. El sector privado gana 4 puntos porcentuales con respecto al semestre precedente, al elevar el volumen de sus transacciones a 370.6 millones de colones. El hecho de que el sector público domine las transacciones bursátiles, es un indicador del escaso impacto que podrían tener las crisis asiática y rusa en el mercado de títulos y acciones del país. A pesar de ello, un indicador a considerar es el volumen de las transacciones según moneda. Las transacciones en dólares han crecido en detrimento de las operaciones en moneda nacional. En el primer semestre del año 1998, el mercado bursátil muestra que los títulos y acciones en dólares cobran una acelerada importancia en el total de las transacciones.

Tal evolución del mercado bursátil la explica el Banco Central de Costa Rica como una consecuencia de los movimientos en las tasas de interés, las cuales han hecho que los rendimientos de las inversiones en dólares sean mayores que los de las inversiones en moneda nacional. Además, la tasa básica pasiva promedio en colones mostró un cierto descenso, tendencia que se presenta desde mediados del año 1995. Otro aspecto importante de analizar en este sentido, es que en el mercado bursátil costarricense dominan significativamente las transacciones de corto

plazo (hasta 180 días). Estas representan más del 90% de las transacciones en cuestión, pero en el primer semestre del año 1998 muestra una tendencia a la baja.

d) COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Como resultado de los procesos de apertura de la economía nacional, y la participación activa del país en la conformación de espacios económicos de libre comercio, durante la década de los noventa el capital extranjero ha mostrado interés por invertir en Costa Rica. Durante el período 1990-1995, el comportamiento de la inversión extranjera en el país, es de una tendencia moderada al crecimiento. En el período 1996-1997, el incremento de la inversión se destacó, creciendo 27% en el año 1996 y más del 20% en el año 1997; en este último año se refleja el ingreso de INTEL (una multimillonaria empresa de capital estadounidense, dedicada a la producción de microchips), con una inversión mayor de \$100 millones (Badilla, 1998:89-92).

Las autoridades de comercio exterior del país, proyectan que la inversión extranjera se incremente en poco más del 20% para el año 1998. En estos cálculos están considerados las restantes inversiones de INTEL. Con ello, el país alcanzaría el mayor índice de inversión extranjera/PIB en el ámbito mundial. Estados Unidos es el principal inversionista en el país, representando actualmente cerca del 70% del total de la inversión extranjera en Costa Rica. En segundo lugar está México; un año antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con México, los inversionistas de dicho país aceleraron la inversión de su capital en Costa Rica, adquiriendo algunas empresas nacionales en la mayor parte de los casos (Villalobos y Peraza, 1999). Alemania ocupa el tercer lugar. Recientemente Colombia y Chile han incrementado su participación en este rubro (COMEX, 1996:35-38).

En el caso de los países asiáticos, entre los más importantes inversionistas en el país destacan Corea, Hong Kong y Japón, repre-

sentando el 2,5% del total. Es importante anotar que como consecuencia de la crisis en Asia, algunas inversiones no serán concretadas o bien serían aplazadas. El impacto en este sentido será tanto indirecto como directo. Es el caso de Motorola, cuyas inversiones se retiraron del país desde el mes de agosto, debido a una caída en la demanda mundial de micro componentes eléctricos (cristales de cuarzo, filtros cerámicos y otros). Ante tal situación, la empresa no pudo soportar la competencia ni el impacto de la crisis asiática. En el país sólo operaría el centro de mercadeo y ventas de dicha empresa. Las operaciones de Motorola también cerrarán en Puerto Rico, Vernon Hill (Illinois, E.U.) y en Singapur, mientras que en Chicago se reduciría su tamaño (*La Nación*, 1998:28A)¹⁹.

Por otro lado, el país tiene la oportunidad de sacar ventaja de la crisis asiática, procurando la atracción de empresas extranjeras ubicadas en esos países. Esta es una probabilidad toda vez que Costa Rica mejore su grado de preparación, especialmente su grado de preparación estructural y de las políticas, y represente para los inversionistas una inserción internacional ventajosa desde el país. Muchas empresas establecidas en Asia han tenido pérdidas considerables, lo cual hace que tengan que cerrar algunas de sus plantas. De manera que la atracción de dichos capitales depende de la capacidad del país para permitirles contrarrestar el impacto de la crisis en cuestión.

CONSIDERACIONES FINALES

Definitivamente es importante distinguir entre el impacto de la crisis asiática en general y el impacto de la crisis asiática en

19. El retiro de Motorola significa la reubicación de 985 empleados, de los cuales 750 eran operarios. Algunos de los empleados de dicha empresa fueron contratados por INTEL.

particular. En el primer caso, el análisis anterior evidencia que Costa Rica ha sido levemente afectada por la crisis en cuestión, debido a las condiciones económicas, sociales y políticas que presenta el país, y a pesar de algunas deficiencias en su grado de preparación para una inserción internacional ventajosa. En el otro sentido, sin embargo, el panorama es completamente otro, puesto que a nivel del comercio y de las inversiones, la crisis ha impactado negativamente al país.

Ello significa que el país juega en dos ambientes distintos en tal situación: a) Continuar con políticas prudentes destinadas a reducir la vulnerabilidad macroeconómica, a la vez que elevar los grados de preparación y plantear adecuadas estrategias de inserción internacional. b) Sacar ventaja de las expectativas comerciales y de inversión con respecto al continente asiático, sobre todo con aquellos países menos afectados por la crisis y cuyos mercados son atractivos. Con la devaluación asiática, los empresarios del país podrían obtener bienes de capital e insumos a precios competitivos en el ámbito internacional, y de esta manera mejorar sus procesos de producción y reducir los costos.

Pero también es posible formular estrategias para exportar bienes y servicios que esos países requieren en estos momentos. Las exportaciones costarricenses hacia la mayor parte del continente han crecido sorprendentemente durante el segundo semestre de 1997 y el primer semestre de 1998. Es decir, las exportaciones se han incrementado hacia la región en plena crisis, lo cual significa que algunos productos costarricenses son competitivos en esos países. También se puede afirmar que existe una ventaja para el capital, si se toma en consideración que la caída en las exportaciones del país en algunos de los países asiáticos, son muy leves en el período 1997-1998. Israel, Taiwan, Singapur, India, China Continental, Tailandia, Turquía y otros países, muestran tasas de crecimiento cercanas o superiores al cien por cien, en plena crisis.

El país tiene importantes oportunidades, incluso de sacar ventaja de la difícil situación económica/financiera que vive el continente asiático. Entre otras razones a destacar, está el hecho de que tiene un sistema político que por más de cien años ha mostrado capacidad para resistir las tendencias desestabilizadoras en América Latina²⁰. La mano de obra calificada va en constante incremento, y muy adecuada a las necesidades del desarrollo tecnológico y empresarial en el ámbito mundial. El grado de preparación del país, y la voluntad de continuar desarrollándolo, ha permitido que Costa Rica constituya importantes ventajas para inversiones de alta tecnología, en comparación con otros países de América Latina.

Sin embargo, la prudencia es el principal aliado en una estrategia de inserción y de aprovechamiento de oportunidades. Costa Rica, al igual que otros países, tiene que haber aprendido del sudeste asiático y del continente en general. Aquellos países que en la década de los años ochenta se colocaron en el mapa mundo como los "países recientemente industrializados", los "PRI y casi PRI o aspirantes a PRI", economías consideradas exitosas, lograron basar su crecimiento en la sustitución de exportaciones primarias, en donde la mano de obra calificada sustentó la estrategia de inserción internacional (De Franco, 1988:175-219)²¹.

Costa Rica ha logrado ejecutar políticas públicas al estilo de tales países, pero de

20. En su propuesta sobre la G-16, Jeffrey Sachs sugiere incluir una contraparte de ocho países en vías de desarrollo. Establece como condición para la selección de los mismos, que posean un gobierno democrático. Entre las democracias más grandes, Sachs sugiere Brasil, India, Corea del Sur y Sudafrica. Entre las democracias más pequeñas cita a Chile y a Costa Rica (Sachs, 1998:4).

21. Es interesante revisar en Silvio De Franco las posiciones de algunos autores en la década de los ochenta, en torno al éxito de los PRI asiáticos. Entre ellos, Gustav Ranis, Jeffrey Sachs y Colin Bradford.

manera gradual y con gran contenido social, en el marco de una concepción de desarrollo sostenible. Los salarios mínimos crecen en términos reales, aun cuando no reflejan suficientemente una relación adecuada con el incremento de la productividad del trabajo. Esto, al igual que el descuido en la equidad en la distribución del ingreso, fue un aspecto que los *tigres asiáticos* pasaron por alto en la década de los ochenta y noventa, lo que los hizo socialmente vulnerables a los efectos negativos de la crisis financiera.

La experiencia asiática, como la de algunos de los grandes países de América Latina, enseña que el éxito acelerado basado en criterios de competitividad, y no en ventajas comparativas que denoten un elevado grado de preparación del país, un desarrollo cuantitativo/cualitativo de las estructuras productivas y comerciales, encierra amenazas que en la mayor parte de las veces es difícil sacarles ventaja. Por un lado, los países más desarrollados, cuyas empresas han perdido competitividad, tienden a protegerse de la competencia. Por el otro, cierto tipo de inversión extranjera, promovida con el abaratamiento de la mano de obra, no puede asegurarse una ventaja competitiva por mucho tiempo. Las altas tasas de interés tampoco sustentan un criterio sólido de competitividad cuando las inversiones acumuladas son de corto plazo, al estilo de *capital golondrina*.

Paul Krugman había señalado que el éxito asiático se debía a una acumulación estalinista de capitales, y no a un crecimiento en la productividad del trabajo (Krugman, 1994)²². La acumulación de capitales por la

vía de un crecimiento acelerado de la inversión extranjera real, y peor aun cuando se trata de una acumulación de capitales especuladores de corto plazo, lo cual no necesariamente garantiza un desarrollo sostenible. Las estrategias de inserción internacional de un país, no deben abstraerse de los esfuerzos en las mejoras del grado de preparación del país. La inversión extranjera no es buena en sí misma, hay que hacer que lo sea, mediante políticas de inversión que discriminen, que exijan ciertas condiciones y que permitan el control de las mismas²³.

La calidad de la inserción internacional ventajosa es mejor que aquella inserción basada en la cantidad, en la acumulación de capitales. La calidad de la inserción se evalúa, entre otros elementos, por la distribución y asignación apropiada del producto del crecimiento económico; por el nivel de desarrollo que es posible promover en las ventajas comparativas del país, las cuales son el fundamento de la competitividad de las empresas; por la transparencia de los agentes económicos del sector público y privado; por el menor grado de corrupción social; por el tipo/calidad de inversión extranjera; así como por el nivel de prudencia con que se formulan y ejecutan las políticas, y se busca solución a los problemas socioeconómicos.

22. Krugman señaló en su artículo "El Mito del Milagro de Asia", publicado en *Foreign Affairs* en 1994, que el crecimiento ha sido sencillamente una función de adoptar niveles en constante crecimiento de mano de obra y capital, sin el tipo de innovaciones que proporcionan ganancias reales en la productividad.

23. Es importante que América Latina, y particularmente la región centroamericana, desarrollen capacidad para formular una estrategia de inserción internacional propia, mejorando su grado de preparación de manera adecuadamente ventajosa en el marco de la globalización en cada uno de sus aspectos más relevantes; entre otros, el mercado financiero, la inversión nacional/extranjera, ambiente, políticas públicas, calidad de vida. En consideración de tales aspectos, es pertinente impulsar marcos conceptuales propios, basado en las recomendaciones del *Taller América Latina y el Caribe en el Mundo: Escenarios al año 2010*, organizado por la SELA (SELA, marzo de 1998). También Eduardo Stein, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, se refirió en tal sentido (SELA, 1998: 179-185).

Costa Rica tiene mucho que compartir de sus experiencias en torno a una estrategia de inserción internacional ventajosa, basada en un constante desarrollo del grado de preparación del país. Pero ante todo, tiene que aprender bien de las experiencias de otros países que, como los asiáticos, fueron exageradamente mostrados como *modelos*. El paso siguiente es, entonces, que Costa Rica tiene que *aprender a enseñar*, para evitar pretender constituirse en un modelo replicable, sin una evaluación previa y rigurosa de acuerdo con las características propias de cada país, su entorno y sus condicionantes internos. Es importante que oportunamente se analice el impacto global de las crisis asiática, rusa y brasileña en la economía costarricense, con el propósito de evaluar las fortalezas y debilidades del país y del capital en general. Ello debe hacerse considerando *tanto* el desarrollo del grado de preparación del país, *como* el *tipo/calidad* de las estrategias de inserción internacional asociada a aquél.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado, Johnny y Peralta, Luis Carlos. "Impacto sobre Costa Rica de las Crisis de Rusia y Asia". *El Financiero*, 21-27 de setiembre de 1998. 19p.
- Arroyo, Mariela. *Crisis en el Sudeste Asiático: Impacto sobre el comercio internacional de Costa Rica*. COMEX, San José, Costa Rica. 1998. 13p.
- Badilla, Adriana. "Los Tratados Bilaterales de Inversión". En: COMEX. Ciclo de Conferencias 1997. COMEX, San José, Costa Rica. 1998. 116 p.
- Banco Central de Costa Rica. División Económica. *Revista Económica*. I Semestre de 1996-II Semestre de 1998. San José, Costa Rica.
- Bradford, Colin. "Cambio Comercial y Estructural: Pri y pri de segunda fila como economías de transición". En: De Franco, Silvio (editor). *Estrategias de Crecimiento y Orientación hacia Afuera*. Educa, San José, Costa Rica. 1988. 528p.
- COMEX. *Los 75 Principales Socios Comerciales de Costa Rica*. PROCOMER, San José, Costa Rica. 1998. 171p.
- De Franco, Silvio. "Políticas Macroeconómicas y Dimensiones Político-Institucionales en el Crecimiento Económico: el caso de Corea del Sur". En: Silvio De Franco (editor). *Estrategias de Crecimiento y Orientación hacia Afuera*. Educa, San José, Costa Rica. 1988. 528p.
- Dornbusch, Rudiger. *Consecuencias de la crisis asiática: lecciones para limitar la vulnerabilidad financiera*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía. Perú. 1998. 51p.
- Krugman, Paul. "El Mito del milagro de Asia". *Foreign Affairs*, vol. 73, No. 6, New York. 1994.
- La Nación*. Agosto-Noviembre. Costa Rica. 1998.
- Madrigal, Jorge; Méndez, Eduardo y Torres, Rigoberto. *Efectos de la Crisis Asiática sobre la Economía Costarricense*. Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. San José, Costa Rica. 1998. 19p.
- Miotti, Edigio y Quenan, Carlos. "Impacto de la Crisis Asiática en América Latina". En: *Globalización y Relaciones Externas de América Latina y el Caribe*. Capítulos No.53, Secretaría Permanente del SELA, 1998. 216p.
- PNUD. "Estado de la Nación: en desarrollo humano sostenible". *Informe No.4*. Editorama S.A, San José, Costa Rica. 1998. 356p.

- Ranis, Gustav. "Los pri, los casi pri y la Economía Mundial". En: De Franco, Silvio (editor). *Estrategias de Crecimiento y Orientación hacia Afuera*. Educa, San José, Costa Rica. 1988. 528p.
- Sachs, Jeffrey. "Ejecutoría Macroeconómica en América Latina y Asia Oriental y Deuda Externa". En: Silvio De Franco (editor). *Estrategias de Crecimiento y Orientación hacia Afuera*. Educa, San José, Costa Rica. 1988. 528p.
- Sachs, Jeffrey. "Making it Work". *The Economist*. Septiembre, 1998. 10p.
- SELA. *Desarrollo Económico y Proyección Internacional de la República de Corea: Hacia una nueva etapa de las relaciones con América Latina*. SP/DS/DT No.9-97. Agosto, 1997. 40p.
- SELA. *Japón: Situación actual y perspectivas de la economía. Relaciones de comercio e inversión con América Latina y El Caribe*. SP/DS/DT No.10-97. Agosto, 1997. 28p.
- SELA. *La Ampliación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus Vinculaciones Económicas con América Latina y el Caribe*. SP/DS/DT No.12-97. Agosto, 1997. 40p.
- SELA. *La República Popular China: Tendencias económicas e implicaciones para América Latina y el Caribe de la Reincorporación del Japón*. SP/DS/DT No.11-97. Agosto, 1997. 26p.
- SELA. *Taller América Latina y el Caribe en el Mundo: Escenarios al año 2010*. Brasil. SP/DS/TALCME/DF No.1-98. Marzo, 1998. 30p.
- Stein, Eduardo. "América Central: Por un renovado ejercicio de integración regional". En: "Globalización y Relaciones Externas de América Latina y el Caribe". *Capítulos No.53*, Secretaría Permanente del SELA, 1998. 216p.
- Villalobos, Daniel y Peraza, José Antonio. "Los Actores Sociales Costarricenses frente al Tratado de Libre Comercio Costa Rica/México". *Tesis de licenciatura* en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1999.

Daniel Villalobos Céspedes
 dvillalo@una.ac.cr

Arlette Pichardo Muñiz
 arlettepichardo@hotmail.com

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y SUS EFECTOS EN LO SOCIAL: CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE MODELOS ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Carmen María Romero¹

RESUMEN

El tema de las políticas macroeconómicas y sus efectos en lo social constituye el marco general de análisis para repensar modelos alternativos de intervención social y brindar elementos para la formulación y gestión de las políticas y programas sociales, a la luz del nuevo milenio. El presente trabajo pone al descubierto la posición de las agencias financieras internacionales y de los gobiernos de la región, en relación con el tema de lo social, descubriendo al mismo tiempo, las excelentes oportunidades para desempeñar una tarea de manera eficiente y comprometida con la realidad.

ABSTRACT

The macroeconomic policies and its effects on the social context consists the main framework of analysis to rethink alternative models of social intervention and offer elements for the formulation and management of social programs and policies, facing the new millenium. The present work presents the position of international agencies and government of the region, in relation to the social subject, discovering at the same time, the excellent opportunities to perform efficiently a task and concerned with reality.

I. INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe muestran una paradoja. Para mucha gente de la región, la pobreza es una cruda realidad, mientras se registran importantes logros económicos, so-

ciales y tecnológicos. En la actualidad, por lo menos 150 millones de habitantes de América Latina y el Caribe son considerados pobres, en sociedades que muestran inaceptables inequidades en la distribución del ingreso y de los beneficios económicos.

Durante los años 70, los esfuerzos y las políticas fueron orientadas hacia la agricultura y el desarrollo urbano; en los 80 el problema que concentró la atención fue el de la deuda; durante los 90 el apoyo fue para los programas de reforma económica. Hoy

1. Charla Inaugural para el V Congreso y II Internacional de Trabajo Social: "Hacia la construcción de enfoques alternativos de trabajo social para el nuevo milenio". San José, Costa Rica, 4-6 mayo 1999.

día, los gobiernos y la cooperación internacional deberían de tener como prioridad, el gran tema de reducir la pobreza, con una posición clara, como nunca antes en la historia fue planteada (Sobre la nueva tendencia de la Cooperación Internacional, Cfr: BID, Abril 1998).

En términos prácticos se deben buscar nuevos conocimientos para recomendar políticas, modelos de intervención y prácticas que contribuyan a la reducción de la pobreza, con una fuerte participación comunitaria, diálogos efectivos con todos los sectores de la sociedad y, más apertura y transparencia en los procesos de formulación y ejecución de los programas sociales, para promover esencialmente un desarrollo sostenible.

El presente trabajo pretende abordar el tema de las políticas macroeconómicas y sus efectos en lo social, con el propósito de brindar algunos elementos que deben ser considerados en la formulación y gestión de las políticas y programas sociales, a la luz del nuevo milenio. De esta manera, el presente trabajo pone al descubierto, la posición de las agencias financieras internacionales y de los gobiernos de la región en relación con el tema de lo social, con el propósito de conocer qué proponen y descubrir al mismo tiempo, las excelentes oportunidades para que los científicos sociales desempeñen su tarea de manera eficiente y comprometida con su realidad.

II. CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y SUS EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES

CUANTIFICACIÓN DE LOS HECHOS

La década de los ochenta resultó desastrosa para América Latina. La crisis de la deuda, la contracción del ingreso per cápita de la región, que disminuyó en más de un 10% entre 1980 y 1990, el agudo aumento de la inflación y las rigurosas reformas monetarias y contracciones fiscales al inicio de los

años noventa, crearon disturbios en el nivel macroeconómico y efectos determinantes sobre la pobreza. Hoy por lo menos 150 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, son considerados pobres; con una incidencia de la pobreza que aumentó en casi todos los países de la región.

Según el estudio preparado para el proyecto PNUD/BID/CEPAL, hacia fines de la década, casi un tercio de la población de la región vive con menos de US\$ 1000 al año, diez años atrás un cuarto de la población vivía con ese ingreso. América Latina se dio a conocer a través del mundo por su crecimiento lento, su desigual distribución de los ingresos y su creciente nivel de pobreza (Morley, 1998).

Bernardo Kliksberg (1998), nos ilustra escasamente hace un año, los "círculos perversos" de la pobreza en el mundo: 1300 millones de habitantes del planeta con ingresos menores a un dólar diario, 800 millones de personas que no reciben suficientes alimentos, 500 millones en estado de desnutrición crónica, 17 millones de personas que mueren cada año de infecciones y enfermedades parasitarias curables, 30% de toda la mano de obra del mundo en situación de desempleo o subempleo. Estas cifras aluden a una situación de exclusión social que se autorreproduce; donde las mujeres, los niños, los grupos indígenas y otras minorías, de no ser atendidos, continuarán siendo el mejor vehículo de transferencia y reproducción de la pobreza.

EL ESCENARIO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y SUS EFECTOS EN LA EQUIDAD

Para América Latina los años noventa se presentan como un período de recuperación y crecimiento renovado, reconocido por estudios recientemente elaborados y, punto de partida para diversos organismos internacionales. Entre 1990 y 1996, el PIB per cápita

aumentó en un 1,5% al año y se ha calificado al año 97 como el mejor para América Latina en el último cuarto de siglo, según información brindada por CEPAL y Panorama Económico de 1997, citado por Morley, 1998. También en estos últimos años la inflación ha sido controlada y fuertes corrientes de inversión extranjera, dan testimonio y confianza de un futuro económico alentador para la región.

Además del período de recesión y recuperación, una característica de la última década ha sido la adopción de un conjunto de reformas de política económica por parte de la mayoría de los países de la región. Según la descripción de las reformas adoptadas en cada país desde 1985 y elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo, existen seis reformas claves: la liberalización comercial, la reforma del sector financiero, la reforma fiscal, la apertura de las cuentas de capital, la privatización y la reforma del mercado laboral (BID, 1996).

El ritmo de las reformas ha variado a través del tiempo, según el país y las circunstancias particulares de cada uno; sin embargo, el panorama general de la región muestra una transformación general del ambiente en el cual tienen lugar las políticas. Teniendo en cuenta salvedades relacionadas con cada país, las cifras muestran que luego de una década de creciente pobreza en los ochenta, durante los años noventa, América Latina empezó finalmente a hacer progresos significativos en sus economías y en la reducción de la pobreza.

Por otra parte, recientes investigaciones demuestran, que de diecisiete países de América Latina estudiados, solamente en ocho, ha disminuido la cifra absoluta de pobres (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Paraguay y Perú) (Morley, 1998), aunque estos mismos pobres no se han recuperado de las pérdidas sufridas durante la crisis de la deuda en los años ochenta. Por otra parte, existen demasiados países donde la pobreza sigue aumentando;

en cifras absolutas, hubo al menos 40 millones más de pobres, resultado de las últimas dos décadas.

Hasta hace poco tiempo se había admitido que la pobreza disminuye cuando crece la economía de los países; sin embargo, existen cifras reveladoras en América Latina que muestran que el crecimiento económico ha provocado, paradójicamente una distribución de ingresos más desigual. La relación crecimiento-equidad no siempre es directamente proporcional. Honduras antes del huracán Mitch tuvo una disminución de la pobreza a pesar de un crecimiento negativo, gracias a una mejor distribución de los ingresos. Venezuela tuvo exactamente la situación opuesta: aumentó la pobreza a pesar de un aceptable crecimiento.

La mayoría de los economistas afirma que la pobreza tiende a disminuir, cuando las economías crecen. No obstante, interesa preguntarse por qué durante los últimos tres años, el debate se ha centrado en buscar evidencias de que las reformas económicas contribuyen con la disminución de la pobreza. Algunos de los autores que tratan de medir este tipo de resultados afirman que:

“...aunque no se ha observado evidencia alguna de que el crecimiento *per se* haya incrementado la desigualdad, los resultados indican que la preocupación actual respecto a los altos niveles de desigualdad en Latinoamérica no puede ser resuelta dependiendo tan solo del crecimiento económico” (De Janvry y Sadoulet, 1999).

Cifras del PNUD (1996) señalan para los últimos 30 años la caída de los ingresos del 20% de las personas más pobres (de 2 a 1,45 del ingreso mundial), mientras que el 20% más rico de la población, pasó del 70% al 85% de la riqueza mundial, duplicándose de 1960 a 1990 las distancias sociales. Las desigualdades en ingresos y en la posesión de activos, producen a su vez inequidades agudas

en el acceso al crédito, con importantes repercusiones en las oportunidades y calidad de los servicios que reciben los pobres. Buenos ejemplos de ésta situación los encontramos en los servicios de salud y educación ofertados para la población pobre.

Estudios también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sugieren “algunas modestas mejoras” que pueden haber ocurrido; sin embargo en la reciente Conferencia realizada sobre “Protección Social y Pobreza”, se destaca con insistencia, el fenómeno de la pobreza en la región (BID, 1999).

Las inequidades económicas y sociales inician el “ciclo perverso” (Kliksberg, 1998) y conducen a nuevas formas de exclusión social: el desarrollo de las comunicaciones, la existencia de las computadoras, el acceso a la información vía internet; todos estos avances tecnológicos que amenazan con un aumento de la brecha entre sectores ricos y pobres de la población y que algunos han llamado “analfabetismo cibernético”.

La preocupación por el fenómeno de pobreza e inequidad empieza a plantearse por parte de los organismos financieros internacionales a inicios de la presente década. Se destaca por ejemplo, el Foro sobre “Reforma Social y Pobreza”, que con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se convoca a gobiernos, especialistas, representantes de agencias internacionales, organizaciones y representantes de la sociedad civil, con el propósito de discutir la persistente situación de pobreza y deterioro de amplios sectores de la población, a pesar de la mejoría observada en los indicadores macroeconómicos. En esta ocasión, el propio Presidente del BID, destacaba como imperativo de tipo ético, imperativo social e imperativo económico el problema de la extrema desigualdad y de la pobreza crítica (Iglesias E., 1993).

Durante esta conferencia privó la idea y necesidad de conjugar y potenciar tanto la reforma económica como la reforma social. Durante la misma actividad, representantes de otros organismos, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, coincidieron en la necesidad de vincular el crecimiento económico con la distribución de oportunidades en formas más equitativas. Durante este Foro y como evento de amplia consulta y reflexión, quedaron planteadas las bases de una “Agenda Social” para la América Latina de los 90, vinculando desarrollo económico y desarrollo social como elementos complementarios e indispensables para el desarrollo humano y cuyos lineamientos deben de ser retomados por parte de los responsables del diseño y ejecución de estrategias, programas y políticas orientadas hacia la transformación y desarrollo de la región.

Durante los siguientes años, especialistas y organismos internacionales han continuado destacando las persistentes desigualdades y sobre todo, las necesidades de reformas sociales que logren enfrentar los servicios ineficientes y las debilidades institucionales y de gestión de las mismas. James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial ha señalado durante los últimos años y en diversas entrevistas que

“la distribución de los beneficios del crecimiento presenta uno de los mayores desafíos a la estabilidad el mundo”, [así como ha destacado que] “las injusticias sociales pueden destruir los avances sociales y políticos” (Banco Mundial, 1997).

El BID por su parte a fines de 1997, creó la Unidad Asesora sobre Pobreza y Desigualdad, como parte del Departamento de Desarrollo Sostenible, con la misión de brindar liderazgo técnico en el área de reducción de la pobreza y contribuir al mejoramiento de la calidad de las actividades financieras y no financieras del Banco, a fin de incrementar su impacto en la reducción de la pobreza.

Este soporte técnico que el BID ha concebido, está dirigido al diseño y orientación de proyectos que permitan la difusión de mejores prácticas, el monitoreo y la asesoría para clasificar inversiones focalizadas a la pobreza; la construcción de bases de información de la región sobre pobreza y desigualdad es otro de sus objetivos. Todo esto, afirma el BID, con el fin de identificar intervenciones más efectivas en la lucha contra la reducción de la pobreza y desigualdad y en las cuales la región aún tiene que desarrollar respuestas institucionales adecuadas (BID, 1999).

SISTEMA POLÍTICO Y DEBILITAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Las dramáticas transformaciones del sistema internacional en las últimas tres décadas alteraron de manera definitiva el panorama latinoamericano. Las reformas macroeconómicas presentan la urgente necesidad estratégica de vincularse al mundo de relaciones globales que dominarán el siglo XXI, las cuales a su vez deberán ser complementadas con democracias sólidas, aumento de la representatividad y fortalecimiento de la sociedad civil. Las acciones de los gobiernos no deben limitarse exclusivamente al crecimiento económico y a la vinculación comercial con el mundo; la sostenibilidad de las mismas en el tiempo puede ocurrir solamente por medio de sociedades política y socialmente estables.

La transición democrática en América Latina ha terminado. Esto no significa que los sistemas políticos de la región hayan alcanzado su madurez, o que los principales problemas hayan sido superados. En recientes estudios elaborados para Centroamérica y que pueden generalizarse para América Latina, se afirma el hecho de que, tal y como lo demuestran los índices de desarrollo humano del área, algunos de los problemas más bien se han agudizado y ello ha producido en la población una percepción crecientemente negativa y desconfiada sobre la democracia, sus líderes y las instituciones que los representan (Garita, 1997).

La crisis de credibilidad trae consigo la peligrosa crisis de legitimidad, expresada en enormes índices de abstencionismo electoral que han predominado en recientes elecciones, como son los casos de Costa Rica (30%), El Salvador (52-44%) y Panamá (20-30%). Menciona un estudio del PNUD (1998), la paradoja de la democracia centroamericana, donde se consolidan los gobiernos de elección popular, pero crece el número de indigentes, aumenta el desempleo, se concentra la riqueza y no mejoran los índices de salud, nutrición, educación y vivienda. Señala el mismo estudio (Solís, 1998) que estos perversos fenómenos de inequidad y violencia social han sido rasgos perdurables e históricos en la región centroamericana, antes atribuidos a las dictaduras, hoy responsabilidad de los regímenes democráticos.

Por otra parte, se reconoce que la mayoría de países de América Latina y el Caribe no cuenta con mecanismos adecuados para mitigar el impacto de los choques adversos sobre la población pobre. De hecho, la mayoría de los países de la región carece de redes de protección social que permitan atenuar el efecto de dichos acontecimientos en el consumo de los hogares pobres y que los protejan de crisis económicas, desastres naturales y otros efectos adversos derivados de tendencias demográficas como el envejecimiento de la población. De ahí que exista la necesidad de un mayor entendimiento en el diseño de programas sociales, tales como estudios costo-beneficio, complemento para los esquemas de focalización vs. universalización, soluciones para estructuras institucionales obsoletas y, búsqueda de nuevos mecanismos de asistencia y protección social para diferentes sectores de población.

Un reciente resumen del trabajo realizado por Fernando Carrillo-Flores (1999), alude a las palabras del Presidente del BID, Sr. Enrique Iglesias en la Sesión Inaugural de la Asamblea Anual de la institución en París, donde hace unas pocas semanas, rescataba:

“la indiscutible relación existente entre la reforma política y el desarrollo económico y social”, [destacando que] “hasta hace muy poco tiempo, la variable política era ignorada o subvalorada en las estrategias de desarrollo, por cuenta de una visión economicista de la realidad”. [Ya a nadie sorprenden] “las reflexiones profundamente políticas en un foro económico”.

Sin embargo, se reconoce también que el trabajo recientemente impulsado en el campo de la reforma institucional, de la modernización de los poderes judiciales, del fortalecimiento de las legislaturas y de la promoción de la participación ciudadana en conjunción con las organizaciones de la sociedad civil, aun despierta inquietud en muchos. Decía el Presidente del BID en la Asamblea de París, que una razón que explica porqué América Latina siendo una de las regiones que más creció en el siglo XX no pudo resolver el problema de la pobreza y la desigualdad, ha sido la debilidad en el funcionamiento de los sistemas políticos. La inexistencia de una base amplia de instituciones democráticas ha recortado fuertemente la capacidad de respuesta a las necesidades y esperanzas de los ciudadanos y por ello

“no es una casualidad que aquellos países de la región con instituciones, cultura y tradición democráticas más arraigadas, sean los que muestran mejores niveles de vida y mayores grados de integración y cohesión social” (Citado por Carrillo-Flores, 1999).

Concebida de esta forma, la reforma de la política adquiere un cariz distinto de una simple reforma de segunda generación. No es marginal, ni complementaria frente a la reforma económica. No puede ser simple apéndice de los procesos de modernización económica. Los hechos han demostrado el costo en que han incurrido los sistemas económicos que pretendieron ignorar la trascendencia de la reforma de la política. Ella ha

dejado de ser un artículo de lujo de los países desarrollados para convertirse en un presupuesto de primera necesidad para la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico. Todo indica que después de haber tragado diversas medicinas amargas, finalmente vamos aprendiendo que es hora de suspender la lucha contra los síntomas mientras las causas continuaban eternizándose.

El deterioro generalizado del tejido social expresa las fuertes tensiones acumuladas, el surgimiento de nuevos y complejos problemas sociales como la desintegración familiar, la violencia doméstica y el ascenso de la criminalidad. A todo esto debemos sumar el fenómeno de los desastres naturales, al que el propio Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hacía referencia cuando informa que durante los últimos dos años, este organismo ha atendido a la mitad de sus países miembros, con algún tipo de desastre natural (BID, 1999). A este panorama se suman también el fenómeno de la corrupción pública y privada, que como caballo de batalla, abre espacios sin discriminar a que actores y espacios golpea.

III. REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES

Encontramos entonces, para entender el marco de análisis de las políticas sociales, factores macroeconómicos determinantes. El éxito de la política económica y de la política social está en su interdependencia y complementariedad, en un contexto de reformas políticas e institucionales de fondo. Es lógico entonces enfrentarnos, a un escenario de políticas públicas y sociales con nuevos rasgos, para dar respuesta a la agudización de problemas.

Producto de las restricciones en el gasto público y en el contexto de los programas de reforma del Estado, las políticas sociales enfrentan hoy día el desafío de la eficiencia y la eficacia, en un marco limitado

de voluntades nacionales y de vaivenes políticos de los gobiernos de turno. El propio Banco Mundial en su Conferencia Anual sobre Pobreza e Inequidad (1998) señala la necesidad de reformar el aparato del Estado y sus instituciones, y la necesidad de que detrás de una buena política macroeconómica exista una buena política social. Al respecto se señala que el Estado asuma un rol importante en la reducción de la pobreza, y en la protección de la equidad y la justicia, destacando el capital humano como elemento necesario de las políticas sociales.

Un reciente estudio del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD, 1998) destaca elementos fundamentales para el nuevo perfil del Estado: se trata de construir un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad post-industrial, un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en el escenario internacional. Se busca de este modo, una tercera vía entre el *laissez-faire* neoliberal y el antiguo modelo social-burocrático de intervención estatal.

La actuación del Estado debe orientarse primordialmente hacia el área social, asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la creación de instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico. Si bien es cierto, se busca garantizar las condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la competitividad de los países, mediante políticas sociales sólidas, se debe desarrollar el capital humano necesario para la productividad y competitividad que demanda la globalización.

La gran modificación del papel del Estado –se insiste– tiene que ocurrir prioritariamente en sus formas de intervención, en el plano económico, social y político. En el área social, se debe fortalecer el papel del Estado como

formulador y financiador de las políticas públicas. Para esto, se toma fundamental el desarrollo de la capacidad catalizadora de los gobiernos para atraer a la comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud y educación básica. Pero, para el caso latinoamericano, se hace un primer llamado de atención:

“es necesario mantener el poder de intervención estatal directo, en caso de que no estuviesen dadas las condiciones sociales mínimas para compartir las actividades con la sociedad. Por consiguiente, es preciso diferenciar las situaciones en las cuales los servicios podrán ser suministrados por más de un proveedor y/o por entidades públicas no estatales, de aquellas situaciones en las que el aparato estatal será el único capaz de garantizar la uniformidad y la realización sin interrupciones de las políticas públicas”.

En la política social tradicional, el Estado financia, diseña, implementa, supervisa y, esporádicamente evalúa. Como dice Rolando Franco (1996), todas las funciones están unificadas en un mismo sujeto. En el llamado “paradigma emergente”, el Estado será el responsable parcialmente del financiamiento, en especial de los programas dirigidos a los pobres, ejercerá actividades de promoción y tendrá que asumir también funciones de ejecución de los programas, sólo de manera subsidiaria. En este marco, lo interesante es que se sostiene que las funciones de la política social, pueden ser separadas y llevadas a cabo por otros subsectores de carácter filantrópico, voluntario, comercial, informal, etc. Un ejemplo de esto lo encontramos con la presencia de ONGs, en países donde incluso, los recursos que manejan, superan al propio sector social estatal. Es un hecho entonces, que en diversos países de la región se están llevando a cabo reformas que transfieren al sector privado responsabilidades y tareas durante la ejecución de las políticas sociales.

Ahora bien, la caracterización de las políticas sociales antes y durante la reforma, refleja cambios significativos en diferentes ámbitos: institucionalidad, proceso de toma de decisiones, fuente y asignación de los recursos, propósitos, prioridades, población beneficiaria, enfoque e indicadores utilizados, los cuales han sido estudiados en detalle por Rolando Franco (1996).

También el tema de la reforma estatal sufre nuevos planteamientos. Los proyectos de reformulación estatal deben tomar en consideración, según el reciente estudio del CLAD, tres grandes problemas específicos en la región, a saber: la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico, y la reducción de la desigualdad social. Son estas tres especificidades las que en gran medida plantean nuevos horizontes a la reforma del Estado en América Latina y sustituir así, la perspectiva financiera y tecnocrática anterior.

En este marco, la reforma social y la del Estado, deben contribuir a la gobernabilidad democrática y a la legitimidad de los gobiernos, pero sobre todo prestando especial atención al desarrollo del capital humano, indispensable para enfrentar los retos de la globalización y de la apertura comercial. Postergar las políticas y desarrollo social significa negar a los países la posibilidad de adaptarse al progreso tecnológico y productivo necesario para la obligada competitividad. La política social es entonces un requisito de la economía y de la política:

“... se vuelve así un requisito previo tanto de la economía como de la política ... por eso es tan importante analizar las posibilidades de reformar y explorar nuevas alternativas de política social” (Franco, 1996).

¿HACIA DÓNDE DEBE IR LA REFORMA SOCIAL?

Para mejorar la capacidad de gestión del Estado y para aumentar la gobernabilidad

democrática, hay quienes consideran la implementación de la reforma gerencial, como un aspecto fundamental. En esta posición se encuentran el CLAD y Bernardo Kliksberg.

La Reforma gerencial está teniendo lugar en la Administración Pública de varios países de la región, con características y paradigmas organizacionales diferentes en todas las naciones. Sin embargo, aún y cuando los modelos gerenciales no responden a modelos únicos, las características de estas reformas se inscriben en un contexto donde el Estado es más pobre, la sociedad es más desigual y donde, es imprescindible la optimización de los recursos utilizados en las políticas sociales. En este sentido, los cambios recomendados deben de estar orientados, según el CLAD, a: a) la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos; b) el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de los servicios públicos y los ciudadanos-consumidores; c) a la implantación de un modelo contractual y competitivo de acción estatal, a partir del cual se pueda aumentar la eficiencia y la efectividad de las políticas (CLAD, 1998).

Afirma por su parte la CEPAL-Chile (1998), que en el ámbito de lo social, la modernización se traduce en la aplicación de un conjunto integrado de principios, prácticas y técnicas de gestión que permitan incrementar el impacto externo y la eficiencia interna de los programas y proyectos sociales. Algunos de estos principios han gozado de amplio consenso a lo largo del tiempo, tales como la “equidad” (atender a la población de necesidades más urgentes), la “focalización” (concentrar los recursos disponibles en aquellos que presenta carencia que el programa pretende atender), y el “impacto” (medir y analizar la magnitud del cambio en las condiciones de bienestar de la población objetivo).

Otros principios, resultan de las recientes orientaciones que los gobiernos han adoptado para satisfacer las necesidades públicas. Entre ellos están la “participación ciudadana” (durante la formulación, gestión, y evaluación

de los programas y proyectos), la "articulación" (gestión de redes con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales), y la "flexibilidad" (adaptación de las formas de organización del trabajo a las características de la prestación de los servicios sociales). A todos ellos habría que sumar las prácticas y técnicas para la modernización de la gestión social, que introducen prácticas novedosas.

Analizar las especificaciones del proceso de gestión de los programas sociales exige revisar elementos centrales, que han sido estudiados a fondo y fundamentados tanto por Bernardo Kliksberg, como por la CEPAL-Chile a través de la división de desarrollo social y por el propio CLAD.

A continuación algunos de los lineamientos esbozados:

- a) *Reposicionamiento organizacional de la política social:* En un esquema de "poder real", para superar el marco de subordinación y de aislamiento en que tradicionalmente se ha ubicado la estructura de lo social, con una visión del desarrollo social que supere la concepción "residual" de estas políticas. Al respecto debemos recordar que el Estado es el primer responsable de asegurar la conciliación de lo económico con lo social.
- b) *Mejoramiento de la coordinación social:* el propósito debe ser la actuación coordinada y efectiva de las áreas sociales de los gobiernos, que suelen actuar aislada y desvinculadamente; lo social es por naturaleza un campo donde ningún actor institucional por sí solo logra sus metas de fondo.
- c) *Descentralización de los servicios sociales hacia las regiones y municipios:* La descentralización de servicios debe ir acompañada de mecanismos que permitan a las entidades regionales y municipales disponer de los recursos

necesarios para enfrentar los problemas de desigualdades regionales y sociales y; fomentar la participación ciudadana. En el contexto de la reforma del Estado, debe existir una separación funcional entre las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y autónomas, ejecutoras de los servicios, de tal manera que la administración pública incorpore el control de los resultados obtenidos por las agencias autónomas.

- d) *Desarrollo de redes:* Con el propósito de sumar potencialidades de todos los actores sociales, el Estado debe ser el promotor de redes que integren iniciativas públicas y privadas, incorporando a otros actores de la sociedad civil y las comunidades pobres organizadas.
- e) *Participación ciudadana:* Los modelos participatorios han demostrado resultados superiores a los que se basan en estructuras jerárquicas. El BID, Banco Mundial y PNUD señalan en la actualidad a la participación, como elemento esencial para impulsar el desarrollo y la democracia en el mundo. El esfuerzo por incorporar a la ciudadanía contribuye a mediano y a largo plazo con la sostenibilidad y las acciones y el éxito real de la gestión social.
- f) *Renovación de las estructuras organizacionales:* Las áreas sociales públicas han contado históricamente con estructuras organizativas verticales, piramidales, jerárquicas y disfuncionales. Se ha dicho entre otros aspectos que tienden a "encerrarse en sí mismos", convirtiendo las "rutinas" en metas y presentando resistencias a la participación de otros actores externos a la estructura. En este sentido, se requiere avanzar hacia estructuras más abiertas, flexibles y participativas, como un medio para facilitar el cumplimiento de los objetivos. En

este sentido, el CLAD ha insistido en la modificación de la rígida jerarquía que caracterizaba al modelo burocrático weberiano, para hacer a los funcionarios públicos responsables de las metas y conscientes de la misión de su organización; facilitándose esto a través de la delegación del poder (empowerment) y autonomía a los gerentes. Este mecanismo, agrega el CLAD, altera la forma de la gestión y la cultura organizacional de los integrantes de la burocracia (1998).

- g) *Mejoramiento en la calidad de los servicios:* En este tema existe un acuerdo generalizado de que el Estado debe mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que brinda, en particular los sociales. Las iniciativas por mejorar la calidad de los servicios e introducir elementos gerenciales, debería tener como meta las necesidades del grupo al que están dirigidas las acciones; se trata de priorizar al usuario del servicio. El control de los resultados, en contraste con el control de las normas y procedimientos, es un instrumento técnico, capaz de hacer que las organizaciones aprendan de sus errores y a partir de esto elaboren sus estrategias futuras. El control y la evaluación se presentan como una forma de desarrollar capacidad, evaluar desempeño y, mejorar continuamente la prestación de los servicios públicos. Las nuevas formas de control exigen la combinación de cuatro tipos: control de resultados, control contable de costos, control por "competencia administrada", en el cual las diversas agencias buscan ofrecer el mejor servicio a los usuarios y, el control social, por medio del cual, los ciudadanos evaluarán los servicios públicos o participarán en la gestión de los mismos. En este punto es necesario reconocer que deben realizarse grandes esfuerzos para la

construcción de instituciones y entrenamiento de personal calificado, de modo que sea posible evaluar el desempeño, tanto organizacional como individual (CLAD, 1998).

Si tratáramos de elaborar una síntesis del escenario que afecta hoy día a las políticas sociales, nos encontramos con un marco de lineamientos o principios básicos y con acciones directas, que definen nuevos ámbitos de acción. Efectivamente, la equidad, el desarrollo del capital humano y la participación social son elementos básicos del desarrollo social que responden a principios éticos de solidaridad social y compromiso con los más débiles y; la eficiencia y eficacia de las acciones, responden más a principios gerenciales, pero que en un contexto más amplio, se vinculan a la población a la que van dirigidos los servicios.

IV. IDENTIDAD PROFESIONAL Y MODELOS ALTERNATIVOS FRENTE AL NUEVO MILENIO

Como en el resto de los países de la región, los científicos sociales continúan buscando fórmulas para intervenir apropiadamente en la realidad y transformarla. Tradicionalmente el mercado de trabajo ha estado definido y los roles de los profesionales, apuntaban hacia las demandas de la sociedad. Pero, los cambios vertiginosos de las últimas décadas, incluyendo nuevos y complejos problemas sociales, presentan un gran desafío para los profesionales. Si solamente tomáramos en cuenta los factores macroeconómicos, políticos y sociales enunciados líneas arriba, cabe preguntarse:

¿Están los científicos sociales en capacidad de comprender y responder a las demandas de nuevos y complejos problemas sociales?

¿Cuentan los científicos sociales con la creatividad necesaria para generar ideas en un marco de escasos recursos?

¿Cuentan los científicos sociales con el compromiso y habilidades gerenciales para saltar las barreras burocráticas y alcanzar logros sociales?

¿Cuentan los científicos sociales con dominio de la tecnología y acceso a la información que les permita impulsar cambios?

Algunas de éstas preguntas están relacionadas con conocimientos, otras con habilidades y otras con actitudes. Corresponderá a los profesionales discutir y reflexionar sobre los modelos alternativos para una intervención adecuada; sin embargo, me atrevo a recordar que en el tanto no actuemos, los pobres seguirán esperando por nuestras soluciones. ¿Será posible que la experiencia acumulada durante tantos años, nos permita encontrar soluciones y prácticas razonables técnica y políticamente viables?

La función del Estado de promover un nivel de vida adecuado depende mucho de los políticos pero también de los técnicos para buscar soluciones. Nuestro papel es político para defender los principios de desarrollo humano y equidad, pero también es técnico al buscar mejorar los servicios, revisar las funciones de las instituciones ya existentes, seleccionar acciones que pueden inscribirse en el ámbito del sector privado con la supervisión del sector público para la prestación de servicios básicos a la población, fortalecer la aparición de nuevas instituciones democráticas de control, con una fuerte participación ciudadana.

En este sentido, los desafíos se ubican en dos niveles:

Un *nivel macro y de carácter político* que se ubica básicamente en la formulación de políticas. Nuestro papel es político, para defender los principios de desarrollo humano y equidad: Para ello será necesario velar por diferentes estrategias que permitan atender la pobreza y vincular el desarrollo

social a procesos sustantivos en los países. Se deberá entonces pensar en:

- a) políticas de asistencia y supervivencia para los sectores de extrema pobreza;
- b) políticas de compensación y reducción de daños para los sectores sociales afectados por las políticas de ajuste económico y otro tipo de desastres y;
- c) políticas orientadas a la reforma político-administrativa de diferentes sectores sociales y a la búsqueda de múltiples formas de intervención social para el mediano y largo plazo.

Estos tres aspectos serán absolutamente necesarios de repensar para el futuro inmediato y de manera complementaria y no excluyente.

Un *nivel específico y técnico* que se ubica en la ejecución, evaluación e impacto de las políticas y programas sociales. El mayor desafío para los científicos sociales es de carácter técnico y relacionado directamente con nuevas prácticas de intervención social. Buscar fórmulas para mejorar los servicios, revisar las funciones de las instituciones ya existentes, seleccionar acciones que puedan inscribirse en el ámbito del sector privado con la supervisión del sector público para la prestación de servicios básicos a la población, fortalecer la aparición de nuevas instituciones democráticas de control, con una fuerte participación ciudadana o comunitaria que sustituya el paternalismo y la asistencia; fomentar los procesos de descentralización de los servicios y, por último; introducir en la cultura institucional la evaluación del desempeño individual y de las propias instituciones.

Los temas quedan en la agenda de "cuestiones" aún no resueltas, pero las debilidades de nuestros sistemas económicos, políticos y sociales, justifican cualquier esfuerzo por "reinventar el gobierno", como manifiesta la famosa obra de Osborne.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial. *The state in a changing world*. World Development Report, 1997. Oxford University Press. New York, 1997.
- Banco Mundial. *Panel Discussion: The role of the state in reducing poverty*. Anual WB Conference on Development in Latin America and the Caribbean: Poverty and Inequality. WB. Washington D.C., March 1998.
- BID. *Economic and Social Progress Report: Part Two*. Washington, D.C., 1996.
- BID. *The Path Out of Poverty*. Publication of the Sustainable Development Department, Washington, D.C., 1998.
- BID. *Conferencia sobre Protección Social y Pobreza*. Washington, D.C., 4-5 Febrero 1999.
- BID. *Unidad Asesora sobre Pobreza y Desigualdad*. Departamento de Desarrollo Sostenible. Brochure de la Unidad, 1999.
- CLAD. *Una nueva gestión para América Latina*. Documento del CLAD. Venezuela, Octubre 1998.
- Cunill, Nuria. "La reinención de los servicios sociales en América Latina. Algunas lecciones de la experiencia". En: *Reforma y Democracia, Revista del CLAD* nº13, Febrero 1999.
- CEPAL. "Gestión de Programas en América Latina". Volumen I, *Serie Políticas Sociales* nº 25, Chile, 1998.
- Carrillo Flores, Fernando. *La financiación de la política en América Latina*. Resumen divulgado por la red de gobernabilidad y desarrollo institucional para América Latina del PNUD y el Instituto de Gobernabilidad. Barcelona-España, Abril 1999.
- De Janvry, Alain y Sadoulet, Elizabeth. "Crecimiento, pobreza y desigualdad en América Latina: Un análisis de las relaciones causales, 1970-94". En: *Conferencia sobre Protección Social y Pobreza*, BID, Washington, D.C. 4-5 Febrero 1999.
- Kliksberg, Bernardo. "Repensando el Estado para el Desarrollo Social: Más allá de Dogmas y Convencionalismos". Lcción Inaugural Ier ciclo lectivo, Universidad de Costa Rica, Mayo 1998.
- Franco, Rolando. "Los paradigmas de la política social en América Latina". En: *Revista CEPAL* nº 58, Abril 1996.
- Garita, Nora. "El desafío democrático: Reflexiones de las sociedades centroamericanas ante el resultado del latinobarómetro". En: *Quién es quién en la institucionalidad centromericana: Algunas reflexiones sobre el proceso de integración*. PNUD-Costa Rica, 1997.
- Gibson, Rowan (Ed.). *Repensando el Futuro*. Editorial Norma, Colombia, 1998.
- Iglesias, Enrique. "Una agenda social para la región. Palabras de Inauguración". *Foro sobre la Reforma Social y la Pobreza*. Washington D.C., Febrero 1993.
- Iglesias, Enrique. "Palabras de Inauguración". *Conferencia sobre Protección Social y Pobreza*. Washington D.C., 4-5 Febrero 1999.
- Morley, Samuel. "La pobreza en tiempos de recuperación económica y reforma en América Latina: 1985-1995". En: *Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe*. BID/PNUD/CEPAL. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid-España, 1998.

Osborne, D. y T. Gaebler. *La reinención del Gobierno*. Ed. Paidós, España, 1997.

PNUD. *Human Development Report*, 1996.

PNUD. *Quién es quién en la institucionalidad centromericana: Algunas reflexiones sobre el proceso de integración*. Costa Rica, 1997.

Solís Rivera, Luis Guillermo. "La integración centroamericana: Los factores políticos

y su inserción en el sistema internacional". En: *Quién es quién en la institucionalidad centromericana: Algunas reflexiones sobre el proceso de integración*. PNUD-Costa Rica, 1997.

Tomassini, Luciano. "Estado, gobernabilidad y desarrollo". *Serie de Monografías*. Nº 9. Washington D.C., BID, 1993.

Carmen María Romero Rodríguez
Apdo. Postal 91-2150 San José, Costa Rica
laykar@sol.racsa.co.cr

UNA AUDIENCIA EN CRECIMIENTO LA PRENSA EN COSTA RICA (1872-1889)*

Patricia Vega Jiménez

RESUMEN

Este artículo estudia las causas y consecuencias del aumento de impresos periódicos en Costa Rica al finalizar el siglo XIX, la presencia de una audiencia cada vez más numerosa y la participación de la prensa como espacio de debate público de ideas. Se analiza la influencia de la educación en este proceso.

ABSTRACT

This article studies the causes and consequences of the increase of printed newspapers by the end of the 19th century, the presence of a growing audience, and the press participation as a debutable space of public ideas. You can notice, or analyze the educational audience during this process.

INTRODUCCIÓN

Para fines de 1870, el número de periódicos que circulan en Costa Rica, aumentan de manera significativa, ¿Qué elementos se conjugan para que este fenómeno se dé precisamente en este momento histórico? ¿Indica acaso la existencia de un público de lectores y de escritores sistemáticos en su papel de emiso-

res y receptores? Ya en 1884 se han dictado las leyes liberales, una serie de medidas tendientes a secularizar la enseñanza¹, reformar jurídicamente² el Estado, acción necesaria para

* Este trabajo forma parte de una investigación mayor financiada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. El número de proyecto es el 212-96-305. Agradezco la colaboración de los asistentes Karla Vázquez y Juan Manuel Fernández en la recopilación de información.

-
1. Sobre la reforma educativa véase, Fishel, Astrid. *Consenso y represión. Una interpretación socio-política de la educación costarricense* San José: Editorial Costa Rica, 1987. Y Muñoz, Ileana. "Estado y poder municipal: un análisis del proceso de centralización escolar en Costa Rica (1821-1882)". *Tesis de posgrado* en Historia, Universidad de Costa Rica, 1988.
 2. Sobre la reforma jurídica véase: Badilla, Patricia. "Estado, Ideología y Derecho: la Reforma Jurídica Costarricense (1882-1888)". *Tesis de posgrado* en Historia, Universidad de Costa Rica, 1988.

asegurar el orden requerido para la consecución del progreso materia³. En buena parte, estas acciones conducen a elevar el número de personas capaces de leer y escribir y lo que resulta trascendental es que los sectores populares ciudadanos aprovechan las posibilidades que se les ofrece para alfabetizarse⁴. ¿El aumento en los índices de alfabetización es corresponsable de que la cuantía de periódicos en circulación sea cada vez mayor? ¿Tiene participación también el desarrollo del mercado interno en tanto eleva las posibilidades del uso de la publicidad como forma de subvención de los impresos regulares? ¿Utilizan los responsables de los medios, estrategias para capturar la audiencia? ¿Se incorporan los sectores populares como parte de la audiencia de los periódicos? Respuestas positivas a tales preguntas hace considerar convincente el planteamiento que ubica a la prensa como el medio técnico necesario a través del cual se representa la comunidad política imaginada que es la Nación costarricense⁵, y lo es porque constituye, para 1880, el espacio donde las ideas son debatidas, reformadas, producidas y reproducidas, analizadas y finalmente apropiadas por un colectivo

cada vez más heterogéneo, disperso y anónimo. Esta es la hipótesis de la que parte el trabajo que se presenta⁶.

Derivados de los problemas planteados, los objetivos que este artículo pretende cumplir son los siguientes: conocer los factores que permiten el aumento de medios impresos en circulación en Costa Rica al finalizar el siglo XIX; determinar la participación de diversos grupos sociales como audiencia perceptora del contenido de los periódicos y analizar el papel de la prensa como el espacio para el debate público de ideas en el período comprendido entre 1876 y 1889.

Las fuentes primarias que sirven de base para comprobar la hipótesis planteada son los periódicos de la época: *El Costarricense* (1873-1876), *La Hoja* (1884-1885), *El Artesano* (1889), *Costa Rica Ilustrada* (1888-1892)⁷, *El Heraldillo*, *diario del Comercio* (1891-1899), *El Preludio* (1878-1879), *La Escoba* (1886). Se utilizan también los manuscritos de Adolfo Blen y la Colección de Leyes de Decretos así como los censos de población de 1864, 1883 y 1892 lo mismo que las Memorias e Informes de Instrucción Pública de 1885-1892.

Los objetivos se analizan en tres apartados: una prensa en crecimiento, espacios de debate público, el mercado y los periódicos y los temas de debate.

UNA PRENSA EN CRECIMIENTO

Para 1876, el número de periódicos que surgen en San José, ascienden a 6, cinco

3. Sobre el papel de la iglesia, véase: Vargas, Claudio. *El liberalismo, la iglesia y el estado en Costa Rica*. San José: Guayacán y Alma Mater, 1991

4. Molina, Iván. "Explorando las bases de la cultura impresa en Costa Rica: La alfabetización popular (1821-1950)". San José: Inédito, 1999, p. 7.

5. Sobre el nacionalismo oficial en Costa Rica véase: Palmer, Steven. "Sociedad Anónima, Cultura Oficial: Inventando la Nación en Costa Rica (1848-1900)". En: *Héroes al gusto y libros de moda Sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1900)*. San José: Editorial Porvenir, 1992, pp. 169-206, p.179-180. Respecto a literatura y nación véase: Ovares, Flora. *Literatura de kiosko. Revistas literarias de Costa Rica (1890-1930)*. San José: Editorial de la Universidad Nacional, 1994, p. 5. Ovares, Flora; Rojas, Margarita; Santander, Carlos y Carballo, María Elena. *La casa paterna Escritura y nación en Costa Rica*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1993. Una fuente básica es Anderson, Benedict. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Thetford Press Limited, 1983, p.15.

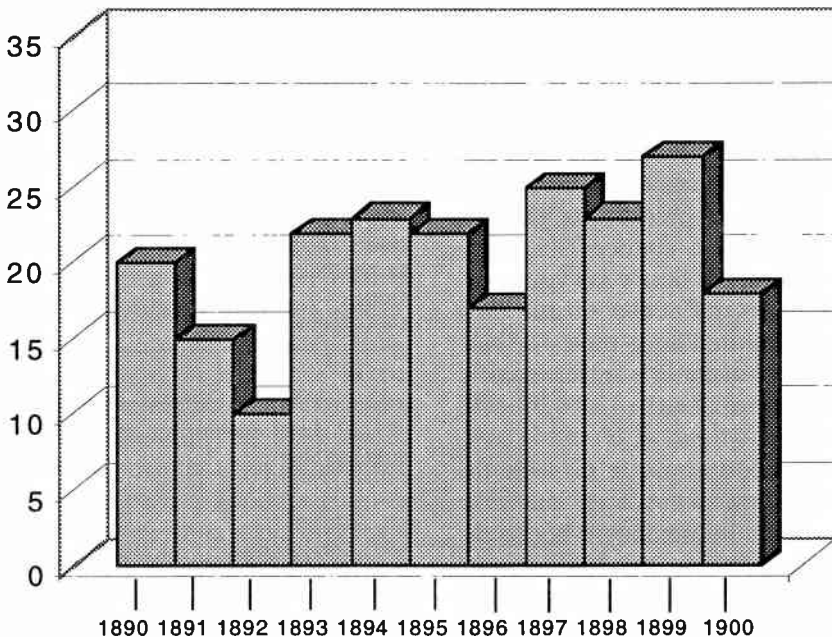
6. Sobre la prensa como espacio de debate público de ideas véase, Vega, Patricia. *De la imprenta al periódico Evolución de la prensa escrita costarricense (1821-1850)*. San José: Editorial Porvenir, 1995.

7. Se trata de una revista más que un periódico pues su contenido y periodicidad indican la diferencia. Sobre esta denominación véase: Ovares. *Op. cit*

años después aparecen 15, 33 en 1889 y 23 cuatro años más tarde. Los números demuestran que la cantidad de periódicos que inician su circulación entre 1876 y 1893, varía

significativamente. El nacimiento de hojas impresas, de vida muy efímera algunas de ellas, muestra una curva cíclica, como lo evidencia el Gráfico 1.

GRÁFICO 1
NÚMERO DE PERIÓDICOS EN CIRCULACIÓN POR AÑO
(1890-1900)



FUENTE: Blen, Adolfo *Manuscrito*. Inédito SF

Varios factores son los responsables de este fenómeno en ese preciso momento histórico: las campañas político-electorales, el nivel de autoritarismo del gobierno de turno, la capacidad tecnológica de los talleres de impresión, el crecimiento del mercado interno y la inserción real del país en el sistema capitalista y los cambios que esto genera en la composición social; más el aumento de la alfabetización tras las políticas dictadas por las instancias gubernamentales; y el interés por colocar en el tapete de la discusión pública, los asuntos que se consideran trascendentales para el futuro del país en el marco de las ideas liberales.

LA POLÍTICA Y LA PRENSA

A diferencia de lo que se ha escrito hasta ahora⁸, no todas las campañas políticas generan el nacimiento de publicaciones periódicas. Por ejemplo, en abril de 1876 se celebran elecciones con el objetivo de escoger al sucesor del General Tomás Guardia. El Lic. Aniceto Esquivel, en calidad de candidato

8. Morales, Carlos *El hombre que no quiso la guerra* San José: Seix Barral, 1981. El autor sostiene la tesis de que el periodismo en Costa Rica nace y muere por su vinculación a la política electoral.

único, es nombrado por unanimidad, Presidente de la República. Tres meses después, es derrocado por los militares y asume el Dr. Vicente Herrera. Un año más tarde dimite de su puesto y lo ocupa el General Guardia hasta mayo de 1882⁹. A pesar de tales cambios, la actividad política que se despliega no es tan significativa como lo será años después, y eso explica en parte el hecho de que no existe una expansión de impresos importante.

Cierto es que los enemigos de Guardia no se organizan para disputarle el poder quizá porque él no está dispuesto a ceder o porque un candidato de oposición no tiene oportunidad ninguna de triunfo en tales circunstancias¹⁰. Los dirigentes de las campañas políticas que ven en la prensa una palestra fundamental, para dar a conocer sus tesis, además de las plazas públicas y las visitas directas a los electores, no tienen en este momento interés de difundirlas a través de impresos pues las condiciones son adversas a todo aquel contrario a Guardia.

Paralelamente, aunque la mayoría de los periódicos no son políticos en cuanto a su contenido, resulta interesante el hecho de que son pocas las personas que hacen circular impresos hasta 1881, cuando disminuye el autoritarismo de Guardia. Las razones de tal ausencia tiene diversos asideros. Por una parte, hay un control del gobierno central sobre la prensa que se evidencia en el hecho de que, la mayoría de los semanarios son editados en las imprentas del Estado (véase el Cuadro 1), subvencionados por el gobierno buena parte de ellos además, se crea y aplica una reglamentación estricta sobre lo impreso; por otra, la calidad tecnológica del taller del Estado es superior a la de los otros establecimientos privados.

CUADRO 1
NÚMERO DE PERIÓDICOS EDITADOS POR LAS
IMPRENTAS POR QUINQUENIO (1872-1889)

IMPRENTAS	AÑOS			TOTAL
	1872-1880	1881-1885	1886-1889	
Álbum	2	4	2	8
Amistad	1			1
El Siglo			5	5
El Comercio		1	10	11
Flores y Flores		3		3
Francisco Pacheco			3	3
La Paz	6	10	10	26
La Tiquetera	5	7		12
La Lira	3	5		8
La Prensa Libre			3	3
Libertad	1	2	4	7
Lines			3	3
Miguel Marishal			3	3
Imprenta Nacional	14	10	3	27
La República	1		6	7
Otros	2	4	5	11
Desconocido	6	14	6	26
TOTAL	41	60	63	164

FUENTE: Blen, Adolfo. "Historia del Periodismo. Manuscrito", 1912.

En efecto, la imprenta nacional es controlada directamente por las autoridades gubernamentales. De hecho, en 1881, el reglamento de la Imprenta Nacional advierte en su primer artículo:

"La Imprenta Nacional dependerá de la Secretaría de Gobernación, en cuanto al nombramiento de sus empleados; y de la Secretaría de Hacienda, en todo lo que se refiere á contabilidad, productos y erogaciones"¹¹.

Pero, además del poder administrativo sobre la Imprenta Nacional, desde 1872, el gobierno de la República mantiene el control

9. Salazar, Orlando. *El apogeo de la República liberal en Costa Rica (1870-1914)*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990, pp. 175-176.

10. *Ibid.*, p. 175.

11. Colección de Leyes y Decretos. San José, julio 1881, pp. 18-19.

sobre todos los otros talleres de particulares que surgen en el territorio a través de la reglamentación existente. De esa manera, todo dueño de imprenta está obligado informar de la existencia del inmueble al gobernador de la provincia, brindando por escrito, el nombre del establecimiento y el lugar detallado donde se encuentra; de no cumplir con la disposición, el dueño tiene que cancelar al erario la multa de cien pesos y además

“...la imprenta con todos sus útiles caerá en comiso y la perderá en favor de la Universidad de Santo Tomás, á cuya Tesorería se aplicará la multa, así como las demás que se impongan...”¹²

La Biblioteca de la Universidad es también la depositaria obligatoria de un ejemplar de todo aquello que se imprima en el taller, 24 horas después de que sea puesto en circulación.

Con esta regla, el Estado liberal, aunque en teoría no participa en los asuntos económicos de la sociedad, en la práctica tiene una activísima participación en tanto es el encargado de proveer a la clase dominante de las condiciones necesarias para su crecimiento y controlar las actividades empresariales que se inician en el territorio. Además, tanto las políticas en salud como en educación son conceptualizadas por los políticos e intelectuales liberales como vitales para el desarrollo económico, por una parte, cuanto para el control social por la otra¹³. En síntesis, las leyes liberales en su conjunto contribuyen a ordenar internamente las funciones coercitivas del Estado con el fin de dar cohesión institucional mientras la reforma jurídica busca modernizar la legislación existente, al eliminar las limitaciones contenidas en ella que impiden un mayor dinamismo de la acu-

mulación capitalista por parte de los sectores dominantes¹⁴.

Por otro lado, para 1876 la Imprenta Nacional se equipa con cuatro máquinas de vapor, cilíndrica¹⁵, una tecnología que permite editar un mayor número de ejemplares a menor costo. No todos los talleres de impresión particulares pueden incurrir en una inversión de tecnología tan avanzada. Solo con esta maquinaria es posible competir con la imprenta del estado. A excepción del taller La Paz, de la familia Carranza, la mayoría de los que surgen entre 1872 y 1885 logran editar muy escasos periódicos y desaparecen en poco tiempo. Algunos venden las máquinas al Estado y/o a particulares interesados en el inmueble.

En efecto, el gasto promedio mensual de un taller de impresión asciende a 2157,38 pesos¹⁶. El rubro que requiere mayor inversión son los salarios y le sigue en importancia los gastos en tecnología, la mayor parte de la cual proviene de Estados Unidos, de casas distribuidoras ubicadas en Nueva York. Los comerciantes costarricenses juegan el papel de intermediarios entre las compañías estadounidenses y los dueños de las imprentas, lo que, sumado al costo del transporte y desembarque, sube vertiginosamente -50%- el monto del equipo. Lo cierto es que, para lograr mantener un taller en funcionamiento, se requiere de la venta constante de materiales. Los periódicos constituyen un producto importante dentro de la imprenta, cuyo mantenimiento necesita del apoyo publicitario, pues la venta a pregón, a 0,10 centavos el ejemplar, más los periódicos que por ley o por cortesía deben depositar en instituciones públicas dentro y fuera del país sin costo alguno, indica que el precio no es suficiente para mantener el taller

12. Colección de Leyes y Decretos. San José, octubre, 1872, pp. 211-212.

13. Molina, 1999, *Op. cit.*, p. 27.

14. Salazar, *Op. cit.*, p. 44.

15. ANCR, Gobernación, Nº 6666, folio 2.

16. ANCR, Gobernación, Nº 6666, folios 1-23

trabajando, en especial porque las ediciones no van más allá de los 600 ejemplares. Por lo general, los dueños de las imprentas, además de editar varios periódicos, realizan otras labores: publican libros, folletos, hojas volantes, materiales gubernamentales o, en algunos casos, se convierten en los proveedores de papel para la imprenta del Estado, como lo hace Rafael Carranza, dueño de La Paz, en 1876¹⁷.

Es claro que durante el gobierno del General Tomás Guardia existe un control sobre la prensa que se manifiesta a través de la subvención estatal, la manutención y vigilancia sobre la Imprenta Nacional y la inspección a los talleres y empresas periódicas, pero no hay evidencia de censura previa sobre los escritos. Es probable que tal limitación se diese de hecho pues los oponentes al régimen prefieren ocultar sus pensamientos por temor a represalias de la más diversa índole y por tanto no se enfrentan de manera decidida y clara al orden establecido.

A diferencia de lo que ocurre en América Latina¹⁸, donde los regímenes autoritarios toman drásticas medidas contra la prensa logrando desmembrar colecciones enteras y desaparecer títulos completos, en Costa Rica, no existen imposiciones determinantes de magnitud similar a la expuesta. Aun en los momentos más agudos, priva algún grado de libertad de exposición. Existen entonces otras formas de "censura"; el gobierno central se garantiza a través de la reglamentación, la imposibilidad de desarrollo de impresos. Es un control ideológico de dominación por medio de los valores que refuerza el discurso jurídico.

La evidencia parece indicar que el nacimiento de diarios tiene relación directa con el desarrollo tecnológico de los talleres de impresión¹⁹ y con la posibilidad que tienen las empresas periodísticas de sobrevivir sin la subvención estatal.

LA PUBLICIDAD Y LOS PERIÓDICOS

La impresión y puesta en circulación de periódicos es, por lo menos para la década de 1870, una actividad más filantrópica que capitalista. Algunos circulan por el interés personal del dueño de dar a conocer sus ideas. *El Semanal Josefino* de Antonio Argüello sale a la luz pública por unos cuantos meses, en 1876, y cierra aduciendo la enfermedad de su editor y redactor²⁰. La situación varía en la década siguiente de modo significativo.

Entre los años de 1840 a 1890, el café es virtualmente el único producto de exportación de Costa Rica. Las cíclicas crisis que sufre el país coinciden con la disminución en el número de impresos que nacen. Para 1875, en Europa hay una rebaja en el precio del grano y un descenso en el volumen de las exportaciones de Costa Rica y una situación similar se produce en 1885-86 y coincidentemente, la falta de circulante hace que descienda el surgimiento de nuevos impresos lo que conduce a pensar que la relación entre la estabilidad económica del país y el comportamiento de la prensa no parecen estar tan separados pues las empresas periodísticas se mantienen básicamente con el apoyo de dos rubros: la venta a pregón, la suscripción y la publicidad. El consumo de periódicos depende de la condición socio-económica

17. *Ibid.*, folio 78.

18. Sobre el control de la prensa en América Latina véase: Timoteo Alvarez, Jesús y Martínez Ríaza, Ascensión. *Historia de la prensa hispanoamericana* Madrid: Editorial Mapfre, 1992, p. 124-178.

19. Sobre el desarrollo de los talleres de impresión en este período véase: Vega, Patricia. "Entre la oscuridad y la luz. (El trabajo en la Imprenta Nacional 1868-1885)". En: *Comunicación y Cultura. Una perspectiva interdisciplinaria*. San José: DEI, 1998, pp. 41-64.

20. Blen, Adolfo. "Historia del periodismo en Costa Rica". *Manuscrito*, 1912, p.198.

del comprador, por tanto al disminuir sus ingresos, renuncia a aquellos gastos que no contribuyen a satisfacer sus necesidades básicas y el impreso entonces, es considerado un bien superfluo cuyo contenido se puede obtener a través del comentario, el chisme y el intercambio verbal en general o por medio del préstamo de ejemplares.

La publicidad por su parte, está aparejada con el crecimiento del mercado interno y el volumen de circulante, y se hará presente entrada la década de 1880 como una forma importante para financiar los periódicos. Al contraerse el mercado, los comerciantes sufren las consecuencias y, por tanto, disminuyen los montos destinados a la publicidad, situación que, en cadena, afecta la emisión de los diarios y semanarios.

En efecto, uno de los periódicos de mayor circulación en 1885, *El Diario de Costa Rica*, tienen un promedio de 15 avisos por día, lo que les permite un ingreso de 42.87 pesos, o sea, 1114,62 pesos por mes²¹. Si a esta cifra se suma la venta a pregón de 550 ejemplares aproximadamente²² por este concepto reciben mensualmente 1560 pesos²³. Los números evidencian que la venta directa y la suscripción siguen siendo las formas preferenciales para obtener recursos aunque la cesión de espacios adquiere un lugar preponderante en las puertas del siglo XX cuando se convierte en el principal sostén de los periódicos²⁴.

21. *Diario de Costa Rica*. 1-7-1885, p. 1. Los periódicos circulan seis días a la semana, los lunes no salen diarios pues el domingo es día de asueto.

22. Se disminuyen 50 números que es la cantidad aproximada que deben entregar de manera gratuita a distintas instancias gubernamentales. Un aviso tiene un costo de 0,05 centavos por centímetro.

23. *Diario de Costa Rica*. 1-7-1885, p. 4.

24. Para 1898 *El Heraldo* tiene un promedio de 58,25 avisos diarios. Para entonces los anuncios de medicamentos, alimentos y ataúdes o servicios mortuorios son los más destacados. Para ampliar información véase: Vega, Patricia. "Recién llegado de Europa". *Ponencia*. IV Congreso Centroamericano de Historia, Managua, julio, 1998.

Resulta fundamental el hecho de que los espacios destinados a la publicidad se multiplican a partir de 1880 de manera vertiginosa, situación que explica en alguna medida, la presencia en Costa Rica de una economía capitalista en expansión. Una característica fundamental de tal sistema es ofrecer los productos y servicios para que aumente la compra de modo que se obtenga capital para continuar con el ciclo de oferta y demanda. En esta tarea es fundamental incentivar la adquisición de bienes y servicios, por tanto la mercancía es mostrada con todos sus atributos positivos y se hace de manera exhaustiva en los periódicos, no en balde hay ya personas especializadas en esta forma de comunicación persuasiva; Luján y Mata son agentes generales de anuncios y venden sus servicios al *Diario de Costa Rica* en 1885²⁵.

El proceso se inicia ya en 1881, cuando la organización interna del periódico se torna más compleja. En ese año *El Mensajero*, un semanario editado en la Imprenta Nacional en colaboración con La Tiquetera, tiene además de un director responsable, Faustino Víquez, un redactor y un administrador y también varios agentes generales de avisos, hombres que buscan y diseñan la publicidad del impreso.

El uso de este tipo de comunicadores especializados se convierte en una práctica común a mediados de 1885 y, al finalizar la década, surgen periódicos dedicados exclusivamente a publicitar bienes y servicios de los diferentes establecimientos comerciales de San José o de empresas internacionales con sucursales en el país así como de productos nacionales o importados.

Ante esta situación, la corta vida de los periódicos se explica en gran parte por razones económicas más que político-electorales. Analizando un editorial publicado en *El Ferro-carril*, periódico semi-oficial y por tanto

25. *Diario de Costa Rica* 1-7-1885, p. 1.

subvencionado por el Estado, los redactores de *El Preludio* manifiestan su inconformidad con el contenido en tanto éste último señala como causa de la efímera vida de los periódicos costarricenses

"...la inconstancia de los que escriben y el indiferentismo de los que leen..."²⁶.

Los redactores de *El Preludio* más bien consideran que la corta existencia de impresos se debe a la falta de recursos económicos de los periódicos no subvencionados.

LOS ESPACIOS DE DEBATE PÚBLICO

Desde sus inicios, en 1833, los periódicos costarricenses son espacios de debate público de ideas, sitios donde se emite y se responde en colectivo. En la década de 1880, a pesar de la restricción gubernamental, los semanarios y diarios, siguen siendo los lugares donde se discute, se analiza y se les da forma a los pensamientos.

Los asuntos que se publican en un diario, son examinados en otros medios impresos e incluso se invita a participar en el debate de temas considerados trascendentales para el futuro del país. Los mismos gobernantes incitan a la opinión pública a participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, *El Preludio*, un semanario de la juventud costarricense que sale a la luz en 1879, advierte:

"Ha empezado á publicarse en el Diario Oficial el Proyecto de Código Penal formulado por el Doctor Don Rafael Orozco... *Se abre una discusión pública y se ofrece que el Gobierno tomará en consideración las observaciones que se hagan, al tiempo de la resolución de los puntos de que han sido objeto...*"²⁷.

Y el redactor señala con énfasis que, ante semejante oferta, el gobierno tiene que acatar los resultados de la discusión que abre. En tal sentido, señala la obligatoriedad moral de que "...todos aquellos que puedan tomar parte en ese intercambio de ideas..." lo hagan. De esa manera, ofrece un espacio en el medio impreso diciendo:

"Las columnas de nuestro periódico se considerarán muy honradas con los trabajos que nos remitan las personas que quieran salir á la arena á que se les llama"²⁸.

Solo dos respuestas llegan a la redacción y la discusión se detiene mientras el proyecto del Código Penal se reformula muchas veces hasta que una versión distinta se aprueba al iniciar el decenio de 1880.

Lo cierto es que existe una idea compartida por todos los editores de periódicos en el sentido de que las comunicaciones impresas, editadas periódicamente, constituyen medios de particular importancia para alcanzar el progreso y por ende la civilización. En noviembre de 1884, *La Hoja*, el quincenario de la sociedad científica-literaria "El Porvenir", no deja lugar a dudas sobre lo señalado, advirtiendo:

"No conocemos para esto [destruir el germen que impide el progreso para levantarse sobre el nivel de sus iguales y hacerse un lugar escogido entre las naciones civilizadas] otro medio más eficaz, porque lo creemos el único, que la institución y propaganda de ideas liberales..."²⁹.

Para hacer la labor de divulgación se utilizan diversas vías, una de ellas es el establecimiento de bibliotecas públicas, otra,

26. *El Preludio*. Nº 8. San José: 14-2-1879, p.29.

27. *El Preludio*. Nº 6. San José: 31-1-1879, p.21. El destacado es nuestro.

28. *Loc. cit.*

29. *La Hoja*. Nº 7, 8-11-1884, p. 49.

básica es la educación a través de la instalación de escuelas primarias y colegios de secundaria, considerado éste último "...[el medio] más poderoso y eficaz de todos"³⁰ y las publicaciones impresas.

"Otro medio, que estimamos tan eficaz como los apuntados para la propaganda de las buenas ideas, es el periodismo... el periodismo *es medio poderosísimo para la propaganda*"³¹.

Según el Estado Liberal, y aquellos que comulgan con estos pensamientos y tienen en sus manos los medios impresos, consideran a la educación y a la prensa —este último un instrumento de educación— como los elementos básicos para legitimar la idea de lo nacional que ellos promueven. Ambos juegan un papel de primer orden en el proceso de modernización del país.

Tal idea es acorde con la función, que a fines del siglo XIX, se cree que debe tener el periodista. Haciendo un paralelismo con un tribunal de justicia, asunto que preocupa mucho a los liberales de fines del siglo decimonónico, los editores de *La Hoja* dicen:

"El periodista es un juez; su tribunal es el periódico: sus testigos el público, y la sanción moral la alta corte que reprobaba ó acepta el fallo de sus actos"³².

En ese sentido, el periodismo oficial no es bien visto por los competidores pues su labor de juez de la cotidianidad se limita ante su compromiso con el Estado. El periodista es el guardián de la sociedad contra los excesos del Estado.

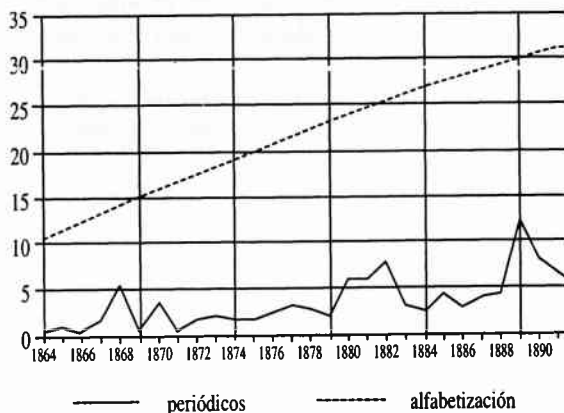
Llama la atención el hecho de establecer importancia similar a la educación y al periodismo. Este último constituye un instru-

mento fundamental para la difusión de las ideas, semejante a la labor de los maestros y los libros. Para las publicaciones impresas regulares, los estudiantes son todos los que tienen acceso a lo divulgado, por lo tanto, más que las escuelas primarias y secundarias, los periódicos alcanzan a un público que se torna más amplio, disperso y heterogéneo.

Esta última afirmación tiene sentido en tanto la edición regular de impresos está aparejada con la reforma educativa de 1886. No cabe duda de que tal acción efectivamente contribuye al aumento de la alfabetización en Costa Rica, coincidente con el aumento en el número de periódicos circulantes, como se evidencia en el Gráfico 2. La disminución del analfabetismo es especialmente evidente en las zonas urbanas, y es patente que se trata de un avance que alcanza a los sectores populares. Para estos grupos sociales, la educación se convierte en una necesidad y en una arma para conocer y defender sus derechos³³.

GRÁFICO 2

COMPARACIÓN NÚMERO DE PERIÓDICOS
POR AÑO Y LA ALFABETIZACIÓN
(1864-1892)



FUENTE: *Censos de Población de Costa Rica, 1864, 1883, 1892* y Blem, Adolfo. "Periodismo en Costa Rica". Man.

30. *Ibid.*, p. 50.

31. *Loc. cit.*

32. *La Hoja*. Nº 10, 20-12-1884, p. 79.

33. Sobre este asunto véase: Molina, 1999, *Op. cit.*, p. 5.

Es por ello que surge un interés de parte de grupos de artesanos y de particulares en abrir escuelas nocturnas para que los estudiantes aprendan a leer, escribir y además, obtengan la enseñanza técnica y los conocimientos productivos para la futura mano de obra de los talleres manufactureros³⁴. Así nace en 1875 la "Escuela Nocturna para artesanos" que llega a contar con 90 alumnos más una subvención estatal. Un éxito similar tienen las escuelas fundadas en Palmares y Heredia en 1884 y más tarde, en 1889, la "Escuela para artesanos" en San José.

De manera paralela, nace la biblioteca popular en 1889 abierta a todo público mientras surgen periódicos de interés particular para grupos obreros y artesanos. En 1883, José Chavarría edita en la Imprenta Nacional, *El Artesano*, un quincenal de efímera vida. Cinco años después, los impresores hacen circular *El Obrero*. Este grupo se caracteriza por conducir luchas reivindicativas desde la década de 1840, demandas que son escuchadas con especial cuidado y tratadas con cautela por los gobernantes pues se trata de un sector indispensable para la difusión del pensamiento de los grupos dominantes. Un año después, en 1889 surgen *El Artesano* y *El Demócrata*, editados por Alejo Marín y Gerardo Matamoros respectivamente. El primero es el órgano de la Sociedad de Artesanos mientras el segundo no pertenece a ninguna organización en particular, pero ambos dedican sus páginas a dar a conocer las luchas y logros de los trabajadores en otras latitudes y promueven y ejecutan discusiones en torno a las medidas que se toman o se promueven en Costa Rica y que afectan directa o indirectamente a este sector ocupacional.

La heterogeneidad y el anonimato de la audiencia de los periódicos, también se constata en la práctica generalizada para entonces de leer en voz alta los periódicos nacionales y extranjeros en los talleres y clubes políticos³⁵. Con este tipo de lectura, las noticias y las ideas contenidas en los impresos trascienden a los letrados y unido al comentario y al rumor, la dispersión se extiende sin posibilidades de medición certera alcanzando a un grupo cada vez más disperso, anónimo y heterogéneo.

A esto se suma el hecho de que los profesionales liberales no aumentan en una proporción similar al número de periódicos y de alfabetos en el país. El Cuadro 2 es claro en este sentido lo que indica que son los sectores no profesionales los que podrían estar en contacto con el contenido de los medios impresos de una manera más decidida que en las décadas iniciales del periodismo nacional.

CUADRO 2

COMPARACIÓN ENTRE PROFESIONALES Y ESCOLARIDAD (1864-1892)

	1	2	3
Maestros		219	482
Bachilleres		193	291
Ingenieros	8	13	18
Médicos	26	35	42
Boticarios	18	44	54
Abogados	33	78	92

FUENTE: Censo de Población de Costa Rica, 1864, 1883, 1892

Es probable que la prensa, desde esta perspectiva, contribuya a consolidar y/o a formar una incipiente "sociedad civil" en el país, ampliando el espacio público. Por lo menos en San José, se comienza a formar una "opinión pública" que se desarrolla en los años siguientes.

34. Oliva, Mario. "La educación y el movimiento artesano-obrero costarricense en el siglo XIX." En: *Revista de Historia*. Heredia, (Costa Rica). Nº 12-13 (Julio 1985-Junio 1986), pp. 129-150. P. 133.

35. *Ibid.*, p. 132.

Si se considera que el grupo gobernante ve en la enseñanza un medio para fortalecer el sentimiento nacional, difundir las ideas liberales que forman el credo político y sustentar a la propia institución estatal, así como un mecanismo para solventar las necesidades de personal de la administración pública en proceso de organización y expansión³⁶, el periódico se mide por las mismas razones.

No es extraño entonces el interés de los intelectuales y escritores de periódicos por discutir la metodología educativa que tiene que aplicarse en Costa Rica al finalizar el siglo decimonónico. Carlos Gagini, en el editorial de la revista *Costa Rica Ilustrada*, en agosto de 1891, recuerda que:

“En días pasados publiqué en “*El Herald*” unas notas relativas á la segunda enseñanza con el objeto de provocar una discusión... hasta ahora no he recibido más que dos promesas de contestación: una de “El partido Constitucional” y otra de “El Cometa”...³⁷.

La polémica en efecto se despierta, aunque las respuestas en este caso específico no son copiosas, en algunas coyunturas el intercambio de ideas se multiplica como ocurre tiempo antes cuando se discuten los asuntos relacionados con la secularización de los cementerios, la educación laica, la expulsión del obispo Thiel, la reforma jurídica, entre otros.

En 1877, Bruno Carranza edita en su imprenta *El Álbum*, un bisemanario denominado *La Reforma* con el objetivo de que el público que lo tuviese a bien opinara sobre las reformas del Ejecutivo³⁸; lo que no es po-

sible medir, por falta de evidencia, es la respuesta que produce su petición.

En ocasiones, se crean periódicos con el exclusivo fin de servir como respuesta a otro impreso circulante. En 1880, F. Mora edita *El Imparcial*, un semanario que trata asuntos educativos y expone opiniones diversas sobre el futuro del sistema educativo costarricense. Pocos números después de iniciar su divulgación, Francisco Chaves Castro edita *La Réplica*, con el único fin de responder al *Imparcial*.

Es claro entonces que a fines del siglo XIX en Costa Rica, la comunicación que se genera a través de las páginas impresas es a todas luces interactiva –por ello comunicacional–; así lo evidencian las respuestas y réplicas que se repiten constantemente. En ese proceso social se producen, transmiten y consumen significaciones sociales, por medio de las cuales se construyen pautas culturales en tanto crean identidades –individuales y colectivas– y modifican los comportamientos.

Las páginas impresas son medios para difundir valores, que a la postre se convierten en “dogmas” de la sociedad. Crear y recrear la historia nacional, es una labor que asumen como propia los responsables de los periódicos y con ella, crean y recrean la identidad del costarricense. En abril de 1891, los responsables de *Costa Rica Ilustrada*, piden:

“á las personas que posean datos interesantes acerca de la campaña del 56-57 ó de los principales hombres que en ella figuraron, les agradeceríamos mucho se sirvieran remitirlos á esta Redacción”³⁹.

Esta petición es abundantemente respondida por diversas figuras políticas, intelectuales y por artesanos de la época, lo

36. Muñoz, Ileana, *Op. cit.*, p. 280.

37. *Costa Rica Ilustrada*. Nº 25, 4-8-1891, p. 250.

38. Blen, *Op. cit.*, p. 219.

39. *Costa Rica Ilustrada*. Nº 27, 25-11-1891, p. 216.

que permite editar una revista dedicada exclusivamente a la campaña del 56-57 el 15 de setiembre de 1891, en la que se exalta de manera particular, la figura del héroe Juan Santamaría, con motivo de la develización de su estatua en Alajuela.

Esa edición tiene por objeto:

"...reunir en este número los principales escritos en que se ha hecho alusión á nuestro héroe". [Por tal motivo, incorporan] "un fragmento del discurso que el 15 de Setiembre de 1864 pronunció el ilustre orador colombiano don José Obaldía en el Palacio Nacional de San José." [Y recalcan] Este discurso tiene gran interés histórico *porque fue la primera publicación en que se habló de Juan Santamaría*. En él halló Alvaro Contreras, notable escritor hondureño, argumento para el artículo que también reproducimos"⁴⁰.

En ese número, además de las intervenciones de Contreras y Obaldía, se publican crónicas de Ramón Loría y Alberto Rodríguez, además del himno patriótico escrito por Emilio Pacheco y poesías de Justo A. Facio, Pío Víquez y Juan F. Feraz. La crónica histórica de la acción, titulada "Batalla del 11 de abril" son:

"párrafos de la Historia de la campaña contra los filibusteros [obra todavía inédita escrita por el artesano costarricense José María Bonilla]"⁴¹.

Esta nota del editor evidencia la contribución de un costarricense, que no pertenece al grupo de los profesionales liberales ni de los políticos, contribuyendo en la Revista. Ciertamente es que tal situación no es la nor-

ma. Por lo general, quienes escriben en los periódicos que no atañen al sector obrero y/o artesanal, son aquellos que militan en los grupos políticos e intelectuales de la época⁴². Esto deja en claro que a pesar de que el número de lectores aumenta, no ocurre lo mismo con la cantidad de personas que escriben en los medios impresos del país en el período en estudio.

Escribir significa exponer las ideas de una manera coherente, o por lo menos medianamente comprensible para una colectividad, cuidar las expresiones, la gramática y la ortografía, elementos que en conjunto requieren de un entrenamiento previo. En 1883, los que solamente leen, son menos de los que saben también escribir; la proporción es de un 11,75% y un 14,30% respectivamente⁴³. En 1892 la proporción se mantiene igual en el espacio de los lectores pero aumenta 5,52 puntos porcentuales en el caso de los costarricenses que saben leer y también escribir⁴⁴. Esto conduce a considerar que los ciudadanos en capacidad de contribuir con sus textos en los periódicos se reduce en comparación con la población global del país.

En todo caso, ambos, escuela y periódicos al finalizar el siglo XIX, construyen la identidad en un proceso aun inconcluso, y por tanto un sentimiento de pertenencia —a un territorio, a una comunidad, a una sociedad determinada diferente y diferenciada, anónima...— de acuerdo con un proyecto excluyente —el mito de la Costa Rica blanca es un ejemplo— que maneja el grupo de intelectuales-ideólogos del Estado. Sobre esta base se conforma el nacionalismo oficial costarricense.

40. *Costa Rica Ilustrada*. Nº 34, 15-9-1891, p. 272.

El destacado es nuestro.

41. *Ibid.*, p. 270.

42. Sobre los escritores de periódicos en Costa Rica en ese período, véase: Vega, Patricia. "De periodista a literato Los escritores de periódicos costarricense, 1870-1890". En: *Anuario de Estudios Sociales Centroamericanos*. San José, Costa Rica, Nº 22 (1), (1996). pp. 149-164.

43. Censo de Población, 1883, p. 90.

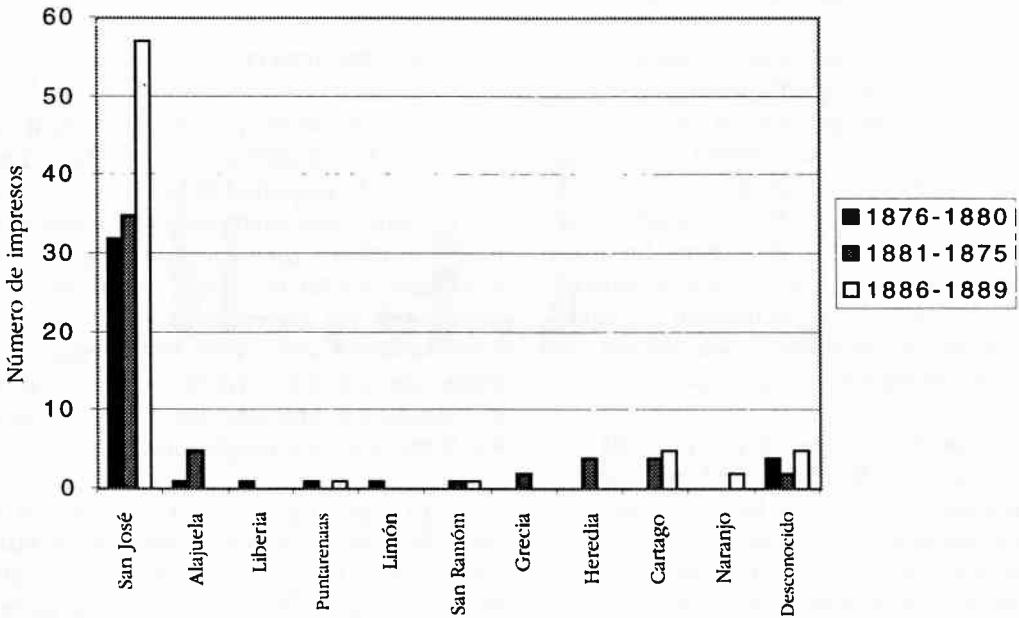
44. Censo de Población, 1892, p. CVII.

Entre tanto, los debates ya no se circunscriben al Valle Central, el ámbito de distribución y producción de los periódicos se

amplía a las zonas de nueva colonización agrícola, como se dibuja en el Gráfico 3.

GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PERIÓDICOS (1876-1889)



FUENTE: Blen, Adolfo. "Periodismo en Costa Rica". Man.

Llama la atención el hecho de que la producción de periódicos en el Valle Occidental del país coincida con los procesos de colonización y desarrollo agrícola de la zona⁴⁵. Además de San José, Alajuela y Cartago, se editan periódicos regionales en Grecia, Naranjo y San Ramón⁴⁶. Estos impresos circulan en su lugar de origen y en San José. Aunque no se trata de un número

elevado, el surgimiento de estos semanarios coincide con el momento —1880— en que el noroeste del Valle Central pasa a ser zona de emigración neta⁴⁷. En esta región predominan las unidades domésticas intermedias y, sobre todo, las excedentarias, esto es, para las primeras unidades domésticas con un equilibrio aproximado entre producción y consumo, mientras que en las segundas se ocupa fuerza de trabajo extra familiar⁴⁸.

45. Sobre el proceso de colonización agrícola en esa zona véase: Samper, Mario. "Los productores directos en el siglo del café". En: *Revista de Historia*. Heredia, (Costa Rica). Nº 7 (Julio-Diciembre 1978). pp. 123-217.

46. Sobre el desarrollo del periodismo en el Valle Occidental, véase: Villalobos, Carlos. "Hacia una contextualización del primer impreso comunal: El Ramonense 1881". En: *Comunicación y Cultura. Una perspectiva interdisciplinaria*. San José: DEI, 1998, pp. 65-88.

El detalle mencionado tiene por objeto enfatizar en el hecho de que existen las condiciones económicas necesarias para que los

47. Samper advierte que después de 1880 la población en el Noroeste del Valle Central siguió creciendo pero a un ritmo mucho menor. Véase, Samper, *Op. cit.*, p.136.

48. *Loc. cit.*, p.153 y 173.

pobladores consideren dentro de sus egresos un monto determinado para adquirir semanalmente un periódico e indica la necesidad de comunicación entre poblaciones que crecen económicamente y se toman más complejas socialmente. En efecto, para 1880, las distancias físicas que separan a las comunidades obligan a buscar formas de comunicación diferentes, alternativas a las tradicionales. La escritura se convierte en una manera distinta y efectiva de intercambio de información. La circulación multiplicada de lo escrito a finales del siglo XIX transforma las formas de sociabilidad, pero más aun, permite el surgimiento de nuevas ideas y modifica las relaciones con el poder. ¿Qué tanto fue esta transformación?; ¿Cuándo se inicia el proceso?; ¿De qué manera se evidencian los cambios?, preguntas cuyas respuestas deben esperar una investigación minuciosa.

Los periódicos que surgen más allá de las fronteras de la Meseta Central, se concentran en temáticas de interés local, educativo o literario, mientras los asuntos políticos no son considerados causas para la publicación de impresos regulares. Esta situación es un indicativo de la necesidad de intercambiar ideas sobre la comunidad particular, inserta en una mayor, anónima y nacional. Los pobladores se identifican como costarricenses, pero antes son miembros de espacios pequeños: Grecia, San Ramón, Naranjo...

Las imprentas encargadas del tiraje de estos impresos se concentran en San José en su mayoría, como lo hace Lorenzo Corrales, con *El Naranjeño* en 1889, cuyo trabajo de taller se realiza en La República, o *El Ensayo* que edita el mismo Corrales en la imprenta de Vicente Lines en ese año. Se trata de periódicos de dos o cuatro páginas que circulan semanalmente a 0,05 o 0,10 centavos el número suelto, el mismo precio al que se ofrecen los periódicos en la capital.

Por lo demás, los censos de 1883 y 1892 evidencian una importante elevación del alfabetismo en los cantones de Grecia, Atenas, Naranjo y San Ramón⁴⁹, lo que podría indicar la existencia de un mayor número de posibles lectores y escritores para los periódicos que ahí se editan.

LOS TEMAS DE DEBATE

Distinto de lo que ocurre al inicio de la actividad periodística en Costa Rica, quienes tienen la responsabilidad de los impresos regulares son intelectuales más que políticos, hombres que asumen el papel de ideólogos del Estado, cuyas ideas son apropiadas por los gobernantes y el colectivo. Estos hombres utilizan los instrumentos técnicos que son los periódicos para asegurar el consenso y propagar los valores culturales, homogéneos y progresistas.

La política electoral no ocupa la atención central de los periódicos costarricenses, más bien son los debates los que tienen un lugar de privilegio por lo menos en los quinquenios comprendidos entre 1881-1885 y 1886-1889, tal y como se muestra en el Gráfico 4.

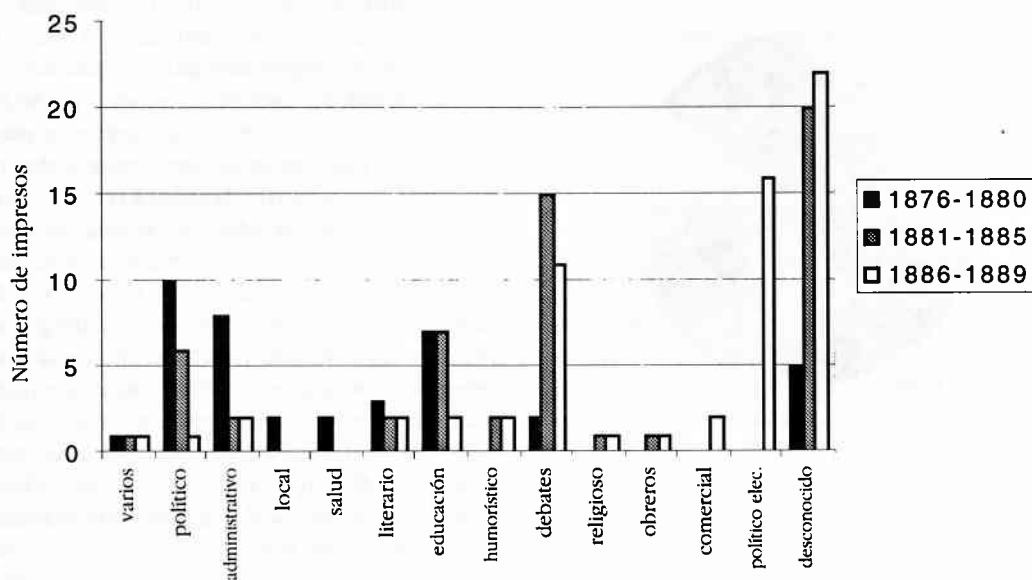
Se analizan temas religiosos, políticos, económicos, educativos, internacionales, etc., todo asunto que afecte los intereses particulares o colectivos es motivo de discusión amplia y sin reservas. Por ejemplo, cuando se examina la reforma educativa, casi todos los medios impresos con periodicidad regular se involucran en este asunto y definen posiciones, esto explica la alta proporción de notas sobre tal aspecto como se refleja en el Gráfico 4, entre los años de 1876 y 1889.

Los asuntos administrativos y políticos son prioritarios en los periódicos gubernamentales más que en los particulares. La situación política electoral de 1889 explica, en buena medida, la presencia de temas

49. Molina, *op. cit.*, p. 7.

GRÁFICO 4

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE LOS PERIÓDICOS (1876-1889)



FUENTE: Blen, Adolfo. "Periodismo en Costa Rica". Man.

en este sentido. Ese año es particularmente importante en el desarrollo político nacional porque se inicia una participación significativa de las masas en una campaña electoral, los partidos políticos adquieren ciertas características que permiten calificarlos como tales y porque se determina el retiro de los militares de su intervención directa en la vida política del país⁵⁰. La efervescencia es evidenciada en la cuantía de periódicos que circulan ese año. Escribir escondiendo la presencia física tras la palabra impresa, y dirigirse a un grupo de personas desconocidas, anónimas, afirmando y refutando tesis parece funcionar como una forma de liberar sentimientos, de catarsis individual y colectiva.

En todo caso, los periódicos que surgen en esos momentos de exaltación, tienen un interés político coyuntural, no pre-

tenden convertirse en órganos de expresión por tiempo indefinido ni en hojas informativas similares a las que circulan entrado el siglo xx.

Los debates siguen siendo los temas más importantes para los editores de periódicos, y así lo refleja el Gráfico 5.

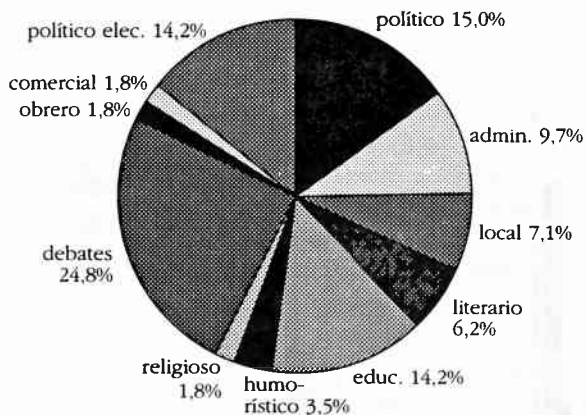
Para entonces, la literatura inicia su forma de expresión decidida con la "Generación del Olimpo", un grupo de intelectuales que se dedican con rigor a la literatura. Son el fruto de una escisión al interior del grupo oligárquico liberal. Al no ocuparse de los negocios, asunto que atienden otros, se convierten en los intelectuales e ideólogos del estado, quienes no necesariamente son los políticos, como ocurre hacia mediados de siglo⁵¹.

50. Sobre el desarrollo político de este período véase: Salazar, *op. cit.*, p. 44.

51. Quesada, Alvaro. *La formación de la narrativa nacional costarricense (1890-1910)*. San José: EDUCA, 1986, p. 96.

GRÁFICO 5

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA (1876-1889)



FUENTE: Blen, Adolfo. "Periodismo en Costa Rica" Man

Estos escritores constituyen un apoyo de primer orden en el esfuerzo liberal por crear pautas culturales nuevas. Ellos impulsan los cambios en la instrucción pública y definen su pensamiento en los periódicos y a su vez, utilizan estos instrumentos como herramientas para divulgar la nueva concepción de mundo que a la postre, se convertirá en el elemento dominante.

EPÍLOGO

Al principio de este trabajo se plantean varias preguntas que son la guía de la exposición siguiente. Los cuestionamientos surgen de un dato numérico que llama la atención: los periódicos aumentan cuantitativamente en la década de 1880 y mantienen una tendencia ascendente en los años noventa del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX.

No cabe duda de que este fenómeno es el producto de una diversidad de factores que confluyen en esa coyuntura específica. Por una parte, no cabe duda de que la política

electoral es un factor desencadenante de medios impresos. Los políticos luchan por ganar adeptos y utilizan los periódicos para difundir sus tesis. Pero más aun, es importante el grado de autoritarismo del gobierno de turno. El mandato de Guardia es a todas luces de fuerte represión para la emisión del pensamiento, lo interesante es que no se evidencia a través de una censura previa manifiesta sino por medio de mecanismos de control menos claros: la legislación que regula los talleres y la circulación de periódicos, el dominio de la tecnología indispensable para la impresión y la autocensura de los posibles emisores. Terminado este período de gobierno, hay un aumento paulatino de medios impresos hasta que en 1889 alcanza su punto más alto durante la campaña electoral de Esquivel y Rodríguez, una situación coyuntural que no indica que este tipo de actividades sean la causa única del surgimiento y muerte de periódicos en el país.

El aumento de la población capaz de leer y escribir condujo a la conformación de una audiencia cada vez más dispersa, heterogénea y anónima de los periódicos. Efectivamente, las escuelas para artesanos y obreros, igual que las bibliotecas públicas y la lectura en voz alta en los talleres y sitios de reunión, permiten diseminar el contenido de los periódicos más allá de los círculos de la "intelligentsia" de la época.

Además, la existencia de un mercado interno en expansión permite que los ciudadanos tengan la capacidad monetaria para la adquisición de periódicos pero además, a través de la publicidad, se consolidan empresas periodísticas sin subvención estatal, abriendo así el espectro de opciones de lectura para la población.

Todo esto lleva a que los periódicos se consoliden como espacios de debate público de ideas al finalizar el siglo XIX, aun cuando la política gubernamental limita la circulación de impresos. Esta situación evidencia la importancia que tiene el medio

impreso para divulgar la obra administrativa y para involucrar en el proceso de toma de decisiones a un espectro mayor que el del grupo gobernante, sin pretender un proyecto incluyente.

Aun si, a la postre, las disposiciones se dictan verticalmente, el solo hecho de solicitar la opinión de la comunidad es un indicador importante de la interacción que el grupo liberal, coherente con su pensamiento, busca mantener a lo largo de la historia.

Es esta apertura la que permite la diseminación de las ideas liberales y la conformación de una identidad proto-nacional y nacional que aglutina a la comunidad costarricense.

Los avances tecnológicos más las condiciones económicas que favorecen el crecimiento comercial en Costa Rica, permiten la publicación de impresos con regularidad y constancia. Los avisos comerciales, cada vez más publicitarios y el ingreso decidido de Costa Rica en la lógica capita-

lista, ayudan a consolidar un periodismo dinámico y participativo.

La pregunta que surge es ¿participativo para quiénes? La respuesta es inmediata. Quienes escriben en los periódicos, quienes responden a los llamados de los grupos gobernantes son aquellos que tienen acceso a los impresos, los que cuentan con el importe necesario para ver publicadas sus ideas, por una parte, y los que tienen algo que decir según su concepción de mundo. Estos últimos, por lo general, han tenido algún acceso a la educación formal dentro y fuera de Costa Rica. Son los discípulos de la Universidad de Santo Tomás o de los Colegios San Luis Gonzaga y Liceo de Costa Rica. Son los intelectuales, los ideólogos del Estado, los que divulgan sus valores y creencias, las discuten y las construyen y, finalmente, son apropiadas por el vulgo. De esta manera, colaboran, junto con la educación y la familia, a definir y crear los mitos sobre los cuales se construye el nacionalismo oficial costarricense.

Patricia Vega Jiménez
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Costa Rica
deliyore@sol.racsa.co.cr

LA NECESIDAD DE LA MULTIRRACIONALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA AGROECOLÓGICO Y EL DESARROLLO RURAL

Jairo R. Mora Delgado

RESUMEN

En el presente documento se discuten algunos aspectos conceptuales que necesitan ser considerados en la investigación rural, para entender mejor los sistemas complejos, como lo son las comunidades rurales y los sistemas de producción campesinos. En el documento se revisa la naturaleza de los tipos de conocimiento local y científico. Además, se discute la necesidad de aprehender los conceptos de "multirracionalidad" y "anfíbio cultural" como base para entender los procesos organizacionales, productivos, simbólicos presentes en las comunidades rurales. Esta reflexión teórica es fundamental para la construcción de un paradigma agroecológico y el desarrollo rural.

ABSTRACT

This paper discusses conceptual issues about rural research that need to be considered in order to understand the complexity of rural communities and peasant production systems. This paper reviews the nature of both local and scientific knowledge. In addition, it discusses the necessity to comprehend the multi-rationality and "amphibian cultural" concepts in order to understand the organizational, productivity, symbolic and cultural process present in the rural communities. This reflection is very important in building an agroecological paradigm and rural development.

INTRODUCCIÓN

Después de los años cincuenta los intentos por modernizar el sector rural, han pululado en los diferentes países del llamado tercer mundo. Para tal efecto los centros y agencias internacionales de investigación y los institutos nacionales encargados de la generación y transferencia de tecnología agropecuaria, han ensayado diferentes modelos de investigación y extensión (conocidos como Modelos de Desarrollo Rural) para los productores campesinos, sin que los cam-

bios obtenidos en el bienestar, la productividad de los factores de producción y la conservación del ambiente sean significativos. Por el contrario, la pobreza rural se ha agudizado, la productividad de los factores cada vez es menor y los ecosistemas y sus recursos naturales (suelo, biodiversidad, agua y bosques) continúan siendo degradados. Es decir, que los modelos tecnológicos creados para "modernizar" los sistemas de producción campesinos continúan sin adoptarse y el desarrollo social, tecnológico y humano aun no se han alcanzado.

Las explicaciones usuales a esta situación, emitidas desde la lógica del saber académico especializado, se basan en el "tradicionalismo" de los pequeños productores, su aversión al cambio, o a la ineficiencia en los medios de extensión. Sin embargo, dos tipos de preguntas subyacen a tal razonamiento. Primero, es si la falta de adopción de tecnología moderna tiene origen en el proceso de transferencia (medios y métodos), en el supuesto tradicionalismo del campesino, o si más bien es un problema de la percepción de quienes hacen las explicaciones a la problemática rural y de la esencia de los productos tecnológicos que sobre tales explicaciones se han creado. En segundo lugar, cabe preguntarse, si hay que continuar con los esfuerzos por transferir los modelos tecnológicos de la agricultura moderna, inspirada en la Revolución Verde, hacia los productores campesinos, o si más bien, lo que se requiere es la construcción de un nuevo modelo de agricultura amigable con el ambiente, socialmente aceptable y económicamente viable: un paradigma agroecológico.

En lo personal, me inclino a pensar que el desplazamiento entre lo transferido y lo adoptado es consecuencia de un abordaje y explicación unidimensional y monometodológicos (reduccionista) de los objetos-sujetos, y por lo tanto de las soluciones. Dicha aproximación, ha privilegiado la racionalidad científica, despreciando otras formas de abordaje de lo "real", excluyendo así caminos alternativos al método experimental para la aprehensión o construcción de la realidad. Es decir, ha predominando, la lógica analítica, propia de las ciencias que funcionan bajo la racionalidad cartesiana. Si bien, el aporte al conocimiento de la ciencia positiva ha sido y será importante en la construcción de discursos científicos especializados, para la comprensión de los sistemas complejos, como los agrarios, no es suficiente.

Hoy en día, es necesario rescatar la diversidad de las formas de producción y consumo, como una alternativa a la homogenei-

zación que nos impone el modelo de desarrollo rampante. Para ello, se hace imprescindible *comprender* los sistemas complejos (v.g. sistemas de producción campesinos) para así poder propiciar modelos de producción agrarios, capaces de autorreproducirse e interactuar con el resto de la sociedad, sin perder autonomía; es decir, sistemas que privilegien el desarrollo humano de la unidad familiar; que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los sujetos (seguridad alimentaria, recreación, solidaridad), y alcancen una armonía entre su dinámica cultural (forma de producir, consumir, organizarse y representarse) y la dinámica de los sistemas naturales (ecosistemas), en un mundo que cada vez se vuelve más integrado y dependiente de la lógica del mercado.

Para contribuir a este propósito, los académicos agrarios del tercer milenio deberían formarse como "anfibiaos culturales", capaces de comprender las diferentes racionalidades (multirracionalidad) que están presentes en las sociedades rurales (campesinos, indígenas, colonos, jornaleros); comprender la lógica de las diferentes disciplinas que los estudian (transdisciplinariedad) y ser permeables a la posibilidad de construcción de conocimiento por diferentes vías (pluralismo metodológico). Esta actitud y capacidad teórica e instrumental, le permitirá al profesional agrario abordar los sistemas tecnológicos, organizativos y simbólicos de los pequeños productores como una totalidad, y en consecuencia, las alternativas de cambio desborden lo meramente técnico, para acoger los modelos de cambio sistémicos. Es decir, comprender holísticamente para transformar holísticamente.

Este trabajo presenta algunas reflexiones, sobre los temas mencionados anteriormente, generadas a partir de experiencias personales vividas como asistente técnico y consultor en zonas de economía campesina localizadas al sur de Colombia, y a partir del acceso a las reflexiones epistémicas realizadas por diferentes teóricos de las ciencias

sociales y naturales. Las ideas aquí expuestas se han organizado alrededor de la argumentación de dos hipótesis de trabajo, las cuales a continuación se desarrollan.

HIPÓTESIS 1

El conocimiento de los ámbitos rurales se ha abordado desde la rigidez de la ciencia positiva, privilegiando la construcción de enunciados racionales y despreciando las prácticas, discursos y cosmovisiones locales que funcionan bajo otras formas de razón o emoción

Ya los pensadores griegos entendían por racionalidad al proceso mental de discernimiento cuidadoso de las experiencias empíricas, mediado por el sistema de valores culturales, el cual se reproduce a través del lenguaje. Tal forma de pensar constituiría una piedra angular después de muchos siglos en la denominada Revolución de la Ciencia (siglos XII y XIII), acaecida con el desarrollo de las ciencias naturales, como la física y la astronomía, y la matemática. El advenimiento de estas nuevas ciencias, a partir de los descubrimientos de Roger Bacon, Galileo Galilei, y la posterior sistematización del pensamiento científico por parte de Descartes, inaugura una nueva forma de concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza basado en la razón. Si bien, dicho cambio representó un modelo de pensamiento liberador frente al oscurantismo premoderno, la emancipación propuesta por la razón en los albores de la modernidad, termina por autonegarse en nombre de la razón misma (Hoyos, 1989). Hoy en día, la razón instrumentada, ha producido una "ceguera epistémica" que impide comprender la riqueza de las interacciones que suceden en los sistemas complejos.

A su vez, las ciencias agrarias heredan dicho estatuto teórico y sustantivo, de las ciencias naturales, como lógica consecuencia del hecho de que estas últimas fueron sus

predecesoras principales. Valga aclarar que tal sesgo subsiste en los programas de las ciencias agrarias de las universidades latinoamericanas, a pesar de la importante contribución de las disciplinas sociales (v.g. la economía, la administración, la sociología, etc.) a la configuración de su perfil académico, como disciplinas que se ocupan del estudio del uso de los recursos agrarios para beneficio del hombre. En este orden de ideas, el pensamiento analítico, el interés técnico de predicción y control sobre el entorno natural, la obsesión por la construcción de evidencias objetivas y el privilegio del conocimiento sujeto a fines, serían algunas de las características que los discursos agrarios heredaron de la ciencia positiva.

LA REVOLUCIÓN VERDE: UN MODELO REDUCCIONISTA

El sistema racional en las ciencias agrarias, y en particular en la agronomía, llega a su máxima expresión con el modelo tecnológico de la Revolución Verde. En adelante, los objetos de estudio privilegiados por los agrónomos serían las partes escindidas del sistema (v.g. la raíz de la planta, el insecto, el hongo, el perfil modal del suelo, la célula, la molécula, etc.), bajo la creencia de que el conocimiento profundo de las partes y el posterior ensamblaje acumulativo de los resultados de conocimiento parciales, permitirían conocer al objeto en su totalidad y por lo tanto predecir su dinámica y poderlo transformar¹. Sin embargo, si bien la lógica del pensamiento analítico, funciona exitosamente en la explicación y predicción de los sistemas simplificados (v.g. monocultivos, cultivos *in vitro*, sistemas de hidroponía, etc.), no es suficiente para el entendimiento de los sistemas complejos, como lo son las comunidades rurales de campesinos, indígenas y/o colonos, y sus respectivos sistemas de organización social y de la

1. Ejemplo de esto es la investigación por especialidades que se impuso en los centros internacionales de investigación agrícola en los años 70 y 80.

producción (fincas, chagras, milpas, etc.) en sus diversos arreglos productivos espaciales y temporales.

Lo anterior ya había sido sugerido por Pimbert (1996), quién señala que las tendencias simplificadoras de la ciencia reduccionista son bien compatibles con la simplicidad ecológica y social de los sistemas agrícolas estandarizados y especializados. Empero, tal modelo de transferencia tecnológica en investigación agrícola, basado en el modelo de sistemas agrícolas de escala, ha tenido un éxito limitado en el contexto de los ambientes complejos, diversos y propensos al riesgo, en los cuales habita la mayor parte de la población rural del mundo y de la cual en muchos países depende más de la mitad de la producción de alimentos. Se estima que aproximadamente 1400 millones de personas dependen de la agricultura tradicional (Pimbert, 1996).

En estos ambientes complejos interactúan una diversidad de elementos bióticos, físicos, simbólicos, diferenciados y cambiantes en el tiempo y en el espacio, lo que hace que estos sistemas sean ricos y, así mismo, complejos para su entendimiento y naturalmente para su predicción y control. En dichos sistemas el "saber popular" cultura juega un papel preponderante, y bien podríamos decir que lo que se ha denominado con este nombre constituye el cúmulo de elaboraciones discursivas, prácticas y simbólicas, resultantes de la percepción e interacción del hombre con el medio biofísico, el cual ha sido configurado a través del tiempo, transmitido de generación en generación y modificado en función de las particularidades espaciales, temporales o sociales.

De ahí que el abordaje de tales sistemas requiere de una apertura mental, por parte de los investigadores, que les permita comprender que los arreglos productivos (sistemas de producción), las finalidades de los componentes, prácticas de manejo, distribución espacial y temporal, estrategias de manejo, etc., están íntimamente relacionadas

con la manera de concebir el micro y macro universo en el que están inmersos. Esto es, que el sistema de valores que en las localidades se construye en función del ambiente macro (naturaleza), el ambiente micro (la parcela), las relaciones intrafamiliares, y de esta con el resto de la sociedad y el mercado, es el que define la dinámica del sistema productivo y cultural rural. En otras palabras, se trata de comprender la racionalidad de dichos sistemas para poderlos estudiar.

LA RACIONALIDAD RURAL NO ES UN SISTEMA COGNITIVO HOMOGÉNEO

Naturalmente que el proceso de racionalización que se desarrolla en las sociedades rurales, es variable en el espacio y en el tiempo, según sean las condiciones materiales y culturales que imperen en los ambientes particulares. De ahí que no se pueda hablar de una racionalidad rural como un sistema cognitivo homogéneo, sino de racionalidades rurales diversas. Basta dar un vistazo a la diversidad de creencias, prácticas agrícolas, percepciones del tiempo y el territorio, taxonomías locales de suelos, plantas y animales, que se encuentran en las comunidades rurales de Centro y Sur América, para entender que el microcosmos de campesinos, indígenas, negros, colonos, campesinos sin tierra, etc., varía dependiendo de que estén en las llanuras o en las colinas, en las selvas húmedas tropicales o en las zonas desérticas, de que predominen familias nucleares o extendidas, de que estén más o menos articulados a los procesos agroindustriales y mercantiles, o que sean comunidades viejas o jóvenes (colonos). Esto demanda por lo tanto, un amplio conocimiento de la historia.

Por su parte, los agentes externos que usualmente intervienen en dichas comunidades (sean extensionista, investigador, promotor de desarrollo, trabajador social, etc.) generalmente están equipados de un sistema cognitivo y cognoscitivo configurado en los centros formales de instrucción (universidades,

centros de investigación, institutos tecnológicos, etc.), que desde su diseño fue concebido como única opción instrumental y conceptual apropiado para el descubrimiento y transferencia de "la verdad": el modelo empírico-analítico de la ciencia.

No sobra recordar que el modelo empírico-analítico solo da crédito al método experimental de las ciencias naturales, como única vía para conocer los objetos. En esta lógica los objetos existen independientemente del observador y por lo tanto entre más distancia se mantenga entre los investigadores y el objeto estudiado, mayor garantía de objetividad y de neutralidad valorativa tiene el proceso y los resultados. Bajo este supuesto el proceso de conocimiento debe ser aséptico a las inclinaciones valorativas del observador, pues las interpretaciones, juicios, emociones, intuiciones, son consideradas como carentes de confianza. Solo lo medible y cuantificable, es digno de confianza, o como lo rezaría la sentencia de Roger Bacon:

"... todo es cuantificable y lo que no es cuantificable hay que volverlo cuantificable ...".

Sin embargo, con las reflexiones de epistemólogos del neopositivismo como Popper, Kuhn, Lakatos, y los posteriores aportes de Feyerabend, algunos de ellos inspirados en la ruptura que para la rigidez de las ciencias naturales representó la teoría de la relatividad de Einstein y el establecimiento del principio de incertidumbre con el advenimiento de la mecánica cuántica, se da un rompimiento con el mito de la infalibilidad de la ciencia. En adelante, la ciencia ya no sería la certeza sino la hipótesis; esto significa que una teoría probada no lo es definitivamente y sigue siendo refutable (Morín, 1996). En este orden de ideas, bien podría decirse que en adelante la ciencia misma ya no sería tan científica como antes se creía, pues siempre estará sujeta a sucesivas refutaciones, falsaciones, pruebas, rectificaciones y modificaciones, tanto en sus lógicas como en

sus métodos. Como consecuencia, la fe exagerada en la razón comienza a tambalear para dar paso a posturas mentales flexibles que si bien valoran la razón, no la consideran el único dominio de coherencias operacionales para acceder al conocimiento y a la convivencia humana, sino como uno más que coexiste paralelamente con otros sistemas operacionales de base emocional o mítica.

Al respecto, Maturana (1998) señala que la razón tiene una posición central en la cultura occidental, y en gran medida tal predominio se lo debemos al sistema cognitivo reproducido en la cultura de la modernidad, en particular, a la difusión de los argumentos racionales como única opción confiable para comprender el mundo, avalado por el modelo de la ciencia positiva. Sin embargo, en las comunidades complejas coexisten diferentes maneras de razonar, diferentes motivaciones para emocionar, y todo acontece en el lenguaje que es desde donde hacemos las definiciones y discusiones.

El autor antes citado explica que las culturas no difieren en la racionalidad, sino en las premisas aceptadas implícita o explícitamente, bajo las cuales ocurren sus diferentes tipos de discursos, acciones y justificaciones de acciones. Esto nos da pie a pensar que la comprensión de las premisas racionales que diferencian los sistemas operacionales de científicos y campesinos, es condición *sine qua non* para lograr la comunicación y la comprensión de sus respectivos dominios de realidad. Es más, ciertas conductas, prácticas y discursos del hombre campesino (y también del científico!) muchas veces no corresponden a maneras de razonar, sino que tienen un carácter emocional.

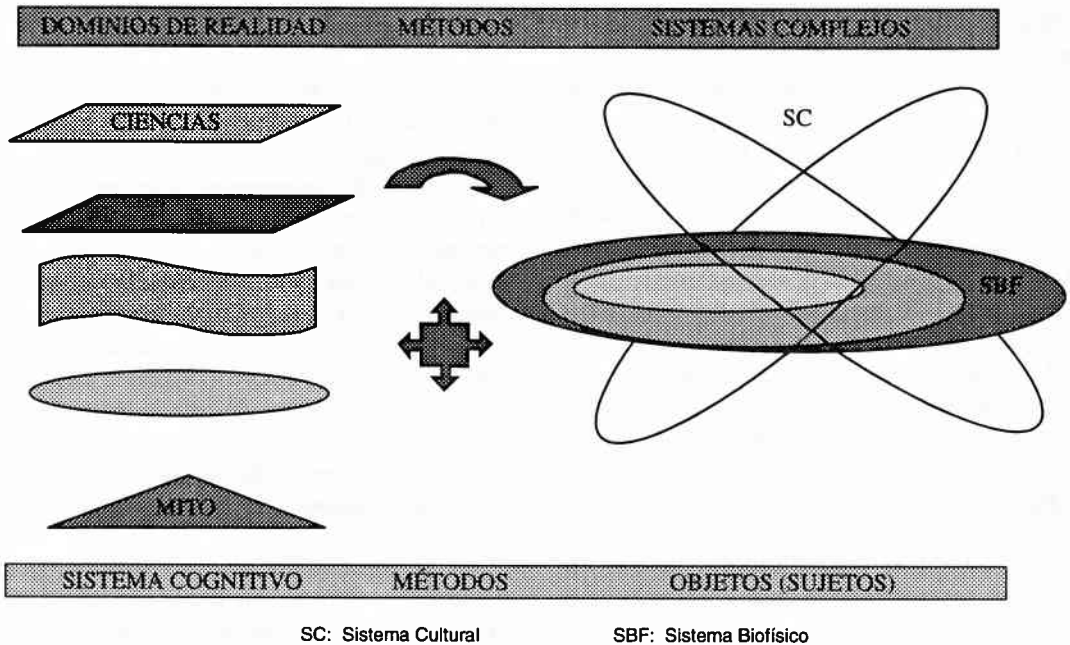
En este orden de ideas, el abordaje de los objetos de estudio, y la construcción de los mismos, está mediado por el sistema de coherencias operacionales de la racionalidad del observador (investigador), es decir, del dominio de realidad en el cual este último se este moviendo, así, el mismo objeto (v.g. un

ecosistema) será diferentemente definido y analizado por un sujeto que se mueva dentro del dominio de verdad de la racionalidad

científica, a la definición que establece quien se mueve dentro de una racionalidad mítica (figura 1).

FIGURA. 1

PERCEPCIONES E INTERPRETACIONES



Y si a esto se le agrega que en la cotidianidad de la vida rural coexisten (y se mezclan) diferentes racionalidades (o sea dominios de realidad), que se configuran en función de su historia, de su relaciones con la sociedad mayor y el ambiente, etc., fácilmente se entiende la necesidad de comprender las coherencias operacionales de las diversas racionalidades, para así poder navegar entre ellas y comprender las explicaciones que cada una construye sobre el entorno natural (sistemas de producción, ecosistemas, paisaje, etc).

HIPÓTESIS 2

Dadas las dificultades de los sistemas cognitivos científico-racionales para la com-

prensión de los sistemas complejos, los académicos agrarios del tercer milenio deben formarse como "anfibiaos culturales", capaces de desenvolverse cómodamente en diferentes tradiciones culturales, comprender diferentes discursos y ser capaces de transitar diferentes caminos; esto les permitirá facilitar la comunicación entre ellos.

Esta reflexión es necesaria para entender que el investigador del tercer milenio debe estar equipado de un sistema cognitivo que le permita navegar en los diferentes dominios de realidad que subyacen a los sistemas complejos, para así comprenderlos y poder actuar bajo sus lógicas o bajo la "hibridación" de ellas. Es decir, se trata de formar una generación de nuevos científicos

“anfibios culturales”, capaces de desenvolverse cómodamente en diferentes ambientes². Y, quienes fuimos formados bajo un modelo educativo que nos limitó la libertad de la mente, a nombre del desarrollo de la inteligencia, aún podemos vivir un proceso de des-educación que nos permita “permeabilizar” el sistema racional, para acceder a otras posibilidades, sin soportar sensaciones de culpabilidad por el abandono de la “formalidad científica” y retornar a la creatividad del libre pensamiento.

LA APERTURA MENTAL: UN REQUISITO PARA LA COMPRESIÓN DE LA COMPLEJIDAD

Considero que este es un buen punto de partida para el abordaje de los sistemas rurales complejos, pues tal actitud, posibilita el estudio de los sistemas en su amplia riqueza material y simbólica, en la medida que la comprensión de los mundos paralelos que coexisten en las comunidades rurales solamente puede ser entendida desde otras aproximaciones diferentes a la razón moderna. Así, para comprender las categorías taxonómicas de plantas, animales y suelos, que establecen campesinos e indígenas; la existencia de espacios y plantas sagradas dentro de los bosques tropicales; la presencia de gnomos, dioses, duendes cuidadores del agua y las plantas en los espacios creados por la racionalidad campesina e indígena³; entender la lógica de las creencias sobre las influencias de la luna sobre los cultivos y las viruelas del ganado; entender las estrategias productivas para interactuar con el mercado; entender las formas de organización social, en resumen, entender el mundo simbólico de las comuni-

dades rurales, indudablemente demanda flexibilizar la pesada cuadrícula racional que el investigador convencional carga en su cabeza.

Al respecto Pimbert (1996) señala que los científicos agrícolas tienen la tendencia de percibir los sistemas agrícolas a través de la estrecha ventana de su disciplina profesional. Yo diría que esta ventana es cada vez más estrecha a medida que se asciende en *un tipo* de abstracción disciplinaria que escinde los objetos del contexto, o lo que dentro de la jerga de la ciencia moderna se denomina la especialización.

Esta especialización disciplinaria a menudo impide al profesional valorar, por ejemplo, las estrategias campesinas diseñadas para la minimización de los riesgos (Pimbert, 1996), como lo son, los cultivos múltiples, las “tapadas” de frijol, los sistemas de tumba y pudre, la crianza de animales domésticos con un mínimo de inversión monetaria, etc. Además, este tipo de pensamiento que parcela la realidad no permite comprender las relaciones existentes entre las dimensiones físico-bióticas (ecosistemas) y las dimensiones de la cultura, que con frecuencia son relevantes en los sistemas rurales, y que pueden ser determinantes en la conservación o destrucción de los recursos naturales.

Al respecto, Reichel-Dolmatoff (1990) explica clara y sencillamente este asunto, cuando afirma que en la definición científica de un ecosistema, los científicos tienen en cuenta una serie de aspectos cronológicos, formaciones geológicas, cambios climáticos cíclicos, presencia de selvas primarias y secundarias, etc., y desde luego de la predicción y planificación ecológica, generada desde un razonamiento empírico-analítico. Paralelamente, el concepto indígena Desana de ecosistema (ka doáro) se fundamenta igualmente en una perspectiva cronológica, pero adicionalmente introduce en el manejo ecológico un gran número de elementos interpretativos, los cuales bajo el criterio del rigor científico parecerían ser irracionales e irrelevantes,

-
2. El concepto de “anfibios culturales” es manejado por Mockus (1994) para designar a la persona que se desenvuelve en diferentes tradiciones culturales y facilita la comunicación entre ella.
 3. Para una mejor comprensión de estos procesos de racionalización, sugiero revisar los trabajos de Reichel-Dolmatoff (1990) y Arhem (1990).

sin embargo, estos constituyen un cuerpo coherente de informaciones que no sólo contienen una gran riqueza de conocimientos sólidos, sino que también tiene una fuerte base ética, que les permite una gran capacidad adaptativa y una actitud de respeto y convivencia con los seres de la naturaleza.

PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO

En resumen, el abordaje de los sistemas rurales demanda un pensamiento complejo, una actitud y sistema cognitivo abierto que privilegie las acciones comunicativas sobre las estratégicas⁴. Sobre el primer aspecto, Morin (1996) propone una serie de principios del pensamiento complejo, de los cuales sólo comentaré tres: *el primero* está relacionado con la necesidad de concebir los objetos de estudio como sistemas en los cuales para la comprensión de la parte se requiere la comprensión de la totalidad y viceversa. Es decir, que la comprensión de las estrategias organizativas del sistema finca, por ejemplo, solo pueden ser entendidas bajo el conocimiento en profundidad de los fines de la unidad de producción-consumo, del sistema de valores del componente familiar, que es quien maneja y dirige la finca, e inversamente, estos están íntimamente relacionados con la dinámica de los sistemas de producción, de las condicionantes ambientales, sociales, de mercado, etc. En palabras sencillas, para la comprensión de la dinámica de la finca como una totalidad físico-cultural hay que conocer en profundidad los elementos biofísicos y culturales distinguibles del sistema y sus componentes, sin ser escindidos.

En *segundo lugar*, Morin explica el principio de hologramático, según el cual, en la parte está contenido el todo y el todo esta construido con el aporte individual e interactivo de las partes, esto es, que en la finca se resumen todos los efectos de una dinámica cultural del nivel regional y del nivel nacional, en el sentido de que ésta es afectada por la dinámica del mercado, por las políticas estatales, por la información, por las decisiones de política económica, etc. A su vez, la comunidad regional se ha configurado por la influencia de las microdinámicas de la vida parcelaria.

En *tercer lugar*, este abordaje de la totalidad y sus constituyentes perfectamente puede ser asumido mediante el análisis de las partes y del todo, estableciendo un razonamiento dialógico⁵ que permita complementar los diferentes niveles de análisis sin excluirse. En algunos casos este abordaje del sistema y de las partes requiere la participación de especialistas; campesinos, extensionistas, brujos, chamanes, etc. ahí es donde se requiere la capacidad comunicativa del investigador que permita un entendimiento y comunicación entre las diferentes lógicas. Al respecto, Hoyos (1989) manifiesta que la ética comunicativa tiene pues en primer lugar la responsabilidad de reconstruir el diálogo entre los diferentes saberes especializados, de suerte que se restablezcan las íntimas relaciones entre los momentos simbólicos y técnicos de nuestro ser en el mundo. Es decir, que con base al aprovechamiento de los espacios de comunicación que se configuran en los bordes de las racionalidades, pueda establecerse un diálogo basado en la tolerancia y en la aceptación del consenso o del disenso de los hablantes. En palabras sencillas, se trata

4. Estoy utilizando aquí los conceptos de acción comunicativa y acción estratégica en el sentido dado por Habermas (1983), según el cual las primeras permiten el entendimiento entre los seres humanos, las segundas establecen relaciones de dominación, y por otra parte él habla de las acciones instrumentales que son las que el hombre utiliza para relacionarse con la naturaleza.

5. La dialógica permite asumir racionalmente la asociación de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo; una mejor explicación de este concepto puede revisarse en Morin (1997).

de que científicos y hombres comunes del campo cuenten y validen sus verdades sin ser coaccionados con argumentos descalificantes, y que también construyan “terceras versiones” o “terceras verdades” salidas de los puntos de encuentro del diálogo intersubjetivo establecido. En las “terceras verdades” está la verdadera acción comunicativa.

Esta interacción entre racionalidades es fundamental en el análisis y comprensión de los sistemas de producción rural, pues de acuerdo a lo expresado por Pimbert (1996) los científicos cuentan con claras ventajas a dos niveles de organización. A nivel micro: técnicas precisas de identificación de los agentes causantes de enfermedades; habilidades en taxonomía para identificar plagas y enemigos naturales (para el control biológico); instrumental y experiencias necesarios para entender procesos fisiológicos y de comportamiento a nivel celular. A nivel macro: sensoramiento remoto para detectar situaciones de estrés, sistemas de información geográfica asistidos por computadora, redes electrónicas de comunicación a escala mundial y bancos de datos. Sin embargo, el conocimiento colectivo que tienen los agricultores y las comunidades rurales de sus cuencas y agroecosistemas les confiere claras ventajas a escala intermedia, que hacia donde, en definitiva están dirigidas las tecnologías agrícolas.

CONCLUSIONES

El dislocamiento entre los modelos tecnológicos transferidos y los adoptados es derivado de un abordaje y explicación de los objetos-sujetos, y por lo tanto de las soluciones, desde una lógica *unidimensional* y *monometodológica* (reduccionista). Tal desfase ha constituido un obstáculo para el desarrollo rural, pues no se “modernizó” la agricultura, y por el contrario se desplazaron algunas prácticas y sistemas de producción agrícola ancestrales armónicos con el ambiente.

Hoy en día es necesario rescatar la diversidad de las formas de producción y consumo, como una alternativa a la homogeneización que nos impone el modelo de desarrollo vigente. Para esto, se hace imprescindible *comprender* los sistemas complejos (como los sectores rurales) y para contribuir a este propósito, los académicos agrarios del tercer milenio deben formarse como “*anfibios culturales*”.

El investigador agrario debe comprender las diferentes racionalidades (*multirracionalidad*), la lógica que las diferentes disciplinas (*transdisciplinariedad*) y ser permeables a la posibilidad de construcción de conocimiento por diferentes vías (*pluralismo metodológico*), como requisitos imprescindibles para la construcción de un paradigma agroecológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Arhem, K. 1990. “Ecosofía Macuna”. En: *La selva Humanizada*. CORREA, F. (Ed.) ICAN-FEN-CEREC, Colombia.
- Habermas, J. 1987. *Teoría de la acción comunicativa*. Vol. 2. Taurus. Madrid, España.
- Hoyos, G. 1989. “Elementos para una ética ambiental”. En: *Ciencias sociales y medioambiente*. Memorias Seminario. Universidad Nacional de Colombia.
- Maturana, H. 1998. *La objetividad, un argumento para obligar*. DOLMEN-TM Eds. Bogotá, Colombia.
- Morin, E. 1997. “La necesidad de un pensamiento complejo”. En: *Revista de la Universidad del Valle*. No. 17. Trad. J. Moreno B. Cali, Colombia.
- Mockus, A. 1994. “Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura”. En: *Análisis Político* No. 21. IEPRI-UNAL, Colombia.

Pimbert, P. 1996. "La necesidad de otro paradigma de investigación". En: Biodiversidad (Fotocopiado)

Reichel-Dolmatoff, G. 1990. "Algunos conceptos de los indios Desana del Vau-

pés sobre manejo ecológico". En: *La selva Humanizada*. CORREA, F (Ed.) ICAN-FEN-CEREC, Colombia.

Jairo R. Mora Delgado
 jairom@cartari.ucr.ac.cr

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO. LAS POSIBILIDADES DE LA TERAPIA DE RED

María Cristina Romero Saint Bonnet

RESUMEN

La intervención psicosocial en red es una alternativa terapéutica que tiene como objeto la red social que configura el espacio de la interacción significativa de la persona. Este espacio no se presenta homogéneo en su nivel de significatividad, lo que determina que las personas que lo integran se ubiquen dentro de cierto nivel de importancia jerárquica en el manejo de la comunicación que va de lo íntimo y más privado a lo menos íntimo y más público.

Este artículo aporta información acerca de la posición de las personas –que se han consultado mediante un cuestionario– frente al manejo público y privado de la información de carácter personal, o sea, cómo cada persona establece los límites de su mundo subjetivo y de su mundo intersubjetivo.

SUMMARY

The intervention psychosocial in net is a therapeutic alternative that has like object the social net that configures the space of the person's significant interaction. By means of this work we try to share the results of an research that she/he had as purpose to research the position, those and the consultations/as, in front of the dicotomía private life and public life, for effects of valuing the favourable or opposed conditions for the work of support psychosocial in net.

PRESENTACIÓN

Mediante este trabajo intentamos compartir los resultados de una investigación que tuvo como propósito indagar la posición, de los y las consultados/as, frente a la dicotomía vida privada y vida pública, para efectos de valorar las condiciones propicias u opuestas para el trabajo de apoyo psicosocial en red.

Para cumplir con tales propósitos se elaboró un cuestionario que fue autoadministrado en una muestra de cien personas que se encontraran en un rango de edad entre los veinte y los cincuenta años, o sea los adolescentes tardíos y aquellos que comienzan su vida de adulto mayor.

1. EL MARCO DE REFERENCIA DE LA INTERVENCIÓN EN RED

La terapia de red se asienta en la perspectiva epistemológica de la construcción social de la realidad y del conocimiento como resultado de intercambios sociales que configuran un entramado simbólico de lenguaje y cultura. El concepto de red social significativa se construye a partir de dos vertientes teóricas: el pensamiento sistémico y el construccionismo social, y significa

“el conjunto de seres con quienes interactuamos de manera regular, en la realidad social cotidiana y que son en principio accesibles de manera directa o indirecta al contacto personalizado y aún a una convocatoria de red personalizada u otra intervención semejante” (Sluzky, 1995: 15).

De manera tal que, el objeto de estudio e intervención es la diversidad siempre cambiante de formas, redes y contextos sociales, y

“la selección y especificación de la frontera de un sistema está determinada por nuestra capacidad de aprehenderla, o bien por una definición operacional que proponamos acerca de qué es lo que elegimos considerar como sistema significativo” (Sluzky, 1995: 34).

El pensamiento epistemológico que yace bajo el concepto de red significativa, proviene del enfoque construccionista que nos plantea la posibilidad humana de un devenir atravesado por múltiples contextos que se van construyendo según intereses, circunstancias y otras experiencias de vida, lo cual le da un carácter subjetivo a la visión de mundo de cada cual. Los aportes de la teoría de sistemas fueron aplicados al análisis y a la intervención en la estructura y dinámica familiar sobre la base del flujo de la información en la comunicación entre los diversos

componentes del sistema. La referencia sistémica aparece como una importante referencia teórica. En efecto, las investigaciones en esta área han estado demasiado centradas en la dinámica familiar, sin embargo, desde la perspectiva de las redes plantea un cuadro complejo pero innovador para la evaluación de situaciones sociales en términos del “problema que se plantea” y no de diagnóstico individual. En este marco conceptual, se favorece la elaboración de estrategias de cambio en vez de imponer cambios decididos apriorísticamente. Esta referencia sistémica también da cuerpo a nuestro proyecto porque, lejos de definir apriorísticamente lo que debe ser una red, nos ayuda a centrar nuestra mirada sobre la emergencia de dicha red en las interacciones mismas de nuestro trabajo con las personas.

No definir una red a priori equivale a reaccionar a las singularidades de cada encuentro, ver cómo las interacciones en curso pueden, en un momento dado, de modo imprevisible, emerger a medida que se constituye una red.

Se trata pues de un contexto nuevo en el cual la gente puede dominar las situaciones mediante la necesaria reorganización de las interacciones. Es preciso, pues, trabajar a partir de la reacción ante los acontecimientos o, si se quiere, de interacción en interacción.

La metáfora cibernética que delimitó a la familia a un sistema de retroalimentación dio paso a la concepción de la familia como parte de esa red social que construye narrativas y contextos simbólicos. La familia deja de ser el centro de interés terapéutico porque en sí, en ella no se agotan ni los diagnósticos ni las posibilidades terapéuticas. El punto de interés se ubica en la red social con la que la familia comparte su entramado simbólico mediato o inmediato lo que tiene que ver con la red primaria y la red secundaria. La red primaria es aquella que se constituye en el punto de intersección entre lo público y lo privado y está constituida por un conjunto de personas

que se comunican entre sí a partir de afinidades personales de manera independiente del ámbito institucional. Se encuentran conformando este tipo de red los familiares, los amigos y los vecinos que interactúan de manera frecuente. Por eso es que, tanto la afectividad como la frecuencia son dos características principales de la red primaria.

La red secundaria se relaciona más con el ámbito institucional, la constituyen las personas que trabajan en conjunto en una organización social que puede tener objetivos socioeconómicos o sociopolíticos y que, sin mediar vínculos sanguíneos, ni afectivos, se constituyen en opciones de apoyo para afrontar situaciones críticas.

Investigaciones recientes desde la clínica¹, así como trabajos de campo desde instituciones de salud o educativas² demuestran la

1. Existe amplia evidencia de que una red social personal estable, sensible, activa y confiable es salutogénica, es decir protege a la persona de las enfermedades, acelera los procesos de curación y aumenta la sobrevida. En otro nivel de análisis, la red social provee retroalimentación cotidiana acerca de las desviaciones de salud que favorece los comportamientos correctivos (Te noto un poco pálido ¿Porqué no vas a ver al médico?). Es decir, la red social actúa como monitor de la salud y activador de las consultas a idóneos. De hecho, la red social favorece muchas actividades personales que se asocian positivamente con sobrevida: rutina de dieta, ejercicios, sueño Adhesión a régimen medicamentoso y, en general, cuidados de la salud. Aún en otro nivel de análisis, las relaciones sociales contribuyen a dar sentido a la vida de sus miembros, es decir, favorecen la organización de la identidad a través de los ojos (y las acciones) de los otros, de lo que deriva la experiencia de que "estamos ahí para alguien" o "sirviendo para algo", lo que a su vez otorga sentido a las prácticas de cuidados de la salud, y, en última instancia, a seguir viviendo. Sluzky, Carlos "De cómo la red social afecta la salud del individuo y la salud del individuo afecta a la red social", en Dabas y Najmananovich (1995) *Redes el lenguaje de los vínculos* p.119.
2. Ver Bendersky, Ruffa Biscione y Leiva. "Abordaje de la crisis de violencia familiar, ayudando a

importancia de la red social para el bienestar de la persona. La red social no solo proporciona los protectores saludables sino que también cumple un papel de apoyo en situaciones de crisis del tipo que sea, además de que en parte tiene que ver con ayudar a construir el sentido de vivir³.

Por tales motivos se consideró necesario iniciar un proceso investigativo que permita contar con información acerca de las condiciones psicosociales y culturales en que podrían encontrarse las personas para ser sujeto de la terapia o apoyo a otros sujetos como parte de su red social significativa.

La intención es más bien dar los primeros pasos en esta materia para afinar los instrumentos de recolección de la información así como los de registro y análisis de la misma.

También es de interés de esta investigación que aquellos terapeutas que se proponen ampliar los horizontes del sujeto-objeto de la terapia psicosocial cuenten con aquellos elementos que viabilizan o truncan procesos de trabajo de redes.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO PSICOSOCIAL EN RED?

Los antecedentes de la terapia de red se encuentran en los aportes que desde la teoría de sistemas se hicieron al análisis y a la intervención en la terapia de familia.

3. recuperar las redes de sostén" en *Op Cit.* parte VI. Escobar y Elizalde. "Intervención en redes para la integración de niños con discapacidad en ámbitos escolares comunes". *Idem.* Parte III
3. La orientación hacia el sentido del hombre debe éste buscarla en las decisiones más importantes de su vida, no solo en su orientación general de la misma y, naturalmente, de manera coherente. Ya que el sentido de la vida es como la razón de las razones, el motivo de los motivos, la raíz motivacional de todos los motivos particulares. Victor Frankl. *El hombre en busca del sentido*, Herder, Barcelona, 1986.

El concepto de sistema se convirtió en la clave para entender a un grupo de personas que unidas por vínculos sanguíneos conforman un sistema familiar, cuya "dinámica" se fundamentaba en el flujo de la información; o sea, en la comunicación entre los diversos componentes del sistema:

"El traslado de esta concepción al conjunto de personas que están unidas por vínculos sanguíneos de manera directa determina que en la terapia de familia, los componentes del sistema sean considerados como personas que se relacionan entre sí; es decir: se comunican" (Watzlawick, 1973).

La teoría de sistemas, pues, aportó una perspectiva tal en el mundo del quehacer psicoterapéutico que una autoridad en lo que a terapia de familia se refiere, considera que

"... el objetivo de las intervenciones en el presente es el sistema familiar. El terapeuta se asocia a este sistema y utiliza a su persona para transformarlo. Al cambiar la *posición* de los miembros del sistema, cambian sus experiencias subjetivas" (Minuchin, 1992: 38).

No solo la cantidad y la calidad de la comunicación es material terapéutico para resolver problemas de la dinámica familiar sino que el concepto de sistema concebido como un conjunto de objetos y de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, permitió objetivar la dinámica familiar en las "posiciones" de cada uno de los componentes de la familia y las consecuentes relaciones de poder que se derivan y que generan los conflictos.

Sea con una perspectiva comunicacional o del manejo del poder, es Sluzky (1994) quien cuestiona el hecho de limitar la acción terapéutica a los límites del sistema familiar, puesto que ésta, en muchos casos, no configura precisamente la red significativa de la persona que consulta y que mantener dicha

estructura como objeto de intervención en exclusividad, omite su protagonismo en la construcción de su propia red e impide considerar esos vínculos significativos.

La posición en terapia de familia criticada por Sluzky, además, está teñida de la ideología familiarista mediante la cual se convierte a la familia nuclear en el único lugar posible de felicidad⁴. Desde esta perspectiva,

"la familia es tanto un espacio por excelencia para compartir la intimidad como el lugar en donde se encuentran los principales responsables de los problemas emocionales cuando éstos aparecen" (Elkaïm, 1995:51)

La experiencia clínica así como las últimas investigaciones en materia de terapia sistémica están demostrando que logra obtenerse una mayor efectividad terapéutica al ampliar las fronteras del sistema significativo de la persona al conjunto de los vínculos interpersonales, los que no se agotan ni en la familia nuclear ni en la extensa, sino que incluyen además a los amigos, a los compañeros de trabajo, de estudio, de recreación, de organizaciones comunales, religiosas, entre otras⁵.

La incorporación de personas significativas genera una interacción que, entreteje un espacio terapéutico, del que es posible que emerja un marco hipotético capaz de atender la complejidad de los problemas.

4. Mony Elkaïm y otros. (1995) *Las prácticas de la terapia de red*. Gedisa p.51

5. Los límites y alcances de la red significativa, son diferentes según los casos y las circunstancias de que se trate. Lo significativo de la red para la persona que consulta o paciente identificado, es el elemento clave para diseñar la frontera de la red; y lo significativo logra definirse a partir de la conciencia que tenga el informante sobre aquellas personas con las cuales tiene una relación más estrecha o de mayor confianza, o de mayor cotidianidad, o aquellas con las cuales contaría frente a una eventualidad. Ma. Cristina Romero Saint Bonnet (1998) "La interacción significativa, espacio de la terapia de red". *Revista Reflexiones* N° 77, UCR. 1999.

Sin embargo, lo que es considerado como factores coadyuvantes para la efectividad terapéutica, puede verse obstaculizado por las concepciones que las personas tengan acerca de compartir los problemas con otras que, si bien son significativas para su vida interaccional, no necesariamente son con las que se comparte lo privado.

También depende de los límites que se establezcan para la red significativa, puesto que mientras algunos terapeutas la amplían a familiares cercanos y amistades, otros incorporan a miembros del barrio o de la comunidad⁶.

Cuanto más abarcativa es la red, más público se hace el problema. De manera tal que los alcances de la terapia de red dependerán de la relación tensional entre lo público y lo privado de allí nuestro interés de indagar en ese ámbito que se establece dentro de espacios que la subjetividad delimita.

Los alcances de lo público y lo privado están socialmente contruidos a partir de los parámetros que configuran la cultura y los valores. Sin embargo, la existencia de cierta re-

lativización de los contextos interpersonales determina que cada sujeto construya sus espacios de lo público y de lo privado, respectivamente. De eso trata esta investigación, cómo cada persona establece los límites de su mundo subjetivo y de su mundo intersubjetivo. O sea, cómo demarca su pertenencia a una red primaria y a una red secundaria.

2. UN PERFIL GENERAL DE LAS PERSONAS CONSULTADAS

La encuesta se realizó a cien personas escogidas al azar sin mediar fundamentos estadísticos muestrales, en el primer semestre del año 1998. Del total de las personas consultadas el 63 % corresponde al sexo femenino y, del 64% que está trabajando el 43% corresponde a trabajadores/as remunerado/as .

CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CONSULTADA POR EDAD Y SEXO (en porcentajes)

EDAD en años	Fem	Mascul	TOTAL
Menos de 25	21	13	34
De 26 a 35	19	10	29
De 36 a 45	11	9	20
De 46 a 55	10	2	12
56 o más	2	3	5
Total	63	37	100

FUENTE: Encuesta propia, 1998

Según se puede apreciar en el cuadro anterior, dos tercios de las personas consultadas se ubican como adultos jóvenes, pues tienen menos de treinta y cinco años, de ellos 52% corresponde al sexo femenino y 62% al masculino; un 22% está ubicado entre los treinta y seis y los cuarenta y cinco años y el resto tiene más de cuarenta y seis años.

6. "Cuando los miembros de una familia se deciden a experimentar el método de la red, se les pide que escojan un día de la semana siguiente, que fijen una hora y que telefoneen a todos sus conocidos, parientes, vecinos y amigos, que les servirán de apoyo. Siguen luego entre cuatrocientos y mil llamados telefónicos mediante los cuales la familia informa a su red acerca de la reunión tribal que se celebrará en su casa, en presencia de psicoterapeutas, para buscar una solución a sus dolorosos problemas. La simple curiosidad y una ligera paranoia hacen que se presenten fácilmente unas cuarenta personas. Por experiencia, prefiero más de cuarenta participantes y se lo hago saber a la familia. En general acuden entre cincuenta y setenta". Ross V. Speck "La intervención en red social: las terapias de red, teoría y desarrollo", en Elkaim Mony y otros (1995). *Las prácticas de la terapia de red*, Gedisa.

GRÁFICO 1

DISTRIBUCIÓN POR EDAD (EN AÑOS)

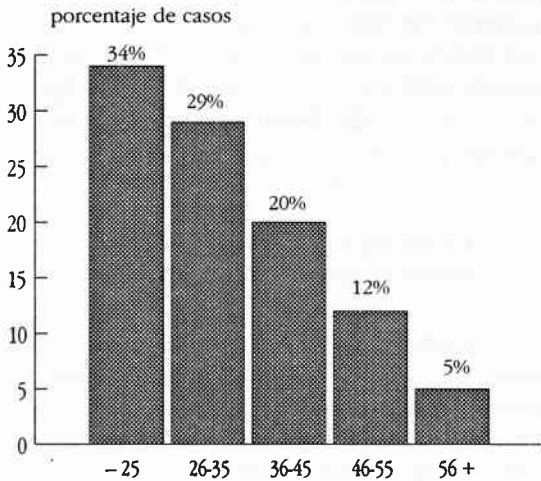
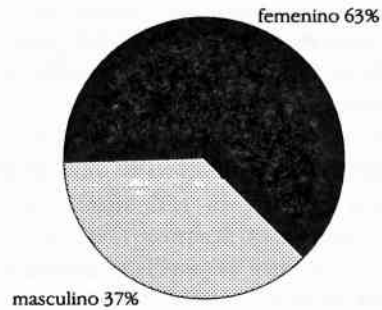


GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN POR SEXO



FUENTE Encuesta propia, 1998

Este dato es interesante en la medida en que la mayoría corresponde a una población que está en un momento propicio de su vida para tomar decisiones en cuanto a las posibilidades de compartir información privada, pues si bien, están saliendo de una vida dependiente de sus padres están comenzando a organizar su vida independiente, una situación vital de transición con todo lo que implica emocionalmente esa circunstancia.

El 64% de las personas consultadas vive en San José. De ellas el 44% son mujeres y el 23% hombres; el 67% tiene una educación universitaria completa o en proceso, el 64% de ellas son mujeres y el 36% son hombres.

En cuanto al estado civil se pueden observar los datos para esta población en el cuadro 2.

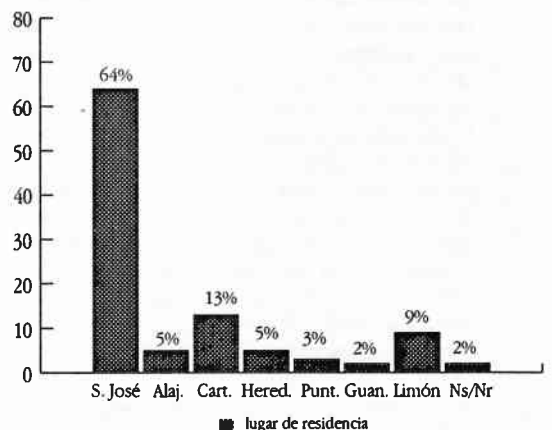
CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CONSULTADA SEGÚN ESTADO CIVIL Y SEXO

Estado civil	Femenino	Masculino	%
Casado/a	23	11	34
Soltero/a	35	21	56
Viudo/a		4	4
Separado/a	2		2
Divorciado	3	1	4
Total			100

GRÁFICO 3

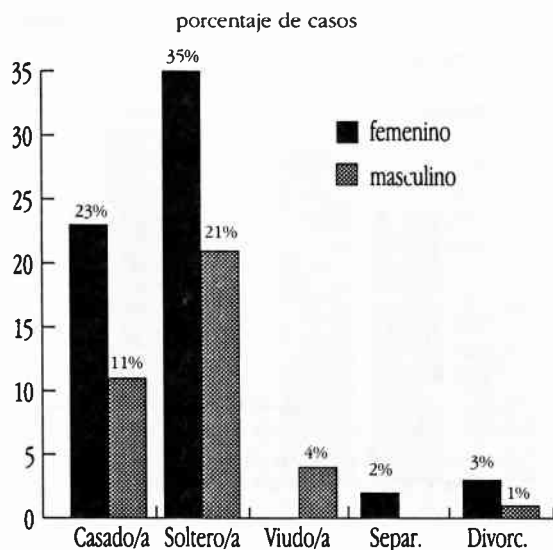
LUGAR DE RESIDENCIA



FUENTE: Encuesta propia, 1998

FUENTE: Encuesta propia, 1998

GRÁFICO 4
ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO



FUENTE: Encuesta propia, 1998

Pareciera que la variable estado civil coincide con lo que se comentaba anteriormente en relación con las edades de esta población, puesto que algo más de la mitad de la población en cuestión se encuentra soltera y de ella el 35% son mujeres. Asimismo, con relación a la variable número de hijos más de la mitad no tiene hijos, el 26% tiene menos de tres, el 16% tiene entre tres y cinco hijos y un 3% tiene más de seis hijos.

4. EXPLORANDO LAS REDES SIGNIFICATIVAS

Para conocer quiénes son los seres significativos en la vida de estas personas, les preguntamos sobre *¿Quiénes son las personas más importantes en su vida? ¿Qué tipo de relación la/lo une a esas personas?*

Con la información que proporcionaron se elaboró el cuadro 3, en la que se consignan los datos de las columnas según el orden de importancia en el cual, el informante incluyó a las personas significativas.

CUADRO 3

PERSONAS Y RELACIONES QUE CONFORMAN LA RED SIGNIFICATIVA EN PORCENTAJES

RED SIGNIFICATIVA	1º lugar	2º lugar	3º lugar	4º lugar	5º lugar	6º lugar	7º lugar
Cónyuge o Compañero	20	18	6	5	5	2	
Hijos	21	19	9	5	2	2	1
Padres	46	25	17	7	5	3	2
Fam. cercanos	2	24	43	35	14	11	8
Fam lejanos		1	5	4	6	4	3
Comp estud / trab				4	3	1	1
Amigos	5	14	17	19	24	8	8
Vecinos			1		1	4	1
Patrón		1		2			
Dios	4						

FUENTE: Encuesta propia, 1998

Las personas consultadas (en la misma proporción, hombres y mujeres) construyen su red significativa, incorporando a sus padres en primer lugar, en segundo lugar a los padres y a los familiares cercanos, en tercer y cuarto lugar las amistades y familiares cercanos y en quinto lugar a los amigos.

De acuerdo con el concepto de red primaria, no se incorpora significativamente a los vecinos y familiares lejanos.

Lo anterior significa que los seres escogidos como importantes para la persona coinciden con los componentes de una red primaria. Quedan por fuera los vecinos y los familiares lejanos en el marco de la significatividad social.

CUADRO 4
CONSTRUYENDO LA RED ACTIVA
(en porcentajes)

	1*	2*	3*	4*
Cónyuge o				
Compañero	35	19	33	27
Hijos	24	8	10	19
Padres	39	3	29	19
Fam cercanos	64	25	28	43
Fam lejanos	4		2	2
Comp estud./Trab	27	8	4	26
Amigos	57	70	49	52
Vecinos	11	11		5

FUENTE. Encuesta propia, 1998

1* Personas que ha visto en los últimos días.

2* Personas con las cuales comparte la vida social.

3* Personas a quienes le cuenta cosas íntimas

4* Personas que ve regularmente

Se ha denominado red activa a la que está compuesta por aquellas personas que con cierta frecuencia, están en contacto con el informante. En el caso de las personas que respondieron el cuestionario, los amigos y los familiares cercanos son las personas con las que más compartió en los últimos días.

Los amigos son los seres más significativos para las actividades sociales, lo mismo que para compartir información privada. Amigos, familiares cercanos y cónyuges o compañeros son las personas con las que interactúan con regularidad, es decir conforman el mundo cotidiano.

Si bien, los padres ocupan el primer lugar como seres importantes en la vida de estas personas, en la interacción cotidiana pierden algo de su importancia como parte de la red activa y no son los principales interlocutores para lo privado.

CUADRO 5
CONSTRUYENDO LA RED "PAÑO
DE LÁGRIMAS"
(en porcentajes)

	1*	2*
Cónyuge o compañero	33	1
Hijos	8	1
Padres	29	1
Fam cercanos	42	30
Fam lejanos		3
Comp estud/ trab		6
Amigos	44	45
Vecinos		2
Sacerdote	4	16
Dios		6
Profesional	2	
Pastor		5
Patrón		2

FUENTE. Encuesta propia, 1998

1* Persona a la que recurriría en momentos difíciles

2* Persona a quien le contaría los problemas.

Se confirma con la información de este cuadro la construcción de la red significativa realizada, pues se acude en momentos difíciles a los amigos, familiares cercanos, cónyuge o compañero y padres en ese orden de importancia.

Sin embargo, para compartir los problemas privados, el papel protagónico lo tienen los amigos en primer lugar los familiares cercanos en segundo lugar y en tercer lugar ubican al sacerdote.

Asimismo, con el fin de explorar las redes secundarias se indagó a las personas acerca de su participación en organizaciones y la información que arrojó dicha consulta fue que dos tercios de las personas no tienen participación en organizaciones y de los que si lo hacen, el 57% son mujeres, 43% son hombres y el 54% son menores de 35 años.

GRÁFICO 5

RED SIGNIFICATIVA

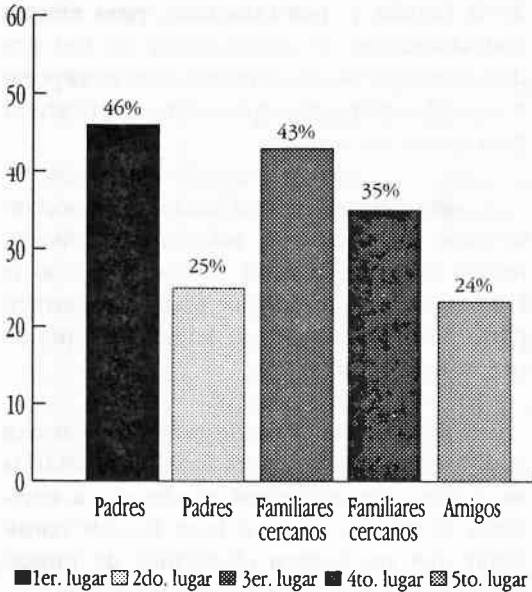


GRÁFICO 6

RED ACTIVA

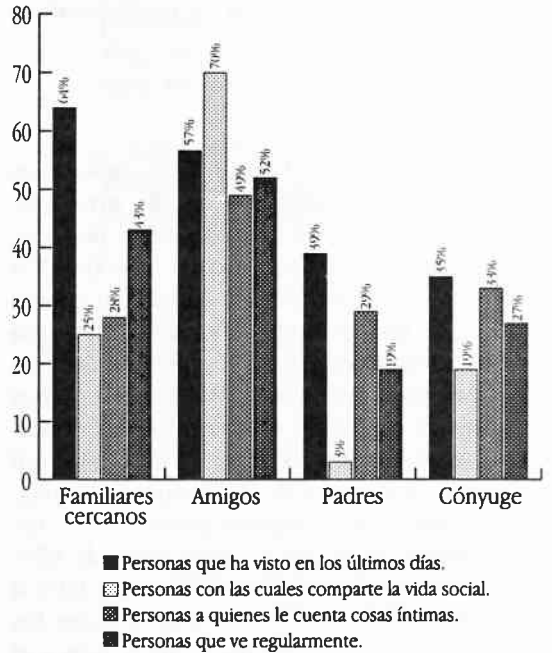
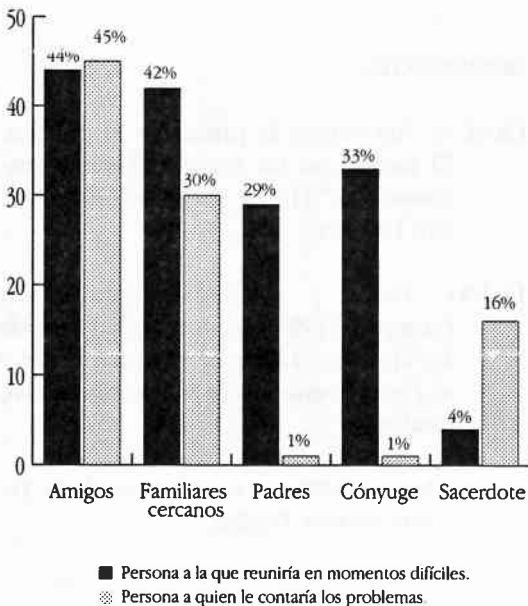


GRÁFICO 7

RED "PAÑO DE LÁGRIMAS"



Con respecto al tipo de organización en la que participan, casi la mitad de los consultados/as lo hacen en organizaciones religiosas (48%), solo un 12% participa en organizaciones laborales y menos de un 10% lo hace en organizaciones comunales.

Para efectos de indagar sobre las posibilidades de hacer público lo privado, o sea trascender los límites de la red primaria, el 60% de los/s consultados/as está a favor de compartir información acerca de los problemas personales, con el ánimo de buscar ayuda, apoyo y contar con otras opiniones acerca de la cuestión.

De ellos el 63% son mujeres y el 62% se ubica entre las personas de menos de 35 años.

Los que mantienen una posición de salvaguarda de la privacidad lo justifican con el hecho de que "todo debe quedar en familia" y que "nadie resuelve problemas ajenos".

Ahora bien, cuando se les consulta con quien o quienes compartiría sus problemas, el 93% de las respuestas hacen referencia a los familiares cercanos y amigos, un 7% se refiere a la consulta con un profesional.

COMENTARIOS

La mayoría de las personas consultadas son jóvenes y cuentan con un alto nivel académico (el 67% tiene una educación universitaria completa o en proceso, el 64% de ellos son mujeres y el 36% son hombres) que si bien no es determinante en modo alguno para lo que se está indagando, si ofrece parámetros para futuros estudios comparativos con grupos sociales de diferentes edades y niveles educativos, con miras a explicar el fenómeno en cuestión. Dos tercios de las personas consultadas se ubican como adultos jóvenes, pues tienen menos de treinta y cinco años, de ellos 52% corresponden al sexo femenino y 62% al masculino; un 22% está ubicado entre los treinta y seis y los cuarenta y cinco años y el resto tiene más de cuarenta y seis años.

Dada la importancia que tiene la red significativa como protectora en situaciones de crisis de diferente índole, conocer la opinión que tienen las personas consultadas, permite corroborar dicha importancia y por consiguiente contar con un elemento facilitador para aplicar el método con objetivos terapéuticos.

La exclusión de la vecindad como parte de la construcción de la red significativa (aspecto que se considera relacionado con la baja participación en organizaciones de la comunidad) a pesar de ser un tipo de interacción caracterizada por la frecuencia, es un aspecto que merece una indagación futura. Por ejemplo, podemos preguntarnos ¿estamos ante una disolución de la "cultura comunal"?, ¿están debilitadas las redes sociales vecinales, las barriales?

El hecho de considerar que los padres no son los principales interlocutores para compartir lo privado, por un lado, contribuye a relativizar la efectividad de delimitar el sujeto-objeto de la intervención, a los límites de la familia y, por otro lado, para efectos metodológicos, la convocatoria de red podría facilitarse si se comienza por incorporar a aquellas personas que son significativas para quien los consulta.

El sacerdote ocupa un lugar importante como interlocutor de información privada, hecho que puede estar relacionado con la tendencia de que las personas que participan en organizaciones lo hagan en aquellas que son religiosas.

Es interesante de destacar que los casi dos tercios de las personas consultadas muestran una tendencia moderada a compartir lo privado, lo cual hace factible considerar que no existen obstáculos de importancia para emprender un trabajo de red.

A partir de este estudio se abre un abanico de posibilidades para realizar investigaciones que contribuyan a construir conocimiento teórico y metodológico pertinente con este tema.

BIBLIOGRAFÍA

- Carel, A. "Lo íntimo, lo privado y lo público. El juego con las reglas del juego psicoanalítico", (1993) *Revista de la AAPPG*, xvi, Uruguay.
- Dabas, Elina y Denise Najmanovich (comps.) (1995). *Redes, el lenguaje de los vínculos. Hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil*, Paidós.
- Elkaïm Mony (1995). *Las prácticas de la Terapia de Red*. Gedisa.

- Puget, J. y L. Wender (1993). "La vida secreta de los secretos", *Revista de la AAPPG* XVI, Uruguay, Sarubbo Laura y Laura Fascioli "Secretos, discreciones y transparencias" *Revista de la FLAPAG*, Montevideo, agosto 1998.
- Sluzky, Carlos (1996). *La red social: frontera de la práctica sistémica*, Gedisa.
- Romero Saint Bonnet, Ma Cristina (1998). "La terapia de familia: De las entidades a las narrativas", en *Revista Reflexiones* N° 71, Universidad de Costa Rica, 1998.
- (1998). "La interacción significativa, espacio de la terapia de red". *Revista Reflexiones* N°77, Universidad de Costa Rica, 1999.
- Vargas, Pedro (1996). "Entrevista con Paul Watzlawick". *Boletín de la Academia de Terapia Sistémica* N°2, Vol. I.

María Cristina Romero Saint Bonnet
mariacr@cariari.ucr.ac.cr